UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA UNIDAD CUAJIMALPA

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

ENEMIGOS GLOBALES, CRIMINALES LOCALES. HISTORIA SOCIAL DEL NARCOMENUDEO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL PERIODO 1989-2020

TESIS

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE

DOCTOR EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

PRESENTA

HÉCTOR JOEL ANAYA SEGURA

DIRECTOR

LEONARDO DÍAZ ABRAHAM

CO-DIRECTOR

GABRIEL PÉREZ PÉREZ

SINODALES

NIDIA ANDREA OLVERA HERNÁNDEZ

JORGE JAVIER ROMERO VADILLO

LORENA EMILIA PAREDES GONZÁLEZ

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO 2025.

See, I think drugs have done some good things for us, I really do
And if you don't believe drugs have done good things for us, do me a favor
Go home tonight and take all your albums, all your tapes, and all your CDs and burn 'em
Cause you know what? The musicians who've made all that great music
That's enhanced your lives throughout the years?
Real fucking high on drugs
Today a young man on acid realized
That all matter is merely energy condensed to a slow vibration
That we are all one consciousness experiencing itself subjectively
There is no such thing as death, life is only a dream, and we are the imagination of ourselves
Here's Tom with the weather
It's not a war on drugs, it's a war on personal freedom, that's what it is, okay?
Keep that in mind at all times, thank you
Dreaming of that face again
It's bright and blue and shimmering
Grinning wide and comforting me with it's three warm and wild eyes
On my back and tumbling
Down that hole and back again (back again)
Rising up and wiping the webs and the dew from my withered eye
In
Out
(Keenan et al., 1996, 0 min12s).

Agradecimientos:

Esta tesis fue realizada con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el marco de Becas Nacionales de Posgrado 2021-2024 con el número de apoyo 789650. Y obtuvo la Beca para Titulación de Posgrado de la Universidad Autónoma Metropolitana durante el trimestre 24-I.

No hubiera sido posible la realización de esta tesis sin el respaldo de mi comité. Gracias por las observaciones y recomendaciones siempre pertinentes de la Dra. Nidia Andrea Hernández Olvera, las gestiones y comentarios del Dr. Leonardo Díaz Abraham y el apoyo del Dr. Gabriel Pérez Pérez. Así mismo, daría una mención al Dr. Jaime Olivera Hernández quien realizó la lectura del documento y participó como jurado en el examen de candidatura.

Agradezco también, la integración del Dr. Jorge Javier Romero Vadillo al sínodo de la disertación pública quien tuvo a bien leer el borrador y hacerme recomendaciones. Reconozco la oportuna inclusión de la Dra. Lorena Emilia Paredes González al sínodo de la disertación pública quien realizó comentarios y lectura detenida del texto.

Dedicatoria:

A Leticia mi compañera de vida. Erika mi madre quien con ese cariño inconmensurable formó la persona que soy. A mi padre que siempre me fomentó la curiosidad intelectual con tantos discos, libros y revistas. Adrián que con su sensibilidad y creatividad siempre me ha acompañado. Mireya mi abuela quien forjó en mí los valores del respeto y compromiso. Y a toda la familia Anaya quienes con su calidez y solidaridad siempre están presentes.

Índice

Siglas y Acrónimos....4
Índice de tablas....6
Indice de figuras....7
Introducción....8
Capítulo I. Del régimen internacional de prohibición de drogas al régimen político mexicano: Construcción de una historia social del narcomenudeo.....21
1.1 Historiar el narcomenudeo....28
1.2 Historia social....38
1.3 Securitización....46
1.4. Régimen Político Mexicano....60
II. Metodología....69
2.1 La entrevista....77
2.2 Análisis de contenido etnográfico.....81
Capítulo III. Regímenes globales de políticas anti droga y su control local....89
3.1 La Campaña Permanente y la judicialización e internacionalización de la penalización sobre drogas en México 1948-1984....94
3.2 Americanización de la lucha contra las drogas en México 1985-1994....110
3.3 Apertura económica y el enemigo interno en México 1997-2006....123
3.4 Tráfico ilícito trasnacional de drogas en México (Narcotráfico)....143
3.5 Comercio de drogas a pequeña escala Narcomenudeo....157
Capítulo IV. Historia social del narcomenudeo en la Ciudad de México en el periodo 1989-2020....171
4.1 ¿Es posible una historia social del narcomenudeo en la ciudad de México?....175
4.2 Configuración del crimen organizado trasnacional en la agenda de seguridad hemisférica 1989-2001, y su repercusión local en el Distrito Federal....192
4.3 Campaña permanente contra el narcomenudeo e Implementación de la ley contra el narcomenudeo 2006-2020....210
Conclusiones....243
Bibliografía....260

Siglas y Acrónimos

AFI. Agencia Federal de Investigaciones

ATF. Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos)

BOM. Bases de Operaciones Mixtas

CENDRO. Centro de Planeación para el Control de Drogas

CIA. Central Intelligence Agency (Agencia Central de Inteligencia)

CICAD. Comisión Interamericana para el Control de Drogas

CISEN. Centro de Información y Seguridad Nacional

CND. The Commission on Narcotic Drugs (Comisión de Estupefacientes o Comisión de Drogas Narcóticas)

CONADIC Consejo Nacional Contra las Adicciones

DEA. Drug Enforcement Administration (Administración de Control de Drogas)

DFS. Dirección Federal de Seguridad

DOF. Diario Oficial de la Federación

DOJ. Department of Justice (Departamento de Justicia)

E.E. U.U. Estados Unidos de América del Norte

FBI. Federal Bureau Investigation

FGJCDMX. Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

FGR. Fiscalía General de la República

GAFE. Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales

GERI. Grupo de Reacción e Intervención

INCB. International Narcotic Control Board (Buró Internacional de Control de Narcóticos) ver JIFE

INCD. Instituto Nacional de Combate a las Drogas

INEGI. Instituto Nacional de Estadistica Geografía y Estadística

JIFE. Junta Internacional de Estupefacientes

NIDA. National Institute on Drug Abuse (Instituto Nacional contra el Abuso de Drogas)

NM. Narcomenudeo

OAS. Organization of American States ver OEA

OBI. Oficina Binacional de Inteligencia

OEA. Organización de los Estados Americanos

OFAC. Office of Foreign Assets Control (Oficina de control de activos extranjeros)

OMS. Organización Mundial de la Salud

ONU. Organización de las Naciones Unidas

OPS. Organización Panamericana de la Salud

PAN. Partido Acción Nacional

PDICDMX. Policía de Investigación de la Ciudad de México

PF. Policía Federal

PFC. Policía Federal de Caminos

PFP. Policía Federal Preventiva

PGJDF. Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal

PGJCDMX. Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México

PGR. Procuraduría General de la República

PJDF. Policía Judicial del Distrito Federal

PJF. Policía Judicial Federal

PRD. Partido de la Revolución Democrática

PRI. Partido de la Revolución Institucional

TSJDF. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal

TLCAN. Tratado de libre comercio de américa del norte

UN. United Nations ver ONU

UNGASS. United Nations General Assembly Special Session (Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas)

UNAM. Universidad Nacional Autónoma de México

UNODC. United Nations Office on Drugs and Crime (Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito)

USNORTHCOM. United States Northern Command (Comando Norte)

WHO. World Health Organization (Organización Mundial de la Salud) ver OMS

Índice de tablas

Tabla 1. Cronología de acciones globales y locales de seguridad y securitización respecto al control de drogas en México 1947-2020. 57

Tabla 2. Análisis de contenido cuantitativo y etnográfico 82

Tabla 3. Ficha de recolección de datos 85

Tabla 4. Porcentaje de términos utilizados en Informes de labores de la PGR 2001-2006 166

Tabla 5. Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato 221

Índice de figuras

Figura 1. Matriz de análisis 75

Figura 2. Delitos relacionados con drogas cometidos por la población en los centros penitenciarios estatales, 2020 234

Introducción

Un desafío para el análisis, estudio, control y contención de los mercados ilícitos de drogas ha sido la imposibilidad de erradicar de manera tajante la demanda de sustancias psicoactivas ilegalizadas. Un ejemplo de ello fue la meta de erradicar el consumo de drogas e incluso la eliminación del cultivo de coca planteado como meta en los órganos de control y fiscalización internacional en 1998 con la propuesta de un "mundo libre de drogas" (Jelsma, 2003). Sin embargo, esta meta no fue superada. Incluso, en el reporte de la Unión Europea sobre mercados ilegales de drogas (1998-2007) se menciona que existen evidencias para argumentar que el problema mundial de las drogas no solo ha empeorado, sino que se ha agudizado en países productores y de tránsito. Este diagnóstico de 2007 ha sido una constante en los informes mundiales de drogas publicados por la Oficina de las Naciones Unidas donde señalan un incremento en el uso de drogas en menores de edad, expansión de grupos criminales, diversificación de grupos criminales en otro tipo de delitos.

Por otro lado, en México en 2009 se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación, con una serie de reformas al Código Penal, Código Federal de Procedimientos Penales y a Ley General de Salud, donde se estableció que los delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, entendidos como la posesión o comercio de drogas a pequeña escala, serían perseguidos por la policías locales y procesados por los ministerios públicos y jueces locales (DOF, 2009), dado que estos delitos eran materia de instancias federales.

Dicho decreto, incluyó una tabla de orientación de dosis mínimas con la cantidad de droga que se podía portar para consumo personal e inmediato, lo que dio cabida a la división jurídica entre: consumidor, vendedor y farmacodependiente (Guerrero, 2014). Así, se delimitaron los delitos *concurrentes* del fuero federal como el tráfico ilícito y el crimen organizado (Astorga, 2012), instruyendo como fecha límite para su implementación agosto de 2012. Esta medida provino del Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad del año 2008, la cual se incluyó en las propuestas programáticas firmadas en 2009 en el marco de la Iniciativa Mérida con el fin de mejorar y reformar los sistemas de seguridad, justicia y salud (Hernández y Zamudio, 2009).

Esta reforma conocida como *Ley Contra Narcomenudeo* fue el proceso institucional de mayor envergadura en el control local de drogas en México durante el siglo XXI debido

a que: dividió a los actores del mercado, estipuló dosis mínimas para portación, indicó penas, agravantes e intentó delimitar esfuerzos conjuntos y homologados entre las agencias de seguridad, impartición de justicia y de salud. Esto es importante porque marca una ruptura a nivel institucional y en el discurso oficial, ya que se fortalecería el combate al crimen organizado y al mercado local de drogas el cual se convirtió en una prioridad administrativa gubernamental y ya no únicamente a la persecución del tráfico ilícito de drogas ilegalizadas en grandes volúmenes o narcotráfico.

En este contexto, al inicio de su mandato, el presidente Felipe Calderón señaló que, México se estaba convirtiendo de un país de tránsito de drogas ilícitas a un país de consumidores, que los alarmantes índices de violencia se debían a que los delincuentes se encontraban peleando por el mercado local y que los jóvenes se estaban convirtiendo en usuarios de drogas (Aguilar y Castañeda, 2009; Fernández, 2012). Desde esta perspectiva, se justificó la estrategia armada, la cual se utilizó a manera de legitimación debido al clima de polarización política, pero lo que esta narrativa solidificó fue el fortalecimiento de la hipótesis en el crecimiento de consumidores y la injerencia del Departamento de Estado[1] en el problema del narcotráfico y su control hemisférico (Zavala, 2018).

Es por ello, que, a través de una serie de intercambios, tensiones, estrategias narrativas, discursivas y políticas experimentadas a lo largo de tres décadas, el narcomenudeo como término, periodístico, político e institucional logró homologar, catalogar y tipificar una actividad ilícita como lo es la venta de drogas al consumidor final o al menudeo. El cambio de concurrencia entre delitos del fuero local y federal tomó una preponderancia programática, por su cobertura mediática y al introducirse como término común en los discursos

[1] En 1988 la CIA admitió que participó en una conspiración internacional para traficar cocaína, lavar dinero e intercambiarlo por armas para financiar y dotar de equipamiento militar a la CONTRA Nicaraguense, en esta trama se argumenta que traficantes mexicanos participaron en la conspiración para el tráfico de cocaína e incluso con campos de entrenamiento. También argumenta Zavala que la doctrina de la Seguridad Nacional es una extensión para delegar un enemigo, ahora interno a partir del declive de la narrativa de la guerra fría y la amenaza comunista el cual es muy rentable para justificar las intromisiones militares. Asimismo velar por los intereses de los Estadounidenses también suele ser un argumento para proteger la salud de sus ciudadanos mediante el poder político y militar.

institucionales y en los políticos siguiendo la agenda de seguridad internacional y en parte derivado por los cambios administrativos ocasionados por la alternancia política.

El término narcomenudeo es utilizado por agencias de seguridad desde el año 2002 y es considerado una actividad ilícita originada por la prohibición global de drogas (Zamudio 2012). También es descrito en el ámbito jurídico como uno de los delitos contra la salud y se le puede reconocer como una operación de mercado, en la que participan dos o más personas (comprador y vendedor) donde hay una mercancía ofertada: denominada "droga" (Vilalta, 2009; Zamudio, 2008).

Así, este fenómeno, presenta una diversidad de actores como: las policías locales, los ministerios públicos, los usuarios, los narcomenudistas, los centros de tratamiento de adicciones (Arredondo *et al*., 2018) y dinámicas diversas como la venta de drogas en la calle de manera informal y en contextos de ilegalidad estructural (Chomczyński *et al*., 2019). La constante mutación del fenómeno representa dificultades para las autoridades, ya que el seguimiento se ve entorpecido por la rotación de los actores mediante distintas modalidades de venta a través de la utilización de esquemas territoriales, redes comunitarias y relaciones de parentesco (Zamudio, 2012; Zamudio y Santos, 2013), los cuales han logrado establecer vínculos y redes de complicidad que han superado los esfuerzos institucionales.

Los principales esquemas de venta de drogas al menudeo, denominados puntos de venta se han clasificado como: fijos, semi fijos y ambulantes y suelen ser atendidos por jóvenes que venden cocaína marihuana, estimulantes tipo anfetamínico y en ocasiones solventes y medicamentos controlados (Zamudio, 2008). Para los puntos fijos se han desarrollado técnicas criminológicas como los llamados *hotspots* donde se han contabilizado numerosos puntos de venta (Vilalta, 2009) que suelen estar más vigilados mediante patrullajes y recorridos virtuales de los centros de video vigilancia policial.

Tomando en cuenta que el narcomenudeo se reproduce a través del mercado y del capital en un contexto ilícito no escapa de presentar externalidades y desigualdades. Pongamos el caso de algunos traficantes con redes de corrupción y clientelares efectivas que aseguran la reproducción del trasiego, almacenamiento de grandes, cantidades de droga y personas que distribuyan el producto en a nivel minorista, ya sea en puntos de venta fijo o

semifijos o ambulantes con el modelo de distribución tipo pizza. También, con la incursión de las redes socio digitales se presentan innovaciones y agencia por parte de vendedores y usuarios que, en el espacio virtual, se advierten de productos o vendedores peligrosos, se hacen recomendaciones entre usuarios y comparten experiencias para el auto cuidado de las personas que usan drogas, mientras que los vendedores, suelen tener mayor cuidado del tipo de productos que ofrecen. Así, este tipo de sofisticación ha potencializado el mercado de alta calidad o *premium* para personas con mayor poder adquisitivo.

De este modo, ha sido complicado vigilar el narcomenudeo desde una perspectiva única, por ejemplo, desde la seguridad o la salud (Zamudio, 2008; Zamudio y Santos, 2013; Arredondo *et al*., 2018), debido a que la multiplicidad de actores involucrados implica un análisis de tipo social. Aunado a esto, el crecimiento y expansión de grupos organizados encargados del control de la venta de drogas a nivel territorial, presentan dinámicas cada vez más violentas y han desplazado en la última década a los vendedores menos conflictivos. Por su parte, las rentas pueden ser altamente lucrativas, si se tiene control de estas variables. En este orden de ideas pensemos en la supuesta estructura de utilización de franquicia criminal para acaparar la venta de drogas en bares, centros nocturnos o espacios turísticos de la Ciudad y quienes suelen utilizar la intimidacion o estrategias violentas. El tamaño de las ganancias será mucho más grande y rentable a las de un emprendedor que no es violento ni tiene nexos con grupos criminales y se podría pensar como autónomo las ganancias serán menores y sin embargo esta diversidad de venta se ha perseguido con el mismo modelo policial.

En este sentido, esta tesis busca analizar un fenómeno contemporáneo que atrae la atención de investigadores, tomadores de decisiones y especialistas en política criminal, derecho, políticas de salud y seguridad. Así como periodistas, historiadores de la prohibición, científicos sociales, urbanistas, sociólogos urbanos o antropólogos. A través de sus capítulos y conclusiones, pretende ofrecer una interpretación histórica y articulada de un fenómeno que al estar entre la enunciación ilegal y prácticas sociales suele vanalizarse en meros actos criminales en notas policiacas o en estadísticas de seguridad.

Sobre la pertinencia investigativa, la historia social resulta adecuada para el análisis de este tipo de fenómenos por dos razones. La primera, obedece a las condiciones de cambio en la escritura de la historia presentes en el contexto de la década de los sesenta, cuando se

pasó de una historia historizante a otra de tipo estructural, dónde el estudio de grupos obreros, subalternos o desfavorecidos tomaron una relevancia inusitada o poco vista. En segundo lugar, dicho análisis contó con la cualidad que ofrecían los estudios interdisciplinarios, dado que los fenómenos sociales dejaron de observarse únicamente desde la perspectiva política o económica, para nutrirse de las ciencias sociales, con el fin de establecer una perspectiva global o totalizante, es por ello que analizar el narcomenudeo como fenómeno de mercado y como fenómeno social implica una serie de intercambios y flujos contextuales de carácter local y global, las cuales han ocurrido bajo distintas perspectivas de coyunturas específicas como lo es la prohibición global de las drogas a partir de los convenios internacionales y cuestiones particulares como el tipo de régimen político o el control y desarrollo de los mercados informales e ilícitos.

Sobre ello, Julián Casanova (2003), al intentar ofrecer una definición de lo que es la historia social, recupera la idea de que este tipo de análisis es de naturaleza estructural, razón por la cual observa fenómenos colectivos, más que experiencias personales. Esto no significa que los acontecimientos y percepciones individuales sean desechadas, sino que forman parte de la configuración de la percepción de los problemas sociales. Es decir, para que un fenómeno como el narcomenudeo sea considerado como un problema que afecta a la sociedad contemporánea es necesario conocer cómo es que gradualmente se fue transformando el problema mundial de las drogas a partir del concepto de narcotráfico como una estructura global de comercio ilícito a gran escala a un fenómeno local y cotidiano.

En este sentido, el narcomenudeo ha sido utilizado como agenda política y electoral (Astorga, 2015), donde algunos de los gobiernos locales incluyeron medidas en contra del narcotráfico o de la venta de drogas al menudeo dentro de sus propuestas políticas y los candidatos que resultaron electos ya siendo funcionarios introdujeron desde el año 1996 medidas como el uso de fuerzas policiales especiales para el combate a las drogas e incluir mandos militares en los gabinetes de seguridad (Astorga, 2012).

Esto coincidió con cambios estructurales políticos y sociales en la capital mexicana, en la que a partir de la reforma política del Distrito Federal de 1996, los habitantes pudieron elegir al Jefe de Gobierno a partir del año 1997 y desde el 2000 a los titulares de las

demarcaciones territoriales mediante voto ciudadano, reconfigurando los balances entre partidos y coaliciones políticas, por ejemplo en la elección del año 2000 el Partido de la Revolución Democrática y sus coaliciones obtuvieron 10 delegaciones mientras que la alianza Partido Acción Nacional-Partido Verde, 6 delegaciones reconfigurando con esto las redes de apoyo de los partidos, las redes clientelares y una demanda creciente de la ciudadanía por el aumento de la criminalidad por ejemplo el secuestro y robo.

Para mediados de la primera década del 2000, la expansión en el uso del término narcomenudeo se había extendió en la prensa y su uso diseminado entre los políticos, funcionarios y periodistas que hacían declaraciones, siempre a partir de información poco clara o confusa por ejemplo, mencionando una cierta cantidad de puntos de venta fijos, o narco tienditas, que oscilaban entre los 1200 y 2000 entre 2004 y 2008 (Vega, 2012), a raíz de esto, los ciudadanos impulsaron campañas para promover esquemas de denuncia anónima a números policiales, por lo que el narcomenudeo representaba en algunos casos una fuente de tensión entre comunidades locales.

Diez años después, según el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario 2018 el narcomenudeo se encontró dentro de los tres delitos más frecuentes del fuero federal con intervenciones policiales. Además, de acuerdo con dicho censo, es la segunda causa de ingreso a centros penitenciarios, de tratamiento y/o internamiento para adolescentes con cerca de 13 900 (INEGI, 2020), siendo un total de 188 mil 262 personas privadas de la libertad en centros penitenciarios (INEGI, 2017) y aproximadamente 30 979 mil presos en la Ciudad de México (INEGI, 2018). Sobre esto llaman la atención dos cuestiones: la primera en el rubro intervenciones policiales, pues las detenciones suelen ser reportadas sin denunciante o por denuncia anónima y en muchas ocasiones son policías los que realizan la detención y acusan a los procesados y la segunda es un alto número de jóvenes procesados por este delito.

De modo que, una historia social del narcomenudeo implica una historización de fenómenos urbanos, describiendo a los delitos contra la salud, el esquema y origen de la prohibición jurídica y el tipo penal utilizado para su persecución, mediante la categorización de enemigos internos derivado de problemáticas globales como: el tráfico ilícito, el uso

indebido de drogas y el marco internacional del problema mundial de las drogas. La relación de lo urbano con la historia social fue analizada por Hobsbawm desde 1971, cuando la dividió en seis áreas coma la demografía y el parentesco, grupos sociales, mentalidades, industrialización, movimientos y protestas sociales y estudios urbanos (Casanova, 2003: 73).

Así, el objetivo de esta tesis fue elaborar una historia social del narcomenudeo, entendida como la historia de la sociedad en su conjunto, dado que analiza unidades específicas de personas, grupos o comunidades grupos conviven y se relacionan, pero también contempla las prácticas, transacciones e impacto de dichas interacciones en el tiempo, dado que un fenómeno como el narcomenudeo toca diferentes aspectos vinculados con dinámicas sociales, culturales, económicas y políticas.

Además, pretende dialogar con distintas corrientes de pensamiento, elaborando desde una perspectiva multidisciplinar con distintos saberes como, el derecho, la política, la socio historia y la comunicación. Para entender problemas del presente, con el fin de elaborar recomendaciones generales sobre problemas prácticos de asuntos públicos como el control y combate al fenómeno del narcomenudeo en un contexto de relaciones multifactoriales, locales y globales. En este orden de ideas, parto de la pregunta ¿De qué forma el narcomenudeo se ha extendido en la Ciudad de México de 1989 a 2020 a partir del marco de interacción entre lo global (acuerdos, tratados, convenios y actores internacionales) y lo local (actores, instituciones, marcos jurídicos y normativos sujetos a la realidad nacional de México y en particular de la Ciudad de México)?

Por lo que, para historiar el fenómeno de la venta al menudeo de drogas ilícitas, en particular en la Ciudad de México de 1989 al año 2020, tomaré en cuenta dos perspectivas una estructural y otra coyuntural desde un horizonte socio histórico. Es por ello por lo que, situar con orden y documentación el control de drogas a través sus procesos sociales históricos e institucionales introduciría en un primer momento el nivel estructural de los mercados ilícitos los cuales se insertan en un largo entramado de comercio ilegal de drogas en la ciudad durante los últimos cien años. Mientras que la perspectiva coyuntural se construye por medio de la selección de cortes históricos que corresponden a un reordenamiento global y sus repercusiones a nivel local entre 1989 y 2020.

El objetivo general de este trabajo de investigación es la elaboración de cortes históricos en periodos o etapas delimitadas mediante rupturas y procesos políticos, económicos y sociales relevantes en el marco de interacción global y local con perspectiva coyuntural y estructural. Para después como objetivo particular, analizar estos periodos a partir del marco de interacción de normas, leyes, acuerdos, locales y globales a partir de los modelos de la securitización, americanización de las políticas de control de drogas en el marco del régimen internacional de prohibición de drogas y la reconfiguración del poder político.

Sostengo por lo tanto como hipótesis o supuesto de partida que, existe una relación en la expansión del narcomenudeo o la venta de drogas a pequeña escala dirigidas al consumidor final en la Ciudad de México a partir de la interacción entre las políticas globales del regímen internacional de prohibición con la ratificación por parte de México de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988 en 1989 la cual promovió una penalización del consumo y posesión de drogas en los sistemas jurídicos locales como lo ocurrido en 2009 con la promulgación de la ley contra narcomenudeo en un entorno de institucionalización y vigorización de los modelos de seguridad (UNODC, 2004).

Debido a que, en este contexto histórico y social se generaron transformaciones a nivel hemisférico y bilateral con América del Norte las cuales afianzaron nuevas formas de comercio, consumo y delincuencia en un contexto de aumento en la demanda de drogas ilícitas para el mercado interno y externo. Aunado a esto, el proceso de reconfiguración del poder político a nivel local y el establecimiento de una agenda de seguridad internacional y nacional exacerbada durante la guerra contra el terrorismo ocacionada por los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York en 2001, la Ciudad de México comenzó un proceso de securitización encabezado por los gobiernos de alternancia política siendo el concepto de narcomenudeo una forma de adopción del enemigo interno el cual debía combatirse con medidas de cero tolerancia (Davis y Reyes, 2007).

Por último, durante la llamada guerra contra las drogas mexicana instaurada en 2006, la Ciudad de México experimentó una reestructuración del fenómeno de la venta de drogas a pequeña escala, la cual se extiendió como un problema de salud, de inseguridad y de gestión

de política pública. Culminando con la adopción de las reformas de ley en el año 2009, las cuales estipularon que los delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo deberían ser perseguidos por las entidades locales enmarcadas en un contexto complejo y violento con un número mayor de actores involucrados.

Esta tesis está dividida en cuatro capítulos en el primero titulado: Del régimen internacional de prohibición de drogas al régimen político mexicano: Construcción de una historia social del narcomenudeo, incluye una revisión de literatura acotada relevante sobre el marco teórico que comprende: la nueva historia social, la securitización, la literatura sobre el régimen y sistema político mexicano y cambio democrático comprendida como una historia multidisciplinar que escribe la historia de la sociedad en su conjunto. Además se elabora la pertinencia del análisis del narcomenudo a partir de historiar el fonómeno como un marco de intercambio internacional y local de mercancías ilegalizadas y su problematización mediante el proyecto global de larga duración denominado: Regímen Internacional de Prohibición de drogas o del Consenso de Viena a partir de un modelo de control social, político y cultural, en interacción con los sistémas jurídicos y el regímen político mexicano a partir de las transformaciones, permanencias y continudades económicas, sociales y políticas durante la era coyuntural de el cambio democrático, la caída del muro de Berlín y los modelos globales de integración regional y los modelos de securitización internacional como las llamada guerras globales contra las drogas y contra el terrorismo y la culminación de la integración a al Comando Norte y a la iniciativa Mérida.

En el segundo capítulo, se aborda la metodología argumentada mediante la perspectiva cualitativa tomada en cuenta como: un conjunto de prácticas materiales interpretativas que hacen visible el mundo (Denzin, 2008). Dado que, existe una diversidad de enfoques dentro de la metodología cualitativa, se realiza una breve revisión de literatura en la cual se define que: para explorar y comprender los significados de individuos y grupos a problemas humanos es necesario identificar las cualidades de los problemas sociales (Creswell, 2014).

En particular, se utiliza la entrevista semi estructurada a actores relevantes de los campos: gubernamentales de las relaciones internacionales, agentes reguladores administrativos de la salud, de la seguridad, sociedad civil e involucrados en el tema del

narcomenudeo. Desde este horizonte, se propone operacionalizar la metodología con la propuesta de historia social tomada en cuenta como una serie de relaciones y construcción de una narración de la historia de la sociedad en su conjunto que mediante el marco analítico multi nivel a través de la articulación histórica y temporal de cortes en el tiempo se construyeron 4 categorías de análisis derivadas del marco teórico a partir de la interacción de lo regional, de lo internacional y lo local las cuales son: el Régimen Internacional de Prohibición, El Sistema político mexicano, la Americanización y la Securitización y variables identificadas como ítems en los que se incluyen: la reconfiguración del poder político, la corrupción, la reforma política, la interdependencia, el respeto y garantía a los Derechos Humanos, rendición de cuentas, cooperación internacional, militarización, policialización, unilateralismo, mediatización, integración económica, transparencia, cero tolerancia y autoritarismo.

Estas categorías fueron construidas a partir de la revisión de literatura y tomadas como unidades de muestreo, las cuales se complementan con las unidades temáticas mediante las cuales se elaboró una guía de entrevista semi estructurada que incluye índices temáticos flexibles adaptables dependiendo el perfil del entrevistado y el contexto en el cual se lleve a cabo la entrevista. Para esto es necesario mencionar que, en se realiza una contextualización de la entrevista como método cualitativo a expertos culturales y desprendidas como narraciones y textos de cultura (Geertz, 2003). En este orden de ideas, la selección de la muestra para los expertos culturales se realizó mediante muestreo orientado tomado en cuenta como un modo de selección que localiza a quienes tengan atributos necesarios para la investigación (Aldridge y Levine, 2003).

Retomando el formato de la entrevista, estas fueron elaboradas cara a cara mediante software de video llamada Zoom con una duración de entre 40 minutos y una hora y media, con preguntas semi estructuradas. A partir de las respuestas, fueron analizadas mediante índices temáticos concernientes desde la perspectiva del análisis de contenido etnográfico (Altheide, 1987; 2008). A través de búsqueda de saturación de las categorías e índices temáticos y contrastación con documentación oficial obtenida de repositorios institucionales. Habiendo recopilado estos resultados y desde el horizonte de la socio historia, se busca inferir en procesos de mediana y corta duración que parten de particularidades estructurales y coyunturales, visibles a través de pequeñas transformaciones o permanencias.

En el tercer capítulo: Regímenes globales de políticas anti droga y su control local se desarrolla una argumentación a partir cortes históricos temporales establecidos a en coyunturas locales e internacionales que a pesar de ser procesos inacabados o con continuidades se pueden ordenar mediante etapas tomadas como rupturas o reacomodos en la configuración del régimen local de control de drogas en el marco de un mercado global de mercancías ilegalizadas las cuales articulan el régimen internacional de prohibición. En el primer apartado la Campaña Permanente se contempla un periodo de cuatro décadas correspondiente a la época de partido único entre 1948-1984, donde hubo una transformación a partir del endurecimiento del control penal y el uso de aparatos de seguridad para el control de drogas en específico la erradicación de plantíos y la intercepción de cargamentos en el contexto de la guerra fría a la par de existir un intercambio con los aparatos de cooperación internacional y diplomática internacional con una influencia dominante de los Estados Unidos.

En los apartados, americanización de la lucha contra las drogas en México 1985-1994 y apertura económica y el enemigo interno en México 1997-2006 se narra cómo a través de una serie de articulaciones en los cambios políticos, económicos y sociales se establecen los nuevos marcos de relaciones entre México y Estados Unidos a partir de la vigorización de esquemas de cooperación de seguridad y militar en el campo del control de drogas y bajo el paraguas de las amenazas a la seguridad nacional y hemisférica, este corte temporal definirá la construcción e institucionalización del enemigo interno a partir del desplazamiento y complementación de la figura de la insurgencia y guerrilla como enemigo del estado depositado durante la época de la guerra fría hacia un ente en configuración como es el tráfico ilícito de drogas o narcotráfico y sus actores así como un nuevo marco de cooperación política ante el proceso de integración regional en la época de la internacionalización de las políticas económicas de mercado abierto y la política de securitización.

Si bien, la temporalidad de esta tesis corresponde a un lapso definido entre la ratificación de la Convención Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 ratificada por el Estado Mexicano en 1989 coincidiendo con el primer año de administración de Carlos Salinas y la reconfiguración política de antiguo Distrito Federal (1989-2019) hasta el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hay que remarcar que los corte históricos elaborados oscilan en acontecimientos y delimitaciones

coyunturales sin embargo el algunos procesos son estructurales y de mediana duración histórica por lo que anteceden a las fechas propuestas es por ello que se mencionan acontecimientos importantes y de coyuntura actual como el final de la administración del gobierno de Andrés Manuel López Obrador el cual será mencionado de manera breve como un recuento de ciertas condiciones que permitieron que tanto el narcomenudeo como el narcotráfico fueran temas relevantes durante la administración y el devenir en el tiempo no es único y lineal es por ello que en la tesis se recuperan acontecimientos anteriores por lo que la matriz de análisis respecto al régimen internacional de prohibición, el sistema político mexicano, la americanización y la securitización articulan el análisis.

Por último en el cuarto capítulo, se presenta de manera somera la configuración del control de drogas en específico del tráfico ilícito en grandes volúmenes a partir de su ascenso en el eje programático como prioridad para el control de drogas internacional y ante rupturas políticas y geo políticas respecto al desplazamiento de las rutas del tráfico ilícito de drogas ilegalizadas y mediante el fortalecimiento de la construcción de la *narco narrativa* a partir del intercambios mediante dispositivos de construcción de jerarquías en el entorno de las guerras globales contra las drogas hasta la securitización el control mediante la cero tolerancia y la expansión de la agenda de persecución del comercio de drogas a pequeña escala bajo la nomenclatura de narcomenudeo.

Por un lado, en el caso mexicano, la mitología del narcotraficante (Astorga, 2004) y la narco-narrativa (Zavala, 2018) han arraigado en los campos de producción social y cultural. Este arraigo ha consolidado prácticas, valores y relaciones entre actores e instituciones que reproducen estereotipos y estilos de pensamiento sobre fenómenos relacionados con la ilegalidad y la criminalidad, especialmente en contextos de debilidad institucional. Estas condiciones han permitido que, en la actualidad, el mercado de drogas a pequeña escala (narcomenudeo) se nutra de estas narrativas dominantes y comparta esquemas de persecución similares a las políticas de "mano dura". Esto genera consecuencias no intencionadas, como restricciones a las libertades y problemáticas en los ámbitos jurídico y constitucional.

De esta forma, desde una perspectiva binacional y global, la figura del narcotráfico se consolidó tras el asesinato de Enrique Camarena, lo que instrumentalizó y exacerbó su uso

como herramienta de negociación y chantaje entre México y Estados Unidos. Sin embargo, el mercado local de drogas se constituyó como un fenómeno más o menos controlado y focalizado, explotado por actores ilegales e informales supeditados a un contexto de control autoritario, como se puede observar en el caso del Río Tula. En este sentido, la relevancia de esta tesis radica en trazar un mapa que permita introducir y continuar estudios políticos con un enfoque social e histórico y una mirada multiescalar. Aunque la construcción histórica y narrativa del narcotráfico tiene como epicentro a la Ciudad de México, la relación entre México y Estados Unidos será definitoria en las condiciones que configuran el narcomenudeo como un fenómeno multicausal, de arraigo histórico, cambiante, difícil de controlar y heterogéneo. Este fenómeno comparte características con las narrativas y acepciones construidas en torno al narcotráfico como una forma de política y seguridad para mitigar conflictos.

Capítulo I. Del régimen internacional de prohibición de drogas al régimen político mexicano: Construcción de una historia social del narcomenudeo.

En este primer capítulo se organiza una explicación de la pregunta de investigación: ¿cómo es que se configura la articulación del régimen internacional de prohibición de drogas a partir de marcos globales y normas locales? Para esto, argumento mediante la delimitación del régimen internacional de prohibición y su interacción con el sistema político mexicano sobre cómo es que se construyó social y políticamente un dispositivo de control que parte de un marco de cooperación internacional y posterior maduración de los órganos e instrumentos internacionales de fiscalización sobre drogas hasta ser una excusa para la expansión de sistema de control territorial policial y militares. Estos dispositivos aproximaciones, se cimentan a través de la interacción multinivel con el régimen local de prohibición de drogas, entendido como una serie de tensiones en el largo entramado de la historia mexicana que abarcan desde las prohibiciones virreinales, hasta la fiscalización e institucionalización del control higiénico de los preparados medicamentosos en las farmacias y el actual modelo de persecución securitaria de las sustancias psicoactivas ilegalizadas.

Además, se bosqueja el largo contexto socio cultural e histórico intervenido por el largo siglo XX, donde el régimen de prohibición global y su adaptación local dispositivos que interactúan en una tensa relación con los Estados Unidos como un eje dominante en el nuevo orden internacional de la posguerra y al cual Eric Hobsbawm interviene como el periodo de expansión del paradigma de la liberalización económica y aceleración en la circulación de mercancías. En este sentido, al ser Estados Unidos uno de los principales consumidores de productos del mundo teniendo un papel preponderante como potencia económica y política se imbrica también no solo un expansionismo económico sino el de un imperio moral el cual faculta para que haya una relación particular entre la producción y tráfico de drogas en particular con los sistemas diplomáticos y de cooperación bilateral configurando un sistema local y global de aceleración de procesos económicos y culturales incluidos los proyectos de integración regional, donde para el caso del control de drogas incluye aspectos de seguridad pública y nacional, en un entorno de liberalización económica y de los cuales el mercado local y global de drogas ilícitas serán agentes configurantes de tensión y control.

En este orden de ideas, el capítulo está delimitado a partir de historiar condiciones estructurales y coyunturales en los marcos del control de la salud y la seguridad a partir de una perspectiva amplia recuperada de la historia social en la última fase del historiador Eric Hobsbawm en su obra Tiempo de Rupturas Sociedad y Cultura en el Siglo XX en la cual entiende una interrelación entre la cultura, la política y el mercado. Habiendo mencionado esto, en el marco de una construcción de lo que Hobsbawm denomina *cultura mundial*, definirá el consumo, producción y demanda de drogas ilícitas a nivel planetario, ya que el intercambio de mercancías será un eje definitorio del modo de relaciones políticas, culturales y sociales que para este caso de estudio en particular, las drogas ilegalizadas exacerbarán una serie de contradicciones y dinámicas en compromisos adquiridos ante el sistema de fiscalización y el régimen de prohibición y las relaciones políticas a nivel local y con el país vecino.

Tomando lo anterior en cuenta, recupero la arquitectura del control de drogas a través del Consenso de Viena, también llamado Régimen Internacional[2] de Prohibición de Drogas o prohibicionismo[3], es una serie de convenios internacionales para la fiscalización y control de drogas, el cual incluye a la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. Estos convenios y políticas no son recientes o improvisados, ya que tienen sus antecedentes a principios del siglo XX con la Comisión Internacional del opio de Shanghái en 1909 y el Convenio Internacional del Opio de La Haya en 1912 entre otros como el Convenio para la Supresión del Tráfico Ilícito de 1936 (UNODC, 2014).

Estos convenios y propuestas inauguraron los dispositivos globales enfocados en el control farmacéutico y de salud con las listas de fiscalización internacionales eliminando el

[2] Por Regímen Internacional recupero la propuesta clásica de Stephen Krasner: Conjunto de principios normas, reglas y procedimientos de toma de decisiones explícitos o implícitos en torno a los cuales convergen las expectativas de los actores en un área determinada de las relaciones internacionales (Krasner, 1983).

[3] Y por prohibicionismo se entenderá como un modelo radical de control del mercado de algunos psicoactivos, que incluyó la meta de erradicar hábitos sociales e individuales de consumo (Labate y Rodrigues, 2015: 21).

potencial terapéutico de ciertas sustancias mediante el paradigma médico y un control y fiscalización a partir de aparatos jurídicos y de seguridad, los cuales se radicalizaron medio siglo después con la declaración de Richard Nixon hacia una *guerra total* contra el abuso de drogas (Markham, 1972), a partir de intercambios, tensiones entre y la fuerte influencia norteamericana el régimen internacional de prohibición hasta la incorporación de un horizonte punitivo y securitario.

Esta *guerra total,* dio pie al uso de estrategias agresivas y agendas presidenciales contra las drogas incluyendo medidas policiales y armadas para la expansión de las políticas norteamericanas de control hemisférico con medidas unilaterales como la operación intercepción donde se cerraron garitas en la frontera y se inspeccionaron autos y personas de manera otras mediante negociaciones donde destacaron las Convenciones sobre drogas de 1961 y 1971. Dentro de estas medidas de control a nivel de fiscalización internacional se procuraba la erradicación de cultivos de plantas ilegalizadas para la elaboración de psicoactivos, con la meta de controlar principalmente los opioides, la mariguana y la hoja de coca para la producción de cocaína, lo cual incluyó que se expandiera el dispositivo de control dirigido a las naciones en desarrollo en las que se originaron esas sustancias y en su mayoría estas se producen en países del tercer mundo (McAllister, 2000: 243).

Tomando en cuenta este contexto histórico este es empatado con el control de población que el estado mexicano, el gobierno norteamericano y algunos otros estados en Latinoamérica y otras partes del mundo emprendieron para controlar, disminuir o erradicar grupos disidentes o minorías peligrosas en el marco de las políticas de la guerra fría. Lo cual implicó un particular escenario de la expansión y adaptación local y global de la doctrina de la seguridad nacional y de amenazas internas y externas propuestas por los Estados Unidos. Siendo el ala castrense la que se robustecerá como una fuerza de ley[4] a utilizar como un esquema de control para la erradicación de cultivos ilegalizados y también en el control de ciertas poblaciones, criminalizando actores específicos como a los campesinos, vendedores, traficantes e intermediarios y población nativa de zonas productoras de cultivos ilícitos,

[4] Jaques Derridá (1997) propuso el término Fuerza de Ley a una facultad administrativa hacia un enemigo a un gran delincuente que desafía el órden jurídico y que debe ser sometido con violencia ante la violencia que este ejerce.

cuestión que articulará una particular cultura del tráfico ilícito, relaciones políticas, complicidades ilícitas, informales y el establecimiento de una narrativa de las instituciones federales, locales, internacionales y norteamericanas del fenómeno del tráfico ilícito narcotráfico como una amenaza (Enciso, 2009).

Este esquema de control, penalización y persecución ha conformado: intereses, retóricas, burocracias, nacionales e internacionales. En este sentido, William McAllister (2012) señala que este sistema al ser entendido como un régimen internacional se comprende como un modelo global que funciona parecido al de una maquinaria y que al ser una construcción social, se va a cimentar en relaciones asimétricas como por ejemplo las promulgaciones de los tratados los cuales obedecen a ciertas coyunturas o necesidades políticas y estas pueden obedecer a juicios no racionales donde a partir de negociaciones diplomáticas algunos países con mayor poder y capital social impondrán sus intereses por ejemplo la moral privada conservadora norteamericana y la expansión del uso armado para el control de drogas en un esquema de guerras globales contra las drogas (Collins, 2012b).

Será por esto que, la guerra contra las drogas como acción de comunicación política y como acto administrativo, lo tomaré en cuenta como un dispositivo político-moral que surge de las siguientes coyunturas políticas: la reestructuración y re acomodo de las agendas bélicas convencionales de la década de los sesenta en particular la derrota en Vietnam, el aumento en el consumo de drogas ilícitas ante un nuevo contexto e individualismo, exploración de la conciencia de las asimetrías de los proyectos de expansión política y económica y emparentados con. Así, entre 1961 y 1971, durante la era Nixon, se estableció un endurecimiento y control diplomático y científico con la prohibición del LSD y MDMA sustancias que comprendían el universo farmacológico controlado y que fueron desviadas para el uso en la experimentación de estados alterados de la conciencia en la experimentación psicodélica y la segunda en los circuitos de culturas de fiesta como un hematógeno.

Al respecto, Antonio Escohotado (2002) menciona que incluso el protocolo científico y la diplomacia internacional utilizaron presiones políticas y protocolos de investigación falsos para prohibir las sustancias alucinógenas que eran identificadas con grupos disidentes y con los estados alterados de la conciencia, limitando la tradición de investigación con psiquedélicos en psiquiatría, psicofarmacología, biología y química orgánica como los que

realizaron Albert Hofmann, Timothy Leary, O Gordon Wasson, posteriormente con la Ley sobre compuestos análogos a sustancias controladas publicada en 1986 en Estados Unidos se ilegalizó poder sintetizar cualquier sustancia que no esté previamente autorizada (Ott, 2011), norma que fue adoptada de manera subsecuente en casi todos los países firmantes de los convenios internacionales de prohibición incluyendo México.

De tal modo, la guerra contra las drogas supone un dispositivo de control que oscila entre lo jurídico, político, cultural, pasando por lo social construyendo un andamiaje de bio poder y control de la salud. Comienza como un experimento para el control social y político de ciertas minorías étnicas, y sirve para controlar ciertas prácticas culturales sobre la salud enfermedad y prácticas tradicionales.

En el caso mexicano, si bien existen distintas teorías y enfoques hay un consenso relativamente generalizado para distinguir una nueva época de guerra contra las drogas utilizada como campaña permanente (Toro, 1998; Astorga, 2007; 2015; Fernández, 2012; Correa-Cabrera, 2017; Anaya, 2019), como forma de capitalización política y parte de una agenda hemisférica securitaria internacional derivada del ataque terrorista a las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York el 11 de septiembre de 2001 o también llamado 9/11, en consecuencia el gobierno de George Bush y la influencia del Pentágono podían conducir al mundo a una nueva era (Anderson, 2014) a partir de sus políticas internacionales.

En el extremo contemporáneo, tomando en cuenta la hegemonía del norte global y la eurocentrización del control de drogas, algunas aproximaciones han sido mediante la internacionalización de ciertas políticas, en particular la llamada americanización del control de drogas (Toro, 1998) pasa por un esquema de reivindicación de lo moral como aspecto subjetivo y punible a través de instrumentos jurídicos como los tratados internacionales y la obligatoriedad de aplicar sanciones a consumidores y actores del mercado ilícito.

En este orden de ideas, a partir de criterios científicos como la criminología o las ciencias de la adicción o adictología, o las neurociencias se ha tejido un andamiaje médico legal basado en lo científico para establecer penalidades, dosis, e incluso proyectos de reorientación de las llamadas conductas antisociales como lo son el consumo de drogas para la visión totalizadora y dominante.

En el caso mexicano, dichos criterios adquieren un matiz distinto a las condiciones contextuales que son los elementos necesarios para la construcción de una historia social que recupera las experiencias de los actores a la luz de una cultura del miedo, escenificada en el contexto de combate armado a los grupos de traficantes, al crimen organizado y a la inseguridad, mediante abundantes flujos de financiamiento público y proyectos de integración regional y seguridad hemisférica como el Plan Mérida.

La iniciativa Mérida fue presentada el 13 y 14 de marzo de 2007 como un instrumento de cooperación bilateral en materia de seguridad y desarrollo por los presidentes George Bush y Felipe Calderón, sería formalmente ideado por el Centro de Información y Seguridad Nacional CISEN y presentado al ejecutivo norteamericano en el marco de la llamada guerra contra el crimen organizado en México y durante el colofón de la guerra contra el terror.

El plan fue planteado como apoyo para desarrollar un programa de seguridad regional, ideado bajo el paraguas de la seguridad hemisférica y la creciente securitización regional, en el acuerdo inicial se estipuló un apoyo de 1.400 millones de dólares a 3 años. Los objetivos generales del financiamiento norteamericano eran: 1- Mejora en los programas de las agencias de seguridad en la vigilancia de su territorio. 2- Equipamiento y activos para apoyar a las agencias de seguridad homólogas. 3- Tecnología computarizada para fortalecer la coordinación de las fuerzas de seguridad e información entre México y EE. UU., tecnologías para aumentar la capacidad de México para recolectar inteligencia para propósitos de orden público. 4. Producir un hemisferio más seguro y protegido, donde las organizaciones criminales ya no amenazarán a los gobiernos ni a la seguridad regional; y 5. Impedir la entrada y la propagación de drogas ilícitas y amenazas transnacionales en toda la región y hacia Estados Unidos (Cámara de Diputados, 2008).

La medida fue acompañada de una serie de acuerdos para fortalecer los sistemas de justicia como la reforma para la implementación de juicios orales, fortalecimiento de los sistemas de tratamiento en adicciones, por ejemplo, con el apoyo y financiamiento de la encuesta nacional de adicciones 2011 y programas de prevención de la violencia y fortalecimiento del tejido social como los llamados centros Nueva Vida.

La ayuda total fue estimada en 3.000 millones de dólares y fue dada por concluida en junio de 2021 por el entonces embajador Marcelo Ebrard señalando al diario norteamericano

The Washington Post que, -el acuerdo no funcionaba y buscarían nuevos mecanismos de cooperación con Washington (The Washington Post, 2021) dando por comienzo el acuerdo bilateral Entendimiento Bicentenario.

Así, el narcomenudeo ejemplifica la convergencia de una serie de dinámicas el orden económico, político, social e incluso cultural que pueden analizarse desde la perspectiva de la historia social entendida como un entramado de relaciones entre la cultura, la política y el mercado que para el caso de la compra venta de drogas a pequeña escala o para el consumidor final se articuló un modelo determinado para la persecución y criminalización el cual tiene relaciones, interdependencias y particularidades entre el régimen internacional de prohibición como un dispositivo global radical y la articulación de un sistema de control local a través del paradigma médico y de seguridad a través de la denominación del circuito del tratamiento con la figura de farmacodependiente y la figura del narcomenudista, cuestión que pone en perspectiva la interrelación entre las decisiones que se tomaron en los sistemas internacionales de fiscalización de las Naciones Unidas, la influencia de las políticas de seguridad norteamericanas y la adaptación al entorno local mexicano en particular del Distrito Federal como estructura administrativa y su posterior construcción como un estado entidad federativa en la Ciudad de México con sus particularidades en la distribución geográfica y la forma de operación de los sistemas policiales, y de administración de justicia.

1.1 Historiar el narcomenudeo

Ante las dificultades derivadas de una indagación histórica que parte de un problema en el presente, el historiador debe explicitar su propósito al escribir, la temporalidad a estudiar y también cómo es que comprende el pasado, el presente y su relación. En la famosa obra de Marc Bloch, *Introducción a la historia*, el autor discute sobre los límites de lo actual y lo inactual, mediante una crítica a aquellos que consideran poco útil conocer el pasado. Para el autor esta tendencia puede ser explicada por el hecho de que "quizá el hombre de la edad de la electricidad o del avión se siente muy lejos de sus antepasados" (Bloch, 2000: 32), y esto sucede, desde su perspectiva, porque en el siglo XX los procesos sociales y sus consecuencias comenzaron a ser más rápidos y visibles debido a las revoluciones en el ámbito político y científico.

En virtud de ello, Bloch argumenta que se puede percibir cercana una fase en la historia por el hecho de ser poco distante en el tiempo o no ofrecer cambios sustanciales respecto al presente, llama a esta condición *contemporaneidad*. No obstante, el historiador francés se remite a ejemplos en la historiografía del siglo XIX y la relación con su contexto; porque Bloch no participó de la ruptura del final de la segunda guerra mundial en 1945, dado que murió un año antes. Sin embargo, logró observar los límites entre lo actual e inactual en el ejercicio de la historia de su tiempo, realizando una crítica tanto al anticuario como al sociólogo, al primero por no observar a sus contemporáneos y al segundo porque en su afán de explicar lo vivo desde una perspectiva científica realiza una observación limitada a unas cuantas décadas.

Para la investigación histórica es importante comenzar un análisis observando el presente por medio de la identificación de los cambios estructurales, sean sutiles o profundos. Sin embargo, esta tarea no es fácil para el historiador que se ve tentado a imprimir la imagen que tiene del presente en cada etapa que investiga. En este sentido, Bloch lleva la discusión al campo de la metodología dado que en ella yace el estatus científico de la historia. Se preguntó si las herramientas y el método de investigación de la historia se verían modificados en el futuro, en la medida que el historiador se situará en diferentes etapas y realizará cortes temporales más arriesgados, incluso si esto implica aproximarse al presente.

Una reflexión similar, la desarrolló el historiador mexicano Guillermo Zermeño en la introducción de la obra colectiva *Historia fin de siglo*. Donde argumenta que desde hace

algunos años se realizan balances del estado de las investigaciones historiográficas, con la finalidad de conocer las tendencias de investigación y los objetivos que persiguen los historiadores, así como el estado del "régimen moderno de historicidad" (Zermeño, 2016: 13) debido a las transformaciones que la disciplina experimenta desde el siglo XIX cuando la historia alcanzó el estatus de ciencia.

En este sentido, Zermeño apunta que el modelo de finales del siglo XIX fue heredado a los historiadores del siguiente siglo. Sin embargo, los profundos cambios derivados de las secuelas de la Segunda Guerra Mundial generaron una fractura en el campo de la actividad del historiador, razón por la cual el estudioso de la historia no ha renunciado a valores epistémicos como la búsqueda de objetividad y neutralidad, pero sí a la búsqueda de la verdad como fin último y esto sucede porque la concepción del tiempo, en especial el futuro, se ha modificado.

Esta situación obedece, desde la perspectiva de Zermeño (2016), a las dudas y tambaleos derivados del frágil modelo decimonónico de "la construcción científica de la historiografía" (2016: 15), que a la luz del fin del siglo XX enfrenta la ruptura con las nuevas formas de hacer la historia y las prácticas de los historiadores que cuestionan el régimen de historicidad impuesto para justificar la cientificidad de la disciplina. No solo eso, lo más importante es que el mundo ha cambiado y los límites, retos y expectativas ya no son los mismos, y esto ha derivado en nuevas formas de repensar el mundo social y la historiografía.

En este sentido, la práctica histórica sugiere realizar un análisis de tipo sociohistórico en el campo de las drogas ilegales, esto es posible cuando se contemplan procesos incompletos en la construcción del pasado y las tensiones entre la sociedad y sus transformaciones, así como las elaboraciones lingüísticas para describir ciertos fenómenos. Así, la intentar historiar el narcomenudeo es necesario construir una línea temporal que indique su irrupción en el terreno lingüístico, ya que este fenómeno no es nuevo pues ha estado presente en los intercambios comerciales de drogas desde hace cientos de años, solo que no se utilizaba el término narcomenudeo para referirse a una dinámica de compra-venta, intercambio o trueque y posesión para la venta de pequeñas cantidades de droga.

La necesidad de construir una historia social del narcomenudeo implica, para esta investigación, analizar el concepto, es decir, su origen y transformaciones en un periodo de

treinta años. En tanto que, las herramientas metodológicas para ello se encuentran en la disciplina de la historia, en particular la historia conceptual, que de acuerdo con los planteamientos de Reinhart Koselleck (2012) es una fusión entre la historia social y la historia de la lingüística, lo cual, a la luz de los cambios en el espectro social, da como resultado una historia plural que centra su atención en las dinámicas de los hablantes.

El análisis conceptual busca comprender tanto las relaciones entre hablar y actuar, así como las transformaciones de los conceptos y los contextos, lo cual permite observar los cambios en las definiciones, para ello, los estudios histórico-conceptuales se basan en tres categorías: *historicidad, tiempo* y *espacio* las cuales son útiles para que el investigador responda, ¿Quién, cómo, cuándo y dónde se utiliza el concepto en cuestión?, mientras que, al mismo tiempo, caracteriza la realidad a estudiar (Fuentes, 2019).

De acuerdo con Lidia Girola (2011), el proceso de historiar un concepto obedece a la comprensión de distintos significados atribuidos a un término a lo largo de un periodo determinado, el análisis del contexto de donde surgen las definiciones, las relaciones sociales, políticas y económicas que permiten que un fenómeno o cosa se entienda de una manera u otra y que a su vez adquiera sentido. Dicho de otra manera, para historiar es necesario llevar a cabo dos pasos en el proceso metodológico, primero reconocer las condiciones de historicidad, entendida como la cualidad de lo histórico presente en los actos, acontecimientos y sujetos analizados, y en segundo lugar ubicar temporalmente objetos, definiciones, conceptos o actores.

Para lograr una precisión histórica y metodológica sobre el concepto narcomenudeo, es necesario definir otros términos relacionados con este. Por dar un ejemplo, el término narcotráfico que ha sido analizado por Luis Astorga (2004) quien argumenta que esta palabra se compone de dos vocablos, el primero, *narco* que refiere a los narcóticos o sustancias que provocan sueño o relajamiento, mientras que el segundo, *tráfico*, tiende a entenderse de manera positiva o peyorativa, como negocio o comercio clandestino respectivamente.

Resulta interesante, como lo señala Astorga, que el significado negativo impera en el uso social, pese a que en sentido estricto el narcotráfico es una negociación comercial de narcóticos, por ello, el autor recomienda designar como tráfico de sustancias ilegales cuando la intención es dar un matiz peyorativo, aunque literal a la palabra. Algo similar sucede en el

caso del término narcomenudeo, que comparte la estructura gramatical, repitiendo narco y el sentido de sí mismo; en tanto que menudeo se refiere a la venta de productos al por menor o a detalle.

En contraste, la palabra menudeo no tiene una acepción negativa en sí misma, pero al momento de unirla con la palabra narco, implica de manera inmediata la idea de delito, ya que la venta al menudeo de narcóticos si es una actividad ilícita. Es decir, las farmacéuticas realizan transacciones comerciales y trafican lícitamente narcóticos, pero en una farmacia local está prohibida la venta de forma individual de cualquier sustancia, de hecho, gran cantidad de medicamentos cuentan con la leyenda *no etiquetado para su venta individual*, esto sin importar si cuentan con cualidades narcóticas o no.

Si bien, puede parecer que el narcomenudeo es un fenómeno reciente, la venta de drogas al menudeo en la Ciudad de México tiene por lo menos cien años documentado, esto sin contar las transacciones cotidianas que pasaron desapercibidas al ojo de la historia oficial por no resultar relevantes en ese momento, por ejemplo las yerberas y boticarios en el siglo XIX, lo cierto es que al endurecerse el régimen local de prohibición y al instaurarse los delitos contra la salud[5] en las leyes mexicanas entre 1917 y 1931 se comenzó a perseguir y documentar a estas prácticas como faltas administrativas y en 1925 se prohibió el tráfico con fines de trasiego internacional (Smith, 1992).

Ya para el mandato de Lázaro Cárdenas, se presentan los primeros intentos de orientación hacia la salud y tratamiento de la *toxicomanía,* entendida como el antecedente histórico de la palabra adicción y cuyo significado estaba relacionado con el hábito de consumir drogas sin poder dejarlas, lo cual indica que en ese contexto los asuntos de drogas estaban orientados al control de la salud. Sin embargo, a partir de la década de los cuarenta la tendencia prohibicionista se instala en la práctica gubernamental (Pérez-Montfort, 2015).

Por ello, los delitos contra la salud fueron delegados a la Procuraduría General de la República (PGR) a partir de 1948 para su penalización, y a la Dirección Federal de Seguridad

[5] Los delitos contra la salud y el control sanitario de narcóticos tienen un origen en el proyecto de nación porfirista y modernizador "higienista" donde se incluían como primigenios delitos contra la salud, a la prostitución y al manejo de sustancias peligrosas o alimentos. Uno de los primeros órganos en controlar este tipo de rubros fueron las policías sanitarias. En la época post revolucionaria la doctrina eugenésica se consolidó en el discurso político en contra de sustancias que pudieran "degenerar la raza" (Schievenini, 2013).

(DFS) para su persecución hasta 1985 (Aguayo, 2001) cuando fue disuelta para ser sustituida por la Policía Judicial Federal (PJF), después Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en el sexenio de Vicente Fox.

En este orden de ideas, durante estos primeros cincuenta años del siglo XX se configuró un aparato social y jurídico de carácter global, que, bajo argumentos generalmente desprendidos desde la predominancia norteamericana, las sustancias narcóticas y su control migraron de un uso privado a tener una predominancia en los aspectos criminales donde se privilegiaron las penas restrictivas sobre el antiguo sistema sanitario (Musto, 1999).

Al no existir, en este contexto, el término narcomenudeo, se denominaba a las transacciones de compra-venta de drogas a cualquier escala como narcotráfico. Es a partir de finales de la década de los ochenta que el comercio de drogas al detal o pequeñas cantidades comienza a tomar relevancia dado el aumento de los consumidores a nivel mundial de sustancias como la cocaína y el crack que se venden a los usuarios en pequeñas dosis. Aunado a ello, estaban las repercusiones sociales, como un aumento en el crimen en las ciudades, sirva de ejemplo Nueva York y Miami.

De esta manera, el gobierno de México en 1986 inauguró para la Ciudad de México el Sistema de Reporte de Información de Drogas (SRID), el cual consistió en el intercambio entre los ministerios públicos, los centros de atención en adicciones y el Instituto Nacional de Psiquiatría, sobre los datos de intoxicaciones, muertes y causas relacionadas con el consumo de drogas. Esto es importante, porque fue el primer acercamiento institucional documentado y sistematizado cronológicamente para identificar las fluctuaciones en los mercados de drogas ilícitas y las tendencias y trayectorias de consumo de usuarios (Ortiz *et al*., 2007).

El 9 de septiembre de 1990, se publicó en el Diario Oficial la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, el cual establece en su Artículo Tercero con la frase: *tipificar como delitos penales en su derecho interno, cuando se cometan intencionalmente* (DOF, 1990). Con esto se facultó a nivel del consenso internacional de control de drogas a pasar de un sistema de fiscalización e invitó a que los países miembros de las Naciones Unidas signantes del acuerdo a que debían perseguir y castigar la posesión de drogas en sus sistemas penales

aún y para uso personal, así como facilitar en la retórica y en la agenda para introducir la doctrina del crimen organizado a través de la figura del *grupo delictivo organizado* señalado en el mismo artículo tercero de la Convención de 1988 con numeral cinco incisos, este documento es parte de un largo entramado de intercambios diplomáticos y políticos mediante los cuales se buscaba fortalecer y refrendar los modelos de cooperación internacional y actividades jurídicas extra territoriales como la entrega vigilada y la extradición de delincuentes afianzando además el ámbito de la persecución del tráfico ilícito como asunto de seguridad nacional e internacional señalando que los grupos delictivos pueden participar de actividades delictivas internacionales organizadas en un contexto de tendencia creciente de producción, demanda y tráfico de estupefacientes y sicotrópicos (DOF, 1990).

Para la siguiente década durante los años noventa, el término narcotráfico alcanzó una cobertura destacada en la prensa nacional, logrando integrar lógicas, términos y argots que eran conocidos únicamente a nivel regional, pero que rebasaron este contexto y se insertaron en la cultura popular y el lenguaje político con términos como: cartel, plaza, sicario, entre otras. Además, comenzaron a publicarse análisis detallados como *La mitología del narcotraficante en México* de Luis Astorga en 1994 y *La internacionalización de la DEA en México* de Celia Toro de 1998, los cuales dan cuenta de las transformaciones respecto al control de drogas en un largo contexto que abarca desde las primeras incursiones en la zona del triángulo dorado y erradicación forzada de cultivos y persecución de traficantes hasta convertirse en una agenda permanente en vísperas de las negociaciones del tratado de integración regional y económico el Tratado de libre comercio de América del Norte así como un proceso de reconfiguración del sistema político mexicano con la aceleración de la descentralización estatal en este entorno como se argumenta más adelante el horizonte securitizador y el aumento global y la tendencia creciente al aumento de población urbana y por consiguiente un tenue pero sostenido consumo de drogas ilegalizadas dará un contexto para el aumento de los puntos de venta de droga al menudeo.

Aunque no es posible establecer la fecha exacta en la que comenzó a utilizarse el término narcomenudeo, en el año 2002 en el informe de labores de la Procuraduría General de la República, en el apartado Fiscalía Especializada para la atención de delitos contra la salud, se distinguió la modalidad de venta de drogas al menudeo del narcotráfico. Para el siguiente informe correspondiente al año 2003, hace su aparición el término narcomenudeo

para designar a las transacciones ilícitas de venta a detalle, en este documento se propone la creación de un Programa Nacional para el Combate al Narcomenudeo cuyos objetivos fueron la prevención, tratamiento y reducción de la oferta de drogas en esta modalidad.

La irrupción del término narcomenudeo diversificó la persecución de los delitos contra la salud en el ámbito local en particular con un modelo policial securitizado. Por ejemplo, con la utilización del Grupo de Reacción e Intervención (GERI) de la Policía Judicial del Distrito Federal, lo cual permitió la captura de vendedores al menudeo en zonas como Iztapalapa, Venustiano Carranza y Ciudad Nezahualcóyotl en el Estado de México, con la detención de *Ma Baker*, famosa líder de un grupo criminal dedicado a la venta de drogas, en principio en fiestas de sonido en la vía pública y después como distribuidores de drogas para el Valle de México.

Las principales características del *Cartel de Neza* fueron la violencia para controlar los puntos de venta, el poder corruptor de autoridades y policía local y federal, así como las relaciones comerciales con traficantes sudamericanos, sin necesidad de acudir a los grandes carteles del tráfico mexicanos con injerencia internacional (Caporal, 2012). Este grupo delictivo facultó y puso la mira pública y un creciente interés de cobertura en el periodismo policiaco de la figura del cártel interno el cual abastecía la demanda de drogas dentro de la ciudad de México y área metropolitana a través de la corrupción y la venta de abundantes cantidades de cocaína a través de un sistema de maquila de envoltorios (Castillo y Gómez, 2002) en la zona oriente incluso se señaló que utilizaron la Arena de lucha libre de ciudad Neza como un centro de distribución de cocaína en polvo y piedra (Ramón, 2003).

En una revisión de la cobertura institucional y mediática del caso del Cártel de Neza las autoridades en particular la Procuraduría General de la República utilizó el término de narcotráfico para referirse a las actividades ilícitas del grupo delictivo, en una muestra aleatoria no exhaustiva de 15 notas periodísticas entre 2002 y 2004 encontré que se hacía referencia al grupo como *narcotraficantes* y no como narcomenudistas, un posible indicador para esta referencia puede ser que el término aún no se diseminaba de manera amplia o que quizá el grupo de vendedores de drogas ilícitas era considerado un grupo que vendía al menudeo pero en grandes cantidades y fueron procesados por delitos contra la salud y delincuencia organizada. Otro aspecto destacable es la corrupción de algunos miembros de

agencias de seguridad, ya que se señaló que tenían en su estructura criminal a ex policías judiciales y policías ministeriales del Distrito Federal y el Estado de México. En una nota de prensa se mencionó incluso que fueron detenidos 41 personas en particular el jefe de la policía de Ciudad Neza junto con policías y expolicías al respecto según La Jornada fueron detenidos 27 policías municipales de Ecatepec y 14 de Seguridad pública estatal (Dávila, 2003).

En este contexto, es necesario recordar que los delitos contra la salud en la modalidad de pequeñas dosis o al menudeo se contemplaba y tipificaba dentro del catálogo de delitos perseguidos por el fuero federal es por ello que la Procuraduría General de la República a partir de la Agencia Federal de Investigaciones coadyuvó con las policías locales la persecución de dichos delitos y eran procesados ante autoridades federales un desafío que presentó este llamado Cártel de Neza fue la extra. Territorialidad ya que las fronteras y límites entre el Distrito Federal el Estado de México en la práctica son difusas y comparten dinámicas y poblaciones fluidas que comprenden rutas diversas de transporte y enlaces económicos lo cual para el caso del tráfico ilícito de drogas va a existir una relación compleja y complementaria sobre todo en áreas urbanas densamente pobladas.

En este sentido, el fenómeno del narcomenudeo no es privativo de la Ciudad de México y la zona metropolitana, lo cierto es que alcanzó una mayor proyección en estas áreas debido que concentran un mayor número de población y por ende de usuarios, además, de que en los estados del interior de la república se desarrollan dinámicas de producción a mayor escala, lo cual corresponde más al narcotráfico, mientras que la ciudad es un espacio de comercio y con grandes flujos de mercancías ilegales y mercados informales procedentes de todo el mundo. Por dar un ejemplo, en el informe de la PGR de 2003, las incautaciones reportadas indican el decomiso de goma de opio, mariguana y cocaína, pero también de audiocasetes, discos compactos piratas, mercancía robada y sin registro esto empata con un programa ambicioso y reformas para castigar con mayor severidad infracciones a la propiedad intelectual las cuales pasaron a ser parte del catálogo de crimen organizado (Aguiar, 2012).

En este orden de ideas, pese a parecer un fenómeno particular que se presenta únicamente en el ámbito local, el narcomenudeo se desarrolla a escala global, de manera que

historizar este problema también implica contemplar tres grandes esferas: el campo internacional, el campo del estado/nacional y el campo local, denominado dimensión interna, cuestión que empata con la propuesta de temporalización que Mónica Serrano (2012) propone respecto a la evolución de los mercados de drogas ilícitas en México: primero a partir de la emergencia de una economía local de drogas ilegales o *drug economy*, seguido de un surgimiento de un mercado ilícito regulado centralmente; y la transición a una economía privatizada y cada vez más violenta de los mercados de drogas ilícitas (2012: 134).

Estos tres estadios propuestos por Serrano (2012) y las esferas articulan un entramado de lo global a lo local, en un proceso de larga duración en el mercado de drogas ilegalizadas primero haya pasado de un mercado farmacéutico, a una explotación ilegal de las sustancias fiscalizadas e ilegalizadas a un contexto de explotación violenta del mercado informal en interacción multinivel de lo global a lo local, primero con el tráfico internacional ilícito y el mercado a pequeña escala o narcomenudeo en un largo entramado de reconfiguración del poder político (Mason, 2001).

Así, este fenómeno denominado narcomenudeo o venta de drogas en pequeña escala o para el consumidor final, presenta en la actualidad una diversidad de actores como: las policías locales y federales, los ministerios públicos locales y federales, las fiscalías especializadas, los usuarios, los narcomenudistas, los centros de tratamiento de adicciones (Arredondo *et al*., 2018) y dinámicas diversas como la venta de drogas en la calle de manera informal en contextos de ilegalidad estructural (Chomczyński *et al*., 2019) hasta la venta en zonas de alto poder adquisitivo y mediante redes socio digitales o mensajería. Además, de las entregas por medio de servicios de mensajería y la constante reestructuración de los mandos al interior de organizaciones criminales y policiales, incluso el encarcelamiento y asesinato de vendedores, lideres y otros al interior de la estructura complejizan este análisis en particular a partir de la captura del mercado ilícito de grupos más violentos dando pie a casos de violencia epidémica (Díaz-Román, 2022).

Un amplio desafío para el análisis del narcomenudeo reside en que al ser un mercado ilícito su control obedece en algunos momentos a dinámicas de delincuencia donde el crimen local en especial los grupos organizados, pandillas y formaciones criminales con arraigo territorial se han extendido y ha crecido la propensión al delito (Robinson y Rengert, 2006)

la venta de protección o extorsión, contrabando, piratería y privación ilegal de la libertad, sin embargo, aunque parezca que en algunos momentos no es claro el nivel de análisis en términos de delimitar el crimen y hasta donde compete los delitos contra la salud también es cierto que el narcomenudeo dependerá en particular de la presencia de la droga ofertada y el punto de venta los cuales tendrán fluctuaciones espaciales en intensidad y frecuencia por lo que la narrativa sobre el narcomenudeo y el tipo penal facultará de una estructura comunicacional para englobar una serie de hechos y prácticas delictivas.

En síntesis, señalar los límites temporales, espacios de acción y características de los actores, es útil para identificar un proceso de *securitización* de la vida pública, a partir del discurso político, aproximaciones institucionales y mediático se construyeron las amenazas y un sentido pesimista en el cual se permiten por ejemplo: restringir derechos y libertades, enmarcando temas como la protección de bienes intangibles y la salud, cuestión que facilitó un sistema de vigilancia policializado o militarizado e instrumentalización del control armado para la protección de la salud pública.

De manera que, a partir del análisis de fenómenos urbanos, como lo son los delitos contra la salud, el esquema y origen de la prohibición jurídica y el tipo penal utilizado para su persecución, mediante la categorización de enemigos internos derivado de problemáticas globales como: el tráfico ilícito, el uso indebido de drogas y el marco internacional del problema mundial de las drogas, es que se busca construir la historia social del narcomenudeo. Perspectiva que se diferencia de otras tendencias de investigación debido a sus cualidades interdisciplinarias y a las transformaciones que atravesó a finales de la década de los sesenta, para pasar de un análisis de corte marxista hacia investigaciones más amplias donde los aportes metodológicos de la antropología y la sociología son determinantes para dar explicación a los fenómenos contemporáneos.

1.2 Historia social

En la obra *El mundo como representación* Roger Chartier (2006), señala que existe una relación de interdependencia entre lo global y lo local, resultado de una reinterpretación de la escritura de la historia que a principios del siglo XX atravesó por un cambio notorio con el modelo historiográfico del siglo XIX que privilegiaba la objetividad científica, la cual después de las guerras se había agotado (Fontana, 2002).

En este sentido, Chartier recupera en el concepto *global history* y el término *glocal* como una la relación de tensión en la escritura de la historia y los contextos interdependientes derivados de la época post guerra fría y la globalización cuestión que se entrecruza con el esquema de comercio, venta internacional y tráfico ilícito de drogas o denominado también por autores como Musto (1999) *drug trade*, concepto que designa a los tratados internacionales sobre el comercio y control de drogas.

En este entramado, la guerra contra las drogas y el régimen internacional de drogas han echado mano de la tecnología y la ciencia desde el comienzo de la fiscalización global de estas. De este modo, es posible el estudio de fenómenos del presente puede lograrse desde la perspectiva de la historia social, dado que contempla la dimensión social de los hechos y acontecimientos que se analizan desde la historia política y económica e incluso de la tecnología, esto es patente sobre todo en el análisis histórico en los riesgos asociados al uso de las drogas, así como las consecuencias de los cambios en ámbito social (Riquelme y Fuentes, 2019).

Así, para Eric Hobsbawm (1998), uno de los representantes más destacados en historia social, la disciplina de la historia ha experimentado transformaciones metodológicas derivadas de los cambios de paradigmas en las ciencias sociales, en especial la antropología social, la lingüística y la sociología; lo cual ha llevado a los historiadores a estudiar temáticas que son abordadas desde la interdisciplinariedad para cubrir las demandas de la sociedad contemporánea respecto a sus problemas y temas de interés, como puede ser el fenómeno del narcomenudeo.

En este sentido, Thane y Muñoz (2008) identifica la importancia de la historia social en su capacidad de renovarse desde hace más de medio siglo, pues tomó del feminismo, la lucha por los derechos civiles y los movimientos decoloniales, sin dejar fuera el análisis de

la división social y de clase. En cuanto a los cambios teóricos y metodológicos coincide con Hobsbawm en que las variaciones en estas áreas han estimulado la evolución de la historia social.

Para Briggs y Burke (2002), la política, economía y tecnología son importante para la historia social y cultural, no obstante, esta última ha representado nuevas formas de acceder al conocimiento, así como prácticas comunicativas y fenómenos culturales, sirva de ejemplo el fenómeno que Hobsbawm llama "coexistencia de culturas" (2013, p. 38), que tiene sus fundamentos en la expansión de las TIC en distintas culturas y que al apropiarse de dichas herramientas y hacer uso de computadoras, teléfonos inteligentes e internet entran en contacto.

Sin embargo, para esta investigación que trata sobre la historia del narcomenudeo, es necesario aclarar que esta no puede realizarse sin antes considerar una categoría más amplia, que es la historia de las drogas, la cual ha sido ampliamente estudiada, y en la historiografía se pueden encontrar estudios que oscilan entre distintos periodos históricos, por ejemplo, la época colonial en México, hasta análisis por sustancia como puede ser la mariguana o el opio. No obstante, autores como Paul Gootenberg (2012) nos recuerdan que algunas sustancias como la cocaína y fenómenos como el tráfico de drogas pueden estar fuera de los alcances de la historiografía, razón por la cual resulta primordial abordar dichas problemáticas y llevarlas al terreno de la historia.

Sobre este asunto, Escohotado (2002) señaló que es necesario realizar historias sociales y culturales sobre las drogas, dentro de las cuales se contemplen análisis estructurales, líneas cronológicas y evolutivas, en diferentes latitudes y así considerar las tradiciones de pueblos en todo el mundo y el uso que han hecho de diversas drogas a lo largo de la historia. Pero también, historias que se enfoquen en las dinámicas económicas, en los usuarios y en las leyes; elementos que repercuten en la vida social.

De acuerdo con esto, pensar en una historia general de las drogas implica una empresa monumental, donde tienen cabida los estudios sobre el uso ritual, médico, recreativo; los cambios en el mercado, la incursión de nuevas sustancias y hasta la regulación de estas. En este sentido, una historia social del narcomenudeo es parte de un entramado que se rige por relaciones sociales y económicas, que a final de cuentas aporta reflexiones sobre un

fenómeno poco estudiado pero importante para comprender mejor las relaciones entre los sujetos y las sustancias.

Al respecto (Gootenberg y Campos, 2015) proponen en un primer momento extender el marco de análisis sobre las drogas a partir de la interdisciplina mediante largos períodos históricos, particularidades culturales y regionales contextualizando un gran abanico de sustancias psicoactivas como de relaciones que abarcan el alimento y los estimulantes en la formación del mundo contemporáneo cuestión también propuesta por (Schievilbusch, 1993) como una historia social. Tomando en cuenta lo anterior, Gootenberg y Campos también añaden una temporalización aplicable para esta tesis desde una perspectiva global y local con conexiones multinivel que no dispersen el objeto de estudio que es la configuración del narcomenudeo identificó dos puntos nodales el primero es delimitar el proceso de compra venta de droga como un proceso capitalista a partir de la oferta de una mercancía global (O´Malley *et al*., 1993) aunado a in imaginario político de los traficantes y usuarios como criminales y enemigos (Madrazo, 2016).

Por lo que habría que, señalar que al igual que para la cultura y socio historia de las drogas no se cuenta con una historiografía extensa y existe un centralismo en los impactos de la historia sobre las drogas originadas a partir de las decisiones en Washington, es por esto que delimitó la venta de drogas al menudeo con antecedentes al menos desde el siglo XIX con la era de las boticas pero quizá rastreable desde la venta informal de plantas medicinales durante la colonia y un centralismo a partir de la instauración del régimen posrevolucionario pero haciendo énfasis en la reconfiguración política derivada de la guerra fría, el modelo desarrollista, el cambio agrario, la violencia social la reestructuración de los regímenes autoritarios y la era de la era neoliberal y globalización (Gootenberg y Campos, 2015: 4) .

En este sentido, los ejes primordiales para el abordaje local y global a partir política antidroga será mediante la noción seguridad nacional clásica norteamericana, derivada de la doctrina Truman, fue estipulada en 1947 con la *National Security Act*, siendo un quiebre y transformación en el horizonte político, tecnológico y científico, dada la primacía de la inversión estatal a través del control de la seguridad militar.

Así, desde 1945 con las propuestas del informe de Vannevar Bush, las aplicaciones de los postulados sobre la guerra contra la enfermedad, la seguridad nacional y el bienestar

público serán instrumentalizaciones conectadas y colectivas que irán sufriendo transformaciones, pero darán sentido a la construcción del problema mundial de las drogas aunado al control institucional y a la americanización del combate y de las políticas de drogas globales (Escohotado, 2002) donde a partir del combate a las adicciones y al tráfico ilícito internacional se justificarán por ejemplo las empresas del complejo militar industrial (Davis, 2013).

En virtud de ello, el vínculo entre el régimen internacional de prohibición, la ciencia y la tecnología aunado a la seguridad nacional permiten un andamiaje de intercambio de recursos, económicos, políticos, morales, configurando un entramado social en el cual se permiten ciertas violaciones a la intimidad, a los derechos humanos así como entidades de intercambio de conocimiento con instituciones donde a partir del año 1988 el tráfico ilícito y el crimen organizado junto con la nueva agenda contra el terrorismo sofisticaron y tecnificaron al régimen internacional de prohibición.

Retomando a Hobsbawm (1995) en su obra *Historia del siglo XX 1914-1991,* donde señala que la revolución cultural que se vivió en los últimos años de las décadas de 1980 y 1990, fueron una época de ruptura en la estructura de la sociedad respecto a sus formas de organización y modelos generales de relación, donde se privilegió, la unidad del individuo como centro de las normas de conducta.

De tal modo, cuando 1990 México suscribió Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, publicando su ratificación en el Diario Oficial de la Federación, tomando en cuenta el clima social y político a escala global, este acto se empató con grandes quiebres internacionales como la caída del muro de Berlín y la reconfiguración del sistema internacional bipolar, suponiendo un nuevo orden internacional tanto en jerarquías como en relaciones y prioridades políticas mundiales.

Dentro de estas jerarquías, la campaña para la integración regional de México a América del norte comienza con la preparación y gestión diplomática para la época de apertura económica entre 1993 y 1994, a través de una fuerte personalización de la imagen presidencial, en medio de una profunda transformación política con el cambio de partido único en México, en el cual, la reconfiguración política y el nuevo sistema de coaliciones y

partidos, dio un nuevo horizonte a la gobernanza y por ende a los asuntos sobre la administración y a las instituciones dedicadas al ámbito del control de drogas en especial la Policía Judicial Federal (PJF).

En este orden de ideas, los cambios no fueron inmediatos ya que la PJF fue resultado de la extinción de la Dirección Federal de Seguridad o también llamada policía política del régimen priista, la cual fue desmantelada durante la gestión de crisis derivada del caso Camarena en 1985, donde se señaló que altos mandos de esta agencia estaban coludidos con traficantes que fueron detenidos como Rafael Caro Quintero. Un asunto pendiente de este escándalo internacional fue cerrado cuando, al comienzo de la administración de Carlos Salinas, se detuvo a Miguel Ángel Félix Gallardo señalado como un traficante notable de origen sinaloense y presuntamente implicado en el asesinato del agente de la DEA.

De este modo, la narrativa del narcotráfico se consolidó en la prensa y la política mexicana, pues el término fue utilizado para señalar al crimen organizado, dando como resultado una retórica de lo criminal, donde continuamente se hacían guiños a un combate o guerra señalando que se libraba una "lucha sin descanso contra las drogas, en una guerra sin cuartel*"* (Pedraza, 1991: 25) en contra del *narcotráfico organizado*. Si bien estas referencias respecto a traficantes son rastreables en la hemerografía desde mediados del siglo XX la preponderancia y la cobertura en perspectiva de encabezados o *prime*. Así como ser parte de una agenda que colindase entre la seguridad nacional, el intercambio diplomático y la delincuencia cotidiana superó la cobertura mínima y espaciada que hubo durante el periodo del autoritarismo revolucionario y el concepto de narcotráfico como una retórica conceptual se iría consolidando como un eje dominante en los medios y la política y también en la cultura.

Llama la atención, la categoría utilizada por la prensa y por agentes de seguridad y políticos, en la que delegaron una carga conceptual al prefijo narco como toda actividad relacionada al tráfico de drogas ya sea para el trasiego internacional, como para pequeñas operaciones de mercado local, dentro de estas grandes transformaciones cabe señalar que en 1989, en México, se instauraron una serie de esfuerzos diplomáticos que definieron las

relaciones comerciales y políticas con Estados Unidos, el principal mercado de drogas ilícitas del mundo.

Aunado a esto, en la convención de 1988 se sugirió la penalización en los sistemas jurídicos a la posesión y consumo de drogas, y en 1989 se realizaron una serie de reformas al Código Penal para castigar la posesión de algunos narcóticos y estupefacientes. Derivado del conflicto, antes mencionado, con el agente asesinado de la DEA, los sistemas de cooperación bilateral en asuntos de drogas se vieron fortalecidos en esquemas policiales o de vigilancia, por ejemplo, a partir de financiamiento norteamericano para el rubro del control de la oferta a partir del financiamiento para compra de vehículos para erradicación y profesionalización de instituciones de seguridad (Reuter y Ronfelt, 1992; Reuter, 2014; DEA, 2018) mientras que para el rubro de la demanda local se realizaron las encuestas sobre adicciones y se estimuló la investigación científica sobre adicciones financiada por organismos internacionales y con inversión del gobierno mexicano (Akin, 1987).

De acuerdo con esto, a partir de 1988 el gobierno de Carlos Salinas promovió la creación de grupos de trabajo para la revisión del sistema de control sobre drogas como espacio diplomático binacional entre México y Estados Unidos. Así, a partir de la práctica diplomática se desarrollaron una serie de foros, reflexiones e intercambios que culminaron en la publicación del libro *El combate a las drogas en América* editado por el Fondo de Cultura Económica y financiado por la Procuraduría General de la República, la Fundación Ford e Ingenieros Civiles Asociados ICA en 1992.

En esta obra, resulta interesante una distinción de corte histórico-conceptual, con un término actualmente difundido que atañe al narcomenudeo y el horizonte de su control que es *política de drogas,* ya que durante la época de Salinas se evitaba hablar de estos temas y se hacía énfasis en el lenguaje internacional e institucional como el combate a las drogas, adicciones o narcotráfico (Smith, 1992); y solía señalar a este último como toda la actividad ilegal desde la pequeña escala, hasta la internacional y el control sobre drogas solía vincularse a los aspectos de seguridad y de salud en particular los de alto nivel como las negociaciones en los acuerdos bilaterales.

En contraste, el nombre en inglés de la publicación antes mencionada, la cual llevó por título *Drug Policy in the Americas*, no hace referencia a un combate sino a una administración, por esta razón se puede identificar como el concepto Política de Drogas o *Drug Policy* continuó en evolución para México y quizá́ no era la aproximación que el gobierno de ese momento quería abordar, pues ya para finales del sexenio de Salinas los escándalos y violencia relacionada a grupos o bandas de traficantes eran parte de las primeras planas de periódicos nacionales, como el asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas en el aeropuerto de Guadalajara en 1993.

Por dar otro ejemplo, con el asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio en marzo de 1994 se especuló en la prensa y en la doxa pública una posible intromisión del narcotráfico o el crimen organizado, a tal grado que uno de los capítulos de la investigación realizada por la Procuraduría General de la República se denominó "Entorno Político y Narcotráfico" (PGR, 2001a), estos hechos de violencia marcaron la época histórica de la primera mitad de la década de los noventa en México.

Aunado al ambiente de internacionalización y apertura económica de la época, los mercados internos de drogas comenzaron a expandirse, así́ como grupos organizados en el contrabando o actividades ilícitas empezaron a dedicarse, migrar o combinar actividades delictivas de venta de artículos robados, *fayuca* y tráfico o venta de drogas, siendo el tema de los grandes traficantes las noticias que predominaron durante los sexenios de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo (Boyer, 2001).

Este contexto es resultado de una tendencia global en el orden económico y social de la cual Hobsbawm (1995) detalla con particular atención en el caso de la cocaína, señalando lo siguiente:

> Así en los años noventa, la liberalización, se quedó en el límite de la legalización de las drogas, que continuaron estando prohibidas con más o menos severidad, y con un alto grado de ineficiencia. Y es que a partir de los años sesenta se desarrolló un gran mercado de cocaína, sobre todo entre la clase media alta Norteamericana, y, algo después de Europa occidental. Este hecho, al igual que el crecimiento anterior y más plebeyo del mercado de la heroína, (también

> sobre todo en los Estados Unidos), convirtió por primera vez el crimen en un negocio de auténtica importancia (1995: 336).

En consecuencia a la globalización de ciertas políticas (Baylis y Smith, 2005), actividades y prácticas, como el consumo masivo de drogas entre clases medias y clases populares, en especial la mariguana y cocaína, se reconfiguró el esquema de venta de estupefacientes y se aceleraron los procesos de reporteo mediático en concordancia con la expansión de narrativas hegemónicas sobre los nuevos enemigos, siendo el crimen un esquema recurrente tanto de explotación económica como de fortalecimiento de la narrativa política sobre la venta de drogas en pequeñas cantidades. Tomando esto en cuenta, según Valenzuela (2012) la construcción política y narrativa de la guerra contra las drogas es un proceso intersubjetivo de delimitación del *yo* y del *otro* es definido a partir del control de la narrativa de los Estados Unidos en particular a partir de la agenda permanente y personal presidencial desde la era Nixon, pasando por la era George Bush y William Clinton en un entramado de relaciones asimétricas en las que se considera al país vecino un actor virtuoso que defiende los valores americanos de criminales irracionales y que añade ayuda a su vecino deficiente y con defecto (2012: 246).

En el complejo contexto de construir un análisis histórico de los actores, instituciones y prácticas mediante el intercambio entre las normas, acuerdos, leyes en el marco de interacción del régimen internacional y el régimen local de prohibición en la configuración del fenómeno del narcomenudeo y recuperando los puentes que la interdisciplina que supone la historia social, recuperó a la hermenéutica de la prohibición (Cajas, 2004) como un esquema para tomar en cuenta largos procesos dentro de la política, la cultura, la economía y la sociedad. Los cuales, se pueden identificar de manera definida en un contexto internacional y local en dos aspectos: el primero a partir de la criminalización y la delimitación narrativa e institucional hacia el delito o desviación de las actividades circundantes a las sustancias psicoactivas ilegalizadas las cuales están fuera de la norma y estos actores son criminalizados (Enciso, 2009) en el marco de las guerras globales contra las drogas (Collins, 2012a).

Recuperar entonces desde la conceptualización de la historia social que abarque cuestiones estructurales por ejemplo el vínculo entre el régimen internacional de prohibición y la restructuración del cambio político e institucional en México en este sentido en el siguiente apartado se desarrolla a la securitización como un margen de implementación de una doctrina de seguridad a partir de la delimitación de politizar una amenaza como lo será el enemigo interno y la doctrina de la seguridad nacional.

1.3 Securitización

Antes de 1945, el concepto de seguridad se había observado desde una perspectiva filosófica para referirse a la sensación de ausencia de peligro, después de la amarga experiencia de guerra esta concepción se transformó. Y es que, este concepto, así como las definiciones asociadas a él tienen un carácter histórico, dado que se modifican en el tiempo. En este sentido, el discurso de seguridad en occidente en el periodo de estudio comprendido entre 1989 y 2020, es atravesado por tres elementos históricos coyunturales en términos locales y globales para la seguridad internacional, como la caída del muro de Berlín y el fin de la guerra fría, la firma del Tratado del Libre Comercio y el ataque terrorista a las Torres Gemelas en 2001.

Cabe destacar que, en el primer caso, la percepción se guío durante la Guerra Fría por la posible amenaza comunista o el de experimentar el riesgo de algún ataque o accidente nuclear. En el segundo, al tratarse del ámbito del comercio internacional la definición estaría relacionada con el concepto de riesgo y las consecuencias derivadas de las transacciones comerciales que pueden implicar una pérdida o ganancia financiera. Mientras que, para el tercero, la concepción viró hacia la conservación de la paz y el respeto de los derechos humanos (Jore, 2017).

Hecha esta distinción, en este apartado se analiza de manera particular el vínculo existente entre la *securitización* como fenómeno que sugiere una exacerbación de los sistemas de control de la población y el narcomenudeo en el marco de interacción entre lo global y lo local a partir de la relación entre tratados normas, acuerdos y leyes. Así, con el fin de establecer una definición del concepto y caracterizar el fenómeno de la securitización se observan sus antecedentes, interpretación académica y aplicación desde la perspectiva institucional y administrativa en su mayoría depositada en la literatura sobre seguridad

internacional y seguridad nacional (Aguayo, 2001; Benítez, 2010; Pansters, 1998; 2012; 2018; Pansters *et al*., 2018; Serrano, 2008; 2012; 2018; Maciel-Padilla, 2021).

Para comenzar, pongamos por caso un breve análisis conceptual de índole morfológico. La palabra y concepto seguridad o el anglicismo *security* supone un horizonte de posibilidad que intuye una serie de actividades, prácticas y lógicas inmersas en contextos específicos de carácter local y global con consecuencias directas en la aplicación de normas, prácticas, códigos de conducta y legales que atañen a un nuevo orden administrativo sobre la penalización de drogas y la orientación que los regímenes locales y globales de prohibición han adoptado y adaptado.

El primero en el cual cuanta más seguridad habría menos amenazas en la cual se apelaba al miedo y la segunda en la cual la seguridad tiene un espectro más amplio en el cual puede abarcar el medioambiente, bienestar, migración y refugiados. Al nombrar en específico un actor político relevante algún hecho o asunto como un problema de seguridad se delimita desde la perspectiva clásica de la securitización que se tienden una amenaza o un enemigo.

En alguna de la literatura revisada concerniente a la seguridad internacional (Weaver, 1995; Serrano, 1998; Chabat, 2006; Benítez, 2010; Berdal y Serrano, 2022), se establece que la seguridad nacional o hemisférica se ha delimitado en aspectos de orden público y privado. Los cuales son analizados desde distintas perspectivas teóricas, que pueden abarcar, el terrorismo, el robo, la seguridad informática, la amenazas, las armas o la guerra. Sin embargo, a pesar de las distintas áreas y disciplinas es complicado establecer un concepto definido de seguridad ya que actualmente abarca aspecto como los energéticos (Asif, 2022) o la alimentación, en este orden de ideas para Jore (2019) la delimita como:

> La seguridad se puede definir como la capacidad percibida o real de prepararse, adaptarse, resistir y recuperarse de los peligros y las crisis causados por actos deliberados, intencionales y maliciosos de las personas, como el terrorismo, el sabotaje, el crimen organizado o la piratería (2019: 157).

En este orden de ideas, la agenda de seguridad en los años ochenta se vio *aumentada o robustecida* por cuestiones que abarcaban la seguridad global, individual y colectiva (Weaver, 1995). Por securitización se recupera el concepto delimitado en la escuela de Copenhague en la cual se concibe a la seguridad como un acto del habla y como un riesgo o

amenaza a la seguridad (Weaver, 1998). En esta categoría incluye un espectro amplio al concepto de seguridad donde se establece que a partir de los años 1980 en la cual la agenda global en la cual se tomaron casi dos horizontes como dominantes.

De acuerdo con esto, como el concepto securitización responde a una serie de connotaciones o preconcepciones rastreables en el tiempo y de manera particular para efectos de esta investigación en el periodo 1989-2020, ha resultado complicado establecer una definición consensuada debido al amplio margen de problemas que se definen desde la seguridad. Entonces, no se puede ignorar la *praxis* del término, que está relacionada con el objetivo que persigue la securitización, que es hacer más seguro o establecer la seguridad de dinámicas en espacios específicos previa percepción de la pérdida o carencia de seguridad. Para establecer lo que este fenómeno es sirva la siguiente definición:

> Visión intersubjetiva de la construcción de amenazas e identidades por parte de un agente securitizador en torno a objetos referentes de una sociedad en donde estos aprueban o no la ejecución de medidas excepcionales y urgentes… donde se posicionan las principales amenazas para las sociedades y los Estados y cómo sus ciudadanos (Buzán *et al.,* 1998).

En el caso mexicano, la noción de narcotráfico comenzó a tomar notoriedad en la agenda política debido al escándalo Camarena, fue así como la seguridad nacional y las directrices de la casa blanca para denominar al narcotráfico como un asunto relevante para su seguridad nacional (Zavala, 2018) resulta determinante para caracterizar el fenómeno de la securitización, al respecto se puede delimitar que el esquema securitizador juega en dos polos el primero el que le hace juego al sistema político interno mexicano como un modelo de seguridad extrema para el control de amenazas como la migración, el tráfico de drogas y el resguardo de bienes estratégicos y el segundo polo que juega en los horizontes internacional y bilateral en un efecto de importación del modelo securitizador (Pérez-Ricart, 2017) respecto al control de las políticas anti droga fomentando que las burocracias encargadas viraran de un modelo policiaco vigilante con amplia porosidad derivada del sistema político centralista hacia un modelo militarizante apegado a la propuesta de guerra contra las drogas en un corto periodo de tiempo y en el marco de presiones derivadas de la guerra fría de la cooperación internacional y ante dinámicas de expansión de la demanda del mercado de drogas ilícitas y la reconfiguración política y social de los años 70 y 80 como por

ejemplo la expansión urbana, las crisis económicas y la restructura de los flujos territoriales de las rutas del tráfico de drogas ilícitas.

Cabe mencionar que, hasta antes de los años 70 la corrupción en el tema del tráfico internacional de drogas se toleraba a nivel binacional y no parecía preocupar de manera especial al gobierno Norteamericano y durante 40 años a pesar de la influencia norteamericana para controlar el tráfico ilícito en México y contar los sistemas de inteligencia con abundante evidencia e informes sobre posibles vínculos entre traficantes, empresarios y políticos se dejaron pasar de largo hasta la crisis del caso Camarena (Pérez-Ricart, 2018).

Sin embargo, acontecimientos del orden político y económico en México marcaron la primera mitad de la década de los noventa y con ello la percepción de seguridad y el posterior proceso de securitización. En este sentido, el homicidio de Juan Jesús Posadas Ocampo el 24 de mayo de 1993 en el estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara fue un caso que marcó una dinámica de violencia que se extendió en el país. La hipótesis de que el crimen fue el resultado de una confusión entre el automóvil del cardenal y el de Joaquín Guzmán Loera alias *El Chapo* no dejaron satisfechos a todos, debido a lo cual nuevas investigaciones se llevaron a cabo, cobrando a su vez más vidas y sumiendo a la capital de Jalisco en una espiral de conmoción y violencia.

A poco menos de un año de los sucesos en Jalisco, el 23 de marzo de 1994 el candidato del PRI a la presidencia de México es asesinado durante un evento de campaña en Lomas Taurinas, Tijuana. Las contradicciones de la procuraduría, así como la disputa entre versiones que oscilaron entre el asesino solitario y el complot de miembros de la élite política mexicana, reforzaron la idea de la intervención del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. La parcial solución del caso y las detenciones realizadas fomentaron un clima de desconfianza a las autoridades que persiste en la actualidad.[6]

Aunado a esto, el 28 de septiembre de 1994 fue asesinado José Francisco Ruíz Massieu, secretario nacional del PRI y ex gobernador del estado de Guerrero, este fue

[6] Una interesante recuperación del acontecimiento la realizó el grupo mexicano El Tri en 1994 con el lanzamiento del álbum de estudio *Una rola para los minusválidos*, donde en el track titulado: *Con la cola entre la patas*, el vocalista y compositor Alejando Lora canta lo siguiente: "Ya nadie se siente seguro, después de ver lo que paso, pues si a Colosio lo asesinaron tan vilmente, ¿Qué podemos esperar los demás?" (Lora y Martínez, 1994).

ejecutado a las puertas del hotel Casablanca ubicado en la colonia Tabacalera en la Ciudad de México. Igual que en el caso Colosio se detuvo al supuesto autor material no se sabe quién ordenó el magnicidio. En las declaraciones del detenido Daniel Aguilar Treviño, salieron a la luz los nombres de Fernando Rodríguez González, en ese momento secretario técnico de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados y del diputado Manuel Muñoz Rocha desaparecido desde octubre de ese año y sus nexos con el hermano del presidente Raúl Salinas de Gortari. Ante la incompetencia de la PGR para resolver el caso, dados los actores involucrados como el hermano del secretario Mario Ruiz Massieu, la procuraduría perdió aún más credibilidad (Puig, 2014).

Seguido de conflictos derivados del desmantelamiento del estado de bienestar, la falta de acceso a la salud pública y el crecimiento de la criminalidad en las zonas urbanas, la desconfianza ante instituciones como la PGR, así como la sensación de inseguridad, volcaron la atención hacia el ejército como una figura más confiable. De acuerdo con Astorga (2012), esta idea se vio reforzada por la relación de cooperación entre los ejércitos mexicano y estadounidense en 1995, con la finalidad, en ese momento, de entrenar a los soldados mexicanos para que pudieran hacer frente al narcotráfico, inaugurando así una nueva etapa de militarización en el norte del país.

En este orden de ideas, entre 1994 y 1995 a consecuencia de los conflictos anteriormente mencionados se considera como una época crucial de militarización y primera securitización del país, en parte por los problemas relacionados de corte de violencia política y crimen organizado (Gallardo, 2001), y debido al alzamiento militar por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional reactivó los sistemas de defensa militar aunado a la necesidad de instalar un protocolo de seguridad fronteriza en virtud de la instalación de la integración regional de México con América del Norte en el marco del tratado de libre comercio.

La entrada en la escena pública de nuevos grupos subversivos y guerrilleros, fueron catalogados en algún momento como terroristas cuestión que facilitó y articuló que el tráfico internacional de drogas o narcotráfico fuera un pretexto para la capacitación de grupos especiales entrenados en tácticas antiterroristas y contra insurgentes, por ello la seguridad nacional y hemisférica se fortaleció un marco de control a partir del despliegue militar por

ejemplo la defensa de la zona del Golfo y del Pacífico (Maciel-Padilla, 2021). No pasó mucho tiempo para que, en la prensa de los años 90 se reportara que el armamento otorgado por Estados Unidos para el combate antinarco fuera desviado para las campañas de ocupación militar y en enfrentamientos con los grupos guerrilleros (Pérez, 1997).

En junio de 1997 según datos de prensa indicaron que, fueron utilizados helicópteros donados por el pentágono Huey UH-1H (Aponte, 1997; Ruiz, 1997) en enfrentamientos con el EPR en Guerrero y de la misma forma un observador internacional señaló también que pudo identificar armamento donado o vendido por Estados Unidos en las zonas de conflicto cabe señalar que estas aeronaves fueron devueltas por el gobierno mexicano en 1999.

Aunado a estos conflictos políticos, los primeros casos de corrupción en torno al control de drogas hicieron presencia. Para 1997 el titular del Instituto Nacional de Combate a las Drogas (INCD) era detenido por sus nexos con organizaciones de traficantes, lo cual dejó al descubierto la intervención y el conocimiento que otras instancias tenían de esos asuntos; más alarmantes aún, resultaron las insinuaciones sobre los nexos de las autoridades más importantes del país llegando incluso al núcleo cercano de la familia presidencial con narcotraficantes (Astorga, 2012).

En este orden de ideas, entre 1986 y 2002 se configuró un esquema particular de negociación y chantaje político con el sistema de Certificación que suponía que cada año en el mes de Marzo el presidente norteamericano debía presentar ante el congreso un informe con los países que participaban y se calificaba el grado de cooperación lo cual provocaba tensión entre los países productores, este esquema fue criticado debido a la humillación a la que se exponían instituciones administrativas gubernamentales, un ex procurador llegó a clasificarla como arbitraria, corruptora y contraproducente (Del Villar, 1988), las medidas de sanción podían incluir interrumpir el tráfico aéreo, incremento de aranceles o retiro de acuerdos aduaneros, con el periodo de la certificación los asuntos bilaterales en asuntos de cooperación y seguridad se limitaban a asuntos de narcotráfico y paulatinamente a migración, cuestión que pudo cambiar la agenda a asuntos de cooperación económica durante la fase de la negociación del tratado de libre comercio de américa del norte.

Por lo que establecer un esquema de control de la corrupción a través de estrategias de seguridad resultaba urgente en vísperas de la sucesión presidencial de 1988. Sobre la

corrupción Sub-Procurador de la Procuraduría General de la República menciona en sus memorias: la Casa Blanca tenía muy mala opinión del gobierno mexicano, al que consideraba absolutamente corrupto, impune e ineficaz para hacer frente al narcotráfico (Coello, 2021: 79). En este sentido, se configuró una transformación profunda a nivel institucional comenzando por el cambio ante la extinta Dirección Federal de Seguridad en 1989 se funda el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional con el propósito de profesionalizar y modernizar los aparatos de inteligencia y despolitizar este tipo de actividades y desvincularlas de las tareas de combate al tráfico de drogas, cabe señalar que el CISEN participó durante las pesquisas de los secuestradores de alto perfil como los entre 1996 y 1998 (Valdés, 2015) .

De este modo también se crearon, la Subprocuraduría de Investigación y Lucha contra el narcotráfico en 1988, y en 1992 el Centro de Planeación para el Control de Drogas (Cendro), la cual se convertiría en la polémica INCD, la cual fue transformada por la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Salud, y ante las continuas crisis señalada por escándalos de corrupción la Policía Federal de Caminos[7] se transformaría en la Policía Federal Preventiva PFP la cual fue utilizada para controlar el conflicto universitario del año 2000 como cuerpo de ocupación en terreno y también para el combate al narcotráfico con un grupo operativo que transitó del CISEN a la PFP (Valdés, 2015).

Estas transformaciones al interior de la Procuración de Justicia incluyeron una serie de cambios en los organigramas y en las normativas, por ejemplo, cambios en la Ley Orgánica de la PGR, su reglamento interno, además se vieron robustecidas con la creación de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y una transformación desde la época de Ernesto Zedillo del poder Judicial lo cual no logró permear a los jueces y ministerios públicos, pero sí a sus cúpulas. Aunado a estos cambios institucionales la agenda sobre securitización comenzó a ampliarse en el rubro de la seguridad pública y seguridad nacional, un ejemplo podría encontrarse en el entrenamiento de corte militar que recibieron los agentes de la Policía Federal Preventiva (Valdés, 2015).

[7] Coello Trejo señala: Entre 1970 y 1976, la Policía Federal de Caminos dependía directamente de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, pero como no tenían vigilancia era un desmadre, se dedicaban a extorsionar, a robar, a cobrar derecho de paso, a traficar, le sacaban dinero a los transportistas. Era un cuerpo muy corrupto.

Algo que logró cambiar la *agenda narcótica* entre México y Estados Unidos fue la coyuntura y promesa de la transición democrática al establecer un nuevo sistema político, de cooperación que se basaría en el entendimiento y en la cooperación, para este efecto la elección del año 2000 configuró un nuevo espectro en las relaciones México Estados Unidos en lo que sugiera a la seguridad, pues en palabras de mismos miembros del gabinete señalaban que: la procuraduría estaba penetrada por los cárteles y totalmente corrompida (Aguilar y Castañeda, 2007), para lograr este cambio en la confianza en las instituciones se nombró al General Rafael Macedo de la Concha como Procurador General de la República cuestión que se denominó en la prensa y por algunos defensores de derechos humanos como una militarización de los mandos en el área civil de la procuración de justicia, cuestión que ya se había comenzado a experimentar desde la época de Ernesto Zedillo[8].

Dentro de las medidas propuestas por el General Macedo, incluía la extinción de la Policía Judicial Federal percibida también como una institución corrupta e ineficiente para transformarla en un modelo de institución acorde a un modelo policial de investigación para el nuevo milenio, así se fundó la Agencia Federal de Investigaciones, asimismo se integró un sistema de cooperación y acuerdos para la transición interinstitucional de personal de la extinta Policía Judicial a la Agencia o al Ejército, sin embargo la premura con la que se realizaron algunos movimientos, en vistas de la transición y urgencia de resultados, la agencia presentó desafíos y fue en varias ocasiones fue acusada de favorecer a ciertos traficantes y criminales (Valdés , 2015) en medio de tensiones de carácter político.

Por último, lo anteriormente señalado marcó el origen y antecedentes pero quizá los esquemas de securitización que permearon como un paradigma predominante en México a nivel hemisférico se desprenden de la integración del modelo de combate al terrorismo, donde mediante el esquema de fronteras inteligentes y el vínculo drogas terrorismo fueron un binomio que logró consolidarse donde incluso Hillary Clinton funcionaria del Departamento de Estado llegó a hablar de una narco insurgencia terrorista (Carroll, 2010) una década después del 11 de septiembre a partir de la violencia e inseguridad . Derivado de

[8] Aguilar y Castañeda, ambos miembros del gabinete de Vicente Fox, el Primero como Vocero de la Presidencia y el Segundo con una estancia breve en la cancillería señalan que Ernesto Zedillo fue “engañado” por los norteamericanos pues al comenzar su mandato al momento de investigar y solicitar ternas para las personas que encabezarían el INCD, el General Gutiérrez Rebollo, obtuvo el visto bueno y la confianza de Washington para después acusarlo de narcotráfico

este hecho ya mencionado, por lo que el primero de octubre de 2002 se consolidó la integración regional militar de México, Canadá y Estados Unidos, a partir del instrumento denominado Comando Norte o *US North Com*, dentro de los objetivos indican proteger, a la nación norteamericana, detectar amenazas a la seguridad y conducir modelos de seguridad con sus aliados (North Com, 2021).

La apertura oficial e institucional en virtud de la construcción de sistemas de seguridad y e información a partir de la guerra contra el terrorismo coincidieron en el marco de la decisión de instaurar un sistema de cooperación entre México y Estados Unidos mediante la estrategia de la iniciativa Mérida, último punto en este apartado de carácter binacional y global el cual comprendió el robustecimiento en la participación militar en el combate al crimen organizado y el intercambio de información y cooperación económica. La securitización lograda por el Plan Mérida fue quizá uno de los grandes procesos de integración regional en materia de inteligencia y seguridad en todo el sistema político mexicano reciente, pues logró abrir de manera pública la interacción con agencias norteamericanas con la instalación de la Oficina Binacional de Inteligencia (OBI) la cual operó de manera unilateral y tuvo un complicado esquema de negociación ya que en algunos momentos fue denunciada una falta de consenso para su instalación por partidos de oposición y dentro de órganos como el Senado de la República (Gaceta del Senado, 2010).

La OBI fue vista con recelo por la Secretaría de la Defensa Nacional como un acto de intervención (Camacho, 2010) ya que se depositaron agencias las cuales podían operar con discrecionalidad entre las que destacaron dependencias del Pentágono como la Agencia de Inteligencia Militar (DIA), la Agencia Nacional de Seguridad (NSA). Agencias dependientes del Departamento de Justicia como el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la DEA la cual, si bien ya tenían presencia en México, durante el gobierno de Felipe Calderón tuvieron aval y carta libre. Al respecto Pérez-Ricart (2018) menciona que desde la época de formación de las burocracias antidroga norteamericanas con el *Federal Bureau of Narcotics* en 1930 y su transición hacia la *Drug Enforcement Administration* en 1973 tuvieron una participación limitada en los sistemas de intercambio de inteligencia de espionaje y de operaciones siendo el punto de infección también

diplomáticas tomando en cuenta la tensión derivada del caso Camarena a mediados de los años ochenta y denominada como una época de desconfianza (Chabat, 2006).

Por lo que se refiere al ámbito local, cabe mencionar que los índices delictivos presentaban aumentos significativos, en lo que concierne a robo y secuestro, por lo que entre 1996 y 1997, el entonces Regente del Distrito Federal Óscar Espinosa Villareal, semi militarizó la ciudad de México y ofreció un gobierno de mano dura, por un lado 102 militares tomaron el mando de la Policía de la capitalina y 2600 soldados realizaron tareas de seguridad, como retenes, detenciones y cateos sin órdenes judiciales y operativos tipo *razzia* en colonias conflictivas (Sánchez, 2020).

Los resultados no fueron del todo positivos y por el contrario algunos terminaron en problemas como enfrentamientos con vecinos e incluso desapariciones (Sánchez, 2020), entre marzo y julio de 1997 la ciudad experimentó una transición a un gobierno encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, sin embargo los problemas de seguridad en la ciudad continuaron por algunos años y el modelo de securitización fue introducido a la ciudad de México con el fin de tener un control sobre el crimen y sobre la población en este sentido, el modelo de restructuración policial a partir de mandos de origen militar continuaron en la ciudad aún y cuando el presidente permitió .

El Gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas sufrió de varias tensiones respecto al control de la seguridad y una presión constante por los medios masivos de comunicación, por ejemplo con el famoso caso del conductor de televisión Paco Stanley, donde a partir de una mezcla de presión política por parte de la oposición y los medios de comunicación[9] lograron establecer una retórica que versaba en la polarización y ataque al gobierno de la ciudad añadiendo un clamor por exigir: seguridad mano dura y resultados inmediatos (Fazio, 2013) a pesar de que el asesinato no parecía relacionado a un tipo de criminalidad cotidiana sino a una acción dirigida y organizada.

Dentro de las pesquisas una línea de investigación residió en un posible vínculo entre el asesinato de Stanley y relaciones con traficantes de drogas. En particular las

[9] Señala Fazio que: El caso Stanley resultó paradigmático en una doble vertiente distorsionadora. Por un lado, en lo que tiene que ver con la construcción de la noticia (y de la realidad) en los medios, en particular en lo que atañe a la (in)seguridad urbana.

averiguaciones de la entonces Procuraduría del Distrito Federal vincularon el hecho y filtraron a la prensa información del examen toxicológico y el informe parcial donde indicaron que el conductor llevaba una placa de la secretaría de gobernación, acreditándolo como agente de la policía judicial, un molino y rastros de cocaína dentro de sus pertenencias (Aranda y Aponte, 1999). Después de este complejo escenario, se complementaba con un entorno pre electoral del gobierno de Cárdenas el cual llegó a su fin como el primer Jefe de Gobierno electo democráticamente, así como sentar precedentes en los cuales se le otorgaron facultades para designar al personal de la policía y el cual continuó con el esquema de mantener ex militares en altos cargos de la Secretaría de Seguridad Pública así como robustecer los sistemas de policiales en una época de creciente inseguridad ciudadana con un modelo policializado descentralizado donde los jefes delegacionales pasaron a tener control sobre los jefes de sector (ALDF, 1999).

En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno las cosas fueron tomando un tinte parecido al de la cero tolerancia, que era el modelo predominante para el control de las ciudades en aquella época, por lo que los cateos sin orden, los operativos en contra de la criminalidad con muchos agentes, de igual manera se tomaron medidas como el operativo mochila segura, operativos rastrillo y una criminalización en particular de personas jóvenes de escasos recursos y baja escolaridad esto aunado al aumento de la criminalidad y entornos adversos lo cual provocó que entre 1998 y 2002 aumentara la población de personas jóvenes en los reclusorios (Gascón, 2002).

Esta política continuó al menos dos sexenios y agravó el sistema de securitización a partir de la tecnificación de la seguridad pública, con la instalación de cámaras y sistemas de video vigilancia, asimismo el narcomenudeo tomó una preponderancia en los medios de comunicación y en el discurso político por lo cual comenzó una persecución intensa, por ejemplo con el caso del Cártel de Neza entre 2001 y 2004 y sucesivamente las primeras incursiones de grupos de traficantes de Michoacán los cuales a partir del comienzo de la guerra contra el crimen organizado en diciembre de 2006 en especial con el llamado operativo Michoacán el fenómeno llamado *efecto cucaracha* provocó que células de la Familia Michoacana y de Los Zetas comenzaron a hacer apariciones e intentar controlar los giros ilícitos y la venta de drogas al menudeo en la zona metropolitana y en la zona oriente de la Ciudad de México (Proceso, 2009).

A manera de cierre se elaboró una tabla con el fin de representar gráficamente un ejemplo cronológico del complicado y disperso marco concerniente a las acciones locales y globales sobre la implementación de medidas de respecto a la seguridad pública y seguridad nacional en torno al control de las sustancias psicoactivas ilegalizadas el cual creará el marco de referencia para la persecución del tráfico ilícito en grandes volúmenes internacional o narcotráfico y el tráfico en pequeñas cantidades o narcomenudeo En la primera columna se nombran las Instituciones políticas, los instrumentos, normas, planes, programas o casos de cooperación, en la segunda la temporalidad, y en la tercera las acciones o medidas implementadas. Dicho esto, el ejemplo y marco referencial de la omite algunas instituciones locales y federales encargadas de combatir el tráfico ilícito de drogas ya que contemplo las instituciones que emanan a partir de modelos securitarios similares en el entorno organizacional a través de la propuesta del isomorfismo institucional (DiMaggio y Powell, 1983) en la cual como se sostendrá en adelante, el control de drogas va a construirse como un territorio en disputa por distintas agencias instituciones y narrativas, tanto locales como internacionales y nacionales.

Tabla 1. Cronología de acciones globales y locales de seguridad y securitización respecto al control de drogas en México 1947-2020.

Instituciones, instrumentos o casos de cooperación	**Periodo**	**Acciones**
Fundación de la Dirección Federal de Seguridad	1947?-1985	• A solicitud expresa del gobierno norteamericano México comenzó campañas de erradicación de plantíos de drogas ilícitas en 1948, y se faculta a las DFS perseguir y actuar en casos de los delitos contra la salud pública. De manera concurrente hay acciones en este rubro por la Procuraduría General de la República y la Policía Judicial, la DFS recopiló documentación abundante sobre este tipo de incursiones.

Operación Intercepción Operación CANADOR Operación Cóndor.	1969 1974-1977	• Elaboración y recopilación de información institucional, documentos oficiales del ejército norteamericano, ejército mexicano y organismos de seguridad y salud. • Incautaciones, redadas, destrucción de plantíos en la zona del Triángulo dorado, comprendido por Sinaloa, Durango y Chihuahua
Caso Camarena- Irán Contras	1984- 1987	• Desaparición de la Dirección Federal de Seguridad.
Creación del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional	1989	• Con motivo de la desaparición de la DFS se estipuló un sistema de investigación en seguridad nacional que recopilara datos sobre inteligencia y seguridad con nuevas metodologías, el tráfico ilícito de drogas internacional cumpliría un esquema de recopilación y análisis.
Establecimiento de agenda bilateral. Rumbo TLCAN	1988-1992	• Creación de materiales académicos, foros y gestión de crisis de la Cancillería para la condena pública del periodo de certificación y un nuevo enfoque para el combate al Narcotráfico. • Detención de traficantes sinaloenses notables.
Entrenamiento de cuerpos élite GANFE, a cargo de militares norteamericanos.	1993-1994	• Seguridad hemisférica y firma de acuerdos de cooperación • Combate a grupos guerrilleros del crimen organizado y uso de la seguridad armada y acciones diplomáticas al exterior.
Creación y Desaparición del Instituto Nacional para el combate a las drogas INCD	1993-1997	• A través de un decreto presidencial se creó el INCD el cual estaría a cargo del control y persecución de drogas en concordancia con el Programa nacional de control de drogas

Creación de las Bases de Operaciones mixtas BOM	1994	• Modelo de seguridad y cooperación interinstitucional y multi nivel coordinación entre gobiernos municipales, estatales y federales. Participan, Ejército Mexicano, Instituto Nacional de Migración, Procuraduría General de la República
Fortalecimiento de la figura de extradición y cooperación multilateral y bilateral respecto al crimen organizado.	2000	• Des narcotización de la agenda bilateral • Seguridad hemisférica 9/11 • Intercambio de información inter-agencias • Fuga espectacular de El Chapo Guzmán • Comienzo de agenda política sobre Narcomenudeo
Apertura pública a los servicios de inteligencia y seguridad. **Plan Mérida.**	2006-2010	• Guerra contra las drogas mexicana • Apoyo en armamento y servicios de inteligencia y tecnificación policial. • Entrenamiento táctico a la Marina Armada

Fuente: elaboración propia con información de (Carvente, 2014; Astorga, 2004).

1.4. Régimen Político Mexicano

En este apartado se delimitará la pertinencia de un entorno contextual como lo es el régimen político mexicano, el cambio democrático y en particular los gobiernos locales, por medio del análisis algunos términos para construir el andamiaje teórico del análisis de la historia social del narcomenudeo en la Ciudad de México desde una perspectiva local y global.

En principio, desde la teoría de sistemas políticos de Easton, se puede definir al régimen político como una serie de términos que adquieren las interacciones políticas, en las que intervienen valores, normas y estructuras de autoridad (Gómez, 2015).

> Un sistema político es un conjunto de interacciones políticas. Lo que distingue las interacciones políticas del resto de interacciones sociales es que se orientan hacia la asignación autoritaria de valores a una sociedad (Easton, 1969 en Gómez, 2015: 31).

Dentro de la propuesta de Easton, este delimita que el régimen político constará de valores, normas y estructuras de autoridad, por lo que la función del sistema, comprendido por individuos y grupos van a interactuar, será distribuir valores que la sociedad considera útiles como el dinero, la educación, el poder, etcétera (Easton, 2006: 111).

Por otra parte, desde la perspectiva de Gabriel Almond, se añadió el concepto de estructura política[10], donde se señala al sistema político mediante un esquema funcionalista de circuito regulado, en el cual a partir de la interacción del sistema se adopta e integra la amenaza de la coerción al respecto Almond señala al sistema político como:

> …un sistema de interacciones, existente en todas las sociedades independientes, que realiza las funciones de integración y adaptación, tanto al interior de la sociedad como en relación con las otras, mediante el uso o la amenaza del uso de la violencia física más o menos legítima (Almond 1976, en Gómez, 2015, 31).

[10] Las estructuras políticas son todas aquellas instituciones (organizaciones, órdenes de procedimiento, normas y conjuntos de roles) que hacen una contribución al cumplimiento de las funciones individuales o los grupos de funciones (Nohlen *et al.,* 2006).

Cabe mencionar, que sugerir al régimen político como categoría de análisis suelen existir confusiones y en ocasiones emplearse como sinónimo los términos sistema político[11] y régimen político. El primero, designa un entramado de relaciones institucionales, formales e informales y suele tener una acepción amplia sobre las interacciones entre los participantes tanto a nivel local como internacional, mientras que el segundo se ha referido al tipo de gobierno, basado en las formas de gobierno conocidas o analizadas durante la fase post guerra fría (Levitsky y Lucan, 2010).

En este sentido, los tipos de régimen político clásicos incluyen el parlamentario, el aristocrático, el autoritarismo, el socialismo, el totalitarismo y el liberal democrático por mencionar algunos. Actualmente, desde la perspectiva del análisis comparado existen interpretaciones flexibles que incluyen préstamos, resistencias, cambios y permanencias en los sistemas políticos y de gobierno nombrados como regímenes híbridos, los cuales suelen asociarse a modelos autoritarios con transiciones democráticas (Brownlee, 2009), cuestión pertinente para el modelo mexicano, el cual ha sido catalogado como uno que transitó del modelo monopartidista de corte presidencialista a un sistema de alianzas y pluralismo democrático (Woldenberg, 2014).

Para esta tesis, se incluirá una perspectiva formal del régimen político mediante una dimensión legal y del Estado a partir de los actores y de las relaciones de interacción entre los sistemas y regímenes globales del fenómeno de venta de drogas al menudeo. Si bien, el fenómeno del narcomenudeo es concomitante con la criminalidad y por ende con la informalidad y la ilegalidad, hago hincapié en que esta investigación se concentra en las relaciones, horizontes y experiencias de los actores de las instituciones políticas locales y globales, en este sentido se recupera la definición de sistema político de Maurice Duverger:

[11] La concepción general del sistema político queda bosquejada a través de las delimitaciones frente a otros fenómenos y abstracciones, por ejemplo respecto al Estado, la Constitución y el sistema de gobierno (Nohlen *et al*., 2006: 184).

> Sistema político es la entidad en el cual concluyen los actores políticos. Las instituciones políticas son, a su vez, las partes integrantes de un subsistema político que es lo que se denomina régimen político (Duverger, 1955 en Gómez, 2015: 31).

En este orden de ideas, entendiendo que el régimen político designa: el ejercicio del poder, las formas en las cuales se tiene ingreso al poder de gobierno y las formas de actuar con la oposición (Thibaut, 2006: 123), también indica un conjunto institucionalizado de principios normas y reglas que regulan la forma en que los actores se relacionan (Zurn, 2006). Por ello, para el caso mexicano es necesario hacer una breve revisión de la evolución del régimen político.

El régimen político mexicano contemporáneo se adscribe, de origen, al periodo de la posrevolución mexicana entre 1917 y 1940 mediante, un modelo de restructuración de las élites aristocráticas porfiristas y los antiguos jefes militares. Si bien, el proceso de la revolución comprendió una serie de complejos momentos, y presenta ciertas continuidades del antiguo sistema político de finales del siglo XIX, el pacto nacional para establecer un periodo de paz y entendimiento mediante un aparato jurídico e institucional que comprendía la elaboración de una constitución y nuevas instituciones políticas, configuraron el nuevo estado mexicano.

Además, el modelo posrevolucionario, se consolidó sirviéndose del mito de la gesta revolucionaria para otorgar legitimidad al nuevo régimen. De esta manera, el control autocrático del poder recayó en una figura central: el presidente, que tiene el monopolio en algunas ocasiones de la violencia y de ciertos poderes subordinados, pero también el discurso de la revolución en sí mismo, al respecto Enrique Krauze sostiene:

> La tradición política de México influía también de manera positiva: el gobernante debía inspirar respeto y hasta temor, pero al mismo tiempo tenía que ser, o al menos parecer, patriarcal, como antes de la Independencia, y tolerante y liberal, como en la tradición del siglo XIX (Krauze, 1997: 101).

Con estos antecedentes, el régimen autoritario mexicano, se entiende como una forma de gobierno (Gómez, 2015), en la cual no se rompieron del todo los lazos con las formas y

procedimientos anteriores a la revolución mexicana, ni tampoco con el régimen autoritario[12]. Por ejemplo, por lado se negaba esta tradición porfiriana caracterizada por una inclinación al positivismo francés y el autoritarismo, mientras que, por el otro, los nuevos hombres en el poder no podían renunciar a ciertas prácticas políticas relacionadas con las alianzas y subordinación de gobernadores y miembros de la clase política (Krauze, 1997).

Los ideales del desarrollo, nacionalismo revolucionario y de la higiene social, son los antecedentes del control de drogas en el régimen político mexicano, partir de 1931, con la creación del nuevo Código Penal y sanitarios se configura el régimen de control local sobre drogas en México, si bien existen antecedentes respecto a las penas y al control de drogas desde decretos y postulados en la constitución que sugieren una regulación de drogas desde una perspectiva sanitario-punitiva (Schievenini, 2018) mediante instrumentos definidos los cuáles algunos siguen vigentes y que si bien el Código Penal en lo que respecta a sustancias psicoactivas ilegalizadas irán teniendo reformas en 1968, 1978, 1989, 1994 y 2009 es de notar que estas normas hasta 1994 sancionaban por tipo de sustancia y paulatinamente irán integrando esquemas de penalización más severas o desproporcionadas y da pistas de las transformaciones estructurales y coyunturales (Pérez-Correa, 2012).

Aunque este capítulo no se define por desarrollar estas ideas señalaría, por ejemplo, que una permanencia en el sistema de control de drogas mexicano se define a partir del vínculo droga igual a desviación o crimen o delito a lo largo de las normas e instituciones habrá una tensión desequilibrada entre la intervención sanitaria, otra policial y a través del derecho (Astorga, 2004). Cuestión nodal que articula cómo es que el Estado mexicano a través de la arquitectura institucional y de la diseminación, represión o tolerancia del cumplimiento e incumplimiento de las leyes y normas fomentará una economía ilegal derivada de la prohibición de las sustancias psicoactivas ilegalizadas.

Ahora bien, al retomar que este apartado encarga de definir el régimen político mexicano y se centrar el vínculo entre el desarrollo particular del régimen o sistema políticos mexicano, el régimen local de prohibición como una larga trama social, cultural y económica, en tensión, contradicción y complementación entre el régimen internacional de prohibición, el sistema internacional de fiscalización y la fuerte influencia de las presiones políticas

[12] Labastida (2015) señala que la constitución de 1917 expresó las reivindicaciones sociales de la Revolución, pero también fue heredera de la constitución liberal de 1857.

norteamericanas. Señalaría entonces que para entender una perspectiva de estructural social y de larga y corta duración del desarrollo del fenómeno del narcomenudeo primero como fenómeno económico y segundo como social habría que mencionar, la restructuración que reside en la venta de drogas al menudeo en las calles y la necesidad institucional de controlar este fenómeno en contraste con la corrupción, desde la perspectiva de (Camacho, 1977) el régimen político en particular el sistema político ha estado comprometido a partir de nudos históricos ocasionados por varios factores entre ellos: por el sistema autoritario presidencialista, en la cual la clase política había logrado transmitir el poder sin necesidad de violencia, aunque la falta de representación de ciertos sectores en el marco del cambio social y reformas políticas trajo consigo la persecución armada de disidentes políticos, lo cual construirá la figura del guerrillero como enemigo acorde a los intereses de la guerra fría.

Esta falta de transferencia del poder, será decisiva para la aceleración de los procesos de securitización ya que ante la reconfiguración política, económica y social internacional de la pos guerra fría y durante la era de la globalización el establecimiento del mercado robusto de sustancias psicoactivas ilegalizadas en Norteamérica y ante la creciente demanda y cierre paulatino de la conexión francesa y de la ruta del caribe, México comprenderá un espacio en consolidación para la cadena de suministro (Knight, 2018).

Dicho esto, a partir de la forma de gobierno que caracterizó más de 70 años al sistema político mexicano, que fue un régimen presidencial de tipo autoritario, donde incluso se denominó que había poderes metaconstitucionales, como lo definió el ex Procurador General de la República y ex Rector de la UNAM Jorge Carpizo, quien observó que las atribuciones presidenciales no tenían límite (Labastida, 2015).

Resulta paradójico, que además de las condiciones económicas basadas en un aumento de la demanda de drogas como la mariguana por parte de Estados Unidos, el factor político fue el que contribuyó para definir el narcotráfico en México. Así, Valdez (2015), sostiene que fue bajo la administración Alemanista (1946-1952), el sistema político mexicano ya se había consolidado con la concentración del poder en un solo partido y la subordinación del poder legislativo y judicial al ejecutivo. De esta forma, el presidente dominaba a diferentes sectores sociales, desde campesinos pasando por organizaciones obreras, la clase política y hasta gobernadores y otros funcionarios como diputados y senadores (2015: 93).

Retomando la figura de Miguel Alemán, Valdés (2015) señala que este presidente realizó cambios importantes en el modelo de administración del país, dentro de los más significativos se encuentran: sacar a los militares del partido y regresarlos a los cuarteles y, en segundo lugar, la creación de la DFS para que sirviera de servicio de inteligencia para protección del estado que después pasó al mando de la Secretaría de Gobernación. Pese a que se podría pensar que la preocupación por la venta de drogas en México comenzó a tomar importancia con la declaración de la guerra contra las drogas en Estados Unidos hasta la década de los setenta, lo cierto es que las primeras acciones se pueden rastrear al sexenio de Alemán cuyo ejercicio vertical del poder se debe destacar, aunque es importante mencionar que esto se trata sobre las operaciones a nivel local. Durante este sexenio y con la interrupción del sistema de Ávila Camacho como barrara y culminación del gobierno nacionalista popular revolucionario hacia un modelo menos radica moderado se tejerán y robustecerán as relaciones políticas y nichos del modelo de control sobre la corrupción a partir de una figura autoritaria por ejemplo a partir del control de la prensa (Niblo, 2000).

La centralización del poder en la figura del presidente significó en materia de la venta de drogas un cambio institucional, es decir, que el Departamento de Salubridad dejó de tratar el tema de las drogas como un problema sanitario o de salud, siendo la PGR la que tomó las atribuciones necesarias para perseguir el narcotráfico, esto representó una modificación en las tareas de intervención, decomisos, destrucción y detenciones. No obstante, un elemento que ha estado presente en este periodo entre 1942 a 1985, es el dinero, el cual pagaba la protección y permisos de operación de narcotraficantes, este beneficio se entregaba en diferentes niveles de autoridad, desde el policía hasta la agencia de seguridad y no solo eso, los recursos generados de decomisos de bienes, armas y drogas también representó una fuente extra de ingresos (Valdés, 2015).

A partir de la reconfiguración del régimen político mexicano, en especial mediante la rotación de sistema de partidos en los gobiernos locales, cambios en las estructuras de gobierno, pérdida del monopolio en las estructuras informales y corporativistas proceso que osciló entre finales década de 1980 y principios de los 1990 se configuró un nuevo sistema político, que por su pluralidad, se exacerba por un lado: la necesidad de integrar las demandas de cooperación internacional, y la integración económica en vísperas a un cambio de sistema económico y de consumo y por otro las características coyunturales sociales y estructurales

dan un nuevo espacio de interacción para el control y desarrollo del fenómeno de narcomenudeo.

Anaya (2019), destaca que no se pueden comprender los cambios sobre las normativas y las transformaciones sobre políticas de drogas en el ámbito global, si no se identifican las características propias del régimen político vigente en las naciones y su evolución; el autor recupera el tránsito del régimen revolucionario en México y su carácter autoritario, pasando por el régimen monopartidista hasta el reordenamiento económico y la flexibilización democrática presente en las administraciones neoliberales. Es interesante que estos cambios tienen "una fuerte influencia norteamericana, comenzando desde, la cabeza del ejecutivo" (2019: 2) y las agencias de seguridad, dentro de las cuales podemos mencionar a la Procuraduría General de la República, la Dirección Federal de Seguridad o la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad.

Así, el cambio de un régimen monopartidista a otro más plural y de transición democrática desató repercusiones más allá del sistema político y económico en México; sino que el reordenamiento del poder en el país derivó en una reconfiguración de los grupos de traficantes ya sea en cuanto a sus transacciones económicas, como en las medidas de seguridad, el ejercicio de la violencia, la corrupción gradual de las instituciones y la negociación con los nuevos actores políticos ajenos al PRI.

Para Valdés (2015), es importante recuperar las relaciones que se tejen entre narcotraficantes y las diferentes figuras que comprenden las autoridades y funcionarios. Así, la corrupción comienza a tomar mayor relevancia, sobre todo a partir de la década de los ochenta donde se manifiesta de una manera más abierta. En este sentido, no solo los policías y militares se ven involucrados, sino autoridades con diferentes jerarquías en la administración federal. Sin embargo, la figura del presidente está aún muy lejos de estos actores que se encuentran fuera de la ley, debido a que "en el ámbito local el capo es intocable" (2015: 131), pero frente a la figura presidencial es solo un subordinado.

Aunado a esto, los cambios globales derivados del impacto de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos en términos de seguridad significaron para México una situación de menor importancia o pasar a un segundo plano debido a que la *agenda securitaria* estadounidense se concentró en el terrorismo y la guerra en Afganistán. Por su

parte en México, los esfuerzos se centraron en la persecución de vendedores y traficantes a pequeña escala y consumidores.

Sin embargo, a finales del sexenio de Vicente Fox y sobre todo en la administración Calderón, los crímenes, homicidios con un matiz de violencia espectacular empezaron a aumentar, y en esa medida los operativos policiacos y militares también. Los mensajes públicos de amenaza plasmados en cartulinas y mantas comenzaron a proliferar en todo el país, así como cuerpos decapitados y ejecuciones se convirtieron en el sello característico del crimen organizado.

Como se mencionó, una de las características del gobierno autoritario derivado de la revolución mexicana fue el control político que se tenía sobre ciertas estructuras, en algunos casos llegando a denominarse formaciones corporativistas[13]. Lo cual se reprodujo más o menos parecido a niveles locales, es decir el pacto constitucional suponía una división republicana y semi democrática de las entidades federativas, en este sentido, los gobernadores ejercían un control político sobre las estructuras locales parecidas al que el presidente ejercía sobre la federación y los poderes como el ejecutivo y el legislativo.

En este sentido, al momento de existir un viraje hacia el sistema pluralista, el viejo régimen de control venía presentando fisuras, además de que la interacción con las agendas globales por ejemplo la securitización de las ciudades y la crisis de criminalidad evidenciaron que los antiguos controles corruptores con los que la policía o las agencias políticas marginaban a los criminales habían parecido difuminarse.

El caso del Distrito Federal representa una experiencia particular, ya que, al ser un territorio federal y sede de los poderes, la reforma política de 1977, el cambio democrático que comenzó en 1989[14] con los gobiernos locales de transición no pareció haber transformado

[13] Para Schmitter el corporativismo puede definirse como: "un sistema de representación de intereses en el que las unidades constitutivas se hallan organizadas en un número limitado de categorías singulares, obligatorias, no competitivas, jerárquicamente ordenadas y funcionalmente diferenciadas, reconocidas o consentidas (cuando no creadas) por el Estado, investidas de un monopolio representativo deliberado en sus respectivas categorías a cambio de observar ciertos lineamientos impuestos, sugeridos o simplemente reconocidos por el Estado en la selección de los líderes y en la articulación de demandas y apoyos" (Schmitter, 1974: 86).

[14] El primer gobernador electo democráticamente que no perteneció al Partido Revolucionario Institucional fue Ernesto Ruffo de Baja California propuesto por el Partido Acción Nacional. Llama la atención que uno de los principales lugares que experimentaron una escalada de violencia fue la ciudad de Tijuana a principios de la década de los noventa.

ni cambiado la distribución de las fuerzas electorales entre la oposición. Sin embargo, al ser la capital del país y una de las ciudades con mayores índices de población, el centralismo y las actividades que sucedían en la Ciudad de México solían replicarse a nivel local.

Al respecto Héctor Tejera (2015) menciona que entre 1928 y 1997, el Distrito Federal no gozó de elecciones para elegir su gobernador y el cargo era designado por el presidente de la república, lo cual dificultó ciertos procesos de transformación social entre los que destacan la participación señalando incluso que la ciudad tenía poco nivel de democracia. Otro aspecto por mencionar es que, al realizarse la primera reforma de partidos y la reforma electoral de 1996, sólo se permitía instalar votaciones para jefe de gobierno, los jefes delegacionales serían elegidos hasta el año 2000, mientras que la asamblea de representantes también comienza en el año 1997 con la primera legislatura.

La antigua estructura clientelar que se adscribió al regente de la ciudad y al sistema corporativo del Partido Revolucionario Institucional se vio diezmado después del sismo de septiembre de 1985, por lo que al conjuntarse la ruptura del a la democrática del PRI y la fundación del Partido de la Revolución Democrática, un nuevo sistema político se configuró en la ciudad de México, en oposición a las viejas instituciones corruptas, como lo era la Policía Local, incluso a diferencia de los municipios que tenían delimitada cual era el actuar de los tres niveles de gobierno, la Ciudad de México tardó en incorporarse a este modelo.

Habiendo articulado de manera somera la construcción del estado mexicano posrevolucionario como un sistema autoritario, centralista con porosidades y en interdependencia con los Estados Unidos, en un marco de interacción a partir de la reconfiguración política y en entramado de la integración regional de México ante Norteamérica y cambios acelerados en los mercados locales e internacionales de drogas ilegalizadas. En el siguiente apartado se desarrolla una articulación de la metodología cualitativa, mediante la entrevista y se construye el aparato metodológico interpretativo a partir de la entrevista con contraste de documentación y análisis de contenido etnográfico.

II. Metodología

En este capítulo se argumenta la pertinencia del abordaje cualitativo para el análisis de la configuración del fenómeno del narcomenudeo, en el contexto de interacción entre el régimen internacional de prohibición de drogas y el sistema político mexicano en el marco espacial de la Ciudad de México, durante la última década del siglo XX y los primeros 20 años transcurridos del siglo XXI a través de las normas, acuerdos y leyes. Para ello, se desarrolla el apartado sobre la entrevista como un recurso donde se recopila la narración de hechos, experiencias, actitudes y valores de individuos clave o expertos capacitados. Como ya se ha argumentado, la perspectiva interrogativa residirá en una visión institucional gubernamental para su posterior interpretación mediante la técnica del análisis de contenido etnográfico.

El primero de diciembre de 1988 durante la toma de posesión de Carlos Salinas de Gortari, el discurso que pronunció estuvo protagonizado por mensajes con un contenido sobre la transformación y modernización del país en un entorno mundial cambiante y añadió que, el Estado mexicano debería garantizar la seguridad de la nación y de los ciudadanos, entre otros importantes mensajes enfocados a la economía y a la reforma política y social. Sin embargo, llama la atención que, dentro de estas palabras enunciadas ante los poderes de la unión, los medios de comunicación, invitados especiales y el cuerpo diplomático acreditado en el país, el presidente señaló que el tráfico de drogas en específico el fenómeno del narcotráfico era un riesgo para la seguridad y la salud, por lo que endurecería las penas y crearía una nueva estructura administrativa para la persecución del tráfico ilícito.

> El narcotráfico se ha convertido en un grave riesgo para la seguridad de la nación y para la salud de los mexicanos. Su combate es ya razón de Estado. Crearé una nueva área en la Procuraduría General de la República dedicada a su exclusivo combate, con más personal y mayor adiestramiento. Elevaremos las sanciones por su tráfico, y perseguiremos con energía redoblada a sus promotores, sean quienes sean (Salinas, 1988).

¿Qué se puede inferir de este cambio en el discurso y cómo se operacionaliza? En primer lugar, se debe tener en cuenta que una metodología cualitativa es entendida como un enfoque para explorar y comprender los significados que los individuos y los grupos asignan a problemas sociales o humanos (Creswell, 2014). En este orden de ideas, y siguiendo el

marco analítico de la socio-historia que comprende el devenir humano como un entramado de aspectos políticos, económicos, sociales e incluso culturales que interactúan y pueden ser visibles en la investigación (Hobsbawm, 1998; 2013: Briggs y Burke, 2003; Casanova, 2003) el caso de estudio de una socio-historia de las drogas como mercancías ilegalizadas adquiere sentido (Astorga, 2004; Cajas, 2004; Gootenberg, 2008; Gootenberg y Campos, 2015) a partir las categorías de: americanización (Hallin y Mancini, 2004; Laguna, 2005; Van Eltern, 2006a; 2006b) securitización (Weaver, 1995) y reconfiguración del poder político (Mason, 2001; Astorga, 2004) se busca establecer la relación entre el tiempo, el espacio y los actores para después inferir una técnica y un método de recopilación de datos.

De esta forma, se delimita el espacio y la frontera temporal definida en 1989 a partir de la estructura administrativa derivada del gobierno de Carlos Salinas de Gortari y heredada tras sesenta años de una doctrina jurídica de los delitos contra la salud, esta última enmarcada en la fiscalización, control y combate del tráfico internacional de drogas, mediante el régimen internacional de prohibición y la relación de interdependencia con los Estados Unidos (Serrano, 1998). En un segundo momento, se delimita a los actores gubernamentales, institucionales, locales e internacionales inmiscuidos en la configuración del fenómeno del narcomenudeo los cuales serán contemplados como expertos capacitados a quien interrogar.

En este sentido, se identifica a la Procuraduría General de la República como uno de los actores determinantes en esta investigación debido a los cambios históricos en relación con el fenómeno que son rastreables y verificables. Así, la PGR concentró la fuerza de ley, en la cual recayó el control penal de las drogas ilegalizadas y si bien como ya se ha mencionado habían existido distintas áreas encargadas de combatir los narcóticos y enervantes al menos desde los años 30 del siglo XX.

Para el periodo a explicar comprendido en la reconfiguración política y declive del presidencialismo mexicano y una época de expansión y aceleración de la globalización e integración regional y económica de América del Norte, el combate al narcotráfico será entonces un momento coyuntural con foco institucional no sólo expresado en el contrabando internacional y el aumento en las bandas de criminales organizadas, sino también en que se delimita al consumo interno como un asunto de Estado en el marco de endurecimiento del sistema internacional y el contexto de la firma de una nueva convención en 1988 para

suprimir el tráfico ilícito y que conminó a penalizar en los aparatos jurídicos internos la posesión de drogas y combatir el crimen organizado (UNODC, 2014).

Tomando esto en cuenta, se configuró el horizonte de posibilidad para que una década después el narcomenudeo tuviera la presencia mediática y política logrando establecer reformas administrativas, creación de burocracias y nuevos criterios jurídicos. Si bien los cambios experimentados en el consumo de drogas en México se han mantenido estables, las historias y narraciones en la prensa y adoptados por los políticos se siguen presentes al menos en el último siglo, lo cierto es que la agenda personalista del presidente respecto a enmarcar el consumo interno, a los traficantes y vendedores pasaron de ser ocasionales notas principales o notas interiores a un énfasis político construyendo una agenda pública que se fue exacerbando (Whitford y Yates, 2009).

En segundo lugar, esta frontera temporal limitada en 1989 se define por un hecho coyuntural en el relato histórico mundial del desvanecimiento de la figura del mundo bi polar y el declive del modelo keynesiano (Hobsbawm, 2012) en una relación multi nivel en el entramado de la estructura administrativa nacional y la reconfiguración política, así como un nuevo enfoque de combate al narcotráfico, el cual además se armonizó con la estructura del régimen internacional de control de drogas por lo que identificar las dinámicas sociales del así llamado problema mundial de las drogas que comenzó a ser más notorio en la prensa, la política e incluso las dinámicas cotidianas.

Tomando esto en cuenta y desde una perspectiva de la historia social y la ciencia histórica socio estructural, los fenómenos se interpretan como un *sujeto histórico* el cual no se desprende del tiempo y el lugar en un largo *continuum*. Para con ello conceptualizar y descubrir la real estructura oculta de la sociedad y con ello identificar las transformaciones, tensiones o resistencias del cambio social estructural (Aróstegui, 1995).

Es por ello, que resulta pertinente retomar la metodología cualitativa cuyo desarrollo es amplio y han existido distintos enfoques y posturas durante su historia, además ha sido influenciada por una infinidad de subdisciplinas, como la sociología, la psicología, la antropología y en las ciencias de la salud. Según Denzin (2008) la escuela americana se puede dividir en 7 u 8 fases: los tradicionales entre 1900-1950; la edad de oro o época modernista 1950-1970; géneros borrosos o fusión 1970-1986; la crisis de la representación 1986-1990;

el posmodernismo, etnografías experimentales, nuevas metodologías 1990-1995; indagación postexperimental 1995–2000; el presente metodológicamente cuestionado 2000-2008 y el futuro comprendido del año 2008 en adelante (2008: 311).

Tomando en cuenta la diversidad de posturas y metodologías inherentes al enfoque siguiendo la propuesta de Denzin y Lincoln (1994), la investigación cualitativa consiste en un conjunto de prácticas materiales interpretativas que hacen visible el mundo. De forma que, desde una perspectiva histórico-social el mundo es tomado como una representación cultural y social y la cultura al ser un documento activo, la cual no es una entidad, algo a lo que puedan atribuirse de manera causal acontecimientos sociales, modos de conducta, instituciones o procesos sociales; la cultura es un contexto dentro del cual pueden describirse todos esos fenómenos de manera inteligible (Geertz, 2003: 27).

En este sentido, según Mejía (2000), una investigación de tipo cualitativa se realiza con el objetivo de encontrar las cualidades que en conjunto caracterizan un fenómeno social. La aproximación cualitativa está diseñada para explorar los elementos humanos de un tema determinado, donde se utilizan métodos específicos para examinar cómo las personas ven y experimentan el mundo y se suelen recopilar múltiples formas de datos, como entrevistas, observaciones, documentos e información audiovisual en lugar de confiar en una sola fuente de datos (Given, 2008: 26).

Bajo este argumento, he articulado hasta el momento que, el narcomenudeo es un fenómeno social, el cual tiene un marco de interacción histórico-social y temporal, producto de una moldura estructural definida por la prohibición global de drogas, el mercado local e internacional de sustancias psicoactivas ilegalizadas y el sistema político mexicano en interacción con la internacionalización y americanización de la seguridad global (Van Elteren, 2006a). Por lo tanto, la información oficial puede ser limitada, es por ello que se recopila y enriquece con testimonios, notas de prensa y observación de observaciones con descripciones densas[15] de la cultura entendida como una interpretación en profundidad del discurso social (Geertz, 2003).

[15] La propuesta de Clifford Geertz en contra del operacionalismo como dogma metodológico transformó el modo de producción humanística y científica social del método de la Antropología Social y Etnología entre: *la etnografía* como método y *hacer etnografía* como un análisis de estructuras de significación. Para Geertz la etnografía no es únicamente establecer relaciones, seleccionar a los informantes, transcribir textos,

Así, el narcomenudeo en su devenir como fenómeno se asume en esta tesis, a través de un proceso ocasionado por la prohibición local y global de drogas derivado de los campos de producción social y cultural del fenómeno del narcotráfico y por ende un fenómeno multicausal concurrente en los dispositivos de la salud, jurídicos y de seguridad. Bajo la delimitación del estado nacional autoritario y su reconfiguración, teniendo límites y fronteras gubernamentales en los campos de la explotación de los mercados ilícitos e informales con agencia y porosidad de los actores inmiscuidos en reproducir el ethos de los mercados de drogas (Bourgois, 2003) esto enmarcado en un entorno mediatizado de cobertura y agenda en contra de la inseguridad y un cambio acelerado a partir de la construcción del enemigo interno derivado de la expansión de la agenda antiterrorista y securitaria del 11 de septiembre.

De este modo para identificar las cualidades del narcomenudeo he argumentado en los capítulos anteriores el entramado de un proceso sociohistórico del régimen internacional de prohibición, los esquemas de securitización, americanización e internacionalización de ciertas políticas en particular de las políticas de drogas (Stewart, 1990; Andreas y Nadelman, 2006), bajo el amplio paraguas de la doctrina de seguridad nacional norteamericana y su adaptación al sistema político mexicano bajo un proceso de tensión estructural a partir del cambio social detonado por la reconfiguración del poder político (Astorga, 2004).

De manera paralela al modo estructural, existe una coyuntura relacionada con los procesos de mediana y corta duración con la integración regional de México a América del Norte, y con ello se experimentó un cambió en las dinámicas de los mercados ilícitos en particular una expansión de la cocaína y su rentabilidad como mercancía ilegal global (Gootenberg, 2008), esto dio pie a la diversificación de los grupos criminales organizados y la transformación de la retórica de la guerra contra las drogas en un modelo de combate policial armado de control territorial policializado y semi militarizado, aunado a la campaña permanente en particular el proceso de mediatización y primacía del discurso político y periodístico imbricado en la *narconarrativa* (Zavala, 2022) un contexto de aumento de la inseguridad bajo condiciones objetivas y subjetivas (Piñeiro, 2004).

establecer genealogías, trazar mapas del área, llevar un diario, etc… Lo que la define es cierto tipo de esfuerzo intelectual (Geertz, 2003: 21)

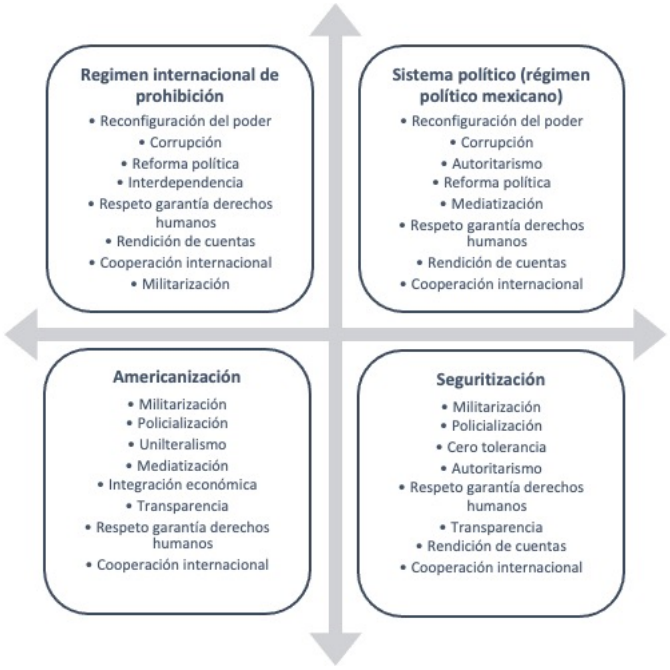
Siguiendo esta argumentación, y para continuar definiendo la técnica y el método, para la recolección de datos cualitativos de esta tesis, propongo una herramienta flexible basada en índices temáticos concernientes al análisis de contenido enriquecidos con la perspectiva etnográfica (Altheide, 2008) en la cual estos documentos se interpretan mediante la identificación de que se sustentan como producciones de textos de cultura entendiendo a la etnografía como una jerarquía estratificada de estructuras significativas (Geertz, 2003).

En este sentido, Brewer y Hunter (1989) señalan que la investigación cualitativa es un multimétodo el cual se nutre de la interdisciplina y la triangulación, centradas sobre un objeto con el fin de tener una comprensión densa del fenómeno (Fontana y Frey, 1994). En este orden de ideas siguiendo a Fontana y Frey (2015), la entrevista es el método de investigación cualitativo más socorrido, debido a su capacidad de recolectar información, es para estos autores el arte de hacer preguntas.

De esta forma, para integrar un corpus de datos se propone una matriz de análisis resultado de las categorías derivadas del marco teórico y operacionalizadas a partir de índices temáticos concernientes al análisis de contenido (Krippendorff, 2004) al respecto las categorías y unidades de muestreo se posicionarán sobre el discurso político mientras que las unidades temáticas tienen correspondencia con una definición estructural particular del contenido de los relatos, explicaciones o interpretaciones (2004: 91).

Estas interpretaciones son socialmente construidas, culturalmente adoptadas y adaptadas, es por ello por lo que, en la matriz se colocan a manera de título como categorías analíticas las unidades de muestreo como: régimen internacional de prohibición, sistema político mexicano, securitización y americanización como ítems codificables con un margen amplio sobre los documentos y textos. Mientras que, debajo de ellas en marcadores tipo viñeta se extraen las unidades temáticas las cuales pueden o no ser compartidas por las categorías muestrales y se definen a partir de indicadores depositados en informes internacionales las cuales son concurrentes o derivadas de inferencias con unidades sintéticas (Krippendorff, 2004) estas fueron además derivadas del muestreo aleatorio con las palabras: delincuencia, seguridad, drogas, narcomenudeo, narcóticos, estupefaciente, narcotráfico, corrupción, derechos, democracia, salud de esta manera se incluyen tanto datos numéricos como narrativos. Esta relación se puede observar en la figura 1 a continuación.

Figura 1. Matriz de análisis



Fuente: Elaboración propia

Como se vio en la figura 1, a partir de estas categorías construidas y tomadas como unidades de muestreo, se complementan con las unidades temáticas mediante las cuales se elaboró una guía de entrevista semi estructurada a partir de grandes índices temáticos y flexible según sea el entrevistado y el contexto en el cual se lleve a cabo la entrevista. Para estipular el orden de la entrevista se elabora una tabla muestral con unidades temáticas bajo el criterio de presente o ausente en particular desde la perspectiva gubernamental institucional en los marcos de interacción del sistema político mexicano el régimen internacional de prohibición y las variables americanización y securitización.

A continuación, se hace una breve contextualización de la pertinencia de la entrevista como método de recolección de datos de expertos especialistas, así mismo hay que señalar que la investigación en profundidad sobre temas delicados requiere un muestreo no probabilístico (Mejía, 2000: 186) por lo que la significación y saturación se concentró a partir

de las menciones de los índices temáticos del resultado de la codificación de las entrevistas y a partir de la acumulación de entrevistas.

2.1 La entrevista

Con el motivo de integrar las actitudes, experiencias, valores y conocimientos de expertos especialistas inmiscuidos tanto en procesos de negociación, desarrollo e integración del sistema de control de drogas a nivel internacional en particular los esquemas diplomáticos de los cuales México ha tomado parte, así como de personas que han participado en puestos gubernamentales de seguridad, salud o impartición de justicia que han atravesado procesos coyunturales en la configuración del fenómeno del narcomenudeo ya sea a nivel político, administrativo, académico y mediático se decantó por elaborar entrevistas semiestructuradas para con ello obtener datos cualitativos. La pertinencia de esta técnica de recolección de datos reside en la flexibilidad que otorga la entrevista para el entrecruzamiento y articulación de distintos saberes y teorías con el fin de identificar y detonar conversaciones de temas sensibles o que pueden contener especificaciones sobre la seguridad nacional, pública o hemisférica, e incluso la seguridad personal de los participantes.

En este orden de ideas, para Fontana y Frey (2015) el tiempo en el que actualmente nos desenvolvemos puede también ser considerado como la sociedad de la entrevista. Al respecto Brinkman (2008) sostiene que la entrevista de investigación cualitativa se ha convertido en una de las prácticas de producción de conocimiento más difundidas en las disciplinas de las ciencias sociales y se define como "una práctica conversacional donde el conocimiento se produce a través de la interacción entre un entrevistador y un entrevistado o un grupo de entrevistados" (2008: 470).

De este modo, integrando la perspectiva local y la internacional con miembros del cuerpo diplomático y especialistas académicos que han estudiado el tema de los mercados ilegales cabe mencionar que los especialistas en la comunicación tendrán también un espacio notable ya que como se ha mencionado el narcomenudeo al estar en los límites de lo pensable respecto al narcotráfico tendrá una fuerte orientación mediática espectacular, articulada en la gran agenda de cobertura sobre la inseguridad de final del siglo XX esto en un gran escenario orientado por la dominación mediática, la agenda personalista de los políticos en la era de la información .

Habiendo señalado la pertinencia de la entrevista y la caracterización del tiempo del espacio y de los actores, cabe mencionar que, la mediatización y la aceleración del tiempo

(Hobsbawm, 2013) en el sentido de una mayor velocidad de las interacciones humanas en relación con la comunicación, es decir, mensajes que tardan segundos en llegar, viajes que se realizan en horas y transmisiones en tiempo real. Estas dinámicas han exacerbado los mensajes y contenidos enmarcados en la era de la policialización (Andreas y Nadelman, 2006) y securitización (Weaver, 1995) sobre la narconarrativa (Zavala, 2022) o el narcotráfico (Astorga, 2004) y al ser este un espacio de adopción y reproducción de los campos de producción sociales y culturales infiero que la representación que existe del fenómeno está normativizada y politizada respecto al combate al tráfico de drogas, ya que como se mencionó durante la toma de posesión de Carlos Salinas se fortaleció la idea de que el tráfico de drogas debía de ser un eje de la seguridad nacional, cuestión que fue interiorizada dentro de las agencias y personal gubernamental. Esto también contiene una fuerte orientación personal y quizá negativa del proceso con experiencias propias, ya que la connotación histórica y subjetiva que se ha delegado a ciertas drogas ilegalizadas, sus mercados y sus usuarios influye en sus opiniones.

Es por ello por lo que se retoma la propuesta de la compilación de entrevistas que se le hicieron a Hobsbawm (2012), en particular en Entrevista sobre el siglo XXI, en la cual se intenta delimitar algunas tendencias generales sobre el siglo XX y su análisis sobre las posibilidades y tendencias económicas y sociales que caracterizan al nuevo siglo teniendo como base el área de experiencia del entrevistado que ofrece al lector una mirada amplia de su contexto. Y de esta forma, se busca replicar este modelo de grandes temas y tendencias generales pero aplicadas al control de drogas en específico el control jurídico, social y político de drogas ilegalizadas para el consumidor final o venta a pequeña escala. Tomando esto en cuenta al recopilar experiencias sobre el narcomenudeo, más que buscar opiniones subjetivas positivas o negativas de los procesos multinivel, regionales y locales se identificarán amplias capas sobre, tensiones, resistencias y transformaciones.

En este sentido, seguir con el análisis de índices temáticos, a través de categorías que ya han sido analizadas y propuestas por otros referentes metodológicos y teóricos como lo es la amplia literatura existente sobre el sistema político mexicano (Camacho, 1977; Krauze, 1997; Woldenberg, 2014: Labastida, 2015; Knight, 2018), la securitización (Weaver, 1995) la americanización (Aronoff, 2000; Hallin y Mancini, 2004; Van Eltern, 2006) y el régimen internacional de prohibición (Walker, 1978; Smith, 1992; McAllister, 2000; 2012; Collins,

2012a) se intentan establecer pautas para la comprensión de una socio historia de la prohibición de drogas y sus consecuencias políticas y administrativas en los campos sociales, políticos, culturales y económicos, en particular cómo es que se ha configurado el fenómeno del narcomenudeo.

Retomando entonces a la entrevista semiestructurada como el punto nodal para la exploración de datos autogenerados, esta será una lista escrita de preguntas y temas que deben cubrirse en un orden particular (Bernard, 2004: 212). Tomando en cuenta la persona a la cual se realicen las preguntas, el espacio o lugar de la entrevista y sobre todo de la disposición y tiempo que pueda ofrecer el entrevistado. El concepto de entrevista se ha ido transformado y cubre mucho terreno, desde interacciones totalmente desestructuradas, pasando por situaciones semiestructuradas, hasta interacciones altamente formales con los encuestados tiene que ser una actividad programada, abierta pero que seguirá un guión general y cubre una lista de temas (Bernard, 2004: 210).

No hay que olvidar que el narcomenudeo es un tema delicado, con un carácter ilegal y dependiente de su combate a las agencias de seguridad y justicia el acercamiento con personas clave se realiza de manera privada y reservada, aunado a que los especialistas culturales tienen un límite de accesibilidad, las preguntas detonantes se basarán en recopilar experiencias, valores y actitudes bajo el lineamiento de temas específicos como los derechos humanos, la transparencia o la securitización y los temas indicados en la ficha de identificación de datos.

Retomando a Fontana y Frey (2015), que entienden a la entrevista vista como una forma casi artística de preguntar, se infiere que esta es un método amistoso y empático, en este sentido, los autores también señalan que la entrevista tiene como principales resultados un posible vehículo para el cambio social y una nueva forma de establecer las narrativas y las situaciones para contar historias, es por ello que uno de los índices para delimitar analíticamente las entrevistas radica en buscar o identificar si es que existen generalidades en el discurso sobre el tráfico ilícito de drogas y el comercio de drogas ilícitas a pequeña escala o para el consumidor final, ya que se busca saber ¿cómo es que se ha configurado el narcomenudeo?

Sostengo entonces que el narcomenudeo se ha categorizado a partir de narrativas dominantes, que si bien algunas obedecen a ámbitos criminales y problemáticas sociales y económicas necesarias por atender, otras se han establecido a través de narrativas estigmatizantes o estereotipantes, es por ello que las preguntas pretenden responder en el presente, la configuración socio histórica del narcomenudeo, el cual obedece a un dispositivo de control emanado del régimen internacional de prohibición y de las narrativas dominantes sobre la criminalidad y el narcotráfico con el fin de buscar algunas recomendaciones finales dentro de la tesis para los lectores de este ejercicio académico.

En este sentido, la entrevista se encuentra en un estado volátil, pues es la intencionalidad tanto del levantamiento de datos como de la interpretación dependerá del tipo de respuestas que sean expresadas por los entrevistados, cabe señalar que las autoridades suelen tener agendas apretadas y en algunos casos poseer información sensible donde se entrelaza el instrumento de investigación fijando dos momentos clave: la delimitación del tipo de entrevista y su análisis tomando en cuenta que la entrevista se da en un ambiente íntimo y flexible (Creswell, 2014). Por último, una vez que concluye la etapa de entrevistas la información debe ser codificada, catalogada y analizada, estos procesos forman parte de los siguientes apartados.

2.2 Análisis de contenido etnográfico.

El análisis de contenido es una técnica utilizada en las ciencias sociales predominantemente en la psicología, en la comunicación y en la ciencia política. Se tiene registro que, el análisis de contenido se realizó por primera ocasión en Suecia en el siglo XIII de manera hermenéutica para establecer relaciones respecto a los cantos sacros denominados Cantos de Sion. Sin embargo, el *media content analysis* o análisis de contenido mediático como técnica moderna comenzó a profesionalizarse en la década de 1930 del siglo XX con el desarrollo de la escuela norteamericana y el análisis científico de la prensa escrita, esta primera fase se caracterizó por medir de manera cuantitativa el nivel de sensacionalismo en los periódicos siendo un aporte a la sociología y la ciencia política quien en particular la obra de Berelson (1952) influyó para las metodologías del análisis señalando que se distinguía por ser una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa cuestión que permitió un desarrollo de la técnica más sofisticada y extendida a otras ciencias sociales (Igartúa, 2006).

Tomando en cuenta el amplio espectro de la metodología cuantitativa y cualitativa, según Krippendorff (2006) el análisis de contenido contemporáneo se ha definido por varias etapas históricas 1) Análisis cuantitativo de noticias, 2) Análisis de contenido temprano, 3) Análisis de propaganda, 4) Análisis de contenido generalizado, y 5) Análisis de texto por computadora, siendo estos dos últimos los que se utilizarán en esta tesis, construyendo un marco híbrido (Lockyer, 2008) entre el análisis de contenido generalizado y texto por computadora con el análisis de contenido etnográfico el cual se precisará adelante en qué consiste, pero antes de mencionar el desarrollo de esta técnica habría que mencionar las críticas y limitantes del análisis de contenido clásico.

La técnica tuvo sus alcances, limitaciones y detractores acusándola de ser extremadamente conductista con amplias barreras intelectuales, epistemológicas y teóricas con interpretaciones de corte cuantitativo e incluso llegó a estar en desuso ya que metodologías como la semiótica, la hermenéutica o el análisis textual y del discurso comenzaron a ganar terreno en la década de los ochenta.

Sin embargo, el uso de la técnica se ha instalado dentro de las ciencias sociales y dada la naturaleza de algunas de sus propiedades en particular las concernientes a agrupar y seleccionar temas y la facilidad con la que actualmente los programas computacionales

brindan ayuda para esquematizar el contenido cuantitativo y cualitativo, es que el análisis de contenido tiene pertinencia y se ha actualizado con la tecnología y adoptó nuevos enfoques.

En este sentido, el análisis de contenido es el proceso intelectual de categorizar datos textuales cualitativos en grupos de entidades similares, o categorías conceptuales, para identificar patrones y relaciones consistentes entre variables o temas (Julien, 2008: 121) y añade Krippendorff (2013) que es una técnica de investigación para hacer inferencias replicables y válidas a partir de textos u otro material significativo al contexto de su uso (p. 24), en la siguiente tabla propuesta por Altheide (2008) se señalan las principales diferencias respecto al análisis de contenido cuantitativo y el análisis de contenido etnográfico.

Tabla 2. Análisis de contenido cuantitativo y etnográfico

Categoría	**Análisis de contenido Cuantitativo**	**Análisis de contenido Etnográfico**
Objetivo de la investigación	Verificación	Descubrimiento, verificación
Diseño de investigación reflexivo	Ocasional	Siempre
Énfasis	Fiabilidad	Validez
Progresión de la recolección de datos, análisis e interpretación	Serial	Reflexiva; circular
Participación en la investigación primaria	Análisis de datos e interpretación	Todas las etapas
Muestra	Al azar y estratificada	Propositiva y teórica
Categorías pre estructuradas	Todas	Algunas
Entrenamiento necesario para recolección de datos	Pequeño	Sólido, considerable
Tipo de dato	Números	Números, narrativos
Puntos de entrada de datos	Único	Múltiple
Descripción narrativa y comentarios	Ocasional	Siempre
Conceptos surgidos durante la investigación	Ocasional	Siempre
Análisis de datos	Estadístico	Estadístico y textual
Presentación de datos	Tablas	Tablas y texto

Fuente: Adaptación y traducción propia tomado de (Altheide, 1987:67)

Como se observó en la tabla 2, y habiendo introducido el análisis de contenido como método válido e históricamente relevante para las ciencias sociales, cabe entonces mencionar la vertiente que se utiliza en esta tesis, que es el análisis de contenido etnográfico, el cual fue el desarrollado por David Altheide como un esquema complementario tomando las

herramientas de investigación de los etnógrafos entendiendo a la cultura como textos y una totalidad tomados en lugar de los espacios convencionales de la etnografía alejada geográficamente y con los intentos de proporcionar contexto profundo para la comprensión de significados y con el afán de verificar relaciones teóricas (Altheide, 2008).

Como ya se ha mencionado al principio de este apartado al identificar desde una perspectiva Geertiana a la cultura como una interpretación en profundidad del discurso social y añadiendo al dispositivo etnográfico como una construcción teórico metodológica de un documento activo, la entrevista se construyó a partir de operacionalizar el marco teórico y el marco analítico con índices temáticos para su posterior interpretación a partir de la codificación siendo un movimiento reflexivo entre el desarrollo del concepto, muestreo, recopilación de datos, codificación de datos, análisis de datos e interpretación (Altheide, 1987: 68).

El análisis de contenido etnográfico se distancia del cuantitativo y del análisis de contenido cualitativo. Sin embargo, esta emparentando metodológica y epistemológicamente con la etnografía y las *descripciones densas* como una observación de una descripción de las personas dentro de su cultura (Geertz, 2003). Cabe señalar que, en este enfoque no hay aproximaciones directamente relacionadas con la probabilística, más esto no significa que no se complementen datos numéricos con los datos narrativos a través de la interpretación en los procesos de selección de códigos y construyendo los temas seleccionados para analizar y establecer inferencias relacionales y con entrada de datos multivariables aunque para este ejercicio se catalogarán de manera dicotómica en presente, ausente o no aplica. Asimismo, no es necesario para el análisis de contenido etnográfico una muestra aleatoria y amplia se tendrá una pequeña muestra (Jernigan y Dorfman, 1996).

En este orden de ideas, las categorías más los índices temáticos, articulan que mediante el análisis de contenido etnográfico se podrá orientar, verificar, complementar y apoyar planteamientos y afirmaciones teóricas previas, ya que al obtener simultáneamente categorías y datos únicos para cada caso estudiado se desarrollan análisis y constructos apropiados para varias investigaciones (Altheide, 1987: 68). Así, articulando el aparato de interpretación desde la socio historia, se busca delimitar ciertos aspectos estructurales y coyunturales, pero también las transformaciones cambios y permanencias, en particular los

ejes concomitantes entre el sistema internacional y el régimen internacional de prohibición de drogas, el régimen local de prohibición de drogas y su interacción con el sistema político mexicano, la securitización y la americanización de ciertas políticas. De este modo la construcción del dispositivo etnográfico supondrá un eje para establecer el análisis y catalogación de documentos con el fin de analizar cómo es que se ha configurado el fenómeno del narcomenudeo en la Ciudad de México. Para lo cual me remito a señalar que el análisis de contenido será un procedimiento sistemático para explorar información archivada (Igartua, 2006) tomando en cuenta que los documentos son representaciones simbólicas expandiéndose a las tecnologías, las bases de datos, notas de campo, entrevistas imágenes con soporte de video fotos, incluso la ropa o la moda (Altheide, 2008).

Por lo que respecta, al tamaño de la muestra, según Altheide señala que desde el análisis de contenido etnográfico se debe estar familiarizado con un monto de 6 a 10 documentos relevantes las cuáles serán las transcripciones de las entrevistas, catalogados mediante la enumeración de los ítems y categorías (variables) para guiar los datos de entrada, para esto se realizó una prueba piloto con la redacción de un protocolo y una ficha de recolección de datos, con el motivo de validación para integrar un documento robusto y tres modelos de guía de entrevista semi estructurada según sea el perfil del entrevistado.

Respecto a la selección de la muestra se integra lo sugerido por (Aldrige y Levine, 2003) quienes señalan al muestreo orientado como un instrumento válido para la metodología cualitativa y en ocasiones fases exploratorias de estudios con el fin de localizar casos e información que poseen los atributos para la investigación. De este modo al seleccionar expertos especialistas se intenta formar casos explicativos a partir de categorías y colección de ejemplos paradigmáticos, ejemplos extremos, recientes, o antiguos, ejemplos en los que *x*, tienen un lugar en *y* o en ausencia de z (2003: 109).

A continuación, se reproduce la ficha de recolección de datos y el cuestionario y enviado a los entrevistados y expertos que pertenecen al área de las relaciones internacionales y representación de México ante los órganos de control y fiscalización de drogas internacionales, así como los encargados de negociaciones regionales y bilaterales sobre seguridad y drogas, respecto al periodista entrevistado no se utilizó cuestionario y se basó en conversaciones informales sobre su experiencia en la cobertura de temas sobre crimen.

Tabla 3. Ficha de recolección de datos

Categoría	**Régimen internacional de prohibición**	**Sistema político (régimen político mexicano)**	**Americanización**	**Securitización**
Itéms	Reconfiguración del poder ( )Si ( )No ( ) NA	Reconfiguración del poder ( )Si ( )No ( ) NA	Militarización ( )Si ( )No ( ) NA	Militarización ( )Si ( )No ( ) NA
	Corrupción ( )Si ( )No ( ) NA	Corrupción ( )Si ( )No ( ) NA	Policialización ( )Si ( )No ( ) NA	Policialización ( )Si ( )No ( ) NA
	Reforma política ( )Si ( )No ( ) NA	Autoritarismo ( )Si ( )No ( ) NA	Unilateralismo ( )Si ( )No ( ) NA	Cero tolerancia ( )Si ( )No ( ) NA
	Interdependencia ( )Si ( )No ( ) NA	Reforma política ( )Si ( )No ( ) NA	Mediatización ( )Si ( )No ( ) NA	Autoritarismo ( )Si ( )No ( ) NA
	Respeto garantía derechos humanos ( )Si ( )No ( ) NA	Mediatización ( )Si ( )No ( ) NA	Integración económica ( )Si ( )No ( ) NA	Respeto garantía derechos humanos ( )Si ( )No ( ) NA
	Rendición de cuentas ( )Si ( )No ( ) NA	Respeto garantía derechos humanos ( )Si ( )No ( ) NA	Transparencia ( )Si ( )No ( ) NA	Transparencia ( )Si ( )No ( ) NA
	Cooperación internacional ( )Si ( )No ( ) NA	Rendición de cuentas ( )Si ( )No ( ) NA	Respeto garantía derechos humanos ( )Si ( )No ( ) NA	Rendición de cuentas ( )Si ( )No ( ) NA
		Cooperación internacional ( )Si ( )No ( ) NA		Cooperación internacional ( )Si ( )No ( ) NA

Fuente: elaboración propia.

Cuestionario Número_____

Nombre:	
Código:	

Preguntas:

1-Desde la perspectiva de la cooperación internacional, la orquestación de los tratados internacionales y tomando en cuenta el escenario sugerido por las *consecuencias no intencionadas del sistema internacional de control de drogas*. ¿Cree usted que el narcomenudeo es resultado de estos efectos no deseados? 1.1-Si es así, ¿Piensa usted que, el narcomenudeo, la venta de drogas ilegalizadas a pequeña escala o para el consumidor final que se realiza en el territorio mexicano tiene implicaciones o consecuencias internacionales? ¿Cuáles? (profundizar)
2- Tomando en cuenta lo anterior. Y desde su experiencia en la representación de México ante los aparatos de control y fiscalización internacional de drogas. ¿Cree usted que los mercados y consumo de drogas a nivel local en México son atendidos de la manera correcta? ¿Qué más se debería hacer? ¿Por cuáles agentes o actores? 2-1- ¿Piensa usted que el narcomenudeo a diferencia del narcotráfico debe atenderse con mayor énfasis en algún área por ejemplo en la seguridad desde la perspectiva de la oferta? O mayor énfasis en la demanda incluyendo el sistema de salud, con prevención tratamiento o en el desarrollo social y comunitario? (profundizar)
3- Sobre los procesos amplios de discusión pre y post UNGASS 2016. ¿Cree usted que este proceso logró transformaciones o cambios a nivel internacional y nacional? Y de ser así, cuáles son los cambios más evidentes a nivel institucional respecto al control de drogas en particular la articulación del sistema internacional hacia el sistema de control de drogas ilegalizadas a nivel nacional.
4- Sobre este tema, aunque se encuentra más cercano temporalmente el proceso de cuestionamiento a las consecuencias no intencionadas mediante las UNGASS de 1998 y 2016. ¿Cuál cree usted que son los principales temas dentro de la agenda internacional y bilateral en el control de drogas internacional de drogas?
5- Sobre la reputación internacional. Si bien la marca país *México* tiene un amplio potencial y cuenta con aceptación y prestigio. También es significativo que suele asociarse un binomio en la prensa internacional y en productos culturales en medios masivos y redes sociales a la denominada na*rco narrativa o narco cultura* y suele asociarse a México con corrupción, inseguridad o traficantes de drogas. En este sentido, ¿ A pesar de esta reputación y tensiones, piensa usted que México continúa teniendo liderazgo internacional o regional al plantear cuestionamientos al actual régimen de prohibición?
6-Desde esta misma premisa con la perspectiva de la cooperación internacional y la orquestación de los tratados internacionales en el marco de interacción con la reconfiguración del poder político nacional. ¿Cuál cree usted que es una de las resistencias más notables a nivel institucional respecto al control de drogas y la posibilidad de alguna reforma local?
7- Tomando en cuenta los compromisos adquiridos a través de instrumentos de cooperación bilateral respecto al control de drogas ilegalizadas ¿Cuál es su opinión respecto a los tribunales de tratamiento en adicciones y su armonización con el modelo de control del narcomenudeo?

El análisis de contenido mediante fichas de recolección fue adoptado para explorar y comprender los significados que diversos individuos asignan a problemas sociales complejos como el narcomenudeo, para con ello elaborar los textos de análisis incluidos en el capitulado, además de que ofrece herramientas para capturar sutilezas y guiños, proporcionando así un análisis contextualizado de la problemática. A través de este enfoque, se elaboró una explicación ordenada desde la perspectiva socio histórica de las complejidades del fenómeno, en lugar de simplemente medirlo de forma cuantitativa, que como se explicará a lo largo de la tesis, existe una variedad de datos sobre el narcomenudeo en repositorios institucionales o los recopilados por la prensa que suelen concentrase en cuestiones de criminalidad o conductas antisociales, como detenciones o incautaciones. Si bien, estos datos son útiles para dar algunas explicaciones empíricas para esta tesis el narcomenudeo se toma como un fenómeno social que presenta un marco de interacción histórico-social y temporal, lo cual puede ser complejo debido a la prohibición global de drogas, al mercado de sustancias psicoactivas y a la interacción con el sistema político mexicano por lo que no solo se reduce a un acto de comercio ilícito.

En este sentido, la recopilación de datos mediante las entrevistas a expertos y especialistas permitió utilizar las fichas de recolección de datos en coherencia con la matriz de análisis para dar sentido y articulación a las interpretaciones elaboradas en las narraciones de los capítulos, ya que permite la flexibilidad para dar un acercamiento más profundo a temas sensibles, aunado a la capacidad de identificar patrones y categorías en los discursos relacionados con el narcomenudeo mediante la triangulación y el uso de índices temáticos que suelen ser delegados a aspectos narrativos negativos, lo que es especialmente crucial en el contexto de una comprensión articulada del narcotráfico y su conexión con la seguridad nacional. Es por ello, que la interacción directa con los expertos puede abrir líneas de conversación que revelan información valiosa que de otro modo podría permanecer oculta.

Esto permitirá a los lectores identificar las narrativas dominantes y sus implicaciones sociales y políticas, contribuyendo así a una comprensión más profunda del fenómeno centrándose en el entendimiento integral de las experiencias, actitudes y marcos de significado de los diversos actores involucrados. Por ejemplo, al considerar aspectos como las narrativas sobre la inseguridad, las actitudes hacia la prohibición de drogas, o las representaciones mediáticas

del narcotráfico, se logra construir un marco analítico que enriquece la comprensión de cómo estos objetos culturales influyen en las percepciones y experiencias de los actores involucrados.

A medida que se recopilan y analizan datos relacionados con estas categorías, se evidencia cómo los objetos culturales no solo reflejan, sino que también construyen realidades sociales y políticas en torno al narcomenudeo. Por ejemplo, la forma en que se representan las figuras del narcotraficante en los medios puede afectar la percepción pública y las políticas de seguridad, mientras que las prácticas culturales locales pueden ofrecer una visión única sobre las dinámicas sociales dentro de comunidades afectadas por el narcomenudeo. De este modo, estas observaciones ayudan a desentrañar las complejas interacciones entre el fenómeno del narcomenudeo y el tejido cultural que lo rodea, proporcionando un entendimiento más profundo y matizado de la situación.

El siguiente apartado, Regímenes globales de políticas antidroga y su control local, se centrará en el análisis de los regímenes globales de políticas antidroga y su control a nivel local en México. En primer lugar, se explorará la "Campaña Permanente" y la judicialización e internacionalización de la penalización sobre drogas en México desde 1948 hasta 1984, analizando cómo estas estrategias fueron implementadas y sus impactos en la sociedad. Despues, se examinará la americanización de la lucha contra las drogas entre 1985 y 1994, destacando la influencia de políticas estadounidenses en el contexto mexicano. Seguirá una sección dedicada a la apertura económica y la conceptualización del "enemigo interno" en México entre 1997 y 2006, donde se discutirán las interrelaciones entre economía y seguridad. Posteriormente, se abordará el tema del tráfico ilícito transnacional de drogas, específicamente el narcotráfico, ilustrando sus dinámicas y consecuencias. Finalmente, se cerrará el capítulo con un análisis del comercio de drogas a pequeña escala, conocido como narcomenudeo, donde se evaluará su impacto social y económico en el país.

Capítulo III. Regímenes globales de políticas antidroga y su control local

Siguiendo la propuesta de Krasner (1983), los regímenes internacionales suponen un sistema de principios, normas, reglas y procedimientos para la toma de decisiones explícitas o implícitas, en los cuales convergen las expectativas de los actores en un área dada de las relaciones internacionales. En este sentido, el régimen internacional de control de drogas supone un acuerdo normativo implícito y explícito de cooperación internacional, por su parte el régimen internacional de prohibición como consenso cultural y social tiene un orden de características particulares socio históricas y las relaciones de interdependencia política, por ejemplo las que se establecen ante una potencia hegemónica, organizaciones supranacionales, frente la configuración, creación y desarrollo de instituciones, las relaciones políticas y culturales frente a las dinámicas de élites locales, a las organizaciones políticas y a los, acuerdos, normas, tratados y leyes normas es por ello que el control de drogas pendulará en parte desde un control internacional, el cual irá desde presiones que Estados Unidos ejerce sobre México, el papel de los organismos internacionales como la ONU y características locales y nacionales que México irá enfrentando.

En este sentido, a partir de 1917 con la centralización revolucionaria en el poder ejecutivo y al convertirse la ciudad en un órgano administrativo dependiente del poder federal el caso del control y mercado de drogas en la Ciudad de México será institucionalmente una competencia federal con ejecución de actores locales y federales. Por lo que, articular una historia de las normativas sobre drogas representa un desafío debido a que son diversos actores, dinámicas, normas e instituciones las que comprenden su control y ejecución, ante una práctica social arraigada como lo es el consumo de drogas. Además de que, con el desarrollo del proyecto de urbanización, modernidad y globalización, también modifican las prácticas sociales en el tiempo. Un carácter definitorio de estas actividades es el tránsito y cambio en sus dinámicas y el *ethos* con el cual las personas que las usan se insertan dentro de la sociedad, ya que poco a poco irá extendiéndose y convirtiéndose en una práctica que pasará de ser oculta, privada delimitada a los bajos fondos y algunas bohemias, a prácticas de consumo masivo.

Por ello, habría que identificar históricamente al narcomenudeo como un fenómeno que supone la venta de drogas ilícitas a pequeña escala en zonas urbanas y aunque no se le nombraba narcomenudeo, este fenómeno de venta de drogas ha sido por cien años perseguido

y procesado gubernamentalmente como un aspecto de salud y judicial. Entonces, el control de drogas a nivel institucional como lo supondrá el narcomenudeo en el siglo XXI se puede entender como paralelo al tráfico internacional de drogas ilícitas, el cual en ocasiones ha sido utilizado como un concepto y un pretexto político para definir enemigos.

En esta lógica histórica, en un comienzo, mediante un proyecto modernizador y de higiene social a través del Departamento de Salubridad Pública, que junto a la inspección de policía y la policía sanitaria hasta los años 40, se llevarían a cabo la supervisión de licencias en boticas y droguerías y por otro la persecución de los traficantes y en su caso de los consumidores de drogas. En este sentido, desde la segunda década del siglo XX, en algunos puntos del centro histórico como el barrio chino o la zona de la merced, la venta de drogas al menudeo era una actividad ilícita que se conjuntaba con la demanda de estas, lo cual configuró espacios identificados con la venta, compra y consumo de drogas (Pérez-Montfort, 2015).

Después, para los años 40 las mafias de tráfico de narcóticos ya se encontraban bien arraigadas en la zona del centro histórico, en particular en el barrio de Tepito, donde había zonas delimitadas para el consumo de drogas, e incluso se señala que en algunas boticas se vendían narcóticos farmacéuticos a sobre precio y sin receta señalando que en 1948 cerca de 1000 personas habían sido procesadas por delitos contra la salud (Olvera, 2021). Es pertinente señalar esta actividad para el análisis del narcomenudeo y los antecedentes de la venta de drogas a pequeña escala, pues tomando en cuenta que la prohibición cambió drásticamente entre 1920 a 1940, el circuito de venta, compra y tenencia, era un sistema semi tolerado a partir de la continuación de la venta farmacéutica de algunas sustancias como la cocaína y la heroína a médicos y boticas con registro y de la cual se puede suponer que algunas de estas sustancias se vendían para usos no médicos. De modo que, el esquema de penalización se vigorizó con la campaña contra los enervantes y las acciones policiales daban cuenta de los abundantes esfuerzos de las autoridades por controlar y evitar el tráfico y venta de drogas para consumo en la ciudad y para su tráfico internacional.

Es importante reconocer, los cambios, continuidades e incorporaciones de las modalidades integradas en la legislación mexicana de los llamados delitos contra la salud, que reglamentan y prohíben: la venta, fabricación, tráfico y posesión de drogas. Esta norma, se encuentra depositada en el Código Penal desde el año de 1931 y se conformó como un

modelo regulatorio centralizado en particular la Ciudad de México, la cual ha sido un centro cosmopolita y de intercambio global, con un mercado local de venta de drogas en especial marihuana, cocaína y heroína para el consumo local, así como punto de encuentro para traficantes internacionales.

Como ya se mencionó, desde 1917 la Ciudad de México, antes Distrito Federal pasó a ser un territorio federal, concentrando un centro de poderes, pero también dinámicas urbanas, cosmopolitas, modernas y tradicionales por lo que las actividades dentro de este territorio comprendieron en buena medida normativas y restricciones de medidas federales y algunas características locales. Por ejemplo, la persecución de la policía local de los delitos contra la salud, en ocasiones había otros delitos concurrentes por ejemplo la extorsión o el juego de apuestas fomentando un mercado ilegal (Excelsior, 1925). Por lo que sus concurrencias después de los años 40 fueron absorbidas por los ministerios públicos federales y las acciones de la Procuraduría General de la República y de la Dirección Federal de Seguridad y durante un corto tiempo la Dirección de Estudios Políticos y Sociales.

Algo destacable del mercado de drogas era que, en la ciudad de México podían encontrarse cultivos de marihuana en las zonas agrícolas como Tlalpan o Xochimilco, pero también laboratorios de cocaína o heroína en las colonias que comprendían el centro de la ciudad, las dinámicas de persecución a la producción y tráfico no son muy claras en los archivos, pero es complicado identificar si las drogas incautadas en los laboratorios o los cultivos eran para venta local o para tráfico trasnacional (Astorga, 2004, Olvera, 2016). A diferencia de las dinámicas presentes en otros estados de la república como Sinaloa o Baja California Norte, donde la producción solía concentrarse para el tráfico internacional, se puede decir que la ciudad de México fue también un centro de negocios y de intercambio para los traficantes internacionales, los cuales solían reunirse para cerrar tratos en la ciudad (Astorga, 2015).

Durante esta primera etapa del control de drogas conocida también como época de: *el buen entendimiento* y de *la campaña permanente*, se llevó a cabo, durante un buen tramo de la llamada guerra fría, la expansión de la hegemonía norteamericana a partir de cambios estructurales en Estados Unidos, como las tensiones raciales, disturbios sociales y cambios en agenda política, aunado a prioridades políticas y condiciones socio históricas que dieron fin al conjunto de normas informales entre México y Estados Unidos en 1968, las cuales

fueron interrumpidas y los asuntos sobre drogas cambiaron radicalmente ante las presiones y las campañas binacionales para el control de drogas.

Al respecto, cabe señalar que, si bien la vigilancia sobre el comercio y tráfico ilícito entre México y Estados Unidos comienza a principios de siglo, a finales de 1944 algunos funcionarios norteamericanos consideraban a México como la mayor fuente de abastecimiento de narcóticos ilícitos (Astorga, 2015). Llama la atención, que la producción, fabricación y almacenamiento de drogas de origen mexicano aumentaba ante el cultivo de plantas ilícitas en algunas zonas serranas, sobre todo de Sinaloa, por lo cual se puede establecer, como se había mencionado con anterioridad, una posible trazabilidad de las drogas fabricadas en México, las cuales llegaban al mercado internacional, pero también tráfico de drogas proveniente de mafias norteamericanas, europeas y asiáticas, por ejemplo la cocaína proveniente de Sudamérica y la heroína de Asia o África.

Tomando esto en cuenta, el principal mercado de drogas en los primeros cuarenta años del siglo XX en la ciudad de México se vio acrecentado por el crecimiento de la ciudad y el aumento de la población. En este sentido, de acuerdo a investigaciones como la de (Olvera, 2016; 2021) existen documentos sobre penalización de drogas en la ciudad donde se señala que algunos toxicómanos (adictos) eran recluidos en el manicomio general y en el hospital de toxicómanos debido a su dependencia a la heroína o morfinismo, cabe también mencionar que Olvera también señala las profundas diferencias entre la clase burguesa extranjera, una clase media y clases populares aunado a la complejidad y transformación de los contextos urbanos en la Ciudad de México ante la dinámica social de la marginación y migración campo ciudad que experimentará el centro del país al menos hasta mitad de los años 1970.

Cabe también mencionar que el modelo de desarrollo y la influencia que la cultura norteamericana tendrá sobre la sociedad mexicana también será un vector en el cual el consumo de mercancías y los medios de comunicación tendrán una fuerte influencia aún y a pesar del centralismo y el proyecto nacionalista del Estado mexicano no detendrán el crecimiento de la cultura urbana, la cultura juvenil y las tensiones derivadas de la guerra fría y la agenda conservadora norteamericana, que se consolidó en los organismos internacionales, en las agencias anti droga y por último en las relaciones locales y globales

aumentó la intensidad y frecuencia del tráfico de drogas debido a los cambios de la denominada guerra cultural, la expansión urbana y demográfica.

Así, en el primer apartado se aborda la denominada campaña permanente y sus repercusiones en el ámbito social, político y económico a nivel global y local. Aunado a esto, se recupera la dinámica económico y social particular de México y Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría, la cual oscila entre los primeros indicios del agotamiento del modelo Keynesiano, los movimientos sociales de finales de los sesenta en el mundo y las crisis económicas.

3.1 La Campaña Permanente y la judicialización e internacionalización de la penalización sobre drogas en México 1948-1984

La Campaña Permanente antidrogas es un *contínuum* de esfuerzos binacionales México-Estados Unidos entre los años de 1948 y 1968, la cual comprende intercambios de experiencias con agentes norteamericanos antinarcóticos y de distintos niveles, como el Departamento del Tesoro, el Buró Federal de Narcóticos, agentes aduanales, la guardia fronteriza y comisiones especiales formadas por diplomáticos y representantes del poder ejecutivo. Por su parte, del lado mexicano participaron agentes de la Policía Judicial, el Departamento de Salubridad, Inspectores de la Policía Federal de Narcóticos, la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales hasta su extinción, la Dirección Federal de Seguridad y Militares, así como comisiones diplomáticas que incluyeron reuniones entre altos miembros del poder ejecutivo.

El objetivo de la *Campaña Permanente* en su primera fase denominada la *Gran Campaña contra los estupefacientes* inaugurada durante el sexenio de Miguel Alemán, consistió en una formalización y robustecimiento ante las presiones de Estados Unidos por el creciente tráfico ilícito y uso de drogas narcóticas entre la población norteamericana en especial: la heroína y morfina con fines no médicos. Así, fueron primordiales las campañas de erradicación de cultivos ilícitos en el ahora denominado *Triángulo Dorado*, comprendido por los estados de: Sinaloa, Durango y Chihuahua, así como detener el tráfico fronterizo en Ciudad Juárez, Mexicali y Matamoros. Estos intercambios diplomáticos establecieron los incipientes acuerdos binacionales respecto al control de drogas para tráfico trasnacional, pero también incluyeron algunas acciones respecto al mercado local de drogas ilícitas en la Ciudad de México por ejemplo la investigación de redes trasnacionales de comercio ilegal de narcóticos.

Estas incursiones, incluían el despliegue de agentes y recursos financieros y materiales por parte de Estados Unidos, los cuales solían ser regulados por el Departamento del Tesoro, en el cual se incluía la capacitación, otorgamiento de recursos como armas y hombres a México para realizar acciones disuasivas o intervenciones, la mayoría de ocasiones se realizaban en las zonas serranas donde se concentraban los cultivos y se utilizaba al ejército, pues eran los únicos que los lugareños respetaban (Astorga, 2015). Al respecto, Luis Astorga señala que previo a las incursiones de la policía local o los militares, se repartían

volantes señalando la prohibición explícita para cultivar amapola y marihuana, este historiador detalla una ocasión en una incursión, en la cual algunos campesinos señalaron que, si contaban con un permiso que había sido otorgado por un político local, estos informes muestran dos cuestiones que serán definitorias para el tráfico de drogas en México. Primero que, algunas personas de la política o allegadas a la misma red participaban del tráfico internacional, en ocasiones también del mercado local de drogas. Y segundo que, las agencias norteamericanas conocían algunos casos de corrupción y solían, como acuerdo implícito, evitar involucrarse en reprimendas judiciales, debido a que no existían los acuerdos diplomáticos necesarios y cualquier acción policial norteamericana sería mal vista o condenada por el gobierno mexicano y la información era utilizada a manera de inteligencia y en algunos casos para perseguir a las capas más bajas del tráfico.

El carácter global y local de estas medidas anti narcóticas se fundamentan en una serie de responsabilidades y compromisos pactados por el Estado Mexicano ante organismos internacionales y de los cuales México participaba de manera continua, por ejemplo: La Convención del Opio 1912, el Acuerdo relativo a la fabricación, el comercio interior y el uso de opio preparado de 1925, el Convenio para limitar la manufactura y regular la distribución de estupefacientes de 1931, el Convenio para la supresión del tráfico ilícito de drogas nocivas de 1936 (UN, 2019) por nombrar algunos. Todos estos acuerdos oficiales signados por el gobierno mexicano fueron espacios y momentos para el intercambio diplomático, así como una forma de alinearse ante las decisiones de un sistema de relaciones internacionales como la Liga de las Naciones y posteriormente con el sistema de las Naciones Unidas en 1945.

Un primer conflicto diplomático, derivado de cierta autonomía relativa que México tomó sobre sus programas de fiscalización y control sobre drogas se dio cuando entre 1939 y 1940, el gobierno mexicano durante los últimos meses del gobierno de Lázaro Cárdenas publicó el Reglamento Federal de Toxicomanías, en el cual se planteó una serie de reformas y medidas que contemplaron una distribución institucional de *drogas enervantes* a personas con dependencia, así como un dispensario para su entrega mediante una prescripción de un médico cirujano, junto con medidas que incluyeron un registro de toxicómanos (DOF, 1940), cuestión que no fue bien vista por el gobierno norteamericano el cual ya había reportado y levantado informes sobre Leopoldo Salazar Viniegra un funcionario psiquiatra formado en Francia el cual experimentó, entre otras formas, facilitando cigarrillos de mariguana a

comitivas diplomáticas mezclados con cigarrillos de tabaco, para con ello probar que no existía el efecto llamado locura tóxica ocasionada por la hierba verde, resultados que Incluso, llegó a publicar en la revista *Criminalia* un texto llamado *El Mito de la Marihuana* (Salazar, 1938).

Sin embargo, las autoridades estadounidenses solicitaron la suspensión del Reglamento con motivo de no permitir el abastecimiento de medicamentos esenciales contra el dolor argumentando que podían ser desviados para otros fines que no fueran los médicos legítimos (Pérez-Montfort, 2015) y desde ese episodio en la mayoría de ocasiones el gobierno mexicano decidió acatar algunas medidas que el gobierno norteamericano solicitó, siempre y cuando no violara la soberanía nacional, por lo que estas medidas de corte radical como una despenalización quedaron en el olvido y se continuó[16], por el contrario, con la narrativa sobre la desviación y criminalidad ocasionada por las drogas ilícitas y se robusteció un sistema de intercambio diplomático el cual en cierta medida se estableció respecto a la toma de partido de México durante la segunda guerra mundial como aliado.

En este sentido, Astorga (2015) señala que una de las etapas con menores conflictos de colaboración diplomática por parte de México en materia antinarcóticos fue entre la época final de los años cuarenta, y hasta mediados de los años sesenta durante la gestión del embajador Óscar Rabasa. Lo cual, también favoreció para que México participara de un espacio representativo en los esquemas de fiscalización sobre drogas en la Comisión de Drogas Narcóticas (CND) de la ONU, en la cual México desempeñó un papel moderado durante la fase de posguerra. Gestiones que empatan con la expansión de las operaciones de la Agencia Central de Inteligencia CIA en México y Latinoamérica, así como la colaboración de algunos funcionarios en operaciones de inteligencia, de cooperación y operaciones encubiertas, y la expansión del FBI y el Buró Federal Antinarcóticos como agencias para la formación de una burocracia policial modelo y a la formación de expertos especialistas para la futura creación de la DEA a principios de 1970 (Pérez-Ricart, 2019).

[16]Para una versión pormenorizada de lo ocurrido entre 1938-1940 con el Reglamento Federal de Toxicomanías en el sistema diplomático internacional y la reacción de Estados Unidos, el texto de Carlos Pérez Ricart (2021) ofrece una discusión historiográfica incluyendo la perspectiva interna diplomática de (Flores, 2013), la aproximación Bilateral Diplomática de (Walker, 1978) y por último la interpretación de (Campos, 2017). Dentro de sus principales conclusiones destaca que, la alianza militar en el contexto de la segunda guerra mundial marcó los intereses superiores diplomáticos donde predominó la cooperación sobre el conflicto, además destaca que los funcionarios mexicanos adolecieron de una falta de comunicación.

Al respecto hay que señalar que la Dirección Federal de Seguridad en México, tuvo capacitaciones y se ciñó de origen al modelo de la policía profesional de campo que recopilaba información, espiaba y controlaba políticamente a los adversarios y enemigos, siguiendo los parámetros de Washington y el modelo de Edgar Hoover sobre el FBI, como un modelo policial profesional y moderno. Cuestión que era aprobada y bien vista por los órganos del poder ejecutivo en México, que al igual que algunos presidentes en Estados Unidos durante la fase de la guerra fría solían ser temerosos de los grupos disidentes o de los enemigos políticos, a los cuales solían espiar y levantar informes de inteligencia (Iber, 2013).

Para el caso de la persecución local Olvera (2021) señala que entre 1947 y 1948 aumentaron las persecuciones de traficantes dentro del país por parte de la policía judicial, lo cual contrasta con la idea de que era la DFS la que se encargaba de estas pesquisas. Por su parte, Aguayo (2001), señala que los presidentes mexicanos, así como los norteamericanos actuaban con cierta paranoia, a veces infundada por los servicios de inteligencia y los cuadros cercanos a los mismos, en donde la práctica del espionaje y contra espionaje a rivales políticos o a movimientos sociales, agencias, partidos y antagonistas políticos era moneda corriente. Sin embargo, los informes de inteligencia que la DFS recopiló en cientos y cientos de hojas y descripciones de actividades de seguimiento e intervenciones telefónicas, eran en ocasiones documentos que quedaban apilados y no lograban conjuntar un modelo de análisis e interpretación sofisticada como el de su homólogo norteamericano. Por lo que en ocasiones presentaban información falsa, inverosímil o los informes solían ser exagerados por las autoridades encargadas de transmitir la información a sectores, por ejemplo, en las relaciones internacionales, pongamos por caso los informes que solían facilitar para la detención de presuntos traficantes, y como no existía un modelo homologado binacional para el intercambio de información oficial, más que los telegramas secretos que en ocasiones eran interceptados, la comunicación sobre los informes de seguridad solían presentar sesgos importantes.

Sin embargo, como habíamos mencionado estos compromisos y actuaciones binacionales de inteligencia sobre el tráfico de narcóticos no tenían un documento base o acuerdos binacionales formales como tratados, sólo se basaban en la interpretación de los acuerdos internacionales de fiscalización sobre drogas, y en consecuencia eran actuaciones de buena fe y aunque existían documentos del lado norteamericano y entre agencias, oficinas

de algunos consulados en estados fronterizos y los gobernadores de ambos lados de la frontera no había grandes resultados.

Esta fase, en la que no se presentaron grandes tensiones fue denominada también como: *del buen entendimiento*. Pues se suponía que a partir de una serie de acuerdos supranacionales y la buena voluntad de ambos Estados; México y Estados Unidos trabajaban de manera conjunta por el bien mayor que es la salud pública mundial, por lo que nunca existió un documento oficial que integrará desde la Secretaría de Relaciones Exteriores o desde el poder ejecutivo mexicano un programa integral para la prevención de la oferta y de la demanda de drogas. Por lo que, podía catalogarse como una serie de acuerdos informales y esfuerzos aislados con algunos resultados, pero deficiente en términos prácticos, lo que fomentó el tráfico ilícito y no estableció un control adecuado de narcóticos para uso no médico. Sin embargo, hay que señalar que a nivel nacional con las modificaciones al código penal de 1947 se presentó un aumento en las penas por delitos contra la salud, lo cual de acuerdo con Olvera (2021) significó una armonización con las políticas antidrogas existentes en Estados Unidos.

Antes de continuar, con la contextualización histórica de los esfuerzos en el control y erradicación de drogas en México, hay que señalar el papel decisivo y configurante del sistema de control bi nacional, internacional y del modelo que se consolidó como antecedente del régimen internacional de prohibición del siglo XX y que desembocaría en la fuerte influencia de Estados Unidos y la llamada *americanización* la de la mayoría estrategias antidrogas, de algunas políticas, de formas de hacer campañas políticas y formas de relacionarse social y culturalmente. Cuestión que se configuró desde principios de siglo, ya que de acuerdo con Astorga (2015), la vigilancia sobre el cultivo de drogas y tráfico ilícito de drogas que Estados Unidos tuvo hacia México se extiende en archivos documentales a principios del siglo XX en 1911, y denota un continuo de esfuerzos nacionales e internacionales, donde las constantes van a ser: el crecimiento de la producción de drogas en México, el aumento en el tráfico ilícito ya sea mediante, simples o complejas redes, en algunos casos auspiciadas por criminales internacionales, redes de políticos, funcionarios o policías y en otros por ciudadanos norteamericanos o mexicanos que encontraban la forma de comprar en un lado y revender en el otro. Así como, campesinos que cultivaban amapola y marihuana y vendían a intermediarios, personas que con o sin conocimiento técnico

trabajaban en laboratorios clandestinos los preparados para el comercio local e internacional, y por último y más importante, el aumento en el consumo de drogas por parte de la población norteamericana, la cual ha experimentado varias epidemias de adicción a la heroína así como una objeción institucional y cultural al consumo de drogas con fines no médicos (Courtwright, 2002).

En este orden de ideas, la objeción cultural y la obsesión puritana prohibitiva de algunas capas de la sociedad norteamericana (Tyrell, 2010) aunado al fracaso de la prohibición del alcohol durante los años 20, quizá fue una de las razones por las que el modelo de prohibición de drogas será una cruzada personal para ciertos personajes e instituciones de la política norteamericana, con esto me refiero al papel decisivo de Harry Anslinger, conocido como el *zar antidrogas* norteamericano, ya que esta cruzada e *imperio moral* de Estados Unidos, al terminar la gran guerra se convirtió en una medida que detonó un sistema de control global, dejando atrás los viejos intentos del imperio británico y la Liga de las Naciones por fiscalizar, controlar y monopolizar el opio hacia una campaña con mayor penetración cultural e institucional.

La presión que Anslinger había puesto sobre la Comisión (CND), desde los años 1930, se tradujo en una influencia mayúscula de Estados Unidos sobre la comisión, sobre todo ante el reacomodo internacional relacionado con el nuevo orden, derivado de la segunda guerra mundial, aunado a esto la agenda política norteamericana solía conjuntarse con presiones a través de organizaciones supranacionales. Además, Anslinger solía visitar México e incluso llegó a mencionar que era un modelo para seguir para el mundo debido a sus informes presentados ante la CND sobre cultivos ilícitos y por su cooperación y legislación avanzada sobre control de drogas (Astorga, 2015), a pesar de los problemas reportados en informes de las campañas de erradicación o policiales sobre la posible corrupción que había en México.

En resumen, tomando en cuenta un ambiente de expansión de un imperio moral norteamericano, con la expansión del dominio norteamericano en los modelos policiales y de inteligencia aunado a que Anslinger llegó a ser el representante de su país ante las Naciones Unidas en la CND, para los años sesenta la cooperación internacional y el régimen de control de drogas, se cimentaron en los acuerdos sobre drogas previos a la Convención Única de las Naciones Unidas sobre estupefacientes de 1961, entre los meses de enero a marzo del año

1961 la Comisión de Drogas Narcóticas de las Naciones Unidas, consolidaron el primer esfuerzo por unificar los tratados internacionales y urgencias regulatorias sobre drogas a nivel internacional y como lo indica su nombre *Single Convention* convierte en únicos todos los acuerdos previos, que incluyeron la fiscalización, control y erradicación del uso de drogas para fines no médicos, teniendo entre sus principales aportes la prohibición de las tres plantas con las cuales se podían producir o elaborar drogas ilícitas de mayor uso a nivel mundial, como el arbusto de hoja de coca, la amapola y la marihuana, a través de una serie de listas que calcificaban a las drogas por su potencial terapéutico o dañino, además de incluir la penalización para el consumo personal de drogas.

Por su parte, en este clima internacional, el estado posrevolucionario y ahora estado moderno mexicano que cimentó un estricto control de drogas al menos dentro de las leyes, aunque en el terreno fuera complicado ejercerlo, el sistema judicial y distintas instituciones participaban ya sea en la detención de traficantes, procesando consumidores o ingresando al sistema de salud o penitenciario a toxicómanos además de cumplir con los requerimientos internacionales de fiscalización y reporte ante los comités internacionales.

Dentro de las acciones policiales de control de drogas en México, que se realizaban en cooperación con agencias o agentes norteamericanos eran trabajos de inteligencia como seguimiento de cargamentos, compras controladas de drogas ilícitas, seguimiento e intervención a redes de traficantes nacionales e internacionales, que en repetidas ocasiones mostraron tener relaciones con políticos locales, o personal allegado a estructuras políticas. Por ejemplo, en 1951 un copiloto del avión del presidente Miguel Alemán fue incluido en una lista en la cual se señalaba que estaba introduciendo drogas y oro a Nueva York debido a que no era requisada esa aeronave (Astorga, 2015). Sin embargo, la corrupción era binacional pues se llegó a dudar también de agentes del mismo Departamento del Tesoro y aduanales los cuales participaban del tráfico de drogas

Ya entrados los años sesenta, con la Convención Única funcionando y el clima político de la guerra fría, en el cual la persecución al comunismo era una agenda prioritaria y el control de la disidencia política, aunado a la creciente crispación entre algunos funcionarios la cooperación y acciones policiales y de inteligencia fueron un espacio idóneo para ejercer una extensión de la política conservadora y neo prohibitiva emanada de problemas particulares de la sociedad norteamericana. Al respecto, se ha señalado la extrema

paranoia que tuvo Edgar Hoover respecto al movimiento *beat* desde los años cincuenta (Gair, 2007), sumado a esto se complementa una realidad criminal que se extendió en Estados Unidos y que según Lupo (2009), indica que la primera guerra que se experimentó en Nueva York entre el sindicato del crimen italiano se debió a la introducción masiva de drogas para la venta al menudeo, esta reconfiguración criminal provocó una investigación especial y el primer maxi proceso que experimentó el sistema de justicia norteamericano después de la gran guerra ante la *mafia italo americana.*

En este sentido, el supuesto crecimiento de la demanda de drogas en América del Norte y las tensiones provocadas por la inconformidad por las políticas del reconocimiento de los derechos civiles de las personas afroamericanas y la condena de las políticas de asistencialismo hacia personas desfavorecidas que el gobierno de Kennedy[17] y los demócratas en el gobierno habían instaurado durante el programa denominado *La Gran Sociedad* (Valdés 2015), en la cual el gasto social destinado a estas minorías no convencía al electorado conservador, provocaron la expansión de la ola conservadora. Por lo cual, ante el comienzo de las protestas juveniles y estudiantiles en contra de la guerra de Vietnam en 1967 y los disturbios por el asesinato de Martin Luther King en 1968, vincularon a la violencia, las drogas, la juventud y a los afroamericanos como disidentes y alborotadores del orden, así como a los extranjeros como las mafias italianas, cubanas, puertorriqueñas y mexicanas como los principales proveedores de drogas ilícitas en especial la heroína.

Estos acontecimientos son un antecedente para poder entender por qué, la agenda de la llamada guerra contra las drogas y la radicalización de las medidas en particular de las políticas antidroga de Estados Unidos lograron escalar y se depositaron dentro de las prácticas binacionales e internacionales en un entorno en el cual la cooperación internacional solía vincularse con la posición política frente a los países alineados a occidente y los países socialistas, por lo que la campaña electoral presidencial de Estados Unidos en 1968 fue un catalizador de tres experiencias, las revueltas juveniles estudiantiles, las tensiones derivadas

[17] Durante los pocos años de la gestión de John F. Kennedy el combate a la corrupción con el encarcelamiento y exposición de la mafia italiana ante los tribunales por su hermano el fiscal general Robert Kennedy en parte ocasionada por el creciente tráfico de drogas, colocó en el mapa electoral el vínculo: *mafias tráfico de drogas* además este vínculo fomentaba una premisa de discriminación étnica principalmente encabezada por grupos o políticos conservadores o de derecha (Lupo, 2009). Cuestión que fortaleció los conceptos de *organized crime* o crimen organizado el cual décadas después será uno de los principales motores de la guerra contra las drogas y el control de grupos trasnacionales de traficantes de drogas.

por la guerra de Vietnam y la búsqueda de una nueva agenda política en especial la amenaza comunista al interior de Estados Unidos, por lo que la doctrina del *enemigo interno* se fue volcando hacia definidos problemas sociales como la disidencia política, ya sea pacífica o armada, y las minorías rebeldes por ejemplo los jóvenes que experimentaban con drogas, que se amalgamaron del movimiento beat, hippie y contracultural así como los latinos y afroamericanos.

En este orden de ideas, dentro de las grandes transformaciones sociales aunadas a las económicas que se vivieron en los años sesenta suponen un conjunto organizado de nuevos valores y actitudes, en especial ante las estructuras de autoridad y políticas, el advenimiento de las mujeres y jóvenes como principales consumidores de la nueva cultura de masas (Britto, 1990), ponían de manifiesto un nuevo espectro, donde el modelo económico, social y político se construyó a partir del consumo y en el cual tenía un lugar esencial, el cuestionar y reproducir en masa nuevos valores y actitudes como ser crítico o rebelde, en donde las culturas juveniles norteamericanas y la contracultura.

Además existía una baja percepción de riesgo ante algunas drogas, pues el tránsito de usar alcohol a mariguana, y LSD a heroína parecía casi natural (Smith, 2021), en este sentido, según Valdés (2015) en los años sesenta el estereotipo de usuario de heroína se cimentaba en un hombre blanco urbano, de clase media, mayor de 30 años, que comenzaba a engancharse por distintos motivos, algunos al regresar de la guerra de Vietnam, otros por curiosidad encontraron en la terapia psicodélica una forma de sustituir los efectos adversos del consumo crónico de heroína, mientras que algunos más vagaban o comenzaron a delinquir para conseguir sus dosis o a traficar o vender drogas para auto abastecerse, cuestión que se podrá identificar como una particularidad del mercado de drogas al menudeo en el cual los usuarios suelen vender a sus conocidos drogas para solventar su consumo.

> No es casual que el LSD circulara como estupefaciente primeramente en los Estados Unidos, el país en el que la industrialización, la tecnificación, incluso la agrícola, y la urbanización están más avanzadas. Son los mismos factores que llevaron al surgimiento y a la difusión del movimiento hippie, que se desarrolló al mismo tiempo que el del LSD; son inseparables uno de otro. Valdría la pena investigar hasta qué punto el consumo de drogas ha fomentado el movimiento hippie y viceversa (Hofmann 1991: 68).

Regresando a la dependencia a la heroína, derivado de la experimentación clínica con alucinógenos y su desviación hacia la práctica terapéutica no formal y no institucionalizada, el ambiente contracultural y generacional fomentó una la expansión del uso de drogas con fines no médicos, por ejemplo el LSD, marihuana y con la popularización de la música como el rock and roll y las producciones cinematográficas psicodélicas fomentaban el consumo de drogas hubo un crecimiento exponencial del uso de drogas a nivel global cuestión que empató con la crisis por consumo de heroína entre jóvenes blancos norteamericanos.

> En los años 1964–66 la publicidad en torno al LSD alcanzó su punto culminante, en lo que se refiere tanto a descripciones entusiastas de fanáticos de las drogas y de hippies sobre la acción mágica del LSD, cuanto, a informes sobre desgracias, colapsos psíquicos, acciones criminales, homicidios y suicidios bajo los efectos de LSD. Reinaba una verdadera histeria de LSD (Hofmann, 1991: 71).

Desde los años cincuenta cuando María Sabina fue retratada durante un ritual y Gordon Wasson publicó sus fotos en la revista *Life* en 1957, muchos jóvenes norteamericanos y los llamados jipitecas comenzaron a viajar o instalarse en lugares como Huautla, para consumir drogas, asunto reportado en la prensa nacional. En una nota del Excélsior de la época recuperada por José Agustín, se leía: "la presencia de viciosos que, en medio de whisky y mariguana, buscaban hongos y llevaban dólares para pagarlo" (Agustín, 1996: 75). Entre 1968 y 1969 comenzaron a realizarse patrullajes por parte del ejército y la policía judicial donde arrestaban *melenudos* y en algunas ocasiones llegaron a encarcelar o deportar extranjeros. El llamado turismo psicodélico, incluyó además el flujo de personas jóvenes norteamericanas y europeos que acudían a México y se paseaban por los *bajos fondos* compraban de drogas y aunque señala Smith (2021), que no siempre las encontraban, la creciente oleada de jóvenes que habían nacido antes de la guerra y la generación beat, tuvieron un largo pasaje en México basta mencionar las andanzas de Kerouac o Burroughs, por lo que las autoridades nacionales ya tenían experiencia en su trato o detención, por ejemplo en 1959 Philip Lamantia poeta beat autor del libro Narcótica fue detenido en Avenida Juárez por la policía en posesión de marihuana y se declaró adicto a la heroína (Pérez-Ricart y Olvera, 2021).

En este orden, la americanización de la cultura y la hegemonía cultural anglo sería un aspecto definitorio del consumo y venta de drogas entre jóvenes. De acuerdo con Hobsbawm

la juventud se cimentó en un sentimiento y construcción identitaria como sujetos individuales y colectivos, basta mencionar el caso de la literatura de *La Onda*, por ejemplo el texto de Parménides García Saldaña *Pasto Verde,* publicado en el año 1968, el cual hacía una apología al uso de mariguana entre otras drogas, en una compleja construcción narrativa escrita en inglés y castellano producto de la afición y formación en letras inglesas en la universidad de Nuevo Orleans.

> La novedad de la cultura juvenil deriva de la primera: era o se convirtió en dominante en las «economías desarrolladas de mercado», en parte porque ahora representaba una masa concentrada de poder adquisitivo, y en parte porque cada nueva generación de adultos se había socializado formando parte de una cultura juvenil con conciencia propia y estaba marcada por esta experiencia (Hobsbawm, 1995: 283).

Incluso el presidente Díaz Ordaz llegó a mencionar en declaraciones, que esta influencia norteamericana estaba afectando a la sociedad mexicana poniendo en duda el sistema de valores emanados de la revolución mexicana y del régimen político mexicano (Jiménez, 2011), esta supuesta influencia extranjera era utilizada como forma retórica para culpar de los problemas estructurales endémicos, como las revueltas estudiantiles mexicanas de 1968, pues tanto la amenaza comunista, como el campo de la cultura materialista, eran para el régimen un pretexto para culpar a los jóvenes que criticaban al gobierno y se alejaban del régimen social y político mexicano ligado al autoritarismo y al presidencialismo ligado al sistema revolucionario institucional, estas reacciones empatan con las propuestas de Jiménez donde señala tres posibles causas de los acontecimientos de 1968: una geopolítica, otra ideológica y la última la etaria.

Otro gran cambio que se dio fue la transformación y diversificación del intercambio económico por drogas ilícitas (Smith, 2021), se señala que los jóvenes americanos venían a lugares de México productores de mariguana y otras drogas después del auge de la generación beat, algunos comenzaron a traficar pequeñas cantidades de mariguana y en menor medida heroína de México hacia Estados Unidos a través de automóviles modificados, por lo que la hipótesis de que no solo había redes criminales, en el sentido estricto, que obedecieran a una mafia o a un grupo criminal peligroso, violento organizado es posible, ya que si también personas que buscaban obtener una ganancia económica de la compra venta

de drogas de manera independiente aparecieron como actores dentro de la dinámica comercial.

Sin embargo, después del quiebre de 1968 y a partir de algunos artículos periodísticos en contra de México por parte de periodistas de orientación conservadora y republicana, la campaña presidencial de Richard Nixon provocó cierta crispación entre ambos lados de la frontera, en un intenso intercambio diplomático en el que ambos países ponían distintos puntos. Mientras México argumentó sobre la soberanía nacional, los estadounidenses mencionaron que existía una falta de compromiso de algunas autoridades para el tráfico de drogas donde se asumió que México era el principal proveedor de drogas a Estados Unidos y llama la atención que la denominada *conexión francesa*, contrabando de hachís y heroína proveniente de África o Asía a Estados Unidos vía Europa, fue tolerada por el gobierno norteamericano hasta principios de los años setenta como un mal necesario de la guerra fría (Davenport-Hines, 2001).

Hay dos hitos que se construyen después de los años sesenta, el primero es la firma y ratificación de México de la Convención Única y segundo las tensiones y el endurecimiento y creciente militarización que se le dio al problema del tráfico ilícito, aunado a los problemas internos donde los militares y la Dirección de Seguridad tenían cada vez mayor actuación pública respecto al control de población y a las disidencias políticas después de la crisis de 1968, en 1969 el gobierno norteamericano a través de medidas unilaterales dejaron de ser amenazas con el cierre de fronteras a detener el tráfico de mercancías y personas con *la operación intercepción* con la cual intentaron frenar el comercio ilegal de marihuana y heroína vía automóvil desde México a los Estados Unidos, así como la incursión con militares a zonas de cultivo. Esta nueva faceta con los Republicanos al mando significó un viraje significativo en el campo policial, militar y de control de drogas a nivel global, pues en 1971 se construyó nuevamente otro acuerdo en las Naciones Unidas para ahora solventar institucionalmente y de manera internacional, la prohibición de las drogas de síntesis como el LSD y la MDMA.

Por su parte, en la primera mitad de la década de los setenta, se presentó un intercambio político derivado del combate a las guerrillas y a los grupos subversivos. En 1975 con la operación Cóndor Mexicana, se presentó un cambio en la retórica y la llamada guerra contra las drogas que el presidente Nixon habría comenzado, y México fue un espacio

para su desarrollo, ante las presiones de este control armado y de erradicación forzada se llevaron a cabo operaciones militares, En este mismo contexto histórico se libró la lucha en contra de las guerrillas urbanas.

En términos de legislación sobre drogas en México, el país ya tenía un largo tramo de avance, en primer lugar ya se penalizaba el consumo y la posesión de drogas narcóticas, y segundo ya se contaba con un ejercicio más o menos extendido de cooperación bilateral para la erradicación de cultivos, mientras que en el ámbito político era ambiguo pues aunque los gobiernos del PRI estaban alineados al sistema norteamericano y participaban de las operaciones de la CIA, también daban guiños a ciertos movimientos latinoamericanos, por ejemplo la estrecha relación con Cuba, aunque la situación fue compleja y se vivió una represión generalizada después de los acontecimientos de Tlatelolco y del jueves de Corpus en 1971.

Como ejemplo de estas contradicciones y diversidad que se gestó en la cultura mexicana, las drogas posteriormente al movimiento estudiantil de 1968 tenían un carácter paradójico. Es decir, el ala radical de corte maoísta o marxista de la época condenó el uso de cualquier tipo de droga viéndola como un ente que enajenaba y alienaba, así como la música norteamericana como el rock o la música pop, por lo que la música de trova o nuevo canto o protesta eran una respuesta a la mercantilización y americanización de la cultura juvenil. Por su parte, el movimiento estudiantil más apegado a las tendencias progresistas consideró consumir mariguana como un acto de rebeldía o expansión de la conciencia. En este sentido, el arraigo histórico en el consumo por parte de clases populares y élites artísticas, así como el crecimiento poblacional, significó el aumento en las matrículas universitarias y una vida juvenil robustecida en las ciudades.

Como ya es conocido, algunas organizaciones políticas se vieron marginadas u orilladas a la clandestinidad entre 1968 y 1980. La piedra de toque para la represión generalizada y sistemática hacia la juventud fue más intensa y reiterada a partir del llamado Halconazo, después del festival de Avándaro, prácticamente ser joven y acudir a algún evento contracultural significaba un riesgo de ser detenido y encarcelado con las llamadas *razzias*. Además, con la radicalización de algunos grupos que optaron por la vía armada, se acrecentó la violencia política y convirtió en sospechoso a casi cualquier persona joven o disidente, en concordancia con la fuerte campaña anti comunista de Estados Unidos durante la guerra fría,

cuestión que sigue en investigación, tanto jurídica como teóricamente, con la puesta en marcha del informe especial sobre las quejas en materia de desapariciones forzadas ocurridas en la década de los setenta y principios de los ochenta a cargo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como un insumo para la Comisión Nacional de Búsqueda y el Comité para Verdad durante la transición democrática, en el documento de mil doscientas hojas se señala que el estado mexicano cometió crímenes y dentro de ellos el 16 de marzo de 1973 fue detenida una persona en el poblado de San Luis de La Loma, Guerrero, por tráfico de drogas y a partir de esa detención desapareció, también se menciona un caso en 1974 en la Sierra de Atoyac, Guerrero, donde una persona que se presume tenía nexos con la compra de armas y drogas no se volvió a conocer su paradero y a partir de su detención por parte de militares (CNDH, 2001).

Esta época de estrategias de violencia política y eliminación de enemigos del estado, denominada como guerra sucia, hay que destacar que a partir de la operación intercepción en 1969 y las constantes campañas previas entre los años 40 y 60 en Sinaloa, Durango y Chihuahua, los traficantes sinaloenses desplazaron algunos cultivos de amapola y marihuana hacia zonas de Guerrero, Oaxaca y Michoacán, lo cual puede ayudar a explicar las casos de desaparición en estas entidades, y poner sobre la mesa el hecho de que estas personas no necesariamente eran guerrilleros, sino parte de una estructura donde se desempeñaban, ya sea, como agricultores o intermediarios.

De acuerdo con la literatura correspondiente al análisis del Régimen Internacional de Prohibición de drogas y como se ha venido sosteniendo, la prohibición de drogas y la propaganda negativa sirvió para controlar y perseguir minorías étnicas y grupos disidentes. Por ejemplo, en el sexenio de Luis Echeverría, durante un mitin en el zócalo, la Confederación Obrera Revolucionaria (COR), la cual fungía como grupo de choque, utilizó una manta que versaba: "Echeverría, presidente de la concordia; Los fósiles de la Universidad, lacra nacional; Los estudiantes drogadictos (cáncer para México)", (Mendoza, 2009).

Esto refuerza la tendencia de descalificación de la juventud, en especial los universitarios, las personas que usan drogas y politizadas que no participaban de los grupos clientelares del régimen político. Además, en ese contexto la figura presidencial, cuyas decisiones no se discutían o cuestionaban, aún gozaba de un peso significativo, y los eventos

de 1971 aún estaban presentes junto con el discurso de la defensa de los ideales de la revolución los cuales no coincidían necesariamente con la nueva cultura urbana, juvenil y mercantilista de la década de los setenta.

Por otro lado, el comercio y consumo de drogas en la ciudad de México se había acrecentado pues la ciudad había crecido, y el control que se estaba dando a nivel social se concentraba en la Dirección Federal de Seguridad y la Policía Judicial Federal. Al respecto Craig (1978) señala que para las autoridades mexicanas el principal problema de abuso de drogas en México a mediados de los años setenta es el uso de mariguana en ambientes universitarios, de clase media y populares. No obstante, atribuyen esta situación a la influencia norteamericana en los jóvenes. Pero, también indica que de acuerdo con las estadísticas existía un problema mayor que afectaba a niños entre 7 y 8 años provenientes de las clases menos favorecidas en el contexto urbano, y este era el consumo de inhalantes. En este sentido, los hallazgos de Craig resultan importantes para desmitificar el consumo de mariguana como único y visibilizar la presencia y uso de otro tipo de sustancias entre la población citadina.

Mientras que en Estados Unidos la cocaína comenzó a invadir las calles y el mercado en ciudades como Nueva York, Chicago, Los Ángeles y Miami, espacios controlados por mafias puertorriqueñas y cubanas. Sin embargo, hay que destacar la importancia que gradualmente comenzaron a adquirir los traficantes colombianos que durante la década de los ochenta marcaron el ritmo de una nueva industria global y trasnacional, en la cual los mexicanos también jugaron un papel secundario pero importante, no solo por compartir la frontera con Estados Unidos o como un lugar de tránsito, sino como parte del circuito de intercambio ilegal al adherirse o negociar con los nuevos actores en la escena internacional del tráfico de drogas. Sobre ello, es necesario destacar la visión institucional con el ejemplo del fiscal Javier Coello en la segunda mitad de los setenta.

> El tráfico de drogas en México era incipiente, puesto que nuestro país era solo un trampolín para que las drogas llegaran a Estados Unidos. El mayor cargamento de cocaína que confiscó el gobierno mexicano por esos años fue de 80 o 90 kilos, que no era poca cosa, pero nada comparado con lo que llega a confiscarse en la actualidad (Coello, 2021: 25).

Cabe mencionar, que el agotamiento del modelo proteccionista dio un vuelco con la administración de Luis Echeverría, sin embargo, fue hasta el sexenio de López Portillo 1976-

1982 que el modelo de sustitución de importaciones representó un problema en términos comerciales debido al ingreso de mercancía importada de manera ilegal, lo cual fomentó el tráfico ilícito sobre todo de electrodomésticos, cuyo origen es el antecedente del tráfico a través de la frontera tamaulipeca y el desarrollo de nuevos grupos de traficantes como el después conocido Cartel del Golfo que comenzó sus actividades con el llamado negocio de la *fayuca* y autos *chocolate* lo cual refuerza la hipótesis de la diversidad de las actividades ilícitas que orbitan alrededor del negocio de las drogas.

Cabe mencionar que algunos sectores de la policía mexicana formaron parte de las redes de contrabando, al respecto Aguayo (2001) menciona que en la DFS y en la PJF se tenía un control y monopolio del tráfico de cocaína y se daba protección a grupos criminales hasta que fueron disueltas en noviembre de 1985, derivado de la investigación del caso del asesinato de Enrique Camarena, un agente de la DEA que evidencio los vínculos entre traficantes mexicanos, contra nicaragüense y la CIA, lo cual generó un conflicto diplomático debido a la presión por parte de Estados Unidos hacia México, lo cual orillo al presidente Miguel de la Madrid a tomar dicha medida.

Al respecto se tiene como especial énfasis para el análisis, que si bien los procesos de intercambio diplomático y de participación de agencias norteamericanas para el control de drogas en especial la erradicación y la persecución de traficantes fueron un espacio de negociación o de presión será a partir de la guerra fía y el paraguas que las operaciones extraterritoriales en América Latina de agencias estadounidenses donde se fundará el fortalecimiento de la americanización y de ciertas políticas en especial las de seguridad y las de combate al terrorismo, a los disidentes políticos y contra las drogas formaran un dispositivo de control y de construcción de andamiaje para el intercambio político y económico. No solo mediante los canales convencionales a partir de intervención militar o política que, si la habrá, sino también en una razón instrumentalizada, en una forma de hacer y entender la política antidroga, cuestión que se delimitará en el apartado a continuación a través de diversos instrumentos como el apoyo financiero, de capacitación o la influencia en las políticas domésticas.

3.2 Americanización de la lucha contra las drogas en México 1985-1994

La *americanización* es un término utilizado en la historia, la economía, la ciencia política, la sociología y en la comunicación política para señalar la influencia de los valores estadounidenses en lo social, económico, cultural y en las instituciones políticas (Aronoff, 2000: 93). Este tipo de influencia o cambios suelen ser inacabados, heterogéneos, flexibles con resistencias y continuidades en las culturas y sistemas endémicos que adoptan los valores antes mencionados. A pesar de esto, dichas transformaciones que suelen asociarse con la *americanización* se presentaron de manera acelerada en el contexto del auge y declive de la hegemonía norteamericana durante y post guerra fría. Sin embargo, este término ha sido utilizado al menos desde el siglo XIX para señalar la supuesta influencia de una o más formas de *americanismo* en alguna sociedad, entidad, objeto material o práctica cultural (Van Elteren, 2006a: 3).

Para esta tesis, la *americanización* será una construcción de una lógica histórica en la cual se despliegan los valores políticos protagonizados por: la libertad individual, la democracia liberal occidental, formas de hacer las guerras de intervención y ocupación, métodos específicos de control de la inteligencia política y la insurgencia, así como de gestión de controles geoestratégicos a partir de operaciones encubiertas y/o políticas militares directas, en lo económico se podrían mencionar a: la industrialización, el capitalismo, la tecnificación y la mediatización como las más relevantes y en lo social y cultural la secularización, individualización la predominancia de las libertades individuales, el auge de las industrias culturales mediante la llamada homogeneización a través de la televisión, el cine y modos de vida (Mattelart, 1998).

En este sentido y particularizando en la americanización de las políticas antidrogas o lucha contra las drogas en México, también se entenderá en algunos aspectos como la *internacionalización* (Edelman, 1993; Toro, 1995) de ciertas medidas para el control de las drogas, la cual se presenta en una interacción multinivel en tres segmentos. El primero es el internacional: a partir agencias supranacionales en los organismos que comprenden el consenso internacional de prohibición o régimen internacional de prohibición, con el cual el sistema internacional de fiscalización o control de drogas de la ONU forman el eje institucional predominante como la OMS, la CND y la JIFE y algunas otras que se irán

incorporando a nivel regional como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), esta última cuenta con una agencia especial en el control y para evitar el abuso de drogas; la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de drogas (CICAD), estas se verán orientadas por el poder e influencia norteamericana y a pesar de que dichas agencias tienen capacidades limitadas, son únicamente entidades consultivas o que emiten recomendaciones y no tienen capacidades coercitivas, pero que por su carácter institucional y vinculatorio con los sistemas políticos sí pueden impulsar a que los países tomen medidas de control de drogas estrictas, en donde Estados Unidos ha ejercido poder e influencia al menos desde mediados de los años 40 a partir de la división del mundo bipolar.

El segundo segmento es el bilateral, compuesto por las organizaciones norteamericanas de seguridad nacional y control de drogas como: la DEA, el FBI, la ATF, el DOJ o la CIA, que juegan un papel predominante al encuadrar y delimitar quienes son los enemigos internos y externos de Estados Unidos. Así, entre la década de 1970 a 1980 se incluirán el tráfico de drogas y el crimen organizado trasnacional dentro de una agenda política prioritaria hacia la americanización de su control a partir de las políticas antidroga con operaciones directas e indirectas. En particular a partir de 1986, con la declaración del tráfico de drogas como una amenaza letal, comenzó a designarse el fenómeno del crimen organizado trasnacional delimitando al trafico de drogas como un asunto de seguridad nacional (DOJ, 1987), cuestión que planteó un esquema para definir enemigos internos y externos concurrentes con el tráfico local y trasnacional de drogas y con el crimen organizado las guerrillas, la contra insurgencia y el terrorismo.

En este segundo ámbito, el papel del poder ejecutivo norteamericano jugó un papel decisivo para instaurar un nuevo régimen de control de drogas más agresivo en tensión con el espíritu del régimen internacional de fiscalización, que de origen como su nombre lo señala buscaba establecer: un sistema de control y abastecimiento de medicamentos esenciales y evitar desviación de estos a los circuitos ilegales y desincentivar el uso no médico de los mismos. Y que si bien, estos primeros acuerdos y convenios también tenían un origen imperialista derivado de los intereses británicos, lo cierto es que posteriormente con la expansión del poder norteamericano, el Régimen Internacional de Prohibición y la agenda personalista de Richard Nixon, Ronald Reagan, George Bush y Bill Clinton constituyeron un

quiebre en el modo de control las drogas a nivel hemisférico e internacional a partir de la llamada *personalización* (Fabbrini, 1994) de la política la cual será encabezada por un candidato, o un personaje carismático, más que por agendas políticas comunes o por ámbitos partidistas. Por ejemplo, las estrategias de corte bélico denominadas *guerra contra las drogas* en los años 1980 y 1990 lograron un consenso y apoyo por parte de agencias y funcionarios de todos los niveles y fueron encabezadas por gobiernos Republicanos o Demócratas, pero también fueron tomadas como agendas políticas compartidas con un enfoque conservador hacia las relaciones bilaterales, en el entendido de que el abuso en el consumo de drogas y el creciente problema del tráfico internacional socavaba la seguridad nacional, por lo que la participación de las fuerzas armadas en este tipo de estrategias antidroga en Latinoamérica formaron parte de estas intervenciones las cuales comenzaron en Bolivia en 1981 y 1982 (Bagley, 1993).

En este sentido, dentro de la americanización se observa una disminución de la influencia de los partidos políticos en este tipo de asuntos, a diferencia por ejemplo de las puestas en marcha de planes con ideales de izquierda o derecha de las décadas de los 60 y 70. La agenda sobre el control de drogas inaugurada por Nixon como una *Total War* fue un eje permanente de las administraciones políticas estadounidenses donde se unió el abordaje médico disciplinar de corte psiquiátrico científico a través de un consenso médico e institucional encabezado por la National Institute on Drug Abuse (NIDA), basado en el paradigma del *cerebro adicto*, aunado a esquemas de flexibilización como programas de desintoxicación o de sustitución con clínicas de metadona (Musto, 1999).

Este abordaje, fue un binomio político, por un lado se atacó con agresividad la oferta en países productores y en segundo plano, se estableció una narrativa política de acción sobre la demanda en este rubro de la salud desde una perspectiva médica y social, lo cual, desde mi perspectiva, también implica una *americanización* en especial de la ciencia sobre la adicción. Ya que se profesionalizó y aumentó una serie de instituciones y especialistas sobre la adicción y la criminología para explicar este tipo de fenómenos en particular los derivados de las crisis por el abuso en el consumo de heroína y cocaína fumable, este modelo se replicó, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Psiquiatría Mexicano, o la Facultad de Psicología de la UNAM.

De este modelo, se llegó a reproducir información falsa, replicada por muchos años por ejemplo, la teoría del enganchamiento en el primer consumo, donde se mencionaba que por una vez que se utilizarán drogas, el cerebro automáticamente se enganchaba y volvía adicto, estas concepciones llegaron incluso a la prensa y provocaron histeria colectiva, otro ejemplo de ello lo encontramos en las historias de los "crack babies" de los años 80, en las cuales se argumentó que los hijos de madres adictas al crack nacían adictos (Hart *et al*., 2014: 2).

Por último, el tercer ámbito de la americanización del control antidroga, se presenta en los sistemas nacionales y locales. En este caso, en el marco de la coyuntura del cambio económico, el sistema político mexicano entre 1980 y 1990, experimentó diversos cambios políticos y sociales a partir del desgaste del partido único, de la corrupción en los sistemas de inteligencia y seguridad. En este contexto, fue particularmente relevante el robustecimiento y expansión del uso de estrategias armadas para el control y erradicación de cultivos ilícitos, el uso de efectivos militares o policiales entrenados en escuelas o con métodos norteamericanos, asemejando las operativos de intervención y ocupación militar, la utilización de tácticas provenientes de las guerras de baja intensidad[18], la guerra psicológica o escuadrones de la muerte y en la mayoría de ocasiones con estrategias directas por ejemplo la incursión en campo con el uso de helicópteros o tecnología donada por el gobierno norteamericano (Mabry, 1988).

A partir de 1985 este modelo tuvo mayor relevancia a nivel local o al menos alcanzó mayor notoriedad, sin embargo, derivado del escándalo diplomático de Enrique Camarena y los conflicto con la DEA en México, la figura predominante que se construyó en la prensa y

[18] Las guerras de baja intensidad son un producto de la crisis originada durante el conflicto de Vietnam, en el cual el gobierno y el ejército norteamericano fueron expulsados por guerrillas del país asiático. Es por ello que durante los años ochenta y como parte de la estrategia del complejo militar industrial y de las oficinas de inteligencia norteamericana diseñaron sistemas de contención de corte contrainsurgente a partir del control de las guerrillas latinoamericanas con distintas técnicas entre ellas el uso de guerra psicológica y financiamiento oculto de grupos paramilitares sin tener la necesidad de intervenir militarmente de forma directa, en un sistema de desgaste, prolongadas y con cobertura global, convirtiéndose en una estrategia idónea para fortalecer y encaminar el nuevo orden internacional y la hegemonía norteamericana.

en la narrativa política fue la del *narcotraficante* y la del *cártel* como nuevas amenazas y el crecimiento tanto en su poder político como económico en unos pocos años, con una fuerte orientación a la presión y un dominio mediático, basado en la influencia de las noticias sobre incautaciones, debilidad institucional, corrupción y crisis política (Riguzzi y De los Ríos, 2012), cuestión que empató con una fuerte recesión económica, crisis y devaluaciones en México durante los años 80, así como un proceso de integración económica y paulatina incorporación al sistema de económica abierta, lo cual implicó grandes transformaciones económicas y sociales entre ellas la crisis del partido hegemónico y el proceso y gestión del TLC en la década de 1990.

En este sentido, la articulación de la americanización en el contexto de la internacionalización (Edelman, 1993) y paulatina globalización de las políticas de drogas en México se concreta en 1986 (Chabat, 1994) en especial a partir del uso de militares especializados en entrenamiento contrainsurgente y en contra de los traficantes de drogas. Esto es visible con el plan militar DNII, la estrategia anti guerrillera, anti crimen organizado y narcotráfico (Lagos, 2014). Como se ha venido argumentando, a partir del consenso generado por el régimen internacional de prohibición de drogas configurado para la época contemporánea en 1961 y 1971, las presiones que México recibió por parte de Estados Unidos a manera de chantaje diplomático (Enciso, 2010) o *diplomatic Bullying* (Smith, 2021) fueron visibles a partir de las medidas unilaterales que estos tomaron con base en la agenda conservadora de Nixon y durante el largo periodo presidencial de Reagan.

En este marco de delimitación del fenómeno de compra venta de drogas a nivel local e internacional, en 1982 el entonces presidente Reagan declaró una guerra contra las drogas y estableció el problema con base en un aumento alarmante en el consumo (Scott y Marshall, 1998) de drogas, por lo que se delegó este aspecto a la seguridad nacional, esta medida logró que el Congreso de Estados Unidos aprobara una nueva legislación en la que se permitió que el ejército norteamericano se involucrara en asuntos administrativos y operativos como el control fronterizo, la erradicación de cultivos y sustancias ilícitas y programas para detener el tráfico en países de tránsito dentro de estas propuestas se estipularon tres grandes indicaciones para que pudiera aplicar la intromisión de fuerzas armadas en medidas extraterritoriales respecto al control de drogas : 1)Las fuerzas de los Estados Unidos tendrán que ser invitadas por el gobierno anfitrión; 2) que las fuerzas serían dirigidas por agencias

civiles de los Estados Unidos; y 3) que su papel quedaría limitado a funciones de apoyo (Bagley, 1993: 185).

En este marco de americanización de la economía, de la política de bancarización e internacionalización de la deuda, el gobierno de Reagan desplegó también una agresiva campaña anti drogas en medios denominada *Just say no*, *solo di no,* en la cual mientras que por otro lado, el gobierno norteamericano participaba de la venta de cocaína a traficantes colombianos, mafias sudamericanas y mexicanas, por el otro realizaba tratos con paramilitares.

Con el fin de dar una justificación temporal y delimitar la americanización del combate a las drogas entre 1985 y 1994, tomemos como un punto de partida que, en 1982 cuando comienza la administración de Miguel de la Madrid el entorno político se encontraba en una fase de crisis económica, social y de seguridad, esta última caracterizada por el tránsito que experimentó la PJF respecto a su relevo en el combate a las drogas por la DFS, cuestión que representó un desafío administrativo ya que muchas de las policías operaban de manera corrupta desorganizada y con relaciones clientelares.

En este sentido, al recobrar la DFS el dominio sobre el combate a las drogas, durante el comienzo del sexenio de Miguel de la Madrid, logró establecer una serie organizada de redes de complicidad y mayor penetración a través de las delegaciones estatales para el control y usufructo de actividades criminales, otro esquema que proliferó y permitió una expansión del tráfico al menudeo e internacional de drogas fueron las rentas por cualquier negocio ilícito como la fayuca, los autos robados y redes clientelares de personas que no pertenecían o laboraban directamente con la policía pero que utilizaron ciertas prebendas para beneficiarse en el uso de insignias o relaciones con mandos policiacos (Fondevilla, 2009). Al respecto, se señala que se expedían placas de la policía sin discreción, en especial de la policía judicial federal, de la ciudad de México, en aquel entonces del Distrito Federal, cuando el titular era Arturo "El Negro" Durazo. Algunas de estas placas o *charolas* eran utilizadas por personas llamadas *madrinas* las cuales no eran formalmente policías pero trabajaban como informantes, recogiendo extorsiones o realizando actividades criminales, incluso participando de interrogatorios y siendo protegidos por algunos comandantes policiacos. Estas madrinas se han identificado históricamente como grupos parapoliciales

originados durante el periodo autoritario y ligados a la aparición de la DFS desde el gobierno de Miguel Alemán. En este sentido y tomando en cuenta que al disolverse la lucha y erradicación de los enemigos del régimen o la lucha contra los grupos guerrilleros algunos policías y agentes de inteligencia pasarían a perseguir delitos en las calles (Fondevilla, 2009).

Otros que se beneficiaron de las credenciales apócrifas fueron periodistas o reporteros, los cuales participaban como informantes o explotaban las credenciales policiacas para tener acceso a escenas del crimen y evitar ser molestados en algún reten o para tener acceso privilegiado a ciertos lugares, esto tomó relevancia en el caso del asesinato del periodista Manuel Buendía, en mayo de 1984, quien publicó numerosas notas sobre, las relaciones de la CIA en México, traficantes de drogas y corrupción; y que además, tenía una relación cercana con José A. Zorrilla Pérez mando de la federal de seguridad (Freije, 2015).

Esto es importante, porque el caso Buendía es identificado como uno de los primeros asesinatos de periodistas a causa del narcotráfico, situación que alcanzó niveles escandalosos cuando un año después en 1985 fue asesinado Enrique Camarena un agente de la DEA, lo cual no pasó desapercibido para la prensa, incluso se ha manejado la hipótesis de que detrás de ambos homicidios se encuentran actores en común cuyas actividades ilícitas se vieron evidenciadas por ambas víctimas (Esquivel, 2014). Además, cabe señalar que para los durante la década de 1980, el término narcotráfico comenzaba a popularizarse y se entendía tanto como el fenómeno de compra venta para tráfico internacional como para el consumo, lo cual complica el entendimiento del fenómeno y lo enmarca como uno solo (Chabat, 1988).

Como ya se mencionó del conflicto derivado por el caso Camarena, el proceso de la *certificación* comenzó a ser un tema de constante tensión diplomática, así como el aumento de la cobertura negativa sobre asuntos de drogas, a tal nivel que en el año de 1988 este fue uno de los principales problemas identificados en las encuestas de opinión del país anglosajón. Es por ello que, hay dos efectos de la americanización de las políticas antidroga en Estados Unidos y México, el primero desde el mismo Estados Unidos a nivel interno y externo, estas variables serán constantes ya que para el caso norteamericano, la opinión pública la presión política y la agenda anti droga y conservadora, impulsarán en 1986 La Ley contra el Abuso de Drogas, La reforma y control de inmigración, complicando la relación e interacción compleja entre política doméstica, política bilateral y política internacional.

Por su parte, el efecto en México se presenta a nivel local y también bilateral con Estados Unidos, como ya se ha mencionado, las tensiones diplomáticas ocasionadas a partir de febrero de 1985 cuando se hizo público la desaparición de un agente de la DEA en territorio Mexicano ocasionó que el entonces embajador estadounidense John Gavin se pronunciara al respecto por lo sucedido, señalando vínculos entre traficantes mexicanos y autoridades de seguridad, por lo que fue retirado de su cargo por sus superiores causando malestar en el gobierno mexicano y agencias de seguridad bajo el argumento que participó en política doméstica mexicana aumentando la tensión diplomática (Riguzzi y de los Ríos, 2012).

Como también ya se argumentó, durante los años 80 se logró establecer en la opinión pública, al interior de los partidos políticos y en los distintos niveles del gobierno norteamericano la narrativa de una afrenta a la seguridad nacional, cuestión que no era del todo mentira ya que los daños ocasionados por el tráfico y consumo de drogas afectan el tejido social de las comunidades afroamericanas. Sirvan de ejemplo las palabras atribuidas al traficante colombiano Carlos Ledher: la cocaína es la bomba atómica de Suramérica que destruirá por dentro a la sociedad norteamericana (Toral, 2020).

Es por lo que, para fortalecer un control punitivo de las drogas, se endurecieron las medidas unilaterales en contra de países productores, se ampliaron las operaciones encubiertas y de intercepción, y comenzó un periodo de certificación. Aunado a estas tensiones, en 1986 en el marco del conflicto en Nicaragua, El Salvador, Bolivia y Panamá el gobierno norteamericano señaló que existía una complicidad entre los gobiernos comunistas centroamericanos en el negocio ilícito del tráfico de drogas y que para sostener la democracia era necesario combatir a la narco guerrilla y a las narco insurgencias (Scott y Marshall, 1998) cuestión que apoyó la doctrina de intervención norteamericana en asuntos de tráfico ilícito de drogas y del combate de las guerrillas latinoamericanas, aunado a que el conflicto derivado de la estrategia de descabezamiento de líderes criminales en Colombia había acarreado una espiral de violencia y aumentado la participación de los traficantes mexicanos ante el cierre de la ruta del caribe y centro américa para con ello seguir llevando cocaína a Estados Unidos (Bagley, 1988).

Sin embargo, no todo era combate al tráfico, ya que a partir del escándalo Irán-Contras, se develó una estrategia emprendida por la Casa Blanca encabezada por el vicepresidente George Bush y agencias de la CIA, para establecer tratos con traficantes y beneficiar y financiar a la contra Nicaragüense por lo que desde mediados de 1985, en medio del escándalo Camarena, periodistas comenzaron a publicar la injerencia y la participación de empresas de aeronáutica relacionadas con la CIA, las cuales traficaban cocaína y eran protegidas por los gobiernos de El Salvador y Nicaragua, a lo que agencias como la DEA y voceros oficiales llegaron a mencionarlos como episodios aislados (Scott y Marshall, 1998).

Es por ello que a partir de 1986 y en el marco de audiencias públicas del congreso norteamericano sobre México, la agenda negativa y la cobertura sobre el país en medios de comunicación solía concentrarse en aspectos negativos y parecía que la agenda se enfocó en golpear políticamente a México, dando como resultado unas nuevas directrices a partir del Informe Anual del Departamento de Estado sobre el Control Internacional de Narcóticos, nombre oficial de la certificación, la cual consistió en verificar al país a partir de la ratificación de una lista, señalando que la nación había cooperado en la lucha contra el narcotráfico, es por ello que el tráfico internacional de drogas y la corrupción fueron ejes recurrentes para el condicionamiento en la entrega del paquete de apoyo económico. Para el caso de México, después de la crisis económica de 1982 esta coyuntura particular será un motivo de presión y parte de la negociación y chantaje diplomático ya que debido a los créditos obtenidos por México ante el FMI, en el caso de tener una certificación negativa, esto podría afectar y acarrear una sanción con la posible negación del apoyo económico de los organismos multilaterales otorgantes del crédito (Riguzzi y De los Ríos, 2012).

Lo cual ocasionó que en el año de 1989 a pocos meses de asumir el cargo George Bush se llevó a cabo una serie de audiencias encabezadas por el Senador John Kerry donde se llamó a testificar a gran cantidad de participantes del tráfico ilícito de drogas entre los cuales destacó el general Oliver North quien era conocido por participar en operaciones encubiertas, llama la atención que de estas audiencias se establecieron tres principales hipótesis que ya habían sido expuestas por parte de la prensa y algunos agentes de la DEA. 1) la participación del gobierno norteamericano en la compra-venta de armas y droga con mafias mexicanas, traficantes colombianos y sudamericanos, 2) la participación en la distribución de grandes cantidades de cocaína, la cual fue tratada para llevarla al mercado en

forma de piedras fumables o crack dentro de comunidades afroamericanas y 3) por último la incursión, meses después, de tropas norteamericanas a Panamá en la operación *Causa Justa* para detener al presidente Manuel Noriega acusado de lavado de dinero y tráfico de drogas, por lo cual fue juzgado en Estados Unidos siendo la última invasión militar de los norteamericanos en América Latina durante la época de la guerra fría.

Con todo, este crisis de operaciones militares y exposición pública de la relación entre el gobierno norteamericano y los traficantes de drogas latinoamericanos fue heredada al gobierno de George Bush, en el marco de las tensiones por la caída del muro de Berlín y la hegemonía de Estados Unidos, por lo que los escándalos fueron sorteados de manera diplomática y en el caso panameño con una invasión militar. En lo que respecta al control de drogas y la americanización se establecieron propuestas que serían internacionalizadas, promovidas y adoptadas a nivel internacional a partir de ciertas presiones que se llevaron a cabo durante las reuniones de la CND en 1987 y 1988 con la promulgación y ratificación de la convención de 1988, a nivel local y a nivel internacional así como a nivel del tráfico al mayoreo y menudeo.

Una de las medidas impuestas en 1986 y que trajo consecuencias no deseadas fue el encarcelamiento y el endurecimiento de las penas a personas en posesión de pequeñas cantidades de cocaína en polvo o piedra, lo cual fue el primer paso en la configuración de lo que más tarde se llamó narcomenudeo. Además, comenzó a ser más notoria una crisis de salud derivada del consumo de crack, lo cual incluyó la violencia que el mercado ilícito provocó entre pandillas que utilizaron la violencia física, en específico la homicida, para llevar a cabo ajustes de cuentas. En segundo lugar, cabe señalar el crecimiento del uso de la figura del crimen organizado trasnacional y el vínculo guerrillas-terrorismo-tráfico de drogas, en la argumentación jurídica local e internacional por lo que el crimen organizado fue por definición un asunto que ponía en riesgo la seguridad nacional.

En este sentido, respecto a la construcción de una agenda compartida y en búsqueda de una relación hemisférica distinta en 1988 durante el comienzo de la administración de Carlos Salinas de Gortari se impulsó una fuerte campaña en prensa nacional e internacional para cuestionar y criticar la certificación, delimitándola como un proceso humillante y unilateral por parte del país vecino hacia México, la forma personal de gobernar de Salinas

impulsó también a nivel diplomático una serie de esfuerzos para que en los espacios de comunicación y de negociación diplomática México tuviera una representación para condenar los efectos adversos que el tráfico de drogas y en especial la falta de control de la demanda generada por parte de Estados Unidos en los países de tránsito se visibilizara (Margain, 1993). Al respecto en 1988 el entonces procurador Samuel del Villar (1988) llegó a señalar que en Estados Unidos se vivía una cultura de narcotización y tolerancia y llegó a sugerir la necesidad de regular la mariguana en Estados Unidos o en México, así como la necesidad de implementar servicios de tratamiento en adicciones que tuvieran efectividad, pues la demanda era el principal problema del país vecino.

Un aspecto que también americaniza las relaciones es el empate de los tiempos electorales, recordemos que la campaña de George Bush se realiza en 1988 y este toma posesión en enero de 1989 y la campaña electoral de Salinas se cimienta en 1988, por lo que todas las transformaciones heredadas del gobierno de Reagan, durante nueve años en los que se establecieron nuevas directrices económicas políticas y sociales, según la literatura correspondiente a la americanización de las campañas políticas (Hallin y Mancini, 2004; Van Elteren, 2006b) el uso de la personalización y los medios de comunicación empata con los objetivos tanto de Carlos Salinas como de George Bush y a pesar de los problemas derivados del escándalo Camarena se emprende un ambicioso proyecto de unificación e integración económica. Otro aspecto que robustece la presencia del plan y proyecto norteamericano es el fin de la Unión Soviética y la negociación de la Perestroika y la caída del muro de Berlín cuando se establece la hegemonía de Estados Unidos a través de una política de expansión tecnológica, y como proyecto económico al cual se adhiere México y lo convierte en parte esencial de su programa de gobierno construir una zona comercial y cultural a través de una integración regional (Riguzzi y De los Ríos, 2012).

Así, entre 1989 y 1992, las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos dieron un viraje positivo que se materializó, primero con el denominado Plan Brady, cuando el secretario del tesoro Nicholas Brady propuso renegociar la deuda externa de países endeudados como México, esto significó una reducción de la inflación en el país y un aumento en los flujos de capital, así como la recuperación notoria de la economía en 1990, sin embargo, también implicó que México se ajustará a nuevos proyectos internacionales

(Zebadúa, 1994). En segundo lugar, México comenzó a gestionar un posible tratado comercial con Estados Unidos y Canadá que no se materializó hasta 1994.

Para lograr esta integración y gestionar la crisis derivada de los escándalos ocurridos a mediados de los 80 y en vísperas de la negociación del TLC, se estableció un grupo de trabajo llamado: Comisión bilateral para el futuro de México y Estados Unidos donde se promovió un aumento en la actividad económica, nuevas formas y mecanismos de intercambio y movilidad de población, así como establecer prioridad económica y de inversión y desarrollo a las zonas geográficas fronterizas para establecer sectores dominantes de la industria como el sector automotriz, las refacciones electrónicas y la industria del vestido. Este proyecto económico se ve robustecido por la predominancia cultural estadounidense.

Por último la década de 1990 se consolidó como una época de integración económica y apertura pero también por una proliferación y aumento en la notoriedad de los grupos del crimen organizado, los cuales provocaron conflictos y comenzaron a actuar de forma cada vez más violenta, llegando incluso a manifestaciones de violencia espectacular, presente en algunos incidentes ocurridos de corte diplomático en el entorno de las pesquisas por el agente de la DEA muerto en Guadalajara, por ejemplo el secuestro del Dr. Álvarez Machain en 1990, derivado del cual se promovió una nueva relación entre México y Estados Unidos en especial con la DEA. El secuestro del doctor provocó que el gobierno de Carlos Salinas expulsara a los agentes de la DEA destacamentados en México, como represalia por tomar medidas unilaterales, incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución al respecto.

Por último, cabe señalar que a pesar de la fuerte orientación norteamericana de las políticas anti-droga, la autonomía relativa y la plautina diversificación política y reacomodo de fuerzas políticas que México experimentó dieron como resultado otro fenómeno: la atomización del poder político y una reconfiguración, así como una concentración de la seguridad, al menos entre 1993 y 1994, para paliar los daños ocasionados por las guerrillas en especial el levantamiento Zapatista, donde el ejército mexicano aplicó los métodos contrainsurgentes utilizados en otros conflictos armados en Centroamérica, a la par de que esas mismas técnicas comenzaron a ser recurrentes también para el combate al narcotráfico.

A esto habrá que sumar una nueva etapa de crisis económica, los compromisos adquiridos con el TLC, la crisis política y de seguridad derivada de los magnicidios hacia el final del sexenio y el gradual protagonismo de personajes relacionados con el tráfico de drogas.

3.3 Apertura económica y el enemigo interno en México 1997-2006

El primero de diciembre de 1995, durante el primer informe de gobierno del presidente Ernesto Zedillo, se enunciaron las principales medidas tomadas por la administración presidencial en el campo político y económico durante el primer año de gobierno, en un contexto que tenía como fondo el recién inaugurado Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la grave crisis económica que se vivió en México entre 1994 y 1995. En este sentido, las medidas incluyeron una línea de crédito con Estados Unidos de 20 mil millones de dólares y otros 50 mil millones con organismos multilaterales. También se informó que cerca del 70% del intercambio comercial de México se había destinado al país vecino.

Respecto al problema del tráfico ilícito de drogas, este ya se encontraba presente dentro de las prioridades gubernamentales, el ejecutivo señaló que, la participación del ejército en estas tareas no había empezado durante su administración y que el conflicto representó una amenaza para la seguridad nacional, además de que el narcotráfico era un *enemigo de la sociedad* que se estaba fortaleciendo como un enemigo interno, parecido a la guerrilla o al terrorismo, lo cual es importante porque se delimitó la perspectiva sobre e fenómeno por parte de la esfera presidencial, como se puede observar en un extracto de dicho informe.

> Hoy, un terrible enemigo de toda la sociedad es el narcotráfico. El narcotráfico se ha convertido en la más grave amenaza a la seguridad nacional, a la salud de la sociedad y a la tranquilidad pública. Es también una amenaza a la convivencia, los valores y tradiciones de los mexicanos. Los mexicanos confiamos que cada nación cumpla su responsabilidad y nos sumaremos al esfuerzo global a través de una más efectiva cooperación internacional, pero, en cualquier caso, seguiremos combatiendo al narcotráfico con todos los instrumentos a nuestro alcance (DOF, 1995).

En este discurso, destaca el hecho de que el narcotráfico está posicionado como el problema de seguridad más importante en el país, una amenaza que corrompe los valores y las tradiciones. Dadas estas condiciones debe ser combatido con todos los medios con los que cuenta el estado, incluso echando mano de la cooperación internacional y al mismo tiempo ajustándose a las demandas globales, lo cual significó que estas dinámicas estarían presentes en los siguientes años.

Cabe mencionar que, el año 1998 fue un momento particular en la diplomacia internacional sobre drogas, ya que se llevó a cabo la Asamblea Especial en las Naciones Unidas (UNGASS por sus siglas en inglés). En el caso mexicano, esta fue gestionada casi desde una década anterior, formalizada durante el gobierno de Carlos Salinas y encabezada por la administración Zedillista y la entonces ministra de relaciones exteriores Rosario Green. La UNGASS 98 fue un foro en donde además de condenar la certificación, e indicar los costos de la prohibición en los países productores, quedó de manifiesto un posible nuevo enfoque donde se intentó manejar a nivel multilateral la *responsabilidad compartida* y no solo la dicotomía entre países productores y consumidores (Jelsma, 2003), así como objetivos polémicos como "eliminar o reducir considerablemente el cultivo ilícito del arbusto de coca, la planta de cannabis y la adormidera para el año 2008" (ONU, 1998: 5).

Este evento fortaleció la agenda de medio sexenio en un esquema multinivel, pues la interacción que México tuvo con esta gestión de manera internacional, frente a Estados Unidos y al interior de la política nacional, sirvió para posicionar y conservar la misma agenda de seguridad nacional y pública, siendo el colofón del año el informe presidencial de 1998 donde se mencionó e incluyó al tráfico de drogas como una amenaza para la salud y la seguridad internacional y al utilizar de manera reiterada el concepto de Crimen o Delincuencia Organizada[19] en el ámbito institucional y programático esto configuró de manera particular la percepción en la ciudadanía y en el tipo de influencia que el presidente ejerció sobre el fenómeno del narcotráfico y el consumo de drogas como un tema y una preocupación institucional, al respecto el presidente Zedillo en su Informe de Gobierno de 1998 señaló:

> En el marco de las Naciones Unidas, la iniciativa mexicana para celebrar una reunión mundial sobre drogas se concretó en junio pasado. Allí se logró que la comunidad internacional definiera una estrategia global, integral y respetuosa de las soberanías nacionales, para luchar contra esta amenaza a la seguridad y a la salud de todos los países (Cámara de Diputados, 2006: 173).

[19] El concepto de delincuencia organizada fue incluído por primera ocasión en una reforma constitucional en el año de 1993 durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, por su parte el presidente Zedillo promulgó la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada en 1996 lo cual trajo consigo la posibilidad para que con este cargo fueran retenidas las personas que pertenecieran a una organización criminal y acarrea agravantes dentro de este tipo penal (García, 2005).

En este sentido**,** para categorizar esta etapa que comprende entre 1997 y 2006 hay que enmarcarla dentro de tres grandes procesos a nivel nacional, a nivel hemisférico regional e internacional que tienen lugar en el contexto de la globalización. Así, el primero de estos procesos corresponde al campo económico de apertura, con el tránsito y aceleración de un sistema cerrado, hacía uno agresivo e integrado al sistema global, en específico, con el intercambio regional entre México y Estados Unidos, el cual modificó las dinámicas económicas[20]. Este tránsito está marcado por: la descentralización, la tercerización o subcontratación, desarrollo y activación de zonas de trabajo en particular las maquilas fronterizas para la industria del vestido, plantas ensambladoras y elaboración de refacciones electrónicas y auto partes. Este plan incluido en la negociación del TLC, fomenta el aumento de la mano de obra de bajo coste y contó con apoyo gubernamental para que las empresas trasnacionales tuvieran condonación de impuestos, esto aunado a que este modelo se integró a proyectos de largo plazo de globalización y de integración regional con el visto bueno por parte del Banco Mundial del TLC como un modelo de desarrollo (Serrano, 2006).

Entonces a la globalización y su pertinencia para el análisis desde una perspectiva multinivel, estructural y coyuntural cabe mencionar que: es un proceso histórico, desigual, irreversible, heterogéneo e inacabado, pues se puede rastrear en el tiempo, su manifestación gradual y grado de penetración depende de las características propias del contexto donde se presente, lo cual implica que aún no existe una sociedad enteramente global. Sin embargo, este proceso ha gestado una serie de redes regionales y trasnacionales, lo que significa que cualquier acción a nivel local puede afectar, conocerse o repercutir en otra latitud, lo que Ulrich Beck llama "el eje local-global" (Beck, 1997: 30) que implica una reorganización de las prácticas, resultado lo que él mismo denomina la *irrevisabilidad* de la globalidad, que no es otra cosa que una característica de la segunda modernidad y que se compone de diferentes aspectos como: ensanchamiento geográfico derivado de un aumento en las transacciones e intercambios comerciales, la revolución informática, en particular los avances en materia de comunicación, aumento del poder de las multinacionales y algunas organizaciones no

[20] Menciona Gerardo Esquivel Subgobernador del Banco de México 2018-2022, en un artículo conjunto del año 2002, que en el año de 1989 cuando comenzaron las negociaciones del TLC la economía mexicana ya se encontraba en una etapa de semi apertura, aunque el sector de telecomunicaciones y el automovilístico tenían aún limitantes para el libre comercio, así como algunos monopolios estatales los cuales fueron subastados en el proceso de restructuración Salinista 1991-1993 (Esquivel *et al*., 2002).

gubernamentales, aumento de la pobreza a nivel global y los conflictos transculturales, así como las catástrofes ambientales.

Es por ello que, este contexto de integración regional en México era complejo, asimétrico, imperfecto y desigual pues mientras que se participaba de un proceso de apertura económica caracterizado por las inversiones internacionales de corte financiero a partir de la presión de la Certificación, así como el aumento de la cooperación en el ámbito del combate al tráfico de drogas en especial con las extradiciones (Aznáres, 2000; 2003) y una relativa liberalización de una parte de las aduanas, por el otro, el control agresivo de la migración indocumentada y la nueva agenda de seguridad estadounidense, que había comenzado desde 1986 al enmarcar el tráfico de drogas como un asunto de seguridad nacional, la administración del fenómeno se verá robustecida con la negociación y endurecimiento de las normas, en especial con el control mediante el uso tecnológico por ejemplo de cámaras, sensores en las fronteras, automatización de aduanas así como con el despliegue en campo de cuerpos policiacos, de control en terreno, semi militarizados, y con la compra adquisición de armamento e intercambio para la capacitación de policías y militares.

Sirva de ejemplo, en 1994[21] cuando para evitar el flujo de migrantes y mercancías ilícitas se llevaron a cabo una serie de medidas como el operativo Guardián o Gatekeeper en California, el Operativo Río Grande en Texas y el Operativo Salvaguarda en Arizona (Ríos, 2019), lo cual situó a la presión norteamericana como una tensa agenda que exigió mayor control sobre la frontera, la migración y el tráfico de drogas durante los años noventa y que culminó en el año 2002 con la eliminación de la certificación y las nuevas directrices en vista de la lucha contra el terrorismo.

Esta puesta en juego regional, vitalizó un programa comercial y político-económico el cual transformó en poco tiempo las actividades económicas en México y también acrecentó algunas desigualdades a pesar de que se impulsaron programas de agricultura tecnificada y no tradicional o de explotación forestal (Esquivel *et al*., 2002), cuestión que empata con un

[21] Cabe mencionar que durante la época de Carlos Salinas ya se menciona el concepto narcotráfico dentro del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, el cual señala que es necesario reforzar la acción preventiva del delito y de aquellas conductas que se encuentran en estrecha vinculación con el mismo, como la farmacodependencia, sin perjuicio de incrementar las acciones de investigación y combate al narcotráfico; (DOF, 1992).

aumento en el desempleo y en la criminalidad en particular el robo, el asalto (Phillips y Land, 2012) y el secuestro de alto impacto, lo cual en este contexto delicado política, social y económicamente, este último se posicionó como una de las principales preocupaciones para los mexicanos, en particular la denominada crisis económica y la inversión extranjera (Latino barómetro, 1996).

Por su parte, durante los primeros años del milenio (La Jornada, 2008), aún y a pesar de que durante el periodo de transición hubo una solidez macroeconómica que se vio reflejada en cierta estabilidad, a nivel local se continuó con estancamiento y empobrecimiento. Aunado a esto, la desaceleración en la producción manufacturera produjo desempleo y también trajo consigo un amplio margen para que la criminalidad fuera notoria en las zonas fronterizas, por ejemplo en el año 2001 un operativo especial fue desplegado en la ciudad de Tijuana encabezado por la Policía Federal Preventiva con el fin de *limpiar la ciudad* (Cortés, 2001). Por otro lado, la rama de los servicios se consolidó como un sector económico estable, aunque la tendencia durante los tres primeros años de gobierno federal panista fue una disminución del empleo como tendencia dominante.

Mientras que, durante los últimos tres años del gobierno de Vicente Fox se llegó a un leve crecimiento de empleos (Pineda, 2014; González, 2016), cuestión que empata con la hipótesis propuesta por el presidente Calderón en la cual señaló que la oferta del mercado local de drogas ilícitas había aumentado y por ende el narcomenudeo, porque el consumo de sustancias psicoactivas ilegales había crecido en parte por la estabilidad económica previa durante los últimos años del gobierno de su predecesor y debido a lo cual más personas podían gastar en drogas de manera no médica, experimental o recreativa.

En este clima de aumento en la inseguridad, durante los tres primeros años del gobierno de Fox, el término narcomenudeo fue en ascenso y tuvo una mayor difusión, lo cual trajo consigo una reestructuración en las instituciones dedicadas a combatir el tráfico de drogas, de igual forma el término, fue utilizado de manera más amplia por actores políticos y de seguridad, y se asoció el fenómeno de venta de drogas al menudeo como un concepto relacionado con el narcotráfico y el delito. Esto destaca debido a que las instituciones y sus estructuras reproducen valores y concepciones sobre lo que es adecuado para la sociedad

(Carvente, 2014), de esta manera, la administración pública, las instituciones y sus lógicas irán permeando el actuar en los ramos administrativos de su competencia.

Esto podría dar pauta para sugerir que en algunos de los órganos administrativos encargados de controlar el tráfico ilícito internacional de drogas y el comercio a pequeña escala para el consumidor final se irá observando un isomorfismo institucional (DiMaggio y Powell, 1999; Brunsson y Olsen, 1993). Esto quiere decir, que cuando los modelos organizativos se consolidan y se institucionalizan, las estructuras se vuelven similares en particular hacia la americanización del control de drogas ya sea a pequeña o en gran escala y algunas de las prácticas organizacionales, pero es necesario mencionar, por ejemplo, la creación de un grupo especializado binacional para el combate a las drogas auspiciado por la DEA, esto trajo consigo la creación entre 1996 y 1997 de la Unidad de Investigaciones Sensibles, debido a que algunas autoridades norteamericanas señalaron que la Policía Judicial era corrupta, igual que su antecesora la DFS (Pérez-Ricart, 2020).

En este orden de ideas, el éxito programático y retórico de la administración de Zedillo fue robustecer la perspectiva de seguridad cuestión cimentada en la era Salinas para centrar al narcotráfico como una prioridad en la relación bilateral y nacional, esto como ya se ha mencionado, en parte fue secundado por el gobierno norteamericano y utilizado como un instrumento de negociación política. Un ejemplo se encuentra en la vista que el presidente Bill Clinton realizó a México en mayo del año 1997, donde se hicieron señalamientos respecto a la cooperación internacional en que al reclamo por parte del presidente Zedillo respecto a la responsabilidad por el consumo de drogas en Estados Unidos -*el motor del narcotráfico en el continente*- y la política de certificación, la falta de vigilancia en el tráfico de armas (Rico, 1997), este reclamo fue aceptado y sostenido por el homólogo noretamericano quien cedió parte de la responsabilidad del tráfico ilícito al consumo interno y mencionó los esfuerzos constantes por ofrecer capacitación y el compromiso de los estados unidos por mejorar los sistemas de tratamiento a partir de una alianza contra las drogas (White House, 1997).

A partir de esta alianza denominada *Alliance Against Drugs* (AAD) firmada en 1997 por el presidente Zedillo y por el presidente Clinton se reconoció al tráfico de drogas como un peligro para ambas sociedades y una amenaza a la seguridad nacional de México y de

Estados Unidos. En esta herramienta bilateral se plantearon 16 objetivos los cuales incluyen: coordinación y cooperación, así como reducir la demanda de drogas ilícitas a través de la intensificación de los esfuerzos de información y prevención dirigido en particular hacia los jóvenes a través de programas de rehabilitación. Sin embargo, no sólo la reducción de la demanda se contemplaba como un horizonte si no también reducir la producción y distribución de drogas ilegales en ambos países, en particular marihuana, metanfetamina, cocaína y heroína (US GPO, 1997).

Por lo que respecta, a las organizaciones criminales, con este acuerdo de 1997 se buscó intensificar el modelo de la la persecución al crimen organizado a partir de dotar de instrumentos jurídicos a ambos países mediante el uso de la extradición como una alianza y un mecanismo de negociación política a través del establecimiento de puntos en común para México y Estados Unidos en particular identificando que, al ser el tráfico de drogas una actividad de carácter internacional y en grandes volúmenes, esta sería una actividad criminal trasnacional donde se cometían delitos de ambos lados de la frontera, por lo que las dinámicas de persecución a las empresas criminales y al crimen organizado facultaba una herramienta para que se utilizara el sistema penal norteamericano y el sistema mexicano para detener y agilizar el proceso de extradición, el cual era un modelo que parecía haber dado resultados en Colombia debido a que los traficantes de drogas no querían someterse a las leyes y al sistema de prisiones norteamericanas ya que como se ha mencionado desde 1986 el tráfico de drogas representaba para el gobierno norteamericano una amenaza a la salud y a la seguridad nacional (DOJ, 1986).

En este sentido, la AAD señalaba que intentaba garantizar que los prófugos sean llevados ante la justicia de manera expedita y con el debido proceso legal evadir la justicia en uno de nuestros países huyendo o permaneciendo en el otro y que las personas sean juzgadas en ambos países antes del cumplimiento de su condena en cualquiera de los dos países. Cabe mencionar, que desde la época de Salinas (Jelsma, 2003) el reclamo ante el sistema internacional de fiscalización y el régimen internacional de drogas se venía cuestionando respecto a su efectividad, por lo que el acuerdo también contemplaba el trabajo conjunto en vísperas de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas Ilícitas en junio de 1998 cuestión que se alinea con los objetivo incluídos en los puntos concernientes a (US GPO, 1997).

Retomando que el acuerdo tenía como propósito continuar con el esquema de seguridad acordado a partir del tratado de libre comercio esta visita de Bill Clinton continuaba con el horizonte de afianzar la relación bilateral, supervisar los acuerdos migratorios y continuar con la construcción de barreras físicas en el proyecto de integración regional en especial al incrementar las capacidades para la securitización y expansión del control migratorio mediante la cooperación la frontera. Así como, Implementar de manera más efectiva las leyes y reglamentos para detectar y sancionar el lavado de dinero en ambos países, y mejorar los intercambios bilaterales y multilaterales de información y experiencia para combatir el lavado de dinero, así como buscar a partir de la incautación y decomisos de los productos e instrumentos del narcotráfico para destinarlos al uso de la prevención de drogas y la aplicación de la ley (US GPO, 1997).

Dentro del acuerdo del tratado de nuestras instituciones democráticas para atacar y erradicar la influencia corruptora del tráfico ilegal de drogas en ambos países. Controlar las sustancias químicas esenciales y precursoras para prevenir el desvío y el uso ilícito de sustancias químicas, y mejorar el intercambio de información sobre este tema., de acuerdo con los procedimientos legales vigentes en y entre nuestros países. necesarias y se desempeñe con el más alto nivel de profesionalismo e integridad. Mejorar y facilitar el intercambio de información y pruebas para enjuiciar y condenar a los delincuentes y disuadir el tráfico de drogas; y velar por la seguridad y el uso adecuado de la información y las pruebas proporcionadas (US GPO, 1997).

Derivado de este acuerdo, durante los últimos 2 años de administración zedillista se reportó un gasto de 500 millones de dólares en inversión en tecnología para mejorar la capacidad para interrumpir los envíos de drogas por vía aérea, terrestre y marítima. Y la implementación de programas de capacitación y cooperación técnica, así como el fortalecimiento y robustecimiento de los sistemas de intercambio en vigilancia epidemiológica con intercambio de datos médicos y de seguiridad pública (White House, 1999). Al reconocer en ambos países y a nivel regional que el tráfico de drogas ilegalizadas que los grupos criminales trasnacionales tenían capacidad corruptora y de ejercer violencia aunado a que se denotaba la idea de crímenes relacionados por drogas o *drug related crimes*, situó el fenómeno como una amenaza interna y al consumo de drogas como un problema que desde esta perspectiva ocasionaba crimen y delitos, como ya se ha explicado que esta

perspectiva ha sido constante durante la larga trayectoria del consenso de más de cien años de prohibición de drogas (McAllister, 2012).

Sin embargo, esto pasó de presentarse en notas aisladas, casos anecdóticos o como parte de la prácticas de un pequeño grupo de policías en narraciones de informes selectivos, a ser un eje dominante en las notas de prensa durante los años noventa (Férnández, 1994; 1999; 2001) y un rubro considerable en el avance programático por ejemplo en la PGR con la creación de fiscalías especializadas, así como un mayor gasto de recursos como la participación del ejército y una pública intromisión del gobierno norteamericano, aunado al desarrollo de una agenda personalista por parte de algunos presidentes, cuestión que ha favorecido a la securitización del fenómeno y ha influido en la percepción en la ciudadanía, en los medios y en la política (Johnson, Wanta y Boudreau, 2010).

En este sentido, si ponemos en perspectiva que desde finales de 1997 hasta el 2002, durante dos administraciones presidenciales, se mantuvo una agenda sobre las extradiciones, por ejemplo la de Juan García Abrego, o Los Arellano Félix, vemos que los Estados Unidos lograron establecer presiones y negociaciones cada vez más públicas sobre cómo enfrentar el problema del narcotráfico a partir de la estrategia del descabezamiento o intercambio de información con las organizaciones criminales más prominentes, mientras que por otro lado, en la práctica cotidiana las acepciones negativas al consumo y al nuevo esquema de nombrar a los criminales intentaron copiar el modelo de lo ocurrido en Colombia durante los años ochenta y noventa aunque esto no fuera del todo cierto (Astorga, 1999).[22]

Otra representación negativa sobre el narcotráfico la encontramos en la medición del Latino barómetro del año 2003, donde se pone en el mismo saco a las drogas, el crimen, los criminales, el crimen organizado, y esto logra que la vinculación se vuelva racionalizada e internalizada entre la ciudadanía y por ende se delegan valores negativos y se vinculan a percepciones también negativas, es por esto que resulta interesante mencionar el cambio que hubo en la presentación de resultados, que sugieren una casi explícita correlación en la *relación experiencia de crimen con consumo de drogas*, cuestión en la cual se muestra como conceptualmente en América latina se tiene un concepto dado respecto al binomio: droga ilícita es igual a delito o crimen, aún y cuando la pregunta señala expresamente: ¿usted o

[22] Por ejemplo el uso de términos como cartel o sicario.

algún conocido o pariente ha consumido drogas el último año? o ¿ha atestiguado algún delito? más de la mitad de los encuestados contestaron que sí a ambas preguntas (Latino barómetro, 2003) asunto que si bien no resulta nuevo dentro de la perspectiva estructural de una representación negativa hacia las sustancias ilegalizadas, a su consumo o al tráfico por ejemplo la idea del traficante extranjero o el envenenador, si resulta relevante ya que se encuentra depositado en un instrumento de opinión pública a partir de encuestas estandarizadas y segmentadas por país instrumento el cual es utilizado en muchas ocasiones para justificar o delimitar agendas o políticas públicas.

Esto es significativo debido a que no necesariamente estaría vinculado el consumo de drogas con actividades delictivas, como el secuestro, o el robo, o delitos, pero quizá sí algunas redes de la venta de drogas, pues al ser parte de un mercado ilícito algunos comparten campos de acción, por ejemplo, durante principios del milenio fueron expuestos a la luz pública vínculos de la banda de secuestradores liderada por Andrés Caletri con los traficantes de la Familia Arellano Félix, incluso el 30 de enero del año 2004 fue publicada una nota en el periódico El Universal en la que señala que internos del Reclusorio Oriente intentaron utilizar un aparato explosivo para fugarse en la zona de juzgados.[23]

Este tipo de noticias espectaculares con tintes de mafia, escape y narrativa policial crean percepciones que fortalecen las agendas de seguridad. Y además refuerzan las demandas ciudadanas respecto a ejercer penas más severas o exigir mayor protección para su integridad mediante, más policías, mayor vigilancia, tecnificación etc. Un ejemplo son las estrategias de cero tolerancia llevadas a cabo en la ciudad de México, donde se comenzó a ampliar el uso de cámaras de vigilancia o grupos tácticos especializados entrenados en contra del crimen organizado. Esto coincide con que entre 2000 y 2004, una de las principales preocupaciones de los ciudadanos se concentró en la seguridad y la economía, ya que se percibió que delitos como el secuestro habían aumentado debido a que este se había expandido a personas de clases medias, además se observó que había un incremento de la

[23] Los internos: David Hernández Rodríguez, Alejandro García Solís y José Alberto Márquez Esqueda alias el Bat detenido en la ciudad de Tijuana, este último preso por delitos contra la salud fue identificado como colaborador de una banda de secuestradores y además participar y ser partícipe de negocios relacionados con la familia Arellano, sin embargo fracasaron en el intento de escape (Sánchez, Herrera y Bolaños, 2004).

inseguridad, al respecto una nota del periódico La Jornada titulada *Ecos de la inseguridad* señala:

> No hay, prácticamente, capitalino o capitalina que no sea víctima potencial de robo, agresión, violación, allanamiento, secuestro u homicidio, con el agravante de que los agentes de las diversas corporaciones policiales, lejos de inspirar confianza entre la ciudadanía, suelen causar casi tanto temor como los propios delincuentes (Aranda, 1997).

En este sentido, una posible respuesta que se le ha dado al crecimiento de la inseguridad, fue en parte el alto grado de corrupción e impunidad y por otro un desequilibrio en los ingresos y en las fluctuaciones de empleo, así como el desarrollo de un capitalismo global, aspiracional e instantáneo, por ejemplo ante la necesidad de recolectar grandes sumas de dinero a partir de apropiarse de los bienes ajenos en poco tiempo de manera violenta, se ampliaron las redes criminales organizadas, o con el aumento mediante la privación ilegal de la libertad a personas con amplios recursos económicos. Otro ejemplo puede encontrarse en las bandas de secuestradores que operaban en algunas ciudades de México, Guadalajara y Monterrey, los cuales al momento de sus detenciones les fueron decomisadas colecciones de autos de lujo, sirva el caso de Daniel Arizmendi quien fue capturado en mayo de 1998 mediante un trabajo conjunto de un grupo especial de la PGR contra el crimen organizado (Espinosa, 1998).

En este sentido, el libre mercado trajo consigo varios fenómenos entre ellos una razón instrumentada por el dinero y recursos sin importar los costos para obtenerlo y esto permeó desde las empresas trasnacionales hasta los delincuentes, por lo que el tema de la inseguridad comenzó a tomar mayor relevancia entre los años 1998 al 2000, siendo el año 2004 un momento clave con la Marcha Blanca cuando un grupo de miembros de organizaciones de la sociedad civil, marcharon en la Ciudad de México en una confrontación directa con el entonces jefe de gobierno de la ciudad Andrés Manuel López Obrador y en la cual se exigía mayor seguridad.

Sobre este tipo de actividades, que involucran a actores de la sociedad civil y otros, Eric Hobsbawm (2012) argumenta que el proceso de globalización implica un mayor acceso de la población a diferentes dinámicas económicas, bienes y productos, más no significa que

dicho acceso sea igual, debido a que se tendió a pensar que la lógica del mercado libre minimizaría el crecimiento económico y la riqueza en el mundo aumentaría, lo cual es cierto pero solo de forma parcial, ya que los recursos económicos no se distribuyen equitativamente, lo cual, desde la perspectiva de Hobsbawm implica que la globalización es un proceso desigual. Por ello, hace una crítica a la estandarización impuesta por las naciones más ricas para homogeneizar mediante procesos técnicos que no necesariamente se pueden cubrir a cabalidad en el tercer mundo.

Sin embargo, el proyecto de integración económica en México se fue desacelerando debido a un clima internacional de contracción que será marcado por los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York en el año 2001, lo cual redireccionó el programa comercial y frenó en cierta medida el proyecto de integración económica binacional, para concentrarse en una integración hemisférica con enfoque hacia la seguridad de los Estados Unidos, en especial el combate al terrorismo y al crimen organizado, los cuales en los últimos 20 años se han vinculado casi de manera conceptual (Serrano, 2007) cuestión que se enmarcó en un modelo de seguridad compartida inaugurada por el Comando Norte, una coalición militar entre Canadá, Estados Unidos y México y que se centró en la defensa del territorio, los límites aéreos y marítimos instrumentalizadas a partir de la cooperación militar y de la llamada amenaza externa y en particular la interna mediante grupos terroristas o subversivos.

Las altas expectativas que se construyeron sobre el TLC y un posible emparejamiento con el desarrollo económico se fueron dificultando en parte por variados problemas estructurales entre ellos la incapacidad para establecer un plan de liberalización, en todos los rubros (Easterly *et al*., 2003). En este sentido, Ulrich Beck (1997) sostiene que el fomento del crecimiento económico genera desempleo, del mismo modo que acciones como la reducción de impuestos y el aumento de beneficios para los empresarios pues aumenta la producción y las ganancias pero a un menor precio, ya que por un lado se abarata la mano de obra y trabajadores con mejores sueldos son despedidos, se "exporta la mano de obra" (1997: 18), a lugares en el mundo donde los precios y sueldos y las contribuciones fiscales sean los más bajos.

El segundo eje a nivel hemisférico es la construcción del enemigo interno, dentro del margen de acción de la seguridad internacional y nacional, habría que recordar lo dicho

previamente donde la política de seguridad derivada de la guerra fría en México, facultó y desarrolló el concepto de seguridad nacional. En este sentido, para poder comprender el modelo de persecución y diseño institucional del control anti drogas a partir de enemigos y amenazas, se ha venido sostenido que la injerencia de la doctrina norteamericana y la adopción del modelo policial de inteligencia y seguridad desde la DFS y la PGR, aunado a la incursión en algunos aspectos de los cuerpos castrenses han configurado de manera particular el esquema de persecución y el diseño institucional del narcotráfico y el narcomenudeo, en el cual incluso se ha llegado a mencionar que hay un combate o una guerra en contra de estos. En este sentido, Hobsbawm (2012), señala que los límites y definiciones sobre la guerra y la paz, en especial después de la segunda guerra mundial, son difusas. Así, cuando se habla de guerra en el siglo XXI no se hace referencia necesariamente a incursiones militares, como la Guerra de Vietnam, sino a dinámicas desestabilizadoras, guerra de baja intensidad, e incluso guerra de sexos o tecnológica situaciones han modificado los regímenes y sistemas culturales y políticos locales.

Cabe señalar que cuando se vigorizó el intercambio internacional a mediados de los años noventa, esto influyó de manera directa en los flujos de drogas ilícitas para tráfico internacional, en primer lugar, porque con el TLC se acrecentó el tráfico ilícito transnacional de drogas, el cual venía en ascenso y transformación desde finales de los años ochenta y mediados de los noventa (Serrano, 1998), esto ocasionado por la demanda de los consumidores norteamericanos y segundo, porque empata con un *boom* en la producción de coca mejorada (OEA, 2004), la cual era más rentable y se cultivaba en zonas de difícil acceso y controladas por grupos guerrilleros colombianos con vínculos criminales o en zonas de difícil acceso en Bolivia y Perú.

Así, los grupos colombianos se flexibilizaron y tomaron medidas arriesgadas y competitivas (Gootenberg, 2008), por ejemplo ampliar la alianza con los traficantes mexicanos, esto dio pie a que se comenzará a distribuir una mayor cantidad de cocaína hacia el mercado norteamericano dejando de ser solo intermediarios (Valdés, 2015). Además los grupos de traficantes del Golfo, Juárez y Tijuana, comenzaron a pagar con producto a sus mafias locales para su distribución y con ello colocarlo en el mercado local y aumentar los mercados al interior, para con esto aceitar el lucrativo mercado de la cocaína (Valdés, 2015).

Desde la crisis que desencadenó el movimiento zapatista, el sur de México no logró insertarse en la dinámica de crecimiento económico por diversos factores, llama la atención que esto será el segundo proceso de la nueva delimitación de un enemigo respecto a la seguridad nacional y hemisférica, y es que el conflicto armado en Chiapas y Guerrero impulsó una agenda de seguridad basada en las operaciones de militares en terreno acompañadas por medidas extraordinarias, como las bases de operaciones militares, lo cual fortaleció las incursiones castrenses no solo en operaciones antiguerrilla si no también las del Instituto Nacional de Combate a las Drogas, fundado durante los últimos años del sexenio de Carlos Salinas, el cual para 1997 ya cumplía labores sustantivas en el ámbito del combate al narcotráfico, mediante actividades primordiales encabezadas por el ejército.

Por otro lado, el fenómeno del tráfico ilícito de drogas en esta década, vio la conformación del concepto narcomenudeo, como un eje particular de control, desmarcándose del narcotráfico, sobre todo en las agendas de seguridad binacionales, las cuales se concentraron en establecer enemigos internos como la contra insurgencia, el terrorismo y el narcotráfico, esta lógica fue una de las tantas trabas que los gobiernos estadounidenses de George Bush y William Clinton tuvieron hacia una total apertura de las fronteras debido a la posible amenaza o riesgos sustantivos.

Una transformación que experimentó el sistema político mexicano respecto a la delimitación de los riesgos y posibles amenazas a la seguridad nacional y pública durante los años noventa, es que el enemigo político se diversificó en términos narrativos, y al dejar de ser perseguidos únicamente los grupos subversivos y adversarios políticos, las estructuras de seguridad comenzaron a concentrarse en el tráfico ilícito como una amenaza. De este modo, la agenda institucional de seguridad comenzó a fortalecer la persecución del tráfico de drogas como un asunto de seguridad, hay que recordar que, el conflicto en Centroamérica re definió también el sentido de la protección hemisférica, aunado al proyecto de integración regional y de transformaciones económicas, por lo que el particular escenario del conflicto zapatista donde una guerrilla participó de la disputa política trajo consigo el despliegue de cuerpos militares, además de que al mismo tiempo se entrenaban grupos especializados en el combate al narcotráfico.

Las reestructuraciones durante la era zedillista también trajeron consigo la instauración de la Policía Federal Preventiva (PFP), un grupo policial semi militarizado entrenado para proteger la seguridad a partir de técnicas contrainsurgentes, manejo antiterrorista y para combate al crimen organizado, esta policía fue de origen una forma de reestructurar a la Policía Federal de Caminos (PFC), identificada desde los años setenta como una corporación corrupta, además de integrar algunos efectivos de la Policía Fiscal y sumar por último a miembros de la Armada. De este modo, una de las primeras apariciones de la PFP, fue el desalojo de las instalaciones de la UNAM durante el conflicto con algunos estudiantes autodenominados Consejo General de Huelga en el año 1999 y también el despliegue en Chiapas y zonas de conflicto para control de población.

En este orden de ideas, durante la gestión de Ernesto Zedillo en el Plan Nacional de Desarrollo, se estableció un proyecto para modernizar la administración pública y con esto también cambiar las viejas estructuras del régimen del sistema de mono partido, en el cual se incluía el rubro de reforma de gobierno y modernización de la administración pública, como la capacitación tecnológica de los servidores públicos, introducir sistemas de rendición de cuentas, aumentar la participación ciudadana (Pardo, 2003) cuestiones que empatan con el nuevo modelo económico y descentralizado del TLC, en el cual también se solicitó, cuidado del medio ambiente, mejora regulatoria y ciertos esquemas de seguridad aplicadas a la protección de recursos estratégicos los cuales fueron clave esencial de los movimientos económicos, por ejemplo la liberalización de la frontera, aumentar la cooperación en seguridad hemisférica y lo que implicó un aumento en la securitización, proceso durante los cuales las fuerzas armadas y policiales participaron de manera constante, en un proyecto de fortalecimiento institucional de las fuerzas armadas y de la policía durante los años noventa.

Además, se estableció el Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que se volvió evidente la corrupción y ante la pérdida de ciertas cadenas del monopolio del poder por parte de las estructuras de gobierno se expandió el control en ciertas cadenas del mercado ilícito de drogas y se establecieron medidas de contención como la detención de más de 400 miembros de grupos de traficantes y el establecimiento de un proceso judicial en contra de algunos miembros del entonces denominado Cártel De Juárez y Cártel del Golfo (Chabat, 2006).

Una reconfiguración se establece a partir de una mayor autonomía relativa de los gobiernos locales, en especial de los congresos y los gobernadores. Sin embargo, el control de la PFP durante la fase de Zedillo estuvo bajo el cargo de la Secretaría de Gobernación, por lo cual su despliegue llegó a causar malestar en entre algunos gobernadores o legisladores locales, pues se llegó a argumentar que se violaba la *soberanía* del pacto entre los estados, esto puede ser una muestra de cómo la securitización se extendió como un dispositivo mediante el cual se desplegó un sistema para ocupar territorios con un cuerpo policial semi militarizado, en este caso para el control de la guerrilla y de la contención y salvaguarda de reservas naturales y el control de migrantes.

Con esta acción, desde la perspectiva de la seguridad y el territorio se normaliza un acoplamiento de la PFP como un mecanismo de seguridad por parte del gobierno de Ernesto Zedillo en el cual extiende el poder hacia un orden de carácter global a través del de complejo sistema inaugurado con la seguridad hemisférica, la seguridad nacional a través de una serie de dispositivos jurídicos y de administración de la fuerza donde se intuye que se hace un cálculo de costos con nuevas formas de penalidad con técnicas *norteamericanas* de vigilancia de individuos (Foucault, 2006), por ejemplo con el uso de lanchas rápidas para la intercepción de cocaína, máquinas de rayos x, y aviones para detección de plantíos, esto aunado al clima de securitización con el conflicto en Chiapas (Chabat, 2006).

Al respecto una nota del periódico La Jornada del 21 de mayo del año 2000 señala y pone de manifiesto el clima de agitación social en Chiapas, en un territorio que se encontraba bajo presión de grupos civiles armados, grupos paramilitares y diversos actores, conflicto que es un indicativo de cuál fue el colofón del sexenio, demostrando la forma particular de actuar de la PFP en contra de civiles en donde se percibía hostilidad, política e hiper vigilancia en el contexto securitario.

> Invocando de manera cada día más elástica y discrecional la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como los ordenamientos migratorios y viales, soldados y agentes parecen aplicar una nueva estrategia de control de cara a las próximas elecciones estatales y federales, sobre los individuos que ellos consideran "sospechosos" y que en los hechos pueden ser cualesquiera (Bellinghausen, 2000).

En este, sentido sumado a la guerrilla, desde la perspectiva de la seguridad nacional la delimitación del sujeto narcotraficante y del delito narcotráfico ya está configurado y categorizado como un enemigo interno depositado en la norma jurídica bajo la denominación y tipo jurídico de delincuencia organizada, la cual se estructura organizacionalmente a partir de una arquitectura institucional y política mediante la delimitación de la idea de que desata inseguridad, opera en la ilegalidad y se sirve de redes y sistemas clientelares ya sea mediante, cooptación o amenaza y se enfrenta en contra de las estructuras administrativas (Foucault, 2006).

Así, se puede intuir que en el caso del crimen organizado en México se aplica la doctrina desarrollada sobre los enemigos del Estado, donde como ya se había mencionado durante los años ochenta y después del monopolio de la guerra fría, la guerrilla y los enemigos o adversarios políticos eran identificados como amenazas. Por su parte, la violencia que se deriva de la amenaza para la seguridad que significa el narcotráfico, significó una transformación resultado de la incapacidad y debilidad del estado por contenerlo (Hurrell, 1998). Entre esta conexión semántica y subjetiva que actualmente se da por sentado en normas como La Ley General contra la Delincuencia Organizada Luis Astorga señala:

> Esto sugiere una similitud formal entre los movimientos de guerrilla y el tráfico de drogas, pues en los dos se dan enfrentamientos con el Estado en el terreno de monopolio de la violencia física y simbólica, lo cual ha dado pie para que gobiernos como el de los Estados Unidos asimilen ambos fenómenos y tiendan a tratarlos, a priori y desde hace algún tiempo, de manera semejante. Se habla de "seguridad nacional" en ambos casos (Astorga, 1995: 35-36).

Este particular escenario, en el mercado de drogas a nivel internacional y local, será el espacio para el desarrollo del narcomenudeo como un fenómeno nombrado como tal, ya que algunos grupos organizados que se habían dedicado, ya tiempo atrás, al comercio de drogas ilícitas y otros artículos ilegales o apócrifos comenzaron a vender, paradójicamente, pequeñas dosis para el consumo personal en mayor escala, de modo que en ciudades como la Ciudad y Estado de México, Tijuana o Guadalajara se expandió el mercado interno. Así, a mayor tráfico internacional, habrá una mayor disponibilidad de producto para el consumo interno, incluso el ex presidente Felipe Calderón sostuvo que el aumento en el consumo de

drogas en México durante el nuevo milenio, se debió al ámbito de estabilidad económica en México durante el gobierno de Vicente Fox (Casey, 2013).

En contraste, en el contexto internacional según el informe de la OEA (2006) por primera ocasión se levantó un análisis comparado del uso de drogas ilícitas entre estudiantes sudamericanos, los resultados indicaron que, los mercados de drogas ilícitas siguen patrones parecidos a los de los mercados lícitos, donde a mayor poder adquisitivo, habrá mayor oferta y por ende mayor consumo (OEA, 2006). Sin embargo, también se menciona que este crecimiento y desigualdad en la distribución del ingreso produjo un fenómeno de violencia y aumento en la deserción escolar y la proliferación de pandillas o grupos criminales, donde cada vez más personas en especial jóvenes y redes familiares quieren participar del mercado de venta de drogas ilícitas en pequeña escala. Ya que al contar con productos para venta económica en especial cocaína fumable, mariguana y metanfetaminas, ya no era necesario contar con una red y movilidad internacional para el tráfico ilegal.

Este proceso económico, coincide con un cambio interno en la oferta y producción de drogas ilícitas en México para su tráfico internacional, así como el mercado de drogas que a pesar de mostrar leves aumentos en las últimas encuestas de adicciones, en sectores como las mujeres jóvenes, el tamaño del mercado se ha denominado como relativamente estable (Medina y Guiot, 2003: Velázquez *et al*., 2016).

Para cerrar este apartado, en el cual se discutió el complejo proceso de *apertura económica* y la configuración de un *enemigo interno* a partir de la figura del crimen organizado, se puede destacar que en este periodo converge durante una reconfiguración en el mercado de drogas, también hay que señalar la tecnificación y aceleración de los procesos, tanto en el cultivo, beneficio, transporte y la incursión en el negocio de traficar los precursores para elaborar metanfetaminas, sustancia que también cambiará el viejo sistema de tráfico de opio-heroína, mariguana, cocaína, con esto la preparación de drogas para su consumo también pasó a ser un negocio lucrativo y no solo de trasiego.

En segundo lugar, durante los años noventa y principios del milenio los grupos criminales mexicanos buscaron optimizar el tráfico ilícito de drogas de distintas maneras, algunas mediante el cruce fronterizo en pequeñas cantidades, otras mediante el embarco de grandes cantidades de drogas, mediante túneles, en aviones, es aquí donde la globalización

marcará parte esencial de la reconfiguración del tráfico ilícito de drogas y de los actores involucrados.

En apartados siguientes, se particulariza en el mercado interno, pero habría que mencionar que en el caso del consumo de drogas por ejemplo de cocaína y mariguana, ya sea que aumente de manera mínima, dicho crecimiento será paulatino. Esta reconfiguración de los mercados, como ya se mencionó, dio mayor notoriedad al mercado interno donde se desarrollaron las dinámicas del narcomenudeo. Por ejemplo, el tráfico de opio y mariguana durante los años setenta, así como su combate eran las mayores actividades del tráfico ilícito de drogas, sin embargo, dos décadas después, la globalización formó parte central en la nueva manera de comerciar drogas ilícitas.

En este sentido, la fuerte influencia estadounidense y la internacionalización de sus formas de control se adaptaron de manera particular en los sistemas locales a partir de intercambiar modelos y ser influenciados por las principales fuerzas de aplicación de la ley al estilo DEA o FBI (Nadelman, 1989; Stewart, 1990). Además de establecer mecanismos y controles de presión y negociación económica con grupos de traficantes y con miembros del gobierno, ya que a partir del nuevo milenio la aplicación de las normativas del Departamento del Tesoro Norteamericano a través de la Office of Foreign Assets Control (OFAC) por sus siglas en inglés, se comenzaron a bloquear cuentas y negocios pertenecientes a traficantes mexicanos, lo cual ha dado una perspectiva de la economía ilícita transnacional. Aunado a esto el gobierno de Vicente Fox se concentró en delimitar a la seguridad como un asunto de inteligencia e información, así como instaurar un modelo de investigación a partir de la Agencia Federal de Investigaciones.

Sin embargo, es a partir del ataque a las torres gemelas que la relación bilateral se modificó, con base en la construcción de acuerdos basados en el combate al terrorismo y disminuir la inseguridad, llama la atención que durante los años 2004 a 2005 aparecieron notas de prensa señalando que en la ciudad de México y en algunos otros estados fronterizos como Chiapas había presencia de miembros de pandillas centro americanas que para el año 2005, el propio embajador Tony Garza envió una carta desde la embajada reclamando la falta de seguridad en la cual señaló que la lucha entre carteles de la droga no era un fenómeno

nuevo, pero que había traído consecuencias como aumento drásticos en asesinatos y secuestros (El Universal, 2005).

En este contexto, es que en México va fortaleciendo la securitización y delimitando al crimen organizado como una amenaza interna, incluso llegó a vincularse con posibles actos terroristas, aunado a que la reputación del sistema de seguridad penitenciario se había vulnerado por la fuga de El Chapo Guzmán. Además, en esas mismas fechas de 2005, la crisis de seguridad provocó que la PFP fuera desplegada en 7 ciudades y que el penal de máxima seguridad del Altiplano fuera ocupado por el ejército y también destaca la creación de la Ley de Seguridad Nacional (DOF, 2005). Sin embargo, en términos de seguridad, el sistema y las estructuras continuaron similares a las que existían bajo el sistema del PRI (Benítez, 2010).

3.4 Tráfico ilícito trasnacional de drogas en México (Narcotráfico)

En este apartado se describe cómo el concepto *narcotráfico* se fue diseminando y consolidando a través de las interacciones a nivel estatal mediante el control jurídico, sanitario y policial de las drogas ilegalizadas en el marco de una compleja red porosa de conexiones institucionales, formales, informales e ilegales en un entorno multinivel. Dentro de estos vínculos predominaron una serie de narrativas principalmente enunciadas por políticos y periodistas a nivel local, internacional y nacional quienes determinaron un horizonte de posibilidad enmarcado en un periodo de tiempo que incluye: las transformaciones y continuidades de la época de la guerra fría, el declive del sistema monopartidista autoritario mexicano, la transición democrática, la reconfiguración del poder político y el nuevo milenio con la agenda global antiterrorista y los cambios, permanencias y tensiones del régimen internacional de prohibición de drogas. Todo esto da como resultado que se pueda identificar al narcotráfico como un concepto político dadas sus cualidades configurativas en el contexto contemporáneo, las cuales no solo dependen de la toma de decisiones y acuerdos entre los actores políticos internacionales sino de un entramado de acuerdos, relaciones y negocios que tienen lugar en los límites de la legalidad en particular el construido a partir del pago de protección, intercambios de complicidades, pago de sobornos o amenaza o cooptación forzada (Pansters, 2018).

Así, el objetivo de este apartado de tesis no es ofrecer una respuesta respecto a un origen único del fenómeno, ni del término *narcotráfico*, ni explicarlo de manera lineal recopilando una serie de hechos cronológicos sobre actos ilegales, detenciones de criminales o enfrentamientos, ni tampoco realizar un árbol familiar de los grupos encargados del tráfico de drogas en México, sino, a partir de un modelo reflexivo, identificar cómo es que la interacción entre distintas instituciones, actores y normas configuran sistemas y dispositivos de control que interactúan o se arraigan al sistema administrativo de control de drogas desde una perspectiva histórica estructural y coyuntural, para hacerlo echaré mano de la construcción de una *genealogía del narcotráfico* desde la perspectiva de Michel Foucault (1988) quien planteó la posibilidad de elaborar una historia por medio de la integración de meticulosidades y azares de los comienzos que configuran el contexto y no necesariamente buscando o rastreando sus orígenes.

Dicho esto, el término narcotráfico se ha utilizado en el lenguaje académico aproximadamente desde la década de los setenta (Rodríguez, 1974; Cárdenas, 1976), este término se ha empleado para delimitar ciertos procesos como la producción, venta y cultivo de sustancias psicoactivas ilegalizadas, pero también para hablar de conductas y personas que pueden causar amenazas, miedo o temor y enemigos del estado que comprometen la salud pública y la seguridad en contextos y campos particulares de lo social, como la economía y la política.

En este contexto una palabra o término que suponía referirse al fenómeno comercial del tráfico ilícito de sustancias psicoactivas ilegalizadas se reformuló y construyó una arquitectura administrativa con motivaciones, contextos políticos y sociales determinados en la configuración de la forma y contenido político para el combate y control al tráfico ilícito de drogas en grandes volúmenes para el mercado trasnacional. El seguimiento a esta transformación del concepto se basa en referentes históricos que se pueden identificar al paso del tiempo. En primer lugar, tomando en cuenta que, el narcotráfico ya se encontraba fiscalizado e identificado por el gobierno mexicano, norteamericano y los organismos internacionales al menos desde la década de los treinta (Pérez-Ricart, 2022) y siendo México parte del sistema internacional de control de drogas ya en ese tiempo, se tenían detectadas algunas formas de contrabando y vínculos entre autoridades locales y traficantes (Flores, 2013).

Cabe señalar y tomando en cuenta el continuum que comprenderá por un lado un mercado regulado y fiscalizado de opiáceos con fines farmacéuticos y un mercado paralelo de sustancias psicoactivas con fines no médicos el cual configurará sistemas de tráfico ilícito de carácter internacional y bajo una perspectiva estructural y de larga duración con hechos coyunturales en los organismos internacional de fiscalización y el proceso de expansión, consolidación del régimen internacional de prohibición, cabe señalar que durante el periodo de la posguerra y ante el nuevo orden internacional según Collins (2014) desde 1947 a partir de la formación de la Comisión de Narcóticos CND y el Secretariado de Drogas de las Naciones Unidas (actual UNODC) fueron un importante moldeador en la narrativa internacional y un *actor normativo* en el discurso de la comunidad internacional promoviendo medidas represivas como aislar a los adictos en lugar de ofrecer tratamientos, o arrestar e imponer fuertes penas para los traficantes, aunque esto no quiere decir que durante

las experiencias previas del sistema de control no se tuviera una visión punitiva pero estas si se exacerbaron en el marco de tensiones durante la guerra fría.

Una tensión reside en los cambios derivados de la perdida de monopolios y oligopolios que las empresas coloniales por ejemplo la Inglesa o Holandesa quienes continuaron con la producción de opio con fines medicinales hasta bien entrados los años 1950, llama también la atención que Collins (2012a) también indica que hasta antes de la Convención Única de 1961, los documentos solían respetaban el espíritu de la fiscalización, por lo que existían en general dos horizontes: la adherencia o la ruptura y que las interpretaciones historiográficas sobre los tratados como entes totalizadores que delimitan de manera unilateral una guerra contra las drogas son imprecisos.

Es por ello que la trayectoria que el mercado ilícito y sus flujos internacionales y reconfiguraciones tendrán también un fuerte componente respecto a la geopolítica, el aumento en la demanda de drogas y las decisiones que cada país miembro tomará sobre sus decisiones sobre el control de drogas, en particular para frenar el tráfico de opio, por ejemplo la relación que hubo entre Asia y Europa o entre Europa y África con la formación de nuevas naciones independentistas de ahí la importancia de la ruta asiática de malasia o la ruta mediterránea o conexión francesa y por ende las relaciones entre los traficantes internacionales, las redes de aprovisionamiento clandestino y la capacidad o habilidad de diversificar o monopolizar ciertos productos y en México la relación de vecindad con los estados unidos y el carácter de proveedor de drogas ilegales casi desde principios de siglo serán también un factor determinante en la construcción del fenómeno del narcotráfico.

Esto tomará relevancia como un problema entre finales de los años 60 y se intensificará a partir de la política norteamericana de control de drogas para disminuir el uso interno de ciertas sustancias en especial la heroína y la cocaína, cuestión que a partir de su demanda reestructura el mercado internacional de drogas y será a partir de la continuación de ciertas estrategias narrativas exacerbadas, que ya se habían utilizado para delegar el uso y tráfico entre minorías por ejemplo, el contrabando a los italianos, cubanos y puertorriqueños (Gootenberg, 2008), el uso de ciertas sustancias como cocaína y mariguana a los afroamericanos y mexicanos o a los veteranos de guerra con el uso de heroína.

En este sentido, al recuperar una perspectiva global y desde la nueva historia social deslindada de la visión marxista delimitada por la lucha de clases, el autor más reconocido de esta tendencia será Eric Hobsbawm (1995; 1998; 2012; 2013) el cual en su última fase de producción académica entendido a la historia como una interrelación entre la cultura, la política y el mercado y la construcción de una historia de la sociedad en su conjunto y también desarrollada por (Burke, 2000; Briggs y Burke, 2002; Fontana, 2002; Casanova, 2003) por lo que el proceso a escala mundial del tráfico ilícito de sustancias psicoactivas ilegalizadas y el desarrollo de su mercados internos con sus dinámicas y sus son configuraciones a escala local, regional y planetario que pueden ser explicadas desde este horizonte explicativo.

En términos coyunturales el *narcotráfico* se delimita como un proceso histórico y como un término polisémico, atravesado de un devenir estructural en un complejo sistema y modo de intercambio de mercancías globales y actividades ilegalizadas (Gootenberg, 2008). Sobre este punto, hago énfasis en que este modelo de nombrar al tráfico ilícito de sustancias ilegalizadas en grandes volúmenes tiene particularidades regionales y una diversidad de ramificaciones, esto es una consecuencia no intencionada de la aplicación del Régimen Internacional de Prohibición de Drogas (McAllister, 2012), en un marco de interacción y tensiones con el sistema político en donde se desarrolle este fenómeno, es por esto, que el modelo de persecución armada también dotará de sentido al Estado Nacional ante el agotamiento y desplazamiento del sistema de criminalización del guerrillero y la guerrilla por centrarse en enemigos que atentan contra la salud pública y la seguridad nacional o pública en distintos niveles, es decir, a través de la construcción de un enemigo político.

Así, la construcción de un enemigo interno (Sierra, 2003) y externo a través del fenómeno del *narcotráfico*, de la figura y representación o mitología del *narcotraficante* (Astorga, 2004) dispersa una serie de pautas, valores y representaciones sociales en los campos de producción política, social y cultural (Zavala, 2022), teniendo como actual plataforma proyectos de hiper securitización en el contexto de los programas de integración económica regional y global en sociedades mediatizadas (Zavala, 2020). Estos proyectos de integración son los vasos comunicantes en procesos hiper locales como las tensiones entre soberanía y cooperación internacional (Berdal y Serrano, 2022), tomemos por ejemplo, los modelos de negociación política como la certificación, los esquemas de extradición de criminales o la cooperación y el adiestramiento militar en inteligencia o seguridad hasta la

participación por parte de miembros de fuerzas especiales de la Marina Norteamericana (U.S. Navy) o agencias de los Estados Unidos como la DEA o FBI en territorio Mexicano (Pérez-Ricart, 2022).

No resulta paradójico, que este enemigo del estado construido de forma similar a los grupos subversivos guerrilleros genere identidad y un *ethos que* fomenta la protección local y dinámicas diversas. Es entonces que el arraigo regional mitológico a la identidad ilegal por ejemplo; la idea del traficante famoso que se enfrenta al estado o que dota de estructura social cuasi religiosa mediante la construcción de capillas, caminos, escuelas o infraestructura a pueblos o lugares alejados, logrará establecer en la *doxa pública* una serie de representaciones simplistas del término que han llegado a expandirse y utilizarse como prefijo que abarca aspectos en los campos culturales, sociales y políticos para delimitar la corrupción, desigualdad y procesos asimétricos de sujeción de poder utilizando palabras compuestas como: narco limosnas, los narco pactos, narco sobornos o narco millonarios, narco política, narco paramilitarismo y narco terrorismo.

En este sentido, una vez señalados en el capítulo anterior los argumentos de Eric Hobsbawm, quien sostiene que, durante el fin de la guerra fría se diversificaron el tipo de incursiones militares a solo la *guerra total* entendida como el enfrentamiento entre dos estados y que carecían de un carácter ideológico o revolucionario con objetivos limitados y significaron la disputa entre una o varias naciones estatales hasta el agotamiento total o la muerte o aniquilación, situación que se modificó después de la segunda guerra mundial, cuando los circuitos de tensión desarrollo de conflictos se desplazan hacia nuevos horizontes y se desarrollaron sistemas de guerras de baja intensidad, modelos de guerra no convencionales, a través de tácticas paramilitares, guerrilla urbana y guerra de propaganda (Fazio, 1996).

Además, de que también se han denominado bajo estos esquemas modelos internacionales o globales de guerras contra las drogas o *drug wars* (Collins, 2014), cabe señalar que al declararse la primera guerra contra las drogas por Richard Nixon en 1972, se estableció al abuso de drogas como el enemigo público número uno, este antecedente delimita el horizonte de posibilidad y faculta un lenguaje bélico en la administración presidencial, que si bien ya se tenían aproximaciones mediante la vía armada, este acto

comunicativo permite una agenda permanente presidencial por incluir temas sobre el control de drogas, en especial, a partir de denominadores negativos y de seguridad, cuestión que se delegó en aquella época al tráfico ilícito entre México y Estados Unidos. Se añade en la declaración, que se establecería una *guerra total* en contra del abuso de drogas y que además se haría todo lo posible por mantener la heroína y todas las drogas peligrosas fuera del territorio, lo cual es crucial tanto como mantener alejados a los invasores enemigos armados (Nixon, 1972).

Como ya se había mencionado en apartados anteriores con la interrupción del flujo de la *conexión francesa* y con el auge y cierre de la ruta del caribe que durante los ochenta, los traficantes mexicanos comenzaron a tener alianzas estructurales con grupos de traficantes sudamericanos para reorganizar el tráfico internacional y comenzar con el transporte y venta de cocaína (Valdés, 2015), cuestión que transformó en poco tiempo, tanto los márgenes de ganancia como las dinámicas para el tráfico de estas sustancias, en particular para llevarlas hacia Estados Unidos y al mercado internacional.

Es notable que las relaciones e influencias que, a partir de una decisión doméstica en Washington, para aplicar en el territorio norteamericano, fueron construyendo un enemigo global que no es necesariamente es una persona o una colectividad si no una actividad como el uso y abuso de drogas, esta doctrina se expandió hacia el país vecino lugar de tránsito y productor de drogas ilegalizadas. Resulta pertinente recuperar la noción de guerra de baja intensidad, ya que Froylán Enciso (2015) indica que desde las primeras ocupaciones militares derivadas de la operación Cóndor en 1975 y las incursiones militares en Sinaloa, los abusos por parte de militares ante los pobladores se asemejan a los de una guerra de ocupación y los grupos represivos del estado actuaron bajo consigna de perseguir enemigos del estado con el fin de exterminarlos o abatirlos sin necesidad de detenerlos y llevarlos ante las autoridades correspondientes.

Aunque estas incursiones ya no respondían a la lógica de la guerra total y se incorporaron a los esquemas de guerras no convencionales, el modelo de combate al *narcotráfico* significó también la construcción de un enemigo interno, que desde los cincuenta se venía consolidando, cuestión que fue exacerbada durante los ochenta, cuando se declaró al tráfico de drogas como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos,

por lo cual el combate armado al narcotráfico tuvo tintes de guerras no convencionales mediante un dispositivo de control social, político y cultural.

Para esta estrategia de pensamiento, estaré refiriéndome al concepto de *Dispositivo* según Foucault en Agamben (2014), entendido como en un conjunto absolutamente heterogéneo que implica discursos, instituciones, estructuras arquitectónicas, decisiones regulativas, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales y filantrópicas, en breve: tanto lo dicho como lo no dicho. Ergo, al ser el *narcotráfico* un dispositivo social, político y cultural una de tantas formas para analizar este fenómeno se refleja de manera lingüística y mediante una estructura léxica, que a pesar de ser polisémica y delimitar un espectro temporal, esta se ha conferido a espacios, lugares y actores difusos, por ejemplo, se suele vincular con algo que causa emergencia, alarma, que es negativo o ilícito, pero también lo vuelve atractivo y mítico.

Al respecto, Enciso (2015) ha señalado que existen dislocaciones en el concepto cultural del prefijo *narco* existiendo una cultura dominante y sub culturas (Hall y Jeferson, 2006) en lo que ha denominado *alta narcocultura y baja narcocultura* refiriéndose a la primera como la construida a partir de las relaciones asimétricas de poder adquisitivo económico en Sinaloa con grandes propiedades en fraccionamientos, la adquisición de artículos y vehículos de lujo, mientras que la segunda categoría obedece a la cultura y religiones populares donde destacan los *narcocorrido*s, las *narco series* o las *narconovelas.*

Por su parte, el narcomenudeo se ha extendido como concepto, término y fenómeno en el presente milenio y será entonces que al insertarse en el marco de referencia del régimen internacional de prohibición y de las relaciones políticas, sociales y mediáticas del narcotráfico, la inseguridad y el crimen su forma de reproducción social, económica y cultural obedecerá a la economía subterránea de las drogas (Bourgois, 2003) y a una subcultura urbana (Cohen, 1972).

Siguiendo la argumentación de la venta de drogas al menudeo para el consumidor final como un fenómeno urbano que oscila en la marginalidad y los límites formales del Estado Bourgois (2003), se identifican contextos y aristas de la venta al detal de drogas ilegales y su reconfiguración a finales de los años ochenta y los cuales serán definitorios para el vínculo entre la construcción de un enemigo interno, la adopción de la narrativa

criminalizante y mediático espectacular del narcotráfico en una versión al menudeo ente los que destacan: 1) La expansión de la demanda y oferta de cocaína fumable o crack, 2)el abaratamiento de la transportación global de mercancías y el auge de las tecnologías digitales, 3) las políticas públicas de tolerancia cero y la agenda permanente de guerra contra las drogas, sobre todo en barrios marginados y países latinoamericanos o en proceso de desindustrialización, 4) la violencia interpersonal, delincuencia menor y el crimen organizado toman una predominancia que suplantan la narrativa de la violencia política de la guerra fría así como el fin del relato revolucionario esto cumpliría con dos premisas: la primera la construcción de un enemigo interno depositada en la inseguridad ocasionada por los mercados violentos de drogas ilegalizadas siendo los sujetos punibles en su mayoría personas jóvenes varones, mujeres y actores con poca escolaridad u oportunidades de inserción institucional. Sin embargo, al ser estos actores sujetos complejos e inmersos en dinámicas ocultas o en los límites de la legalidad reitero que me concentraré en narración de la construcción del fenómeno del narcomenudeo desde una perspectiva de los actores institucionales.

Dicho esto, el desafío de construir una historia social del narcomenudeo, que es el objetivo de esta tesis, a partir de la interacción local y global de normas y actores es imprescindible analizar el origen del concepto y del antecesor léxico inmediato que es la estructura del concepto narcotráfico. Asimismo, se designa como es que el término narcotráfico, el cual como vengo argumentando ha fungido como un sistema de control mediante el despliegue de dispositivos en los campos de producción política y social.

Ya que el objetivo general supone identificar cómo es que se ha configurado el narcomenudeo a partir de los marcos de interacción en multinivel, donde la retórica y aproximación a la seguridad y al crimen organizado han dominado la agenda de investigación, las implicaciones derivadas del régimen internacional de prohibición, que como señalan en diferentes trabajos y momentos desde Rosa del Olmo (1992), Astorga (2004) y más recientemente Zavala (2022), suelen contener una mirada estigmatizante y criminalizadora cuando se trata de temáticas relacionadas con drogas, lo que ha dado como resultado que el narcotráfico se haya convertido en una ficción rentable para la política y para los medios de comunicación, donde se ha logrado afianzar una representación e imaginario construido que invisibilizan ciertos aspectos como los espacios de producción agrícola, al

señalar que los intermediarios o simplifican el continuum de uso de sustancias psicoactivas cuestión que afectará de manera directa e indirecta por ejemplo con los espacios de prevención, tratamiento y rehabilitación de personas con consumo problemático o también ha entrampado o las ineficacias para desincentivar la venta de drogas ilícitas.

Estas narrativas se construyen a través de supuestos de origen que se puede denominar como ficticios o mitológicos e incluso conspirativos, por ejemplo, la intromisión probada de la CIA en el tráfico de drogas internacional (Webb,1996;1998; USDOJ/OIG, 1997) o la ATF con la entrega controlada de armas, fórmula de representación correspondiente a un daño mayor, a esto Oswaldo Zavala lo ha denominado *narconarrativa* la cual parte de la siguiente premisa: los "cárteles", con un "gran poder"-económico, social militar-, ante "la ausencia y debilidad histórica del Estado mexicano", desataron una guerra por el control de las rutas y plazas del mercado de la droga, provocando "una tragedia de dimensiones colosales…". (Zavala, 2022: 21).

Desde esta perspectiva, podemos mencionar algunas suposiciones, sirva de ejemplo la siguiente: las grandes cifras de dinero obtenidas por la venta de drogas ilícitas entre ellas la cifra de un billón de dólares señalada por la revista Forbes vinculada al traficante sinaloense Joaquín Guzmán y señalado como un CEO del "Cártel de Sinaloa y colocándolo en la lista de personas más ricas en el año 2009 con la posición 701 y el número 61 como el más poderoso en el año 2013" (Forbes, 2013). Otra premisa ha sido el gran poder corruptor o nociones de control operativo cuasi empresarial con un formato vertical como grandes empresas trasnacionales con el llamado *jefe de jefes* y un supuesto poder para establecer unidades de control de precios parecidos a los del cártel de petróleo, cuestión que ha sido refutada por Astorga (2004) y Zavala (2018) quienes mencionan que esta capacidad para organizarse de manera vertical debido a la naturaleza ilegal es cuestionable incluso que el término cártel es poco adecuado para describir el fenómeno del tráfico ilícito de drogas.

Este modelo también delegó la configuración de la persecución y la narrativa del narcomenudeo, ya que se emplearon para dar explicaciones paralelas, por ejemplo, la idea de un cártel interno, el control vertical de los negocios y el crecimiento y expansión del mercado interno a partir de la figura de *grandes operadores* (USDT, 2009) cuestión que será desarrollada en el siguiente apartado, pero que resulta imprescindible su recuperación en

vísperas de integrar la pertinencia de la catalogación del enemigo interno y criminal local. Regresando a la genealogía del narcotráfico en 1989, durante el juicio y proceso a los traficantes sinaloenses Ernesto Fonseca y Rafael Quintero detenidos y encarcelados por el supuesto homicidio de un agente de la DEA en el estado de Jalisco, se comenzó a construir una narrativa respecto a que eran los *narcos de narcos* y señalaban amplias sumas de dinero producto de los negocios ilícitos incluso el periódico Washington Post señaló que al interior del penal estos detenidos gozaban de lujos y privilegios como tener cerámica oriental, refrigeradores baños de mármol cama *king size* con sábanas de lujo (Branigin, 1989), se volvió internacional una narrativa que se consolidaría pero que llevaba décadas gestándose en primer lugar la supuesta debilidad institucional, segunda el poder corruptor y tercero el poder para ejercer violencia y la capacidad para continuar los. negocios ilícitos aun estando recluidos.

En este sentido, al construir un relato sobre los monstruos o grandes jefes del negocio que operaban en México se cimentó una reputación internacional que fue en aumento durante los años noventa y aunque exista ficción de estas narrativas, esto no omite que las ganancias rentables de este mercado sean amplias y que las conexiones para la venta sean de carácter trasnacional basadas en la intimidación y la corrupción; es innegable el apoyo de algunas autoridades de distintos negocios. Al respecto, según el informe de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (CICAD OEA) 2013 se menciona un estimado de 320 billones de dólares y que el mercado de drogas no se encuentra integrado verticalmente, pero las organizaciones mexicanas controlan *mucho* (much of) del comercio de cocaína esto es relevante ya que durante los años ochenta el narcotráfico como concepto supondrá una relación directa con el estimulante extraído del arbusto procesado de hoja de coca (OEA, 2013).

Por lo que, el concepto de narcotráfico más que dar idea del tráfico ilícito de drogas supone un andamiaje politizado polisémico y que será el origen para que el narcomenudeo pueda dotar de sentido las transformaciones a nivel del control local del fenómeno paralelo de larga data como lo es la venta de drogas al detal con las particulares transformaciones del fin de siglo y en el contexto de la modernidad tardía por lo tanto las instituciones estarán inmersas en una historicidad particular y en un sistema de control en especial asumiendo la premisa antes indicada sobre la *narconarrativa,* la cual también faculta en la tensa relación

bilateral, la noción del enemigo interno para México y el enemigo externo para Estados Unidos, dando por hecho y construyéndose como consenso dentro del ámbito de las estrategias de seguridad nacionales, bi nacionales y regionales la aproximación punitiva, militar y la notable penetración en los campos sociales y culturales tales como los evidentes vínculos con el fomento a la corrupción, el socavamiento de la seguridad pública, el desafío al estado de derecho y en algunos momentos debilitando y confrontando a los estados nacionales y comprometiendo el espacio político.

Tomando esto en cuenta, el narcotráfico además del supuesto depositado en la *narconarrativa* es un dispositivo de seguridad entendido como una práctica de vigilancia dislocada geopolíticamente donde hay un "caso, riesgo, peligrosidad y crisis*"* (Foucault, 2017: 82). Al acercarnos a esta propuesta se pueden identificar pautas para poner en perspectiva tres grandes aspectos que estarán delimitando y configurando el fenómeno regional del así llamado narcotráfico latinoamericano (Del Olmo, 1992; Santana, 2004; Rodrigues y Labate, 2019), así como la versión particular del narcotráfico mexicano (Astorga, 2004; Enciso, 2009; Valdés, 2015) siendo las tres dimensiones construidas a partir del análisis institucional a través interacción entre la americanización, la securitización, las transformaciones y resistencias dentro de la reconfiguración del poder político en Latinoamérica y México, al respecto del Olmo (1992) también señala que el *narcotráfico* latinoamericano se va a distinguir como fenómeno histórico y político por emerger con gran fuerza y violencia en el marco socioeconómico y político de la región en la década de los ochenta.

Estas pautas están delimitadas por la expansión de la americanización de ciertas políticas en especial las del control de drogas, de la gestión de riesgos y amenazas a su seguridad nacional en la vertiente de las guerras no convencionales, guerras de baja intensidad esto mediante la incorporación paulatina y sostenida de la securitización capacitación respecto a lo que corresponde a una serie de controles sobre el poder armado.

En este sentido, tomando en cuenta que el *narcotráfico* supone un caso el cual se inscribe en el proceso dentro del modo de producción capitalista funciona como una de las partes del desarrollo de la economía subterránea o criminal, además es según Adalberto Santana (2004) señala que un fenómeno muy dinámico, complejo y flexible que se desarrolla

de forma permanente. Se expresa como "un conflicto que constantemente choca con la normalidad del sistema dominante" (Santana, 2004: 23). Tomando en cuenta que se expande en el marco de interacción entre las normas locales y globales en el contexto de la desregulación estatal afectará el modo en el cual se desenvuelve el control de los circuitos de intercambio de drogas ilícitas y supone un fenómeno económico que se puede identificar como una empresa o industria ilegal, a este respecto entre mayor autonomía relativa de las actividades ilícitas, informales y el sistema de cooptación corporativa al cual el modelo autoritario estaba cimentado mayor descontrol del estado.

En este orden de ideas, desde la perspectiva de del Olmo a partir de los años ochenta con los proyectos de securitización y combate armado así como la expansión de los mercados de drogas ilegalizadas se ha instruido *un nuevo orden económico de la droga* y por otro, hubo un impacto en Latinoamérica derivado de una guerra norteamericana contra las drogas cuestión que facultará a la extensión del combate extraterritorial a partir de la doctrina del crimen organizado trasnacional así como la figura construida a partir del terrorista

Al respecto Norberto Emmerich (2015) señala algunos postulados relevantes para integrarlos a este corpus analítico del narcotráfico en afán de construir un entendimiento similar del narcomenudeo respecto a las relaciones políticas que se han estructurado de manera asimétrica y desproporcionada incluyendo la tesis de Zavala el cual entiende que las relaciones construidas de dominación control y poder han sido construidas a partir del desarrollo del estado nacional y el tipo de sistema político. Y su interacción con otros estados y organismos internacionales, por lo tanto, para Emmerich:

> "El narcotráfico sólo puede ser comprendido estudiando la formación histórica del Estado nacional, la vinculación del narcotráfico es más fuerte con el Estado que con las drogas […]Definir al narcotráfico como tráfico de drogas es etimológicamente correcto, ontológicamente equivocado y políticamente inútil. El narcotráfico es un proceso organizacional cuya finalidad es conquistar territorio para producir o vender drogas. Sin ese monopolio cuasi-legítimo de la violencia en un territorio determinado puede haber comercio de drogas, pero no hay narcotráfico" (Emmerich, 2015: 20).

Al incluir una perspectiva sobre el modelo que adquirió el combate al tráfico ilícito de drogas ilícitas desde el sistema político y desde lo organizacional como mundo de posibilidad, será a través de las instituciones encargadas de regular, castigar y vigilar el

cumplimiento de las normas respecto a las drogas ilegalizada que las competencias entre las áreas jurídicas, de seguridad y de salud resaltarán como concurrentes. En este orden de ideas, los límites de actuación son complejos e imbricados, por ejemplo, la ley contra la delincuencia organizada permitió la extra territorialidad de agencias norteamericanas como el FBI o la DEA, mientras que la persecución del tráfico ilícito de drogas como agenda programática articuló, a la entonces Policía Federal y la Agencia Federal de Investigaciones como agencias policiales que estuvieron vinculadas con el combate al narcomenudeo y narcotráfico principios del milenio que relevaron el trabajo que llevaban haciendo la Policía Judicial Federal aunado a la larga data de combate al narcotráfico por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y el Ejército Mexicano (Contreras, 2012).

Por ello que, el devenir en el control y combate al tráfico ilícito de drogas para comercio internacional que se contemplan algunas instituciones, actores, normas acuerdos y leyes que intervienen a nivel local y global, a lo cual existe una disputa de competencias por lo que respectan a normas jurídicas y pertinencia regulatoria adicionales a las señaladas anteriormente, como puede ser las competencias, locales y federales, es decir las policías locales, los jueces, ministerios públicos, así mismo, si retomamos la perspectiva multinivel algunas instancias bi laterales e internacionales también delinean el modelo para el control del *narcotráfic*o y el cual en parte se configuró a partir de la relación política con Estados Unidos y de su status como consumidor de mercancías y de drogas ilegales tomando en cuenta como ya se ha señalado en capítulos anteriores que la demanda de estas sustancias en particular mariguana y heroína comprendió el mercado dominante para tráfico ilícito por parte de traficantes mexicanos o los flujos que circulaban por el país de los años 1930 (Pérez-Montfort, 2015) hasta mediados y finales de los años 1980 (Smith, 2021). Mientras que en un segundo momento la cocaína y metanfetaminas reconfiguraron el tráfico ilícito trasnacional ante la época de cierre de la ruta del tráfico ilícito de cocaína vía Miami y el caribe y la reconfiguración de las rutas con el Tratado de Libre Comercio y la aceleración de la globalización.

En este sentido este apartado no se intentó delimitar a todos los actores ni tampoco una línea del tiempo del desarrollo del concepto o término narcotráfico y únicamente recupera de manera exploratoria algunas de las relaciones y actividades para con ello ilustrar la complejidad, diversidad de actividades y actores que se involucran en el control del tráfico

ilícito de sustancias ilegalizadas y algunos delitos que se han convertido en concurrentes por ejemplo la doctrina del crimen organizado y la complejidad de redes nacionales e internacionales que sugieren el control del llamado narcotráfico el cual además ha tendido una serie de cambios y reestructuras administrativas entre ellas la que ocupa explicar cuando se distinguió de manera jurídica la venta en grandes volúmenes y la versión en pequeñas dosis a partir de reformas definidas a la ley, así como cambios paulatinos y acelerados en el entramado de la configuración de un marco amplio de intercambio de mercancías ilegalizadas y un contexto de globalización internacionalización de políticas.

3.5 Comercio de drogas a pequeña escala Narcomenudeo

A continuación se presenta el cierre el segundo capítulo y se cimenta a partir de una construcción conceptual-contextual del término narcomenudeo, recuperando la propuesta teórica y analítica utilizada para el narcotráfico entendido como un *dispositivo de seguridad* Foucault (2006)[24] y como un término polisémico que denota relaciones asimétricas de poder en un complejo intercambio de relaciones multidireccionales y multi origen a partir de interacción entre el sistema internacional de control de drogas y del régimen internacional de prohibición (Collins, 2012a).

En este sentido, el control de los mercados locales de drogas ilegalizadas van a tener una correlación en la expansión contracción y contradicciones de la agenda posterior a la guerra fría, al proceso de globalización y doctrina de seguridad nacional y antiterrorista los procesos de securitización americanización (Nelken, 1997; Van Eltern, 2006) de las políticas antidroga en particular los sistemas penales y el eje dominante hacia la criminalización, uso de inteligencia policial y semi militarizada con una atención prioritaria al tráfico de drogas, lavado de dinero y actividades criminales (Andreas y Nadelman, 2006: 236) y las características locales del sistema político mexicano como el autoritarismo la reconfiguración del poder político con marcos institucionales complejos y fisuras como la corrupción (Escalante, 2000; Santana, 2004: Flores, 2013; Smith, 2016; Pansters, 2018) así la influencia del modelo de comunicación política enmarcada en la personalización y la mano dura (Whitford y Yates, 2009) serán el horizonte de posibilidad de la expansión, (des) control y configuración del narcomenudeo.

Si bien, existe agencia o autonomía relativa de los actores inmiscuidos en el narcomenudeo (Bourgois, 2003; Zamudio, 2008) en particular, vendedores (Zamudio, 2012), traficantes y personas que se encuentran en actividades cercanas como el almacenamiento,

[24] La mirada foucultiana que recupero en esta tesis reside en las conferencias dictadas a finales de los años setenta (Foucault, 2006) las cuales se alejan de las propuestas súper estructurales rígidas marcadas por el presentismo, el critponormativismo y relativismo (Habermas en Vázquez-Rocca, 2009) y dialogan con la genealogía recuperada desde el *narcoanálisis de la guerra contra las drogas* (Rodrigues y Labate, 2019) identificando además la noción de *dispositivo* y *saberes poderes* como esquemas de control en el largo proyecto de modernidad con capacidad y agencia de los sujetos para cuestionarlos y flexibilizarlos .

vigilancia de puntos de venta o de dinámicas ilícitas como enlace o partícipe de autoridades corruptas (Bacca *et al*., 2015; Torres, 2019) será a partir que de esas tensiones entre los actores y los cuerpos intermedios donde se genere conflicto con la autoridad, comunidad y las instituciones (Cameras, 2006) y es ahí cuando toma un carácter relevante como un asunto de interés y la necesidad de comprender la configuración del fenómeno el cual se vuelve un área de claroscuro, compleja y riesgosa en términos de abordaje *in situ*, tanto por la dificultad de acceder al campo o por la información sensible derivada.

En este sentido, como ya se ha mencionado en apartados anteriores, la propuesta interdisciplinaria de esta tesis reside en una recopilación socio histórica enfocada en textos y documentos producidos por actores institucionales y oficiales para su posterior interpretación y procesamiento mediante el análisis de contenido etnográfico y no tanto concentrados en espacios de la microsociología.[25] Habiendo dicho esto, para delimitar la venta de drogas ilegalizadas al menudeo hay que señalar que se integran algunos presupuestos de la concepción del narcotráfico (Astorga, 2004; Zavala, 2018; 2020; 2022) es por ello que el narcomenudeo estará cubierto por representaciones mitológicas y ficticias (en los campos de producción cultural, social y política inmersas en prácticas las del mundo de vida de los vendedores (Chomczyńsk *et al*., 2022; Zamudio, 2012) comerciantes, distribuidores e incluso en los consumidores de los mercados de drogas a pequeña escala y al ser algunas de estas actividades prohibidas o ilegalizadas los campos de acciones de estos sujetos pueden estar vinculadas o relacionadas con algunos otros mercados informales (Zamudio, 2008) o ilícitos (Torres, 2019) en áreas geográficas delimitadas (Vilalta, 2009; Díaz-Román, 2022).

Cuestión que durante los años transcurridos entre el principio del milenio y su primera veintena se construirá una narrativa política y mediática a partir de enunciar y nombrar enemigos internos y criminales estereotipados (Fernández y Salazar, 2008; Romandía *et al*., 2018) , permitir las estrategias de mano dura, cero tolerancia y extender el proceso de securitización urbana mediante la asignación de recursos económicos en la administración pública en particular las áreas de procuración de justicia y combate a la inseguridad a partir de lo que se ha denominado como; *el lenguaje como movilizador de*

[25] Para ver más sobre etnografía en puntos de venta de drogas en la zona metropolitana de la CDMX (Zamudio, 2012; Rivera y Aguayo, 2017; Chomczyński et al., 2019; 2022). En la Ciudad de Guadalajara (Torres, 2019). En el norte del país (Morín, 2015) y en Nueva York (Bourgois, 2003; Cajas, 2004).

recursos públicos (Emmerich, 2015) y será la mancuerna a partir del binomio político mediático que el narcomenudeo.

Tomando esto en cuenta, al recuperar que partimos de la pregunta ¿cómo se ha configurado el fenómeno del narcomenudeo en la ciudad de México a partir de la interacción entre: normas, acuerdos y leyes en el marco de interacción a nivel global y local. Es imprescindible delimitar a partir de origen lingüístico al narcomenudeo como fenómeno que supondría el comercio de drogas a pequeña escala. Y al igual que la complejidad que se destaca en el apartado anterior por contener el prefijo *narco*, la construcción narrativa e institucional el *narcomenudeo* y tener por segundo lexema *menudeo* obedece a una operación de mercado que sugiere en primer lugar que es una mercancía (Gootenberg y Campos, 2015; Madrazo, 2016) que se oferta dentro del mercado global de drogas ilegalizadas *drug trad*e (Collins, 2012a) y tendrá como horizonte de enunciación representaciones colectivas y sociales construidas a partir de las ideas preconcebidas y exacerbadas que perdurarán entre: las dinámicas arraigadas de los mercados informales, la ilegalidad y una reproducción de ciertos aspectos del narcotráfico y la agenda de la inseguridad (Andreas y Nadelman, 2006) en particular debido a que los asuntos criminales o delictivos en la ciudad cada vez eran más violentos como el secuestro y homicidio (Cruz y Servín, 2010; Díaz-Román, 2022).

Por lo que se rebasarán las nociones descriptivas del narcomenudeo sólo como actividad comercial enmarcada por el régimen internacional de prohibición de drogas, donde se oferta una mercancía: las sustancias psicoactivas ilegalizadas (en particular marihuana, cocaína y metanfetaminas) a partir de actividades que incluyen la venta, compra, transporte, consumo, posesión de drogas con fines de distribución destinadas al consumidor final o para la venta en pequeñas cantidades. Esto implica que al igual que el narcotráfico, y como he venido sosteniendo y bajo las premisas propuestas por (Astorga, 2004: Enciso, 2009; Smith, 2021; Zavala, 2022) lo *narco*, construye una serie de mitos y representación, pero también permite que a nivel institucional y político se deleguen relaciones de poder y se reproduzcan lugares comunes (Rodríguez y Mastrogiovanni, 2018).

A diferencia del largo proceso de construcción simbólica de la figura del narcotraficante, el narcomenudeo tendrá tres características: primero estar enmarcada históricamente en un contexto de control exacerbado mediante las políticas de cero tolerancia

y la mano dura en las ciudades inmersas en procesos intensos de securitización derivados por la guerra contra el terrorismo y el control de la inseguridad en las ciudades bajo el modelo norteamericano, segundo ser concurrente a la aceleración de los procesos de comunicación a partir de sociedades mediatizadas dentro del nuevo milenio, por ejemplo con la aparición del internet y tecnologías de la información y por último el contexto político, social, político y económico de la transición democrática y la reconfiguración del poder político cuestión que faculta y exacerba la agenda personalista ya no solo a nivel presidencial sino también local respecto al control de la seguridad teniendo como horizonte una crisis y aumento de inseguridad, lo cual es un desafío ya que presentan una amplia diversidad y dispersión geográfica compleja (Vidal, 2020).

Para estudiar un problema reciente como el narcomenudeo es necesario conocer y analizar las diferentes posturas sobre su emergencia y definiciones existentes sobre el mismo. Identificar las atribuciones, adiciones y delimitaciones conceptuales es de utilidad para hacer inteligible un fenómeno, comprender el actuar de las personas y explicar las situaciones alrededor de dichas acciones. Cuando estudiamos un concepto nos remitimos al contexto donde surge, los procesos y su impacto en el desarrollo, popularización y uso, así como las modificaciones en el contenido al que se refiere. En este sentido, los trabajos de Reinhart Koselleck son los más recurridos entre historiadores debido a la discusión alrededor de conceptos fundamentales como Estado o moral. Pese a que no se puede pensar en el término narcomenudeo como un concepto de la envergadura de los analizados por Koselleck, las herramientas del análisis conceptual pueden ayudar a tener una mejor comprensión de los conflictos derivados de la dificultad de contar con una definición unívoca, esto solo es posible en la medida de que se observe históricamente la trayectoria del concepto, es decir, *historizando*, que no es otra cosa que identificar las diferentes concepciones, crisis y manifestaciones del concepto en el mundo, en la vida cotidiana, como sujeto de estudio científico y como parte de las narrativas institucionales y disciplinares que le han otorgado sentido al paso del tiempo (Girola, 2011). Cabe aclarar que los retos actuales derivados de la aceleración de los procesos y de un ritmo de vida caótico donde las situaciones y procesos tienen lugar en tiempos mayormente reducidos, han dado paso a que las palabras y los conceptos mismos, así como las definiciones sufran cambios tan rápidos que pueden pasar desapercibidos.

El problema no radica en si existe o no un consenso en las definiciones de narcomenudeo o las distintas perspectivas disciplinares alrededor de la construcción de éstas, sino sobre la capacidad de la palabra para convertirse o ser entendida o no como un concepto, de acuerdo con Palti, para que una palabra llegue a ser un concepto debe trascender el tiempo y el espacio más allá de su contexto, esto sin importar la existencia de una definición unívoca, esto puede indicar que efectivamente narcomenudeo es un concepto que ha trascendido el espacio de manera que se mueve entre el contexto local y global, es decir, cuando diferentes ideas alrededor de la palabra comienzan a formar parte de las connotaciones propias de la misma, en diferentes momentos en una línea temporal, y con una historia común de trasfondo (Palti, 2005).

De esta forma, el proceso metodológico para la comprensión y análisis conceptual implica la ubicación en tiempo y espacio de las condiciones que generaron el término y la configuración de una secuencia histórica que permita observar en el presente como se ha cargado de significados en el tiempo y acerca de él, teniendo en cuenta que este proceso es irreversible e inevitable en la medida de que la construcción de significados es asíncrona. Los conceptos caducan pero también se transforman, de modo que después de dichos procesos ya no dan cuenta de la misma realidad aunque en términos semánticos se refieran a lo mismo, y esto es resultado de que las condiciones contextuales nunca permanecen iguales, de modo que las experiencias de los actores involucrados refieren a situaciones completamente distintas, ante esta situación el concepto puede expandir su horizonte de significación, es decir, abrazar las nuevas construcciones definitorias y de experiencia o reducirse de modo que otro concepto deba reemplazarlo (Girola, 2011).

Para lograrlo, la perspectiva histórico-social de Eric Hobsbawm es utilizada como una herramienta metodológica que permite tener una visión amplia, en la cual se reconoce a la historia de la sociedad en su conjunto. Y es que, en el contexto de la década de los años 1960, cuando se pasó de una historia historizante a otra de tipo estructural, el estudio de grupos obreros, subalternos o desfavorecidos tomaron una relevancia inusitada o poco vista. En este caso, se toma en cuenta la temporalidad sexenal entre el comienzo del siglo XXI y el año 2002, esto con el motivo de simplificar metodológicamente la ubicación espacial y temporal quizá no del fenómeno del narcomenudeo, pero si del término nombrado en una

serie de conexiones entre dispositivos-saberes-poderes en un contexto global e interconectado en la historia de la sociedad.

Para que un fenómeno como el narcomenudeo sea considerado como un problema que afecta a la sociedad contemporánea es necesario conocer cómo es que gradualmente se fue transformando el problema mundial de las drogas a partir del concepto de narcotráfico como una estructura global de comercio ilícito a gran escala a un fenómeno local y cotidiano el cual tiene antecedentes de larga duración (Pérez-Montfort, 2015). La necesidad entonces de construir desde la historia social el narcomenudeo implica analizar el concepto, su posible origen y transformaciones en un periodo corto de tiempo.

Derivado de este hecho coyuntural, el primero de octubre de 2002 se consolidó la integración regional militar de México, Canadá y Estados Unidos, a partir del instrumento denominado Comando Norte o *US North Com,* dentro de los objetivos indican proteger, a la nación norteamericana, detectar amenazas a las seguridad y conducir modelos de seguridad con sus aliados (North Com, 2021) y aunque esta decisión pareciera no afectar de manera directa el control interno del narcomenudeo si atrae y expande un modelo de respuesta securitizada y de cero tolerancia a los asuntos que representan una amenaza aplicando estas medidas en los dispositivos de control criminal ya que según algunas autoridades y agencias internacionales se vincula el terrorismo con actividades ilícitas por lo que la figura del tráfico ilícito de drogas se masificará como un eje conceptual para definir lo punible y un esquema amplio de americanización en las políticas de control anti droga.

Retomando el hecho de que no es posible establecer la fecha exacta en la que comenzó a utilizarse el término narcomenudeo, lo que sí es destacable es que, en el año 2002 en el informe de labores de la Procuraduría General de la República, en el apartado Fiscalía Especializada para la atención de delitos contra la salud, se distinguió la modalidad de venta de drogas al menudeo del narcotráfico. Para el siguiente informe correspondiente al año 2003, hace su aparición el término narcomenudeo para designar a las transacciones ilícitas de venta a detalle, en este documento se propone la creación de un Programa Nacional para el Combate al Narcomenudeo (PGR, 2003) cuyos objetivos fueron la prevención, tratamiento y reducción de la oferta de drogas en esta modalidad. Así mismo al incorporarse al universo institucional se publicó en el Diario Oficial una serie de criterios correspondientes al intercambio de

información, criterios y niveles de coordinación entre entidades federativas, delegaciones de la PGR y las unidades administrativas en particular las unidades especializadas en delincuencia organizada y las delegaciones especiales las cuales se convertirían en las fiscalías contra narcomenudeo, además se define por primera ocasión al narcomenudeo como: la posesión, el comercio o suministro ilícito de estupefacientes o psicotrópicos, cuando por la cantidad y presentación o forma de embalaje u otras circunstancias objetivas, se determine que es para su distribución en dosis individuales (DOF, 2003).

Como ya he mencionado a mediados de la primera década del 2000, el uso del término narcomenudeo pasó de no utilizarse en el primer año del gobierno de Vicente Fox a ser un neologismo para designar una serie de actividades criminales y prácticas que durante los últimos años de la primera presidencial de a ser parte programática de la agenda local en el Distrito Federal y del Gobierno Federal. Así como, también de las preocupaciones ciudadanas es por ello que dentro de los cambios y reacomodos durante la transición democrática el narcomenudeo será un punto de unión entre la agenda ciudadana de participación y el gobierno y la inclusión de sistemas de participación ciudadana, por ejemplo durante se construyeron a nivel institucional implementación de nuevos esquemas de participación ciudadana a tal grado que se instalaron por ley en Consejos Consultivos de Participación Ciudadana y los cuales se *des* electorizaron y comenzaron a confluir una nueva agenda de seguridad ciudadana ya que en aquel momento surgió una mayor exigencia a las autoridades ante la inseguridad en particular el robo y el secuestro.

En respuesta a esto, los grupos ciudadanos se vincularon con autoridades para formular campañas para promover la denuncia anónima a números policiales, es a partir de este hecho que un desafío para el control de la venta de drogas a pequeña escala residirá en la forma de persecución la denuncia del narcomenudeo representaba en algunos casos una forma de participación y vinculación ciudadana con autoridades, a este respecto se reportó en el Informe de la PGR del año 2002 la presencia de actividad para controlar centros de venta de drogas al menudeo y "picaderos" esto destaca debido a que durante seis años que comprende entre 2003 y 2009 se conformó una fuerte campaña por informar en medios de comunicación y por parte de autoridades la denuncia y aparición de centros o puntos de venta fijos o narcotienditas (PGR, 2003).

Al respecto hay dos puntos notables que se encuentran en disputa en la literatura y en la opinión pública, el primero es el aumento en el consumo de drogas ilegales durante el periodo de Vicente Fox 2000-2006 al Felipe Calderón 2006-2012, y esto ocasionaría una disputa por el control de los mercados locales de drogas y que el narcomenudeo se convirtiera en un enlace directo entre el aumento de violencia y crimen. No hay evidencias que muestren que los homicidios aumenten como efecto directo del aumento de la demanda interna. Según la comparación de la ENA 1998 y 2008, la proporción de población de la Ciudad de México, entre 12 y 65 años, que reconoce haber probado drogas ilícitas alguna vez en la vida pasó de 5.3 % en 1998 (CONADIC, 1998) a 5.5% en 2008 (INSP, 2009); lo que significó un crecimiento de la demanda menor al 10%, por lo que descarto esta propuesta como la hipótesis de la correlación directa. Sea probada o no esta hipótesis en la práctica de política pública y de reordenamiento del sistema de control de drogas y de seguridad urbana la aparición de la figura de narcomenudeo se convierte en una razón instrumentalizada punible a partir información poco clara o confusa, por ejemplo, mencionando una cierta cantidad de puntos de venta fijos, o narcotienditas, que oscilaron entre 1200 y 2000 entre 2004 y 2008 (Vega, 2012).

Dadas estas condiciones, la irrupción del término narcomenudeo diversificó la persecución de los delitos contra la salud en el ámbito local. Por ejemplo, con la participación del Grupo de Reacción Inmediata de la Policía del Distrito Federal, lo cual permitió la captura de vendedores al menudeo en zonas como Iztapalapa, Venustiano Carranza y Ciudad Nezahualcóyotl en el Estado de México, con la detención de *Ma Baker*, famosa líder de un grupo criminal dedicado a la venta de drogas, en principio en fiestas de sonido en la vía pública y después como distribuidores de drogas para el Valle de México.

Las principales características del llamado *Cartel de Neza*, fueron la violencia para controlar los puntos de venta, el poder corruptor de autoridades y policía local y federal, así como las relaciones comerciales con traficantes sudamericanos, sin necesidad de acudir a los grandes traficantes mexicanos con injerencia internacional (Caporal, 2012). Si bien, el fenómeno del narcomenudeo no es privativo de la Ciudad de México y la zona metropolitana, lo cierto es que alcanzó una mayor proyección en estas áreas, debido a que concentran una mayor población. Además, la ciudad es un espacio de comercio y con grandes flujos de mercancías ilegales y mercados informales procedentes de todo el mundo. Por dar un

ejemplo, en el informe de la PGR de 2003, las incautaciones reportadas indican el decomiso de goma de opio, mariguana y cocaína, pero también de audiocasetes, discos compactos piratas, mercancía robada y sin registro. En este orden de ideas, pese a parecer un fenómeno particular que se presenta únicamente en el ámbito local, el narcomenudeo se desarrolla a escala global, de manera que historizar este problema también implica contemplar tres grandes esferas: el campo internacional, el campo del estado/nacional y el campo local.

Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno del Distrito Federal, las dinámicas fueron similares a las del esquema neoyorkino de cero tolerancia, que era el modelo predominante para el control de las ciudades en aquella época, por lo que los cateos sin orden, los operativos en contra de la criminalidad con muchos agentes, son relatados en la prensa nacional y local, así mismo se tomaron medidas como el operativo mochila segura, operativos rastrillo y una criminalización en particular de personas jóvenes de escasos recursos y baja escolaridad, esto aunado al aumento de la criminalidad en entornos adversos provocó que entre 1998 y 2002 aumentará la población de personas jóvenes en los reclusorios (Gascón, 2002). Esto destaca debido a que las instituciones y sus estructuras reproducen valores y concepciones sobre lo que es adecuado para la sociedad (Carvente, 2014), de esta manera, la administración pública, las instituciones y sus lógicas irán permeando el actuar en los ramos administrativos de su competencia.

Como se puede observar en la tabla 4, se realizó una selección de palabras que pueden relacionarse con los fenómenos del narcotráfico y el narcomenudeo, esto con la finalidad de analizar qué tan presentes estaban en los informes de labores de la PGR, debido a que en dichos documentos se identificó que la palabra narcomenudeo hizo sus primeras apariciones y se identificó a esta práctica como un nuevo problema de seguridad para la población y ante la cual las autoridades debían actuar, de esta forma, los informes permiten conocer cuáles fueron las estrategias, operativos y resultados en esta materia por la dependencia.

Tabla 4. Porcentaje de términos utilizados en Informes de labores de la PGR 2001-2006

Término	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Promedio	Moda	Media	TOTAL (n)
Narcotráfico	11.2	11.1	23.6	23.6	27.0	8.9	17.5	17.4	23.6	552
Drogas al menudeo	0	5.4	25.4	25.4	42.3	17.7	19.4	21.5	25.4	130
Narcomenudeo	0	0	29.9	29.9	52.9	9.2	20.3	19.5	0	87
Crimen	11.4	10.1	26.6	26.6	29.1	3.8	17.9	19	26.6	79
Crimen organizado	13.3	3.3	26.7	26.7	43.3	3.3	19.4	20	3.3	30
Seguridad	12.3	14.3	23.0	23.0	26.6	6.5	17.6	18.6	23	666
Droga	19.7	22.0	28.6	28.6	19.7	9.9	21.4	20.9	19.7	395
Narcótico	14.4	18.0	23.4	23.4	14.4	7.2	16.8	16.2	14.4	111
Estupefaciente	14.7	23.2	18.9	18.9	14.7	4.2	15.8	16.8	14.7	95
Delincuencia	17.0	12.6	24.4	24.4	24.9	6.9	18.4	20.7	24.4	635
Delincuente	4.4	2.9	4.4	4.4	82.5	1.5	16.7	4.4	4.4	137

Fuente: elaboración propia con datos de Informes de labores PGR (2001b; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006).

Las palabras seguridad y delincuencia son las que mayores números reportan, es decir, son los términos más recurrentes en los informes entre 2001 y 2006, esto no es de extrañarse debido a que estos documentos tienen la finalidad de dar cuenta de las labores de la PGR y la seguridad es uno de los ejes principales de sus labores. Sin embargo, lo que esta tabla quiere discutir es el aumento en la aparición de términos como narcotráfico y narcomenudeo, ya que esta información es significativa. Por ejemplo, el término narcotráfico está presente desde el primer informe, pero para el año 2003 comienza a duplicarse, situación que se sostiene tres años, mientras que en el caso del narcomenudeo el término pasó de no figurar en los informes a alcanzar un pico de 55 menciones en 2005, esto puede indicar que entre 2003 y 2005 comenzó a ser visible un fenómeno que hasta ese momento no había representado quizá un problema mayor.

Cabe señalar que el término *drogas al menudeo* durante los dos primeros informes 2001 y 2002 son tomados como el único concepto o término reportado para referirse a la venta de drogas a pequeña escala y es a partir del año 2003 que comienza a ser utilizado como sinónimo de narcomenudeo cuestión que pone en perspectiva que, en el análisis no exhaustivo y exploratorio que se realizó, si este se homologara y codificara bajo el criterio de ausente o presente de la noción de venta de sustancias psicoactivas ilegalizadas para el consumidor final en pequeñas cantidades igualaría o superaría a la aparición del término narcotráfico.

Estos resultados respaldan la hipótesis de que el término narcomenudeo comenzó a utilizarse a la mitad del sexenio de Fox y que su impacto en la agenda política, mediática y en la sociedad fue tal, que se hizo necesario implementar o hacer uso de un término distinto a narcotráfico para lograr definir y delinear las características propias del nuevo fenómeno, es decir la venta a pequeña escala o en pequeñas cantidades de droga (PGR, 2003; INACIPE, 2011). Y si bien, el número de veces que una palabra aparece en un documento de este tipo no significa un aumento, en este caso de delitos, lo cierto es que la presencia de estas palabras seleccionadas implica que dentro de las preocupaciones, detenciones, denuncias y hechos delictivos las autoridades se vieron en la necesidad de indagar, definir e incluso investigar sobre diferentes modalidades de venta de drogas, ya que el narcomenudeo en este contexto tiene un carácter local e incluso novedoso.

En este sentido, al aplicar al narcomenudeo el paraguas de la delincuencia organizada, es innegable el aumento en la violencia y la violencia. Espectacular y la saña con la cual algunos grupos de traficantes secuestraron mercados locales y utilizaron la violencia para construir nuevas formas de atribución basadas en la intimidación dejando atrás las redes de solidaridad y bajo perfil (Chomczyńsk *et al*., 2019) por modelos predatorios y vinculados a la extorsión y explotación de diversos mercados ilícitos lo que dificulta conocer el peso exacto de la disputa por el mercado interno en el aumento de homicidios como se argumenta en la narrativa oficial y académica (Carroll, 2010).

También a nivel hemerográfico y periodístico detecté que se ha construido una *narco narrativa* propia de la ciudad de México en la que disputa y cambio en dinámicas del narcomenudeo pareciera tener características en cuanto a región e intensidad, concentradas

en el área metropolita y zonas cercanas a la ciudad como Morelos y el estado de México, Hidalgo y Puebla teniendo como indicador la cobertura de las masacres en la zona las cuales incluyen la muerte o asesinato de tres o más la cobertura hemerográfica y oficial señalan entre 3 o cuatro regiones donde parecieran haber tenido influencia en el mercado de drogas los siguientes grupos "La mano con ojos", "El hongo" o "cartel del centro", "La familia" y "Zetas" donde estos pretenderían alinear a vendedores, esto ocasionado a partir del abatimiento de Arturo Beltrán Leyva, "El Barbas", el 16 de diciembre de 2009 en la ciudad de Cuernavaca (Isidro, 2010) donde se generan fisuras en la agrupación de los Beltrán Leyva y, con ello, surgen conflictos por el control del comercio al menudeo de drogas ilícitas (Jiménez, 2010).

La "historia" reconstruida someramente menciona que, la organización de traficantes Sinaloenses de los Beltrán Leyva habían cooptado las zonas metropolitanas de algunos estados mediante un personaje llamado "La Barbie" Edgar Valdez Villareal, hoy extraditado y el cual ha sido señalado de participar intenta controlar el mercado de drogas mediante el narcomenudeo (Romandía *et al*., 2019) donde criminales emprenden una embestida violenta contra aquellos que no quieren mantenerse bajo su control o quieren cambiarse de bando (Morelos, 2011).

Un ejemplo es el caso de la una familia en la delegación Tlalpan el cual se describe a continuación: El 5 de octubre del 2010 en Tlalpan fue encontrada la familia Sánchez Pérez, sin vida y decapitados 5 miembros de la familia que se presumía vendían cocaína al menudeo y se negaron a aceptar vender el producto de la organización de La Barbie y fueron ajusticiados por dicha organización. Esta fue la primera masacre registrada en la zona de Tlalpan por asuntos relacionados al mercado de drogas; resalta que varios de los inculpados, admitieron que el comando armado comprendía de 15 personas que llevaban uniformes de Policías Federales habían servido de "muro" durante la decapitación y el que el jefe de escoltas apodado "el Compayito" había sido el autor de dicha operación (Jiménez, 2010).

Esto es relevante porque lejos de la construcción narrativa, según datos oficiales, al estar estos grupos intentando controlar el mercado al menudeo de la ciudad entre 2009 y 2010 creció la violencia en la zona en cuanto al número de homicidios violentos en y también se observó una la crueldad con la que se realizaron varios de los asesinatos, los cuales

incluyeron decapitaciones, ejecuciones de menores de edad, además se fortaleció la idea y cobertura de conflictos similares a los acaecidos en otros estados como el uso del cuerpo muerto con mensajes (Royacelli, 2010) y el uso de palabras como *Cártel, fragmentación y escisiones*, comenzaron a utilizarse para describir casos criminales dentro de la cobertura policiaca y policial (Bolaños, 2010).

Esto podría dar pauta para sugerir que en algunos de los órganos administrativos encargados de controlar el tráfico ilícito internacional de drogas y el comercio a pequeña escala para el consumidor final se irá observando un isomorfismo institucional (DiMaggio y Powell, 1983; Brunsson y Olsen, 1993). Esto quiere decir, que cuando los modelos organizativos se consolidan y se institucionalizan, las estructuras se vuelven similares, por ejemplo, con la aparición de unidades mixtas de combate y atención al narcomenudeo, en distintos estados del país y el avance programático por ejemplo en la PGR con la creación de fiscalías especializadas, así como un mayor gasto de recursos cuestión que ha favorecido a la securitización del fenómeno y ha influido en la percepción en la ciudadanía, en los medios y en la política cuestión que además tendrá una reorientación a partir de la concurrencia de los delitos del narcomenudeo a la persecución local y los desafíos que esto denominará administrativamente.

A manera de cierre, este capítulo: Regímenes globales de políticas anti droga y su control local se desarrollaron los objetivos generales de la tesis a partir de la delimitación de cortes históricos temporales con acontecimientos tomando en cuenta los antecedentes entre un largo periodo correspondiente a la época de partido único entre 1948-1984 y los cambios administrativos a partir del control penal y judicialización mediante la seguridad de los delitos por drogas a partir de lo que denominé la Campaña Permanente y la judicialización e internacionalización de la penalización sobre drogas en México, seguido del segundo corte en el cual corresponde el comienzo de quiebre con la época de la guerra fría y una mayor intromisión y participación de las fuerzas armadas y de organismos norteamericanos mediante instrumentos de cooperación política incluido den el capitulado como una Americanización de la lucha contra las drogas en México 1985-1994, para categorizar el último periodo de configuración del término político y lingüístico del narcomenudeo durante la época de apertura económica y por lo mismo, la construcción del enemigo interno en

México entre 1997-2006 donde se delegó y protagonizó la venta de dogas al menudeo un carácter parecido al construido durante la era Reagan.

Por último en los dos últimos apartados se desarrolló de manera teórica y conceptual al Tráfico ilícito trasnacional de drogas en México o narcotráfico y al comercio de drogas a pequeña escala o narcomenudeo, en este orden de ideas, el narcomenudeo entendido como; la venta de ciertas drogas en los mercados ilícitos es una actividad originada por la prohibición de las drogas y tendrá en rol dominante dentro de la política criminal delegando en; un enemigo interno la facultad de combatir colectividades, individuos y daños sociales ocasionadas por el abuso de drogas, el mercado de drogas local en México se ha convertido en el imaginario; un enemigo público, que se combate policialmente, y cuenta por ley; fiscalías desconcentradas y ciertas medidas extraordinarias como la extinción de dominio y la prisión preventiva, aunque el objetivo de este capítulo no es reconstruir una narrativa o una historia de acontecimientos criminales se recuperaron algunos de una gran cantidad disponible en la prensa para ejemplificar el usos de recursos similares para construir los enemigos internos a partir del marco de prohibición de drogas, el sistema político y una serie de construcciones de dispositivos de seguridad y relaciones asimétricas de poder.

En el siguiente capítulo se describe la pertinencia del análisis de contenido etnográfico (ACE) el cual se refiere a un método, procedimiento y técnica para ubicar, identificar, recuperar y analizar documentos por su relevancia, importancia y significado *(*Altheide, 2008: 287). En este sentido como ya se ha mencionado el enfoque institucional y recopilación de textos emanados de autoridades o personajes relevantes en la configuración del narcomenudeo como productos de cultura (Chartier, 1996) recopilados a partir de una matriz de análisis que se elaborará para identificar los puntos concurrentes entre: el marco de la securitización y la americanización institucional así como las particularidades culturales del sistema de procuración y de justicia relacionadas con el sistema político y el control antidroga en México y en particular el de la Ciudad de México en el contexto de la reconfiguración política.

Capítulo IV. Historia social del narcomenudeo en la Ciudad de México en el periodo 1989-2020

En este capítulo, se argumenta la pertinencia y particulariza en el análisis de la historia social del narcomenudeo en la Ciudad de México, entre 1989 y el año 2020. Como ya se cimentó, en un apartado del primer capítulo, la forma de historiar desde una perspectiva interdisciplinaria sugiere que es posible el estudio del fenómeno del narcomenudeo desde el presente con una mirada a partir de la historia social, ya que esta contempla la dimensión social de los hechos y acontecimientos que se pueden analizar desde la historia política y económica e incluso de la tecnología y la cultura. Para este capítulo, se utilizan fuentes primarias como documentación gubernamental oficial, hemerografía, literatura periodística, académica y productos de cultura popular.

Además, para complementar esta historia, se perfila el análisis de contenido etnográfico, derivado de entrevistas semi estructuradas realizadas entre marzo y agosto de 2023 a un periodista, dos usuarios de drogas ilegales, un vendedor, un ex funcionario de la Secretaría de Gobernación y Servicio Exterior Mexicano, encargado de asuntos sobre seguridad y drogas, y una funcionaria de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por ser un tema delicado, se eliminaron aspectos sensibles como el nombre del informante catalogado con un pseudónimo o algunos aspectos confidenciales como fechas, nombres o lugares. Sin embargo, cabe mencionar que el corpus de entrevistas irá creciendo, conforme se avance en la recolección de informantes.

Antes de continuar, es necesario recuperar la hipótesis o supuesto de partida para esta investigación, la cual indica que existe una relación en la expansión del narcomenudeo, o la venta de drogas a pequeña escala, dirigida al consumidor final, en la Ciudad de México a partir de la interacción entre las políticas globales del régimen internacional de prohibición con la ratificación por parte de México de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988 en 1989, la cual promovió una penalización del consumo y posesión de drogas en los sistemas jurídicos locales, como lo ocurrido en 2009 con la promulgación de la ley contra narcomenudeo en un entorno de institucionalización y vigorización de los modelos de seguridad.

Respecto a la articulación de este capítulo, en la *Matriz de Análisis,* véase figura 1*,* se desarrolló un gráfico explicativo a partir de grandes índices temáticos donde se entrelazó

la interacción entre la adopción de la americanización, entendida con fines metodológicos en esta tesis, como una forma de construir una lógica histórica que contempla valores políticos que oscilan entre la libertad individual, la democracia y los procesos de intervención, hasta los métodos de control e inteligencia política y las formas particulares de hacer campañas electorales y de promover la comunicación política.

Ya que también sobresale la americanización de las políticas, en particular, las políticas de seguridad y anti droga, las cuales dotan de coherencia para la consolidación de un modelo de securitización mediante la policialización y militarización, en un entorno de mundialización económica y adopción de medidas de integración regional y de cooperación económica, política y en materia de seguridad con Estados Unidos, las cuales afectan y se aplican en ciudades latinoamericanas y la Ciudad de México no es la excepción.

Tomando en cuenta estas interacciones, se articulan las siguientes categorías de análisis, a partir de la interacción entre lo global, como es el régimen internacional de prohibición, y lo local con el robustecimiento del sistema punitivo judicial nacional, así como las particularidades históricas y sociales del régimen político mexicano a partir de la reconfiguración del poder político y criminal, el cual tuvo repercusión en el control y configuración del fenómeno del narcomenudeo en el entramado local y subnacional, y con las particularidades de la Ciudad de México.

La pertinencia de indagar sobre la compraventa de drogas al menudeo, y la configuración de un régimen de persecución, que se empata con aspectos coyunturales económicos, culturales y sociales, e implica identificar fenómenos sociales, problemas de salud pública, de impartición y ejecución de seguridad y justicia, así como de actores gubernamentales y sociales que estaban inmiscuidos en la conformación y exacerbación de representaciones e imágenes sobre el tráfico de drogas, sus vendedores y sus perseguidores, esto permite identificar posibles soluciones o propuestas para el desarrollo de política pública, profundizando en la separación y persecución de los delitos mediante de investigación y aproximaciones al fenómeno, que se encuentra en constante transformación, tanto por los cambios en las dinámicas como en la sustitución de las mismas respecto a la venta de drogas ilegales y la configuración del narcomenudeo como un objeto imaginario y objetivo, donde depositar enemigos y narrativas, ya que contextualiza actividades criminales

o ilegales, pero también representa cambio e innovación, constante transformación e incluso mediación tecnológica. Por ejemplo, con el uso de escuchas, software de rastreo de telecomunicaciones, instrumentos para detección de estupefacientes, así como formatos de investigación policial, pasando por la venta en plataformas digitales de la web profunda o en redes sociales y así poder identificar grupos tendencias y amenazas violentas.

En este sentido, el objetivo general de esta investigación indica la elaboración de cortes históricos en periodos o etapas delimitadas mediante rupturas y procesos políticos, económicos y sociales relevantes en el marco de interacción global y local con perspectiva coyuntural y estructural. Por ello, los apartados que se desarrollarán en este capítulo obedecen al ritmo de cambios sociopolíticos, que en su momento no fueron considerados como elementos constitutivos de una historia política alineada con el estado, porque un fenómeno como el narcomenudeo se relegó a formar parte de lo prohibido y oculto, además de ser una problemática reciente que pareciera escapar del ojo de la historia.

Sin embargo, en este primer apartado que obedece al periodo 1989-2020 en la Ciudad de México los postulados de la historia social indican la pertinencia de una indagación acerca de las formas en las que el fenómeno se desarrolló en treinta años, tiempo suficiente para rastrear aquellos componentes que le han dado al narcomenudeo sus características definitorias, propias también de la dinámica de la ciudad.

Mientras que, en el segundo apartado se analiza la Configuración del crimen organizado trasnacional en la agenda de seguridad hemisférica 1989-2001, estructurado a partir de lo local a comienzo de la administración de Carlos Salinas de Gortari en enero de 1989 como presidente y Manuel Camacho Solís como Regente del Distrito Federal y hasta lo global a partir del atentado de las torres gemelas en la ciudad de Nueva York en septiembre de 2001.

Siendo 2001, el primer año de administración gubernamental de Vicente Fox en la presidencia de México ocupando el lugar como el primer presidente derivado de la alternancia política, mientras que en la administración local destacó la particular administración de Andrés Manuel López Obrador quien configuró un esquema de administración centralizada con gasto público en infraestructura e inversión en ámbitos de seguridad debido a una crisis generalizada de inseguridad urbana y el momento en que se

configura el concepto narcomenudeo en el Distrito Federal así como establecer medios de control y de comunicación política y policial para su combate y control.

Seguido de la campaña permanente presidencial para la penalización del mercado interno y la restructuración institucionalización del narcomenudeo 2008 y 2012 la cual implica la denominada guerra contra las drogas mexicana emprendida por el presidente Felipe Calderón y el espacio de la última reforma presentada ante el congreso la cual delimita el actual régimen de control del narcomenudeo en las normas vigentes.

Así como, el periodo de exacerbación de la narrativa de los grupos de traficantes locales organizados o agrupados en el modelo de carteles internos hasta el último apartado comprendido como la implementación de la ley contra el narcomenudeo 2012-2020 perdido en el cual las reformas de ley fueron implementadas y establecidas las fiscalías especializadas a nivel local, así como un reajuste en las dinámicas de los mercados internos ante la diversificación de la venta al menudeo de otras sustancias como la expansión y paulatina introducción de los estimulantes tipo anfetamínicos o metanfetaminas y los opiáceos sintéticos pasando por las regulaciones sobre cannabis en los Estados Unidos y Canadá cuestión que reconfiguró los mercados locales y aparición de nuevas formas de compra venta por ejemplo mediante internet.

4.1 ¿Es posible una historia social del narcomenudeo en la ciudad de México?

Si bien no existe un consenso teórico sobre qué es una ciudad ya que existen nociones como la política, urbanística, sociológica o filosófica. Para el caso de la historia recuperó la propuesta de Henri Lefebvre quien considera que una ciudad es un espacio creado modelado y ocupado por actividades sociales en el curso de un tiempo histórico (Lefebvre, 2013: 130). En este sentido, el espacio a describir comienza con el Distrito Federal ahora llamada Ciudad de México, la cual ha sido un centro y punto de dispersión del poder político de larga data, así como un lugar que concentró actividades económicas, sociales, culturales. Fue un punto de difusión para la cultura nacional, la cultura urbana y urbanización de México, por lo tanto, un eje de referencia para las políticas públicas, modelos de desarrollo y espejo de las relaciones y reconfiguraciones del sistema político mexicano.

En este orden de ideas, el Distrito Federal fue heredero de la centralización política y el proyecto de la construcción del estado nacional y hasta hoy sigue concentrando físicamente las sedes de los tres poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Tomaré como punto de origen del ente administrativo el año 1928, cuando se estableció el Departamento del Distrito Federal como unidad administrativa cuya máxima autoridad recayó en la figura del regente, fue hasta 1997 cuando se eligió por primera ocasión a un jefe de gobierno y en el año 2017 se promulgó su constitución política, la cual dota de bases y principios del andamiaje institucional de la ciudad y según datos del censo de población y vivienda del año 2020 realizado por el INEGI la Ciudad de México cuenta con más de nueve millones de habitantes.

Cabe mencionar que la Ciudad de México comparte territorio y frontera con algunos municipios pertenecientes al Estado de México y de Hidalgo, dichas entidades conforman una concentración urbana denominada como la Zona Metropolitana del Valle de México, que en total comprende 52 municipios. Sin embargo, por cuestiones de intercambios y flujos poblaciones y de servicios tomaré para efectos metodológicos solamente a la Ciudad de México y sus 16 delegaciones, aunque sí habrá referencias e incluiré algunos casos y datos de la zona metropolitana con fines complementarios.

Retomando entonces el contexto de la Ciudad de México antes DF, este estuvo dentro del desarrollo de las políticas del nacionalismo revolucionario cobijado por el régimen del partido único, y el Gobernador o Regente era nombrado por el presidente de la república y a su vez los delegados o administradores de los territorios eran nombrados por el gobernador,

de este modo todos los cargos debían ser ratificados por el ejecutivo cuestión que complicaba las competencias legales y las responsabilidades políticas (Pansters y Castillo, 2007).

Dentro de algunas características de las actividades sociales que se realizaban en Distrito Federal destaca el comercio, particularmente el comercio informal, así como la concentración de población migrante que provenía de zonas campestres del interior de la república, esto provocó un desarrollo desigual de la vivienda, así como concentración y centralización de los servicios públicos, lo cual resultó en un crecimiento de las zonas marginadas. Como consecuencia de ello, el DF se configuró como un lugar donde los actos administrativos solían ser parte de un apéndice del gobierno federal, por lo tanto, hay que diferenciar a la Ciudad de México como entidad política, como espacio geográfico y como unidad administrativa.

En este sentido, siguiendo con la argumentación de Lefebvre con la que se comenzó, la dimensión espacial de la Ciudad de México se construye a través de un entramado de relaciones y sería pertinente señalar que para abastecer de insumos el análisis sobre el narcomenudeo y su historia en la ciudad habría que señalar que estas se desprenden de las prácticas y actores que entrelazan en una cultura urbana contemporánea. Para Carlos Monsivaís (1979), la cultura urbana latinoamericana y mexicana se ha configurado desde el desapego de la otra cultura, la tradicional hispánica, colonial, católica cerrada. Ergo, lo urbano al ser resultado de la industrialización es un conductor ideológico de la modernidad, de la desnacionalización y un proceso enlazado con la cultura de masas y la *norteamericanización* de la cultura mexicana mediante los medios de comunicación. Así, también Monisvaís señaló que un efecto de esta cultura de masas provocó un espacio para distraerse del *tedio de sus vidas.*

Es por ello, que las actividades sociales desprendidas del uso, consumo e intercambio de bienes y mercancías globales sitúan al mercado de drogas ilegalizadas como un espacio de prácticas particulares, estados de significación y horizontes de posibilidad para la cultura del ocio, pero al estar inmerso en circuitos ilegales y estar oculto historiar estos fenómenos han pasado desapercibidos y se dispersan dentro del ruido de otras las prácticas culturales.

De igual modo, se establecen relaciones jerarquizadas y asimétricas de poder por ejemplo entre los actores encargados de perseguir actos punibles, la prensa o los medios de

comunicación que retratan el uso suntuario de drogas en clases altas como algo atípico pero válido, mientras que en ámbitos precarizados o marginados se toman como un signo de desviación e inmoral.

Para entender, el continuum de venta de drogas ilegalizadas en México y en la Ciudad de México en particular, hay que delimitar que existen ciertas prácticas, como el ocultamiento de la mercancía, la promoción en la calle y las dinámicas de compra, en los límites del comercio ilegal de drogas que permitieron que los modos de venta y persecución de drogas, así como los espacios de compra y venta se transformaran en algunos casos y se mantengan en otros. De esta forma, configuraron el espacio de intercambio de actividades de contención del tráfico de drogas el cual pasó de ser anecdótico y casi desapercibido a un fenómeno relevante y vinculado al crimen y a la violencia (Morin, 2010).

Y es que no se puede soslayar que, México resintió los continuos episodios derivados de la crisis económica de 1976, las cual significó la pérdida de empleos, un aumento notorio en la migración hacia Estados Unidos y un clima de descontento que afectó a los estratos sociales más bajos y a la clase trabajadora. De acuerdo con Jiménez (2006), con el hallazgo de los yacimientos de petróleo en 1978 la situación económica pareció mejorar, lo cierto es que para explotar dichos yacimientos fue necesario el aumento de la deuda externa, y posteriormente la implementación de medidas como los topes salariales; por estas razones la población no se vio beneficiada por la bonanza petrolera, que duró muy poco, lo que llevó a una pauperización de sectores sociales ya de por sí marginados, y a un aumento de los actos criminales y delitos.

La percepción negativa de un aumento del crimen afectó sobre todo a la ciudad, la cual se observó con un espacio inseguro y proclive para el delito, sirva de ejemplo para mostrar el proceso, un trabajo cinematográfico. En 1980 se estrenó en cines una película titulada *Perro callejero* protagonizada por Valentín Trujillo y Eric del Castillo, en la cual el personaje principal *Perro* sigue una trayectoria criminal desde la infancia hasta llegar la correccional de menores, pero no logra reinsertarse en la sociedad, razón por la cual termina en prisión como adulto. El contexto de esta historia se compone de colonias marginales donde el robo es práctica común entre los criminales de poca monta, mientras que la corrupción es característica de las autoridades, desde el policía de a pie hasta el burócrata y el comandante.

Un ejemplo de ello es el centro de la ciudad con barrios como Tepito o la Merced, que se han construido como centros de distribución y almacenamiento de drogas desde principios del siglo XX, explotados por distintos grupos de traficantes, algunos con mayor penetración en el mercado internacional que otros (Astorga, 2012). En este sentido, la llamada guerra contra las drogas, un continuo instaurado desde los años 70 pero cimentado desde el principio de la prohibición, configuró perfiles o estereotipos, que Astorga (2005) denomina mitologías del narcotraficante en México.

Si bien, la historia se construye en momentos de manera similar a la lógica del cine de ficheras, donde se muestran mujeres atractivas con poca ropa, el albur impera en los diálogos y la mayoría de los personajes consumen alcohol, lo cierto es que en esta película el espectador puede observar la dinámica de la vida nocturna, que contempla no solo los espectáculos eróticos, sino también la compra y venta de drogas al menudeo, temas ya tocados en otros filmes como *Contrabando y Traición* de 1977, basado en el popular corrido de los Tigres del Norte, o *La banda del polvo maldito* de 1979, ficciones donde el eje principal es el narcotráfico y las relaciones establecidas entre autoridades, vendedores, intermediarios y criminales.

Este tipo de películas muestran la cara oculta de la ciudad y son documentos para el estudio del paisaje urbano y su evolución, pues se pueden observar casas a medio construir, tianguis donde se vende fayuca y cosas robadas, pero también establecimientos como restaurantes, ferreterías, billares, cantinas, baños públicos y estaciones del metro. Esto es importante, porque después del sismo de septiembre de 1985 la estructura de la ciudad se modificó de manera drástica debido a la tragedia, y no solo eso, la destrucción de la ciudad implicó un reacomodo de la población y una nueva traza, procesos que llevaron a que familias cambiaran su lugar de residencia hacia la zona metropolitana.

En este contexto, se aplicó un esquema de control y de comunicación política y de producción mediática y periodística que se construyó a partir de una lógica basada en estereotipos, el miedo y la cero tolerancia en un entorno de crisis e inseguridad urbana, la cual se adaptó al estilo particular mexicano, cuyos marcos referenciales se empatan en un entorno de mundialización de mercancías, configuración que corresponde con el comienzo de la primacía de los grupos de traficantes mexicanos en el entorno regional como agentes

significativos del contrabando ilegal de cocaína, esto mediante alianzas estratégicas con traficantes sudamericanos, a pesar de que los índices de consumo, como también ya se ha demostrado, se situaron como estables, el comercio de drogas en la ciudad a pequeña escala fue creciendo a medida que la ciudad crecía en términos territoriales y poblacionales, ya que según datos de INEGI entre 1970 y 1990 la población citadina creció de manera acelerada casi en un millón de habitantes (INEGI, 2020).

Por su parte, en el ámbito político interno, la transformación de las estructuras administrativas dentro del sistema político posrevolucionario, derivaron en la modificación de las dinámicas de tráfico, control y consumo a partir de la reconfiguración del poder político, el cual facultó la paulatina transformación del modelo y del sistema político electoral, pero también del control criminal en un entorno donde la criminalidad rebasó el aspecto local. Cuando se desintegró la Dirección Federal de Seguridad, el tipo de impunidad institucional que suele existir estructuralmente en el sistema de impartición de justicia y corrupción concedió que grupos o bandas dedicadas al contrabando, al robo de vehículos, al robo de negocios así como a la venta, tráfico y producción de drogas enfilaran a personal con conocimiento, redes y capacidades para delinquir y con conocimiento de los ambientes policiales se dedicaron a cualquiera de las actividades delictivas antes mencionadas (Aguayo, 2001).

Ahora bien, tomando en cuenta estas reestructuras administrativas hay que destacar la preponderancia que la Ciudad de México tuvo como un punto de referencia nacional e internacional y la trascendencia que tuvo pues provocó imbricaciones regionales, locales y globales. Por ejemplo, las incipientes transformaciones y tensiones respecto al sistema de partido único donde el sistema presidencialista autoritario se fue transformando a partir de reformas políticas derivadas del conflicto electoral de 1988. Aunado a esto, la ya mencionada crisis derivada en la ciudad ocasionada por el terremoto de 1985, cuestión que había facultado a la organización de frentes ciudadanos, donde nuevos actores comenzaron a tener participación política a partir de la reconfiguración de la policía y el Departamento de Policía y Tránsito del Distrito Federal, algunos aspectos del control policial también fueron delegados a otros actores.

Durante la época del General Durazo como parte de la policía de la ciudad, la corrupción dentro de la corporación fue exhibida en numerosas ocasiones por autoridades, como el propio regente de la ciudad, incluso se mencionó que Ramón Aguirre el Regente de la ciudad había sido un opositor a las actividades del General Durazo y un principal detractor y facilitador para su captura, así como la de algunos de sus colaboradores (Pansters y Castillo, 2007). Existen varios productos culturales que evidenciaron a nivel popular la corrupción de la gestión de Arturo Durazo (1976- 1982) y que caricaturizaron o parodiaron su actuar corrupto por ejemplo el libro *Lo negro del negro* publicado por uno de sus colaboradores fue llevado al cine donde se relataban actos de corrupción como el encubrimiento, el tráfico de influencias y sus relaciones con traficantes de drogas y explotación de giros negros, situaciones y anécdotas que quedaron plasmadas en canciones populares, sirva de ejemplo, el grupo de rock mexicano Botellita de Jerez, que mencionan en una de sus canciones lo siguiente:

> … Yo trancé al Negro Durazo
> Yo le puse un buen sablazo
> Le vendí un pericazo
> Resultó ser harinazo
> Me pidió una mordida
> Yo le abrí una herida
> En las patas, en las manos
> En su hocico
> Yo trancé al Negro Durazo… (Botellita de Jerez, 1985).

Habría que mencionar que después del escándalo de Kiki Camarena, ocurrido 1985 el gobierno mexicano robusteció e intentó formular un esquema que se terminó empatando con los presupuestos norteamericanos y de seguridad hemisférica, es notable señalar esta cuestión debido a que si bien a pesar de existir una fuerte intromisión presión norteamericana y moldeamiento de los sistemas de control de drogas a nivel global, regional y local, entre las que destacan las inflexiones en las transformaciones económicas y sociales derivadas de una recomposición y nuevas presiones del modelo de cooperación con Estados Unidos a nivel seguridad y económica, así como la fuerte influencia de los mecanismos de cooperación económica o instrumentos de negociación política a nivel global y regional que predominaron

durante los años ochenta y noventa, el narcotráfico pasó a ser parte esencial del discurso de cooperación internacional y las políticas de drogas, así como esquemas de cooperación internacional y formas y mecanismos para la asignación y solicitud de recursos como la certificación que ya se había mencionado en capítulos anteriores y a partir de la denominada narco narrativa el término narcotráfico si será identificado como un esquema de persecución y de forma de nombrar tanto al comercio a larga escala como el comercio a baja escala.

Desde esta perspectiva en los campos de producción cultural social y política es que el concepto y término narcomenudeo se fue construyendo a partir de las representaciones y nociones de narcotráfico, las relaciones, las formas de tráfico y venta en la ciudad, con trayectoria de casi un siglo, se fueron reconfigurando ante el crecimiento de la ciudad y nuevas formas de operar. En este sentido, cuando en 1986 el tráfico de drogas es incluido por la política norteamericana como un asunto de seguridad nacional, se dio como resultado un descontrol en el ámbito local ocasionado por la pérdida de monopolio estatal de la violencia y dispersión del control criminal.

Como ya he mencionado en los capítulos anteriores la reconfiguración del poder político a nivel internacional y local, faculta y permite que actores no estatales tomen preponderancia de actividades antes monopolizadas por el estado, es por ello por lo que el ámbito del tráfico de drogas ilegalizadas también se transforma. Algo a destacar es que, durante la época de los años ochenta, la cultura juvenil en especial las llamadas bandas, pandillas rocanroleras y los grupos punks proliferaron por la ciudad, algunas en espacios marginales en las zonas de la periferia de la ciudad, pero también en puntos céntricos y al reproducirse los modelos de autoritarismo y represión era común que existieran redadas en contra de estos grupos y fueran acusados de poseer comerciar o vender drogas.

En este sentido, en 1989 a partir de la reconfiguración de los mercados de drogas internacionales en particular de los cambios en los flujos de mercancías que provenían de sur América, parte importante tanto de la cultura rocanrolera como de la cultura punk era el sexo y las drogas. Sin embargo, esto no quiere decir que fueran la única capa social que consumía sustancias psicoactivas ilegalizadas, como también lo muestran los informes del Sistema de Vigilancia Epidemiológica SRID, pues los solventes inhalables eran la droga de impacto entre los jóvenes y personas menores.

Según datos del SRID, sobre uso de cocaína alguna vez en la vida, fue notorio tuvo un incremento significativo desde 1986 hasta el año 2005. Por poner un ejemplo, según el informe del sistema de vigilancia situó al consumo de mariguana alguna vez en la vida con un 70% de incidencia en 1987, mientras que el uso de cocaína reportó un porcentaje de 3.5%. Sin embargo, para 1992 la misma sustancia clorhidrato de cocaína reportó un 10.8% de uso, 39.8% para 1997, y para 2002 68.4%.

Si bien, el reporte y la variable de consumo de la incidencia acumulada o alguna vez en la vida, en el consumo de alguna sustancia psicoactiva, no explica de manera correlacional la compra de droga, ya que en muchas ocasiones los usuarios suelen compartir sus dosis con personas conocidas, quizá un dato de mayor precisión respecto al circuito de compra venta lo podríamos situar en el reporte de consumo del último mes, ya que por las dinámicas de consumo de los estimulantes es probable que los usuarios de cocaína hayan comprado de manera reciente su dosis que compartieron, mientras que el reporte de alguna vez en la vida podría reportar consumo de años anteriores.

Aunado a esto la cultura nocturna en la ciudad de México durante los años ochenta era boyante, ya que los hoteles y restaurantes ofrecían espectáculos nocturnos, y La Zona Rosa era un espacio de recreación desde los años sesenta. Ejemplo de ello, es una anécdota señalada por el músico de rock Rodrigo Levario, quien argumenta que los músicos y en particular los organizadores de eventos participaban de actos de corrupción o chantaje por parte de policías los cuales explotaban centros nocturnos y giros negros cuestión que no ha sido ajena a la historia de la ciudad (Fondevilla, 2009; Olvera, 2021).

> Estábamos en Dama y nosotros colaborábamos con Victorino y una vez llegando al *Chez Agnes* había un apañón güey y a mi valedor Bátiz le estaban enjaretando cocaína güey. Y ahí la bronca es… dices el…. yo siento que, él no actuó con inteligencia güey. ¡Me declaro adicto ya a la chingada no pasa nada! Pero no, él se negó, se negó, y se hizo el pedo y nos llevó a todos para adentro. Cómo trabajamos en el bar y los que regenteaban eran tres… este tres comandantes uno de la Federal, otro del aeropuerto picudos, vaya. Yo dije nos van a sacar, no hay pedo todavía llegué yo güey dejé la guitarra en el camerino y me formé, pero no, nos fuimos todos para adentro y salimos muy sacados de onda y se desintegró Dama (Paniagua, 2023).

Cabe señalar que, con Dama, Levario se refiere a un grupo de rock que él fundó junto con Juan Salgado en los años ochenta de la ciudad de México y que tuvo reconocimiento en el ambiente nocturno por tocar varias noches en bares, haber compartido escenario y tocar en versión eléctrica canciones del trovador Rodrigo González, mientras que el *Chez Agnes* fue un bar que se ubicaba en la calle de Liverpool en la Zona Rosa, a solo unas cuadras de las oficinas de la policía de la ciudad. En 1989, tras una redada producto de un pleito entre dos grupos policiacos, en la que accidentalmente Dama resultó involucrado, decidieron disolverse ante el miedo por las amenazas de las que fueron objeto por parte de la policía. A partir de este suceso se definieron por el nombre Heavy Nopal (González, 2019).

Esto es significativo porque el mercado y consumo de cocaína en México tuvo un aumento de manera correlacional a la irrupción y preponderancia de los grupos mexicanos dedicados al tráfico de esta mercancía en la reconfiguración del esquema de venta de drogas al menudeo en el marco de una integración regional al proyecto de América del Norte, un robustecimiento en la persecución de delitos control cuestiones que se verán exacerbadas con el imaginario social y político, y por ende, con la construcción de normas y dispositivos de control estipulados como criminales y enemigos en particular los pequeños vendedores y grandes traficantes, mientras que los usuarios son delimitados como enfermos adictos o dependientes que necesitan ser tutelados por el estado incluso internados de manera forzada o reinsertados a la sociedad con penas que pueden ser privativas de la libertad.

Mientras que, en materia económica, después de décadas de proteccionismo económico, la administración de Miguel de la Madrid fue el antecedente de los cambios estructurales que se materializaron en el siguiente sexenio, aunque este proceso fue difícil para la administración de Carlos Salinas, ya que esta etapa comenzó con rumores de falta de legitimidad derivada de las elecciones de 1988, a esto hay que sumar los resabios de las crisis económicas y la deuda externa. Salinas tuvo que implementar medidas nunca vistas pues era condición necesaria que México se abriera al mercado e inversión extranjeros (Cárdenas, 2015).

Esta condición estuvo alimentada no solo por las necesidades del país y el interés de Salinas y su gabinete, sino también por el gobierno estadounidense que promovió medidas como la reducción y negociación de la deuda en algunos países, uno de ellos México,

mediante la ampliación de los plazos de pago. Sin embargo, para acceder a estos beneficios fue necesario que estas naciones se adhirieran a lo estipulado en el Congreso de Washington, una reunión en 1989, donde los ministros latinoamericanos pactaron con el gobierno de Estados Unidos reformas en materia económica que habrían de aplicarse en los próximos años en la región (Moreno, Pérez y Ruiz, 2004). Esto representó una oportunidad para México pues los resultados a corto plazo fueron positivos, desde una momentánea reducción de la deuda y la inflación hasta el crecimiento del PIB, así como los primeros pasos de apertura a la inversión extranjera.

Así, el Congreso de Washington fue la antesala de las negociaciones con Estados Unidos para firmar un tratado comercial, lo que después fue el TLC. No obstante, las negociaciones tardaron el concretarse alrededor de cuatro años debido a que el gobierno salinista había tejido una buena relación con George Bush y al llegar a la presidencia Bill Clinton no se sabía exactamente cómo beneficiaría esto a México (Zebadúa, 1994). Finalmente, el tratado se firmó en agosto de 1992, y entró en vigor en enero de 1994, ese mismo año México se integró a las filas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el siguiente a la Organización Mundial del Comercio (OMC).

En el proceso de la firma del tratado, el gobierno estadounidense estableció sus condiciones las cuales incluyeron desde la apertura del mercado mexicano a las importaciones, hasta cláusulas sobre medidas ambientales como el cuidado y protección del ambiente (Padua, 1999). En este sentido, era de esperarse que en materia de seguridad y también en relación con el fenómeno del narcotráfico, la influencia estadounidense, ya de por sí presente desde décadas atrás, impuso nuevas normativas aunadas a los convenios vigentes.

En este sentido, reiteró de nueva cuenta el objetivo particular de esta tesis, el cual será analizar estos periodos a partir del marco de interacción de normas, leyes, acuerdos, locales y globales a partir de los modelos de la securitización, americanización de las políticas de control de drogas en el marco del régimen internacional de prohibición de drogas y la reconfiguración del poder político. Para ello, analizaré el fenómeno del narcomenudeo en dos esferas una la explícita y otra en el imaginario social.

La primera esfera, es entendida como el acto de compra venta, donde existe un comprador y un vendedor que intercambian una mercancía denominada como droga y delimitada a nivel institucional según las normas vigentes como: la Ley General de Salud, en su capítulo sobre los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo; así como el Código Federal de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y la Ley Contra la Delincuencia Organizada; que penalizan ciertas actividades y conductas así como atenuantes y agravantes, cabe mencionar que a partir de esta arquitectura jurídica e institucional se desprenden fiscalías especializadas a nivel local y federal local así como planes institucionales de combate y contención.

Desde esta perspectiva, ante la complejidad de denominar de una sola manera un término polisémico, la investigación se ajustó al ámbito jurídico, desde donde se entiende al narcomenudeo como una conducta ilícita y definen de manera explícita como la posesión, comercio, sumisito, o cualquier otra conducta que se realice con narcóticos previstos en la tabla de la Ley General de Salud, cuando la cantidad de que se trate sea inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las dosis señaladas como máximos del consumo personal e inmediato diario (Ojeda, 2010: 245), aunque esto no quiere decir que no haya hermenéutica jurídica en la interpretación de los criterios de oportunidad particulares.

Esta esfera coyuntural, se delimita a partir de un margen de lo político y social mediante la seguridad pública, e incluso tomará el eje apegado a la seguridad nacional bajo el esquema de la Ley contra la Delincuencia Organizada promulgada en el año 1996 bajo el gobierno de Ernesto Zedillo; en medio de una confrontación nacional con un grupo disidente armado y en el marco de la integración económica y regional de América del Norte y en un contexto de inseguridad. Actualmente, la ley vigente entiende al crimen o delincuencia organizada como: una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia (Senado de la República, 2012). Sin embargo, en la normatividad se distingue y proponen penas diferenciadas entre los distintos actores de la posible comisión del acto o del delito.

También, como ya se mencionó, el margen del narcomenudeo a nivel jurídico se construye a partir de relaciones de mercado y de consumo dividiendo las conductas entre farmacodependientes y vendedores o narcomenudistas y establecen cantidades mínimas de

portación siendo esto la versión implícita y entendida como algo jurídicamente penalizado, políticamente adecuado para delimitar enemigos o sujetos punibles o en persecución y comunicativamente utilizado como recurso periodístico (Romandía, 2018).

Es por ello, que si bien el narcomenudeo comenzó a tener visibilidad como tema recurrente en la prensa y como categoría pública a partir del año 2001, la configuración del control de la venta al menudeo de drogas ilegalizadas en pequeñas dosis le antecede al periodo de estudio comprendido entre 1989 y 2020, y como señalé en capítulos anteriores, el narcomenudeo tendrá tres características: el primero será que se sitúa históricamente en un marco de control de políticas de cero tolerancia, segundo es que atraviesa la era de la comunicación y la información al ser concurrente con la aceleración del tiempo y de los procesos de comunicación a partir de sociedades mediatizadas y por último el contexto político, social, político y económico de la transición democrática y la reconfiguración del poder político lo cual presentará una dispersión geográfica compleja del fenómeno.

Dada esta complejidad, la segunda esfera de análisis del narcomenudeo, desde la perspectiva estructural y como imaginario social, se construyó y se redefinió a partir de un entramado de relaciones económicas, sociales y políticas. Si bien, el narcomenudeo no se va a localizar como concepto periodístico, categoría económica o desprendido de un dispositivo jurídico, policial o político durante los años ochenta o noventa, este se concatena a partir de una serie de representaciones signos y símbolos que se le fueron delegando al concepto de narcotráfico, al respecto existen varias nociones y producciones de sentido.

Astorga (2005) señala que se utiliza la palabra de forma particular a partir de los años setenta, para designar el fenómeno que integra todas las fases del negocio ilícito, la cual es integrada al lenguaje institucional oficial, en la política, en el campo policial y es replicado por los medios de comunicación y en un segundo nivel se extiende el uso de su prefijo narco como un delegante de figuras retóricas, lugares comunes con una extensión de carga peyorativa o estigmática, extendidos a una serie de representaciones en los campos de producción culturales y políticos de ahí que devienen productos culturales como las narco series, la narco literatura, narco limosnas, narcopolítica, narconovelas, narcocorridos, narco rap, todas ellas englobadas en el término de narco cultura la cual también se construye a partir de relaciones de control y de poder incluso pueden construirse relaciones asimétricas y que

dentro de la misma narco cultura pueden haber distintos niveles entre alta narco cultura y baja narco cultura (Enciso, 2009).

Entonces, el narcomenudeo sugiere una relación de operación mercantil que distingue una pequeña dosis ya sea en posesión, para suministro, para consumo o para venta y dadas las características de su comercio. Zamudio (2008), distingue entre puntos de venta fijos, semi fijos y ambulantes, por su parte Díaz-Román (2022), señala formas de venta en las cuales pueden ser abiertas o cerradas en particular espacios en la calle, venta al interior y ventas por entrega. Esto es importante, ya que una particularidad que se aplica en ámbitos criminológicos encuestas de victimización o mapeos sobre criminalidad y violencia suelen asociar la pregunta si ha atestiguado un crimen en particular si ha visto la presencia de venta de droga.

Al respecto, dentro de los hallazgos de Edgar Morín, al realizar entrevistas a ex policías judiciales del Distrito Federal, fue que no se distinguió de manera plena entre usuario y narcomenudista, esto da pie a interpretar, cómo es que de manera institucional a pesar de que en el discurso en el alto nivel, por ejemplo, ante declaraciones de autoridades se intenta separar entre vendedores, usuarios y farmacodependientes, y se señala de manera reiterada y que no se busca criminalizar el consumo (Secretaría de Salud, 2022), en la realidad operativa los policías, o primeros respondientes en la persecución de los delitos contra la salud, los usuarios son tratados de la misma manera incluso suelen ser presionados a señalar sus fuentes de abastecimiento o entregados por vendedores para cumplir cuotas de detenciones.

> Punto de venta yo le llamo al lugar donde hay más de un consumo personal y que el excedente ya puede ser vendible: Juanito Pérez tiene aquí 3, 5 o 10 grapas, y te va a decir sabes qué, son para consumo personal. No me chingues, porque si te metes más de 3 te vas a poner bien estúpido. Ocasionalmente hay gente que se puede meter más, pero ya ponerte 3, ya andas bien chido como dice la banda. Eso ya se puede considerar como punto de venta porque ya es un excedente. ¿Cuántas personas pueden habitar en una misma casa y que consuman? (Morin, 2010: 191).

Desde esta perspectiva, retomaré relaciones multidireccionales entre lo local y global, pues existen factores estructurales y coyunturales. Y añado que a partir de la reconfiguración

política de la Ciudad de México, la reestructuración de los mercados de drogas internacionales y cambios en las tendencias de consumo aunado a factores como crisis económica, social y política la década de los años noventa cimentará un mercado estable de drogas ilícitas y un entorno en el cual la mano dura derivada de la crisis de inseguridad facultará la extensión de la securitización hacia el combate o control de los traficantes de drogas a pequeña escala, cuestión que ya se encontraba como práctica común entre agentes de seguridad el usar el delito de tráfico o posesión como una forma de extorsión o arresto en el Informe Especial sobre Drogas y Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se señala que dos de cada tres usuarios de drogas ilegales había sido extorsionado por autoridades (CDHDF, 2013).

Esta serie de relaciones entre los campos políticos culturales y sociales construidas a partir del lenguaje periodístico, político y social se entrelazan en un contexto sociohistórico en el cual se exacerban las políticas norteamericanas en contra del tráfico ilícito de drogas, las operaciones militares y el despliegue que dará paso a la delimitación de la *narconarrativa* propuesta por (Zavala, 2018). Bajo estos supuestos, en una entrevista realizada para esta tesis a un periodista de aspectos policiales con más de 20 años de experiencia, se le preguntó cuando empezó a escuchar el término narcomenudeo y a diferenciarlo del narcotráfico, así como incluir la pregunta, ¿qué ha cambiado de la cobertura o el narcomenudeo desde que empezó cubrirlo a la fecha? A lo cual, contestó que existe una reorganización de la venta de droga al menudeo y era algo de lo que se escuchaba poco o tenía poco interés para las redacciones, pasaban como un adicto más o un vendedor apañado o detenido.

El entrevistado también señaló que, dentro de zonas populares contaban con informantes o incluso interceptaban las radios de emergencias o policiales quienes solían dar pistas o pitazos a cambio de para cubrir asesinatos o detenciones, pero eso sí había cambiado y algunos reporteros de fuente evitaban firmar sus notas, pero otros por el contrario eran proactivos y otros se arriesgaron a indagar más sobre las redes criminales cuestiones por las cuales cada día era más difícil encontrar el *pitazo*[26], contactos o informantes. Parte de la transcripción de la respuesta del entrevistado se puede observar a continuación.

26

> … Pues ha cambiado mucho y una de las experiencias más vivas fue que hace un año cuando muy cerca de aquí unas calles de aquí acribillaron a un narcomenudista; entonces bueno esos tipos, al momento de establecerse en el barrio ellos empiezan a hacer lo que ellos llaman cobrar derecho de piso y es algo muy común en los carteles del narcotráfico desde los 70 cobrar el derecho de piso, pero si ha cambiado por la manera tan violenta de operar de ellos, ósea los vendedores de droga ya no están tranquilos no los que antes podían vender en una tiendita, o incluso en un taller mecánico que es donde se solía dar, pues o aún están o ya no existen o están cooptados por ellos mismos porque son células bastante organizadas saben quién vende y quien no…
>
> …el caso del periódico hubo un tiempo que no manejábamos los nombres de los carteles, por órdenes de editorial hemos manejado los términos crimen organizado, célula delictiva y también debido a las fuentes de información que en ese sentido son bastante herméticas y a veces la misma información que fluye no es la que realmente es… por ejemplo los cuerpos de seguridad no te van a decir a cuantos agarramos o a cuantos matamos, ósea te van a decir una información tergiversada, los medios de comunicación publican, los comunicados de prensa publican lo que las autoridades declaran, entonces la gente que en ese sentido tilda a los medios de comunicación de mentirosos , porque la gente dice… ¡que pusieron que mataron a tres y yo vi como siete cuerpos! No sé a nosotros es la información que nos llega, ósea nosotros estamos en el momento y nos dejan tomar fotos, nos dejan arrimarnos, pero nunca nos van a decir la verdad, incluso yo creo que si nos tocara ver podríamos poner lo que vimos; pero pues no se ha dado el caso, y te digo y yo creo que, si nos han limitado un poco por cuidar un tanto también lo que es el trabajo de tanto de nosotros mismos como periodistas como la empresa, el periódico (Entrevistado 02).

Con el decreto divulgado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto del año 2009, se intentó llevar a cabo la restructuración administrativa para el control del tráfico de drogas a pequeña escala y diferenciarlo del tráfico a gran escala, es decir, se aplicó una nueva distinción entre narcotráfico y narcomenudeo, así como establecer las nuevas competencias que habría entre distintos niveles de gobierno, en particular el cambio que se daría con la persecución de los delitos por drogas a pequeña escala, los cuales serían perseguidos por los gobiernos locales, teniendo los gobiernos subnacionales nuevas obligaciones y concurrencias con la federación cuestión que provocó disputas ente la federación y algunos estados como Campeche (SCJN, 2011).

Además, pude observar que, en la reforma de ley se menciona que, en la última década el narcotráfico había mutado y este delito que:

> se transformó de una forma particularmente grave para nuestro país; toda vez que hemos dejado de ser un país preponderantemente de producción y paso de drogas; ahora también se ha incrementado la venta al menudeo y el consumo ilícito de las mismas (DOF, 2009).

Estas hipótesis introducidas en el dictamen y exposición de motivos de las reformas de ley se dieron por ciertas y fueron bases para argumentar sobre el desarrollo contemporáneo del combate al narcomenudeo de manera institucional. Por ejemplo, la hipótesis del aumento del consumo local y la disputa por centros y puntos de distribución, lo cual provocó una disputa entre las mafias locales las cuales acrecentaron la violencia y mutaron hacia otros delitos fueron los argumentos y narrativas recurrentes, que incluso llegará a considerarse una crisis de inseguridad (Escalante, 2011; Díaz-Román, 2022).

Así, bajo un esquema de presión política y alineado a la agenda internacional sobre seguridad hemisférica e internacional y a la agenda presidencial, en el marco de un contexto securitizador post ataque a las torres gemelas de Nueva York, y en concordancia con actos de violencia espectacular, por parte de grupos criminales en Tijuana, Acapulco y Michoacán, la seguridad nacional comenzó a imbricarse con el narcomenudeo, ya que el Procurador General de la República a finales del sexenio de Vicente Fox en 2005, Daniel Cabeza de Vaca señaló que el narcomenudeo era: una amenaza mayor a la de grandes capos e insinuó otro punto importante en la reconfiguración del mercado local, asegurando que existía una nueva oferta de producto como las metanfetaminas y el pago con mercancía a las mafias locales, en específico el pago con cocaína y por así decirlo droga detenida en el país, lo cual vigorizó la venta al menudeo.

De manera paralela, dentro de la reconfiguración política e institucional se construyó una narrativa institucional donde se señaló un modelo de cambio y un enfoque para urgir y transformar el modelo de justicia y de seguridad o policial junto al modelo de investigación, mediante la mano dura y el ataque a los activos financieros, cuestión que fue replicada por las fiscalías locales y las entidades federativas que se intentó reformar con la creación de la Agencia Federal de Investigación, desde principios del sexenio de Vicente Fox, al respecto Cabeza de Vaca señaló en entrevista para La Jornada.

> El problema del tráfico y consumo de drogas en México "ha evolucionado y no es ahorita, igual que en 2000, y mucho menos como en los 80. En los 80 éramos un país de tráfico, ahorita somos un país de consumo, esa es la razón principal por la cual también se combate al narcomenudeo "Pero eso también implica flujo de recursos de forma diferente, porque ya vemos cómo también hay grupos que hacen el famoso pago en especie, y esa es la droga que circula en nuestras calles y que envenena a nuestra gente y genera recursos. Entonces, la forma de combatir este delito tiene que cambiar (Castillo, 2005).

También, cabe señalar que, al estar inmerso en circuitos ilegales, la explotación de este negocio se posicionó dentro de muchos otros como lo fue la venta de productos apócrifos (pirata o sin licencia), robados, mercancía de contrabando y a partir de unos 10 o 15 años esquemas de economías ilegales como el cobro de piso, extorsión, secuestro, auto partes robadas (Pansters y Castillo, 2007). Además, se indica que como parte de la economía informal ilegal es probable que algunos de los sujetos que se dedicaran a la venta en pequeñas cantidades de droga y que no pertenezcan a un grupo de traficantes organizados si no pequeños emprendedores, es posible que cuenten también con otro tipo de negocios como el llamado efecto *backdoor* (Chomczyński *et al*., 2019) en el que la venta de productos provenientes del contrabando, robo o apócrifos incluso legales sirven de "fachada" para la venta de drogas ilícitas en la "puerta trasera".

4.2 Configuración del crimen organizado trasnacional en la agenda de seguridad hemisférica 1989-2001, y su repercusión local en el Distrito Federal

En enero de 1982 fueron encontrados una docena de cuerpos en el Río Tula, un desagüe que conecta la Ciudad de México con el estado de Hidalgo, los cadáveres fueron trasladados al Servicio Médico Forense de la ciudad, fue casi imposible identificarlos dadas sus lesiones, que oscilaron entre el degollamiento, fuertes golpes y falta de miembros como brazos, piernas y dedos, así como el avanzado estado de descomposición, que insinuaron una posible tortura.

De acuerdo con la prensa de investigación reciente, las averiguaciones sobre la matanza del Río Tula comenzaron cuando la madre de Armando Mogollán Pérez, un taxista originario de la zona de Tepito, denunció su desaparición y después identificó el cuerpo de su hijo entre las víctimas de la masacre (Hernández, 2022). Sin embargo, otro hecho, más allá de los detalles turbios, llamó la atención durante las investigaciones, pues se hizo público que entre los cadáveres se encontraban los cuerpos de hombres de nacionalidad colombiana, así como un peruano, que supuestamente se dedicaban a la venta de drogas y el robo de bancos (OEM, 2022).

La conexión con Mogollán Pérez radicó en su desempeño como una especie de guía para los extranjeros, que en principio no conocían la ciudad, lo cual convirtió al taxista en cómplice de los asaltos. Mogollán comenzó a ganar dinero, que no pudo ocultar de las miradas indiscretas entre ellas las de sus propios parientes políticos, y fue investigado por su cuñado, un policía judicial que dio cuenta de sus actividades ilícitas a sus superiores, como resultado de estar en la mira de la policía el taxista fue visto por última vez en junio de 1981, se especula que bajo tortura confeso que trabajaba para un grupo de colombianos, asimismo proporciono la ubicación de estos, que tiempo después fueron secuestrados y asesinados por órdenes del jefe de la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia Francisco Sahagún Baca y del ya conocido Arturo Durazo (Hernández, 2022).

En principio, Sahagún Baca intentó desviar la atención argumentando que el hallazgo correspondió a una pugna relacionada con grupos guerrilleros extranjeros sacrificados en nuestro territorio por opositores violentos (OEM, 2022). No obstante, este tipo de violencia no era algo común en México. Además, no queda claro si la venta de drogas, a la que supuestamente se dedicaban las víctimas, se realizaba al menudeo o en grandes volúmenes y cuáles eran los nexos de estos con narcotraficantes más grandes, aunque en las notas se

sugiere que las transacciones se realizaban en centros nocturnos, por lo cual, puede indicar que quizá la venta de drogas al menudeo fue una de sus actividades delictivas, dada la naturaleza de este tipo de espacios, también llama la atención, que tanto la tipificación de los delitos como de las actividades ilegales comienzan a interactuar, de modo que los asalta-bancos también podían ser vendedores de drogas, a esto hay que sumar el hecho de que fueran extranjeros.

Dadas las condiciones particulares del caso, este fue cubierto por la prensa local e internacional, como una extraña matanza (AP EFE, 1982) consumada en el marco de una crisis económica y política concerniente al último año del sexenio del presidente José López Portillo, donde el descrédito institucional, así como el desaseo en los quehaceres de las agencias de seguridad fue evidenciada y una herencia negativa para el siguiente sexenio de Miguel de la Madrid; el cual, al menos en la narrativa y en la gestión de crisis se concentró en condenar figuras notables de la corrupción como la de Arturo Durazo y algunos otros mandos policiacos, por ejemplo, en una nota del periódico *El Alarma* se señaló en su primera página: "Durazo y Sahagún Baca ordenaron la matanza del Río Tula" (Hernández, 2022).

Retomando los reportes periodísticos y policiales la masacre la realizó un grupo de policías de élite pertenecientes a la DIPD conocido como *Jaguares* quienes cobraban renta o extorsión a delincuentes para quedarse con una tajada de sus ganancias. Así, en primera instancia obligaron al grupo de colombianos a trabajar para ellos, los veinte secuestrados debían proporcionar dinero y drogas, de este total de veinte, solo "ocho lograron salir del agujero donde los torturaban, entregando todo el dinero y la cocaína que pudieron" (Hernández, 2022), los doce restantes fueron ejecutados y posteriormente arrojados al drenaje profundo.

Por su parte en la cultura popular las narrativas derivadas del Río Tula interactuaron y se fusionaron con el escándalo Kiki Camarena, que tuvo lugar pocos años después, ya que también este fue caso donde la participación de autoridades policiacas y vinculadas con la política mexicana están presentes (Byram-Lake, 1984). Sirva de ejemplo un corrido, que narra detalles de la masacre e intercala algunos elementos que corresponden al caso Camarena como la inclusión del nombre de Caro Quintero y la participación y muerte de estadounidenses entre las víctimas de la matanza, el cual es transcrito a continuación.

El Río de Tula

Año del 85
voy a cantar un corrido
en ese Río de Tula
mire lo que ha sucedido
ya parecía cementerio
de cuerpos desconocidos

Dicen que unos colombianos
en ese río murieron
porque andaban en la mafia de la de Caro Quintero
también norteamericanos
ahí desaparecieron

Y las leyes mexicanas se tienen que respetar
no porque presten servicio al Gobierno Federal
a todos los delincuentes
se les debe castigar

Se le acreditan los muertos
a la banda del Jaguar
no saben si fue Durazo el que los mandó callar
o la mafia de Quintero
los muertos ya no hablaran

Fueron bastantes los muertos
que muchos recordarán
las órdenes de Durazo que le dio a la judicial
también a la policía del Distrito Federal

Por ese Río de Tula
muchos secretos se irán

adiós, Arturo Durazo
y a la banda del Jaguar
mafia de Caro Quintero
ya terminé de cantar
(Los Hermanos Coria de Michoacán, 1985).

Cabe señalar que el corrido del Río Tula es parte de la banda sonora para la película de nombre *Masacre en Río Tula* estrenada en el año de 1985, y que fue dirigida por Ismael Rodríguez Jr., en el filme presentaron escenas sangrientas y violentas, incluso esta película fue denominada como *gore* por lo cual fue censurada en su tiempo por más de una década. De acuerdo con Coria *et al*. (1998), la película presenta en su secuencia de créditos cuerpos en putrefacción y despojados de toda humanidad como consecuencia de una violencia inenarrable.

También, esta fue acompañada de un poster de exhibición donde se podía observar un grupo de cadáveres desnudos, tirados en el suelo y apenas cubiertos por plástico, estas imágenes aparecen presentadas en viñetas que asemejan la primera plana del periódico El Alarma, por lo cual la película y el periódico parecen fusionarse como ejes que dotan cierto nivel de realismo, esto con la finalidad de que los espectadores de la película tuvieran la sensación de que estaban viendo una historia real, aunque se tratase de una adaptación novelada de ficción en un guión cinematográfico.

Al respecto Zavala (2022) menciona que durante la época del escándalo Camarena la cobertura mediática dotó a la política y a las instituciones de la seguridad en México de un dispositivo semiótico que abonó a fundar la fantasía de un cartel que controlaba distintos tipos de criminales y delitos. Si a esto le sumamos los antecedentes de un hecho tan violento como la ya relatada masacre, a esta se le puede entender como un telón de fondo donde los actores involucrados en la ejecución, las víctimas mortales, que también se dedicaban a actividades criminales y las autoridades, funcionaron, tal vez sin saberlo, en una lógica que poco tiempo después configuró las bases de una evolución en las transacciones ilícitas, es decir, a falta de dominio de las calles citadinas y el hecho de no alinearse a la cadena de corrupción y cuotas exigidas por algunos miembros de la policía capitalina, el grupo procedente de Colombia tuvo que generar ganancias y movilizar su mercancía en pequeña

escala, lo cual no significa que no llevaran a cabo acciones propias del narcotráfico a gran escala.

La intención de desarrollar el caso de la masacre del Río Tula obedece al hecho de que esta ejemplifica, lo que se ha venido desarrollando sobre la idea de un agotamiento de los enemigos construidos durante la guerra fría, esto mediante la adopción de nuevos enemigos. En este sentido, a un contexto de inseguridad urbana con delincuentes locales se le suman actores extranjeros en busca de espacios mercantiles ilícitos, los cuales fueron incluso erróneamente clasificados y figuras provenientes de contextos dislocados como el crimen organizado tanto en la cobertura periodística como en la narrativa y por ende su reproducción en los campos de producción cultural, político y social.

Y es que la prensa dio un viraje que comenzó a principios de los ochenta, y que se consolidó a mediados de la década, hacía la observación y posterior incorporación en los relatos periodísticos de figuras como el narcotraficante, el asaltabancos o el secuestrador, que para finales de la década se convirtieron en parte de una narrativa aceptada y por todos conocida. Sin embargo, en este proceso se presentaron cruces categoriales alimentados desde las posiciones políticas e incluso ideológicas de altos mandos policiacos y del gobierno, por ejemplo, el desplazamiento de la figura del guerrillero hacia el delincuente, los cuales ya por separado eran vistos como enemigos, pero como uno solo eran potencialmente peligrosos. De igual modo, en este proceso como consecuencia de los escándalos y abusos de la policía capitalina en la prensa comenzaron a rondar con más frecuencia personajes como el policía corrupto el cual ha estado presente en la historia de México del siglo XX (Pulido, 2015; 2021).

Por último, falta indagar sobre el papel de actores extranjeros en un contexto delicado y violento como el que enfrentaba México a principio de la década de los ochenta, además de que la estigmatización y rechazo a personas de nacionalidades distintas también se puede relacionar con estereotipos básicamente negativos, situación que no era nueva en el país, sirva de ejemplo el tráfico ilegal de drogas desde el origen de su persecución y prohibición en las normativas mexicanas al estar inmiscuida en ambientes farmacéuticos y linderos de lo ilegal y de un tipo especial de comercio de mercancías internacionales como la heroína o la cocaína puede estar imbricado en horizontes de extranjería por lo que las narrativas que se

adoptaron respecto a la cocaína y los colombianos era casi indivisible al igual que en los años treinta y cuarenta con las mafias europeas con el hachís y la heroína.

Así, cuando supuestamente Durazo pidió se eliminará a esos "mugrosos colombianos" (OEM, 2022), dentro de esta lógica presuponía, igual que el ejecutor Rodolfo Reséndiz "El Rudy" quien decidió lanzarlos desde una altura de 70 metros hacia el drenaje profundo, que dada su condición de extranjeros y delincuentes a nadie le importaría su destino.

Como ya se argumentó en capítulos anteriores la reconfiguración del sistema político comenzó desde el agotamiento del modelo político y económico en la administración de Miguel de la Madrid 1982-1988, y durante este la reestructura también las organizaciones policiales se vieron afectadas con el encarcelamiento de altos mandos, la extinción de la DIPD y la DFS y las reformas a la policía preventiva del Distrito Federal, así mismo muchos miembros de la DIPD pasaron administrativamente a ser parte de la Policía Judicial Federal o de la Policía Judicial del Distrito Federal (Jiménez, 1999).

También con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y la reforma política en el Distrito Federal, que dicho sea de paso se dio en un contexto de redefinición las relaciones México Estados Unidos en cuestiones de tráfico ilícito de drogas y de delincuencia en un entorno que se convertiría en un espacio de mundialización y americanización al respecto en las memorias del expresidente de la Madrid, se presentó la necesidad de integrar nuevos esquemas administrativos en particular los económicos pero también los policías y para hacerlo sería necesario echar mano de las experiencias norteamericanas y acercarse al país vecino con el fin de profesionalizar, actualizar y tecnificar a las policías (Lajous, 1984).

Por ello recuperó la pregunta, ¿cómo se configuró el fenómeno del narcomenudeo en la Ciudad de México en el marco de interacción entre normas, leyes y actores en un intercambio multi nivel desde lo subnacional hasta lo global enfocándonos en la Ciudad de México? Para responder, tomó en cuenta en primer lugar la cuestión lingüística ya que a partir de los distintos usos de términos, categorías, etiquetas políticas y mediáticas se identificó que el prefijo *narco* se ha construido a partir de una serie de relaciones de poder mediante la repetición de información gubernamental y lenguaje político mediático y es desde este horizonte que se desprenden los términos narcotráfico y narcotraficante, que a su

vez guardan una cercana relación con ideas como criminalidad y tráfico de drogas ilegalizadas.

Sobre el análisis del término narcomenudeo, este ha dado pie a pensar que dada la evolución del mercado de drogas ilegalizadas para el consumidor final el cual, aunque sea pequeño estable ya se ha convertido en un sujeto rastreable histórica y hemerográficamente, de modo que el narcomenudista es un sujeto de la historia. De igual manera, como el clima de inseguridad urbana se exacerbó dando pie a la aplicación de estrategias para perseguir y controlar el fenómeno, la figura y concepto del crimen organizado también se ciñó a este mismo complejo de representaciones sociales y colectivas en el ámbito del lenguaje político y mediático sobre el problema.

Este es un proceso similar al caso del narcotráfico y la época de la certificación, donde la figura del criminal, del crimen y del crimen organizado fungieron como un espectro potencial para depositar lo punible y los esquemas de negociación política e instauración de sistemas y codificaciones jurídicas que rebasan lo subnacional y se insertaron en un contexto de globalización de ciertas políticas de seguridad. Estas políticas afectaron desde la policía Judicial Federal en Guadalajara durante los años 80 pasando por la policía de seguridad pública de la Ciudad de México durante los años noventa en delegaciones como Iztapalapa o Cuauhtémoc hasta la Policía Federal Preventiva o la Agencia Federal de Investigaciones durante el primer lustro del siglo XX por nombrar algunas.

Según Luis Astorga (2023) señala que para entender vocablos como crimen, criminal, delincuente o delincuencia considera tres posibles expectativas de razonamiento. La primera sería la forma etimológica o literal, en este nivel suele reproducirse el uso cotidiano como el de la prensa, el que se encuentra en los diccionarios o manuales, por lo cual es el que mayormente se utiliza en los campos de reproducción social como los objetos culturales.

En un segundo plano se encontraría el de la codificación jurídica, que establece los límites entre lo permitido y lo prohibido en una sociedad determinada y define sanciones para los transgresores, que delimita, asimismo, el universo de validación de palabras, nociones y conceptos con un grado de elaboración mayor (Astorga, 2023: 17). Desde modo la historia social del narcomenudeo pretende identificar cómo es que a través de complejos usos de lenguaje institucional reproducido por la prensa se afianza la idea de un enemigo interno y

una figura del criminal que sea identificador e identificada en el marco de interacciones de productos y campos de producción sociales y culturales donde el crimen organizado se irá asociando con delitos contra la salud en su modalidad de tráfico a gran escala como narcotráfico y a pequeña escala como narcomenudeo.

Y por último Astorga (2023) señala el horizonte académico donde las preconcepciones y lugares comunes deben rebasarse para hacer una reflexión epistemológica de los problemas sociales. En este orden de ideas, para comprender la interacción y la configuración de la idea y futura codificación social, política y mediática en México de la figura del crimen organizado será entendida a partir de la repetición de esquemas *norteamericanizantes* respecto a la seguridad y a la denominación de enemigos y cómo una coyuntura específica como lo fue la reconfiguración del poder político y la interacción de México en el campo de la configuración y consolidación de regiones económicas como América del Norte la cual se inserta como un proyecto económico y político derivado de la reconfiguración política del sistema político mexicano las relaciones México-Estados Unidos y las Américas.

Una vez establecidos los antecedentes, recupero las nociones no preconcebidas y analíticas sobre el crimen y crimen organizado en el contexto de la inseguridad urbana de finales del siglo XX como ejes, que dotaran a nivel regional local y global consensos administrativos y comunicacionales, esto en una temporalidad que parte en el primer año de administración gubernamental del sexenio de Carlos Salinas de Gortari y culmina en al año 2001 con el ataque a las torres gemelas de Nueva York, debido a que la agenda hemisférica de seguridad se agudizó con la narrativa terrorista y con la integración de los equipos de seguridad mexicanos con los estadounidense a partir del comando norte, al mismo tiempo que en la ciudad de México se experimentaron los primeros gobiernos encabezados por el Partido de la Revolución Democrática y la restructuración de las relaciones de poder en los aspectos criminales ante el agotamiento del control ejercido por algunos agentes de policía corruptos agencias.

Al retomar que, la americanización es entendida como un proceso por el cual los valores, las políticas y la cultura norteamericana tienen un peso preponderante para las sociedades occidentales, en los años ochenta y noventa estos principios funcionaron como

un eje de persuasión y de ordenamiento en los campos sociales, políticos y culturales. En este sentido, la doctrina de seguridad nacional norteamericana se adaptó y se expandió en la persecución del *crimen organizado* como un nuevo enemigo interno y externo, hasta convertirlo en un enemigo internacional lejano y cercano.

En el contexto de finales del siglo XX, procesos como la mundialización del sistema bancario y de intercambio acelerado de mercancías y bienes se encontraron cada vez más interconectados. Pero, también era necesario establecer mayores controles internacionales, contrario a lo que se podría pensar de un mercado abierto, por lo que la integración de México al proyecto de América del Norte experimentó tensiones y continuidades, en lo que respecta al control criminal, esto aunado a los acontecimientos y el clima político en México que facilitó la americanización de ciertas áreas de la seguridad, la comunicación y la política durante los años noventa en los sexenios de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo.

Por ello, el crimen organizado en particular el tráfico ilícito de drogas, el lavado de dinero, el tráfico de personas y el terrorismo (figura que tendrá su propia dimensión securitaria) funcionaron como un eje para la adopción de una narrativa y un estereotipo del *narco mexicano*. En este horizonte se operativizó la idea de un cártel local mexicano que desplazó su actividad principal del tráfico de mariguana hacia el de cocaína. Esto fue posible, gracias a que se construyó una narrativa sobre jefes criminales que se detenían e información acorde a la estrategia norteamericana del *kingpin* (USGAO, 1999), tanto en el esquema gubernamental norteamericano como en el mexicano. Un ejemplo es la figura de Félix Gallardo, uno de los acusados por el asesinato de Kiki Camarena, que fue apodado en Estados Unidos como *El Zar de la cocaína* y en México se le bautizó como *El jefe de jefes*.

Cabe señalar, que este fue un tema que estuvo presente en debates y discusiones en la prensa y en términos de producción cultural desde finales de los ochenta hasta casi una década después, pues 1997 el grupo de regional mexicano Los Tigres del Norte publicó un álbum de estudio bajo el sello discográfico Fonovisa, propiedad de Televisa, llamado Jefe de Jefes, título que también el tema más representativo de este, ya que alcanzó el número 1 en la lista *Billboard* en la categoría de álbum latino ese año (Billboard, 2024).

Dicha canción hace referencia implícita a Gallardo, posicionándolo como uno de los personajes más importantes y respetados en México, tanto por la prensa, como por la

sociedad. No obstante, en la canción, composición de Teodoro Bello, se destaca la importancia del corrido como un lugar de enunciación de los hechos que atañen a la sociedad y donde se narra la verdad. Sirva de ejemplo la introducción del tema:

> A mí me gustan los corridos
> Porque son los hechos reales de nuestro pueblo
> Sí, a mí también me gustan
> Porque en ellos se canta la pura verdad
> Pues ponlos, pues
> ¡Órale, ahí va!

(Los Tigres del Norte, 1997).

A diferencia del resto del corrido, en la introducción se desarrolla en *voz en off* un diálogo entre dos personas, que intercambian opiniones de manera coloquial sobre el papel que juegan los corridos para el pueblo como fuentes de información y como narraciones de cultura popular. En este sentido, el corrido en este contexto puede considerarse un texto de cultura. Después de la introducción, en el primer verso aparecen la prensa y los periodistas como elementos que reproducen el discurso sobre la vida, hazañas y obras de los narcotraficantes; pero también se sugiere la conflictiva relación entre prensa y traficantes, así como el peligro de no ajustarse a la narrativa del *mafioso* y sus intereses.

> Soy el jefe de jefes, señores
> Me respetan a todos niveles
> Ni mi nombre y mi fotografía
> Nunca van a mirar en papeles
> Porque a mí el periodista me quiere
> Y si no, mi amistad se la pierde

(Los Tigres del Norte, 1997).

De acuerdo con Herlinghaus (2013) señala que los narcocorridos han sido criticados porque celebran la violencia y ponen a los narcotraficantes en un lugar de heroes debido a sus hazañas en el intercambio y tráfico de drogas más alla de las fronteras mexicanas. Por lo que

desde su perspectiva han intoxicado las narrativas, sublimando las condiciones de posibilidad y de los limites de lo imaginable ya que al narrar mediante música las experiencias estéticas con violencia y éxtasis logran transmitir un sentido de normalidad y con esto, como tambien se menciona en la introducción de la canción del Jefe de Jefes supone que retrata cierta realidad.

Gallardo, ofreció en el año 2021 una entrevista para la televisora Telemundo y aseguró que nunca existió el *Cartel de Guadalajara* y que escuchó de él hasta que estuvo preso (Telemundo, 2021). Por su parte, Zavala (2022) reafirma estas sospechas confirmando que la historia sobre la cobertura del caso Camarena y sus implicaciones estuvo plagada de inexactitudes, pero consolidó una narrativa y un universo de explicación razonable dentro del imaginario colectivo, construido a partir de información oficial inverificable o falsa e interpretaciones sesgadas. Así, se verifica el consenso político y mediático, incluso histórico, que este acontecimiento con la DEA marcó un antes y un después dentro de las relaciones México-Estados Unidos, además fue exitoso también porque emparejó la narrativa de la existencia de grandes cárteles colombianos, que trabajaban de manera cercana o con acuerdos a traficantes mexicanos y que estos serían los próximos objetivos por perseguir.

Con la internacionalización de estas prácticas político-mediáticas, a través de negociaciones diplomáticas, presiones económicas o políticas e incluso con la intervención de Estados Unidos, estas influyeron de manera directa e indirecta en la política interior y exterior mexicana, así como en la reputación que se tiene de México en el extranjero, un caso notable fue la serie que la televisora NBC puso al aire a principios del año 1990 titulada *Drug Wars The Camarena Story*, que provocó el disgusto del presidente Salinas, quien declaró en una ceremonia, en honor a soldados y agentes caídos en la lucha contra traficantes, que no se permitirían intromisiones exteriores en asuntos internos. Incluso el Consejo Nacional de la Publicidad publicó el 16 de enero del mismo año, dos días antes de la primera nota, un desplegado en el New York Times condenando la serie y las acciones del gobierno norteamericano cuestionando su compromiso con las autoridades para luchar contra las drogas (Rohter, 1989; 1990).

De este modo, la americanización de la lucha contra las drogas y la creación de una narrativa sobre un *cártel* con un padrino que controlaba una empresa criminal se consolidó

en la televisión norteamericana con la figura de Caro Quintero (Zavala, 2022), mediante una serie que mostró las dinámicas un México corrupto, narrativa que no desapareció en lo sucesivo y que persistió en la siguiente década. A la par, en la prensa de la época se destacó la existencia de una relación tensa, a veces con reclamos de ambos lados, pero amistosa entre presidentes, donde los titulares del ejecutivo se concentraban en asuntos del tratado económico, pero también en la cooperación antidrogas, cuestión que continuó al menos durante toda la década de los noventa (Balz, 1990).

Al compartir intereses y frontera en el marco de la interacción política y la integración regional y económica con América del Norte, en el gobierno de Carlos Salinas, durante las administraciones presidenciales de George Bush y Bill Clinton, las interacciones estuvieron marcadas por la obligación de México de cumplir con la certificación, aunque se condenaba en público o en foros internacionales la medida como arbitraria. Durante los acuerdos para adjudicar recursos de apoyo bilaterales se daba por sentado el cumplimiento de dichas imposiciones, aunado a que las relaciones durante la época de negociación y post implementación del TLC fueron complejas y agresivas, basta mencionar la renuencia de algunos miembros del congreso norteamericano para establecer un tratado de libre comercio con México, donde la cobertura de prensa de élite dejaba mal parada a la administración salinista, en parte por la mala reputación heredada por la corrupción, crisis económica y el escándalo Camarena (Balz, 1990).

Sin embargo, durante las negociaciones internacionales, México solía alinearse a los intereses y a la retórica norteamericana consolidando, en el marco del derecho internacional, la adherencia a las nuevas reglas y relaciones impuestas por la doctrina de seguridad nacional norteamericana, como el interés al etiquetar y denominar a las empresas criminales y al crimen organizado como categorías traducibles. Por ejemplo, los consensos internacionales como lo fue la Convención en Contra del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, donde se fortaleció y amplió el modelo americano de guerra contra las drogas, esto permitió que términos del derecho norteamericano pasaran al ámbito del derecho internacional como: *actividades criminales internacionales* y *empresas criminales*, lo que dio pie a la adopción de percepciones y de categorías jurídicas que para el caso mexicano y de la Ciudad de México se ajustaban al contexto de la inseguridad urbana y la restructuración de los mercados ilegales, en particular la venta de drogas.

Durante la crisis derivada por el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, una de las líneas de investigación apuntó a dos factores, el primero que el magnicidio tuvo lugar en un territorito que no era controlado por el PRI, si no por el PAN, y que los espacios estaban controlados por grupos criminales. Al respecto, Moreno y Villasana (2002) también señala que el asesinato del Cardenal Posadas en 1993 y el asesinato de Mario Ruiz Massieu en 1994 fueron etiquetados como ocasionados por el crimen organizado cuestión que construye una visión estereotipada desde distintas realidades y se utiliza como una excusa para adoptar medidas político-criminales a partir del mito mafioso (2001: 151-152). Estos acontecimientos coinciden con el periodo de internacionalización de las políticas económicas de México y la adopción de un nuevo sistema económico y de reorientación del viejo sistema político a otro, que, si bien seguía con la estructura presidencialista, si presentó ligeras reconfiguraciones locales.

En este orden de ideas, tomando en cuenta el auge y popularización del término delincuencia y crimen organizado en el ámbito político, jurídico y periodístico, durante los años noventa este término comenzó a expandirse y a ser utilizado por periodistas y políticos para designar enemigos o culpas, esto se concatena con que en algunos lugares del país, en particular en las grandes ciudades, se experimentó un aumento en la criminalidad, la cual se juntó con el desorden del modelo clientelar con el que se intentaron resolver los graves problemas sociales, lo cual, también fue un factor para el crecimiento de la criminalidad, en especial el robo como asalto con violencia, robo de automóvil y el secuestro que fue considerado un delito que años después sería tipificado como delincuencia organizada. Aunado a esto, es posible argumentar que ante un problema estructural como lo fue el crecimiento de la inseguridad urbana y tensiones políticas, los medios de comunicación amplificaron la violencia como un modelo de legitimación de la violencia simbólica y el proceso disciplinario (Pansters y Castillo, 2007).

Para la temporalidad construida en este apartado, si bien no es posible establecer correlaciones directas entre el aumento de la criminalidad y los procesos de integración económica, si es evidente que a nivel local las ciudades experimentaron el incremento exponencial de delincuencia callejera, aunado a que crecieron los grupos organizados para delinquir y a los problemas estructurales y coyunturas políticas y sociales ya existentes como la crisis económica de 1994.

De esta manera, se gestaron las condiciones de posibilidad para que durante los años noventa se conformarán redes establecidas para delinquir, cada vez más sofisticadas y violentas, donde las autoridades tenían el conocimiento de la existencia de grupos criminales, desde los años 80, dedicados al robo, al secuestro y al contrabando, también que los espacios para el intercambio y control de estos liderazgos se establecía en las cárceles del Distrito Federal (Castillo y Zúñiga, 2001).

Entonces, tanto la violencia como la inseguridad urbana en el Distrito Federal, durante la década de los años noventa, comenzaron a tener una mayor cobertura por parte de la prensa, así como a convertirse en asuntos públicos y por lo tanto en una preocupación para la ciudadanía. Esto debido a, que, si bien crímenes como los robos y los asaltos habían formado parte del ecosistema urbano, aunado a que ciertas zonas de la ciudad han sido consideradas históricamente como conflictivas o peligrosas, se agudizó esta percepción. Por ejemplo, los casos de algunas zonas de la ciudad como Iztapalapa y el centro histórico, prueba de ello existe en la cultura popular mediante un lenguaje estigmatizante o que alerta sobre el peligro de estos lugares como lo pueden ser las expresiones vinculadas a colonias y lugares como: *Iztaparrata*, *Iztapalacra (*Iztapalapa*) Apatraco* (Apatlaco)*, La mortales* (Portales) *o Santa María la Ratera* (Santa María la Ribera).

Sobre la inseguridad, se observó que los delitos en aumento fueron el robo a transeúnte, el robo en transporte público y el robo de automóvil y auto partes, mientras que la violencia homicida, al menos hasta mediados del sexenio de Vicente Fox, según datos oficiales del INEGI, se encontraba a la baja. Eso quiere decir, que, de manera paradójica, los delitos violentos como el robo a mano armada y el secuestro se encontraban en un aumento significativo, la tasa de homicidio era relativamente estable a nivel nacional, cuestión que cambió drásticamente en el último año de administración gubernamental del PAN.

Al mismo tiempo, la narrativa construida en la prensa respecto a la inseguridad también fue en aumento y se convirtió en agenda política local y supra nacional, por lo que la necesidad de integración de la doctrina securitaria y la americanización de ciertas figuras narrativas y conceptuales como el crimen o delincuencia organizados, dotaron de un horizonte político idóneo para endurecer las medidas de seguridad. En este sentido, se generó un consenso para la creación y codificación penal de la figura de delincuencia organizada, la

cual apareció en las leyes en 1993 para posteriormente en 1996 ser incluida dentro de una ley general.

Una explicación sociológica, para el aumento en la pobreza y criminalidad y el desafío administrativo y conexión entre el crimen organizado y el narcomenudeo, se puede localizar en la atomización del poder político, derivado de la reconfiguración y crisis del sistema político mexicano, que afectó a la administración de las redes clientelares y el abandono de instituciones encargadas del control social, por ejemplo, en el Distrito Federal solo algunas organizaciones corporativistas lograron empatar con el proyecto Salinista del Programa Nacional Solidaridad, PRONASOL en adelante, para obtener apoyos como vivienda, reestructuración de deuda, préstamos o proyectos de inversión social.

De este modo, la ciudad se consideró un centro de difusión de los grupos organizados pertenecientes al recién formado Partido de la Revolución Democrática, PRD y a la izquierda, razón por la cual el programa PRONASOL no logró adherencia significativa en la ciudad como lo señala Barajas (1997) que realizó un comparativo nacional, destacan los casos de Oaxaca y Puebla en el periodo 1989 y 1994 donde se instalaron entre 20 y 25 mil comités de PRONASOL, mientras en el Distrito Federal sólo se establecieron 7000, esto es importante debido a que para acceder a la dispersión de apoyos y recursos financieros había que formar los comités sociales de PRONASOL y entrar a la estructura política del modelo salinista y si bien el programa buscaba erradicar la pobreza extrema, también era un factor de dominación política en un entorno de crisis y empobrecimiento con tasas amplias de desempleo, con una la tasa de criminalidad en el Distrito Federal que de 1 700 delitos (por cada cien mil habitantes) en 1993, se pasó a dos mil 835 en 1995, y los delitos cometidos con violencia aumentaron 500% de 1990 a 1996 (Zurita *et al*., 1999:12-13).

En el marco de re-ordenamiento político y administrativo la ciudad de México fue un espacio de intercambio derivado de la reconstrucción de zonas de la ciudad y el desplazamiento de poblaciones, resultado del sismo de 1985, estas redes clientelares afianzaron el modelo político de alternancia en la ciudad y permitieron el avance y victoria de Cuauhtémoc Cárdenas y reconfiguraron las relaciones entre el centro de la ciudad y la periferia, así como el crecimiento de la ciudad de manera acelerada durante el proceso de alternancia (Gamboa y Revah, 1990). En 1997, Pedro Peñaloza, congresista del PRI, advirtió

en entrevista para *La Jornada* que durante la nueva administración de Cárdenas los delitos se dispararían, y, además, indicó particularidades respecto a la corrupción policiaca y venta de droga en Tepito y otras zonas de la ciudad:

> Tepito es el almacén de droga más grande de la ciudad y colonias de Iztapalapa, Iztacalco, Azcapotzalco y Álvaro Obregón, así como zonas más localizadas como la colonia El Rosario, Doctores, Buenos Aires y Portales funcionan como zonas de distribución, al igual que giros negros, discotecas e incluso centros escolares. Pero la policía no interviene en ninguno de esos puntos, no detienen a las cabezas, no cumple con las órdenes de aprehensión por una simple razón: ``Los propios elementos policiacos se abastecen de droga, principalmente, y en consecuencia están coludidos con los distribuidores, les venden protección y les facilitan la entrada y salida del producto con la mayor impunidad" (Posada y Urrutia, 1997).

Habría que señalar las dos distinciones que se han logrado establecer para la expansión del uso del término crimen organizado, que se integraría posteriormente al universo del narcomenudeo, uno la percepción de violencia y segundo los hechos consultables. Sobre el crecimiento en el uso del término crimen organizado, es innegable que es paralelo al crecimiento de la inseguridad y la violencia urbana pero también de la proliferación de la violencia armada entre grupos de traficantes y criminales, la cual fue aún más evidente durante el siglo XX, por lo cual el crimen organizado como imaginario construyó un horizonte explicativo tanto para el sentido común como para el lenguaje político-mediático.

La espiral de violencia que se construyó en la prensa y en el discurso político aunado al aumento de inseguridad y a la crisis derivada, tanto por el crimen como por el alzamiento zapatista y aparición de otros grupos armados y la presión norteamericana para controlar el narcotráfico, logró establecer un consenso y la necesidad de reformar e implementar medidas ejemplares en contra de los delincuentes, pero también en contra de la ciudadanía y de los actores que participaran de estos delitos, aunado a este clima, tan sólo entre los años 1994 y 1995 fueron cesados más de 50 mandos de PGR acusados de tener vínculos o proteger a traficantes (Venegas, 1996).

En este sentido, ante el descontrol criminal los modelos de *mano dura* o *cero tolerancia* comenzaron a tener mayor eco en la prensa, la sociedad y la política, incluso en personas ligadas a la izquierda, ya fuera el caso de Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, quienes dejaron huella de esto en sus respectivas administraciones. Si bien,

este modelo era reflejo de un contexto internacional, por ejemplo, las capacitaciones que tuvieron las agencias como la policía judicial, la PGR y el ejército para el combate en contra del terrorismo y crimen organizado, se incluyeron tácticas de guerra psicológica, guerra no convencional y espionaje (DOF, 1996; Méndez, 2007).

A partir de la americanización de ciertas prácticas globales como el control al crimen organizado, se dio pie a que en el Distrito Federal se experimentará con narrativas y políticas que hasta el día de hoy son las dominantes en el modelo punitivo jurídico. Estas han construido relaciones políticas, sociales y económicas para desarrollar la codificación y construcción de otro enemigo interno consensuado internacionalmente depositado en la categoría de crimen organizado y que mediante la espectacularización de la inseguridad urbana y el control poblacional de la ciudades y a partir de la tecnificación de los servicios de seguridad, así como, las tensiones con los sistemas policiales y de seguridad, se logró consumar y adaptar el formato norteamericano (Baker y Roberts, 2005).

Antes de que la figura del narcomenudista fuera el depositario del orden punible en el Distrito Federal, el secuestro logró captar la atención de la prensa y los medios de manera radical mediante cobertura e historias abundantes, dinámica que duró más de una década. Las características de estas narrativas en un primer momento fueron el plagio de personas, cuyo prestigio depositado a sus vidas eran contempladas como de alto valor, es decir, personas con alto nivel adquisitivo o notoria popularidad fueron secuestradas por grupos organizados que comenzaron a ser juzgados y perseguidos bajo el modelo de delincuencia organizada. En contraste, Jiménez (2012) señala que entre la década de los cincuenta y hasta los setenta del siglo XX el secuestro se consumó como un delito, una suerte de acto en contra del poder establecido y como forma de negociación política por ejemplo los secuestros de personajes notables que llevó a cabo la guerrilla durante los setenta.

Sin embargo durante los noventa, el lugar social que se delegó a los secuestradores fue el de enemigos públicos y el delito dentro de la política criminal fue tomado como fuente de información y de comunicación política, por lo tanto la cobertura mediática permitió y facultó la formación de opinión pública a favor de la mano dura y de medidas que incluyeron el aumento en las penas y robustecimiento del sistema de persecución con grupos policiales tácticos especializados en contra del secuestro capacitación y robustecimiento en el tipo de

inteligencia que se utilizaba (Castillo y Zúñiga, 2001). Incluso políticos como Arturo Montiel, gobernador del Estado de México entre 1999 y 2005, utilizó como lema de campaña la polémica frase: Los derechos humanos no son para las ratas (Concha, 1999), esto tanto para aludir a la delincuencia y el clima de violencia en el país, como para insinuar las medidas de mano dura que habría de implementar y que eran populares en la época.

El modelo de políticas de cero tolerancia puede considerarse en dos arenas, la primera como un conjunto de principios y medidas para prevenir y erradicar prácticas lesivas, nocivas y atroces, en distintos ámbitos como: la gestión y administración pública, espacios laborales, educativos o deportivos. Tomemos, por ejemplo, el abuso, hostigamiento y explotación sexual, la discriminación racial, de género o por condición clínica y por último el dopaje o conductas antideportivas. Sobre este enfoque existen en México decálogos, manuales y armonización entre tratados internacionales y leyes locales o regulaciones particulares, donde el objetivo es imponer medidas ejemplares ya sea administrativas, civiles o incluso judiciales cuando este sea el caso para penalizar conductas. Mientras que la segunda, es securitaria, es decir, prácticas de encarcelamiento masivo, operativos policiacos de control poblacional y medidas invasivas de perfilamiento social como los denominados *operativos rastrillo* y *portación de cara*, que responden a estereotipos y estigmatización de la población joven, de bajos recursos y que habita en zonas conflictivas.

4.3 Campaña permanente contra el narcomenudeo e Implementación de la ley contra el narcomenudeo 2006-2020

La literatura sobre narcomenudeo aún es escasa en comparación con otros tópicos como narcotráfico o crimen organizado. No obstante, existen algunos trabajos que desde diferentes frentes como el derecho o el análisis estadístico, ofrecen distintas formas de explicar el fenómeno del narcomenudeo en México y que oscilan entre observar el consumo de drogas como un riesgo al que está expuesta la población mexicana y que reformas como la llamada *Ley narcomenudeo* no son del todo claras (Ojeda, 2010), hasta argumentos sobre el aumento de la violencia y el delito asociados al narcomenudeo en el país, a tal grado que se da la impresión de que los delitos disminuyeron en la capital cuando no necesariamente fue así (Díaz-Román, 2022).

En este sentido, como ya se desarrolló en el apartado 3.5 de este trabajo, el comercio de drogas a pequeña escala o *narcomenudeo* es un fenómeno social complejo que parte de la venta en pequeñas dosis de drogas ilegalizadas, lo cual ha facilitado su introducción en la narrativa política, de justicia, de seguridad-policial e incluso en la periodística, mediante la articulación de un modelo para nombrar e institucionalizar actividades. Para con ello, delimitar normas, transgresiones, delitos, penas, agravantes y criterios de oportunidad bajo la lógica de narrativas políticas en un entorno de inseguridad urbana, securitización y diversificación criminal, pero también en cumplimiento de la función ante la demanda de drogas ilícitas, lo cual dificulta su control y erradicación.

Dicho esto, se retoman los ejes de la matriz de análisis: Régimen Internacional de Prohibición de drogas, Sistema Político, Americanización y Securitización, porque son puntuales para describir los procesos de la institucionalización del narcomenudeo en la práctica política, en particular el tránsito de la persecución federal a la competencia estatal, las cuales son más notorias en la política criminal, de justicia y de seguridad, así como en la adaptación, homologación y aceleración nacional para la persecución de los delitos contra la salud, como agenda política, y su utilización para el combate al crimen organizado aún y cuando en la Ciudad de México tardaron en reconocer la presencia de grandes grupos de traficante o este tipo de delitos (Astorga, 2023). De este modo, los campos de producción política a través del complejo político mediático y político encuestador (Moreno, 2018) fortalecieron las narrativas dominantes, en este caso el combate al narcomenudeo y al crimen

organizado, así como la adopción de endurecimiento de las penas que incluyen el encarcelamiento, arraigo, prisión preventiva sobre todo cuando el delito es concomitante a la persecución del crimen organizado (Madrazo, 2014).

Así, el consenso internacional, regional y local que ha generado el largo entramado de la punición de drogas en el ámbito jurídico, político y mediático permiten y articulan un modelo poco flexible y encaminado a lógicas de combate (Collins, 2012a) para que dentro del sistema político mexicano el narcomenudeo se inserte en el horizonte criminalizador a pesar de la resistencia y la aparente discordancia entre proyectos y actores políticos dominantes a principios del siglo XXI. En este caso, es de importancia para este capítulo destacar el antagonismo entre Vicente Fox, titular del ejecutivo federal 2000- 2006, y Andrés Manuel López Obrador, jefe de Gobierno del Distrito Federal 2000-2005, marcado por desencuentros y controversias que tuvieron lugar entre 2003 y 2006 como el desafuero de López Obrador y la famosa frase *Ya cállate, chachalaca*, que este último lanzó al presidente (Aguilar y Castañeda, 2007). Sin embargo, pese a sus discrepancias, como ya se mencionó en el apartado 4.1 ambos compartieron el uso de estrategias de mano dura para la contención de la criminalidad y medidas de control urbano modelos punitivos adoptados de la securitización y extendidos mediante la americanización de las políticas y de los modelos de reconfiguración institucional de los modelos de policía, seguridad urbana y militares (Chabat, 2006).

De este modo, el modelo de comunicación de la campaña permanente también pretende crear narrativas y acciones como si todos los días fueran el día de la elección, así como establecer puntos de comunicación interna y externa, es por ello que el narcomenudeo se insertó como problema prioritario, como un delito generador de violencia y como una arista o foco recurrente de la campaña permanente también utilizada por los mandatarios del Distrito Federal, pero construido desde la necesidad de fortalecer la agenda personalista rumbo a una candidatura presidencial (Espino-Sánchez, 2011). Pongamos por caso el comienzo de la administración de Andrés Manuel López Obrador al frente del D.F. donde como contexto del cambio político y social derivado de la reconfiguración del poder político hubo un innegable reordenamiento en las relaciones entre el crimen, delitos empatando en un entorno de endurecimiento global de penas y de securitización de las ciudades (Salgado, 2009).

En este sentido, se busca apuntalar el hecho de que la comunicación gubernamental de Andrés Manuel López Obrador se construyó como una campaña permanente en primer lugar por coincidir con el espacio de la tercera época de la comunicación política donde hubo un robusto interés en seguir consejos de asesores políticos (Moreno, 2018). Así como el uso de fuertes campañas de polarización y un particular interés en establecer lazos con el complejo político encuestador mediante el uso de campañas personales respecto a apoyos sociales, desarrollo social, estableciendo puentes y nexos con la iniciativa privada para la inversión en proyectos inmobiliarios y también en el fortalecimiento del aparato de seguridad e inteligencia de la ciudad, en este marco se electoralizaron demandas políticas y en el contexto de reconfiguración de las estructuras políticas en particular las clientelares hubo un crecimiento en el mercado informal y en la estructura local del crimen en la ciudad dando pie a la articulación de nuevos liderazgos criminales pero también a la reconfiguración de antiguos grupos criminales (Alvarado-Mendoza, 2016).

De este modo, al articular el tiempo y el espacio delimitado por la aceleración del cambio político a nivel regional, federal y local, el Distrito Federal fue un escenario de competencia política con relaciones multinivel, pero a la par debido al incremento de delitos durante la segunda mitad de los años noventa con paulatino el aumento en las tasas de homicidio en el segundo lustro del año 2000 aumentó la demanda ciudadana y presión de grupos de interés por la reducción de la inseguridad, en particular el robo y el secuestro cuestión que se afianzó durante la administración obradorista (Pansters y Castillo 2007).

Tomando en cuenta este modelo de gobierno, basado en un actor político, el jefe de gobierno, con liderazgo personalista, antagonizó con el poder ejecutivo federal y su gestión administrativa sirvió como plataforma política en un momento para el Partido de la Revolución Democrática y partidos satélite como el Partido del Trabajo, al incorporarse de manera vigorosa al modelo de importantes reconfiguraciones locales, tales como la autonomía y aumento en el ejercicio de recursos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la relación con personajes prioritarios del gabinete como lo fueron el Secretario de Seguridad Pública Marcelo Ebrard durante el periodo 2001-2005, o Miguel Ángel Mancera 2008-2012, pues ambos se posicionaron como agentes de seguridad o procuración de justicia y después se convirtieron en jefes de gobierno de la ciudad bajo el cobijo del PRD, en un entorno donde la campaña permanente por la construcción de candidaturas presidenciales

estaba en buena medida influenciada por la aceleración de la securitización y las estrategias de comunicación articuladas con decisiones políticas, económicas y sociales.

Así, el narcomenudeo irrumpió durante los primeros veinte años del siglo XXI en los campos de producción político, social y cultural, delimitando un horizonte de enunciación a una versión local del narcotráfico; siendo un lugar donde colocar la desviación derivada del mercado ilícito de drogas en el contexto urbano. De tal manera, se pueden identificar patrones o perfiles de acción asociados a este en las ciudades por ejemplo, un fenómeno que se expande en redes, en un principio en la venta a partir de vínculos familiares y redes sociales, actualmente en esquemas de compra-venta en redes socio digitales, pero también opera mediante contactos, con lenguaje dicho y no dicho en redes de corrupción por parte de autoridades, siendo también un esquema de explotación económica y política de lo ilegal, ya que el narcomenudeo es un dispositivo social, pero también semiótico que justifica el uso de medidas que afectan a las comunidades, por ejemplo, la extinción de dominio, la mano dura con operativos rastrillo, el encarcelamiento o detención esto mediante narrativas que se gestan desde diferentes frentes como el discurso político o los medios de comunicación.

En este orden de ideas, al intercambiar el narcomenudeo espacios con otro tipo de actividades ilícitas como la venta de mercancías robadas, contrabando y desde la segunda década del siglo XXI algunas bandas criminales que de origen se dedicaban a la venta de drogas a pequeña escala incluyeron un modelo de explotación criminal apegado a la diversificación centrada en la extorsión por cobro de piso (Alvarado-Mendoza, 2019), esto fue provocado quizá en parte por el agotamiento comercial y abaratamiento de la venta de mercancía de contrabando debido a que la fayuca electrónica y ropa dejó de ser un negocio lucrativo desde la mitad de los años noventa ante el proceso de integración y apertura económica transitando a la venta de mercancía apócrifa en Tepito la cual era distribuida a nivel regional como: casetes, discos compactos y películas, así como la perfumería de imitación, las cuales podían fabricarse in situ en talleres y solían compartir negocios fachada en el ecosistema criminal de la Ciudad de México bajo el modelo de efecto de puerta trasera (Chomczyński *et al*., 2019; Jiménez, 2019).

Estas complicidades y formas dinámicas en el manejo de las actividades ilícitas son el modo de reproducción de las redes de complicidad bajo el fenómeno del secreto oculto

(Rabotnikof, 2005) y mientras se mantuviera oculto a nivel privado se solía pasar por alto estas actividades mientras no le afectase a la comunidad cuestión que había permitido que la venta de drogas en particular se mantuviera como una forma de emprendimiento o como parte del aporte económico local (Moreno, 2018).

Pero lo que ha llamado la atención ante la reconfiguración del mercado de drogas, en el nuevo siglo y en la economía criminal de la capital del país durante la primera y segunda década del siglo XXI es que si bien el mercado de drogas al menudeo había significado o tenido un componente violento este era marginal y al ser replicado por la prensa o la política solía ser velada la relación entre narcomenudeo y violencia. Y la violencia de la ciudad solía asociarse al robo, o al secuestro (Jiménez-Ornelas y Reyes, 2020). Sin embargo, al ser el narcomenudeo una extensión local narrativa de la figura del narcotráfico, esta adaptó de recursos similares como: la generación de violencia espectacular detonada por el control de puntos de venta y monopolio sobre la venta de drogas en espacios delimitados, secuestros masivos, asesinatos selectivos o de alto impacto como jefes policiales, atentados e incluso el uso de estrategias de bloqueo de vialidades incendio de automóviles (Ruiz, 2017).

Por ello y debido el narcomenudeo se enuncia dentro de diferentes esferas a nivel institucional, periodístico y coloquial este se relaciona con la narrativa dominante muy similar a la delegada a la del narcotráfico donde se incluyen la criminalidad, el crimen organizado el delito y la violencia (Rodríguez y Mastrogiovanni, 2018). Entonces al articularse una versión local del narcotráfico y en concordancia con la ejecución de competencias locales en la persecución de los delitos contra la salud en la modalidad narcomenudeo las autoridades locales por ejemplo las Fiscalías y el Tribunal Superior a través de los jueces, magistrados y ministerios públicos con el posible fin de conseguir legitimación en sus tareas y para articular la dispersión de recursos financieros y técnicos difunden en la prensa y medios el uso de la retórica negativa de la venta de drogas con el fin de articular el narcomenudeo dentro del horizonte de las competencias locales y como un eje programático en el ambiente judicial (Azar, 2011).

De esta manera, la política servirá como amplificador del discurso securitizador y expansión en el aumento de la vigilancia y presencia policial por lo que el robustecimiento de narrativas dominantes las cuales al igual que en su versión de narcotráfico suelen ser

imprecisas o inexactas. Esto dificulta el control y la persecución del delito, ya que se antepone la punición y se sobreestima la categoría de crimen organizado o narcomenudeo ya que puede llegar a evitar distinguir entre vendedores violentos y no violentos incluso entre tipos de delitos a perseguir o concurrentes y encasilla el uso de categorías jurídicas que se replican en la prensa y en el sentido común provocando contradicciones incluso arbitrariedades.

Para el caso de la Ciudad de México, y casi en todo el país seguir el tamaño real de la oferta de narcomenudeo es una tarea desafiante y las posibles estimaciones suelen establecerse siguiendo estadísticas delictivas aunado a que se encuentran dispersas y suelen ser contradictorias incluso los enunciadas por los organismos internacionales de control, propias autoridades nacionales o locales e incluso las citadas por especialistas (Romero, 2018). Por ejemplo, en 2012 un magistrado en entrevista con un medio nacional mencionó que el narcomenudeo generaba más ganancias que el narcotráfico (Macías, 2012), cuestión difícil de comprobar tomando en cuenta el tamaño del mercado de drogas internacional o en particular de Estados Unidos respecto a la cantidad de droga que se comercia en la Ciudad de México.

Retomando esta aseveración y tomando por ejemplo según estadísticas del Departamento del Tesoro norteamericano entre 2013 y 2017 las organizaciones criminales mexicanas dedicadas al tráfico de drogas habrían lavado un aproximado de 3 billones 646 mil 500 millones de pesos cifra por demás refutable pero imposible de comparar con los datos disponibles y también contradictorios de la Ciudad de México (Romero, 2018). Por ello, he intentado argumentar que esta narrativa hegemónica y ficcional sobre el narcotráfico como un complejo modelo de comercio hiper rentable se intenta adecuar a una versión local cuestión por demás inconmensurable, ya que si bien algunos grupos criminales incursionaron en el tráfico internacional es poco probable que el volumen de ganancias sea similar lo que quizá adopta o se complementa es en el modelo de captación de pandillas o mafias locales

A esta compleja particularidad y aseveración sobre la oferta, los datos respecto al tamaño tanto de consumo, así como el valor de venta de drogas al menudeo es aproximado y sesgado. Un esfuerzo equilibrado y basado en la evidencia institucional derivada de encuestas de salud (INPRFM, 2014) y son las que Zamudio (2013) propuso donde el tamaño aproximado del consumo de drogas ilegales en la Ciudad de México basado en el cruce de

los datos emitidos por la encuesta nacional de adicciones 2011 e información pública señala que para 2013 había un máximo de 85, 819 usuarios en la capital del cual un 85% sería el equivalente a los usuarios de mariguana y la sustancia que mayor aumento tendría serían estimulantes tipo anfetamínico y pero también están presentes en menor medida las drogas médicas, en particular ansiolíticos (INPRFM, 2017).

Ante esta dificultad para tasar a los usuarios viene la problemática de calcular los precios ya que dependen de las calidades, y zonas, además, las sustancias pueden tener análogos o adulterantes y a la dificultad de confirmar o corroborar que se está comercializando en realidad, ya que al ser un mercado sin normas o regulaciones el producto que se vende carece de controles. A esto hay que agregar que tanto usuarios como vendedores corren riesgos por comercializar o consumir las sustancias ya que existen diferentes perfiles y clases de vendedores, lo cual puede significar que el narcomenudeo en la ciudad se ha hiper diversificado.

En ese orden de ideas, son dos contextos estructurales los que han redefinido las relaciones en la ciudad respecto al control de la policía y de la seguridad, el primero de ellos corresponde al proceso de reconfiguración del poder político, sobre el cual se ha venido sosteniendo que es un detonador para que las estructuras de delincuencia común pierdan o ejerzan autonomía relativa respecto a los controles y presiones pre existentes, el segundo contexto acciona como un esquema de persecución que pretende articular el poder punitivo y el desarrollo extendido de la narrativa dominante.

Por otro lado, la aproximación de Felipe Calderón como titular del ejecutivo 2006-2012, también fortaleció una narrativa y retórica presidencial de combate al crimen organizado que añadió y estableció como foco de combate al narcomenudeo, ya que según las implicaciones sostenidas por las autoridades en aquel momento se mencionó que se estaba incrementando el consumo de drogas a nivel local y también la criminalidad ocasionada por dos razones; la primera la disputa por los espacios de control territorial o *plazas* y la segunda por el supuesto accionar delictivo de las personas bajo el influjo de la droga (Díaz-Román, 2022).

Así, podría analizarse la persecución del narcomenudeo desde un paralelismo respecto a la narrativa retórica utilizada por titulares del ejecutivo para establecer temas y

agendas en su accionar político, parecidos a los construidos con la guerra contra las drogas de Richard Nixon, Ronald Reagan y Bill Clinton por mencionar algunos. En este orden de ideas, la herramienta adoptada por el ejecutivo obedeció al modelo de americanización de las políticas en particular las de cómo hacer elecciones, donde se entenderá como campaña permanente: una combinación de creación de imagen y estrategia. Cálculo que convierte el gobernar en una perpetua campaña y reconvierte al gobierno en un instrumento diseñado para sostener una popularidad del funcionario electo (Sanguinetti, 2023).

De este modo, Felipe Calderón inició una la campaña permanente presidencial para el control del narcomenudeo, la cual se insertó de manera adecuada en la legitimación del poder y su administración dado conflicto electoral derivado de una controversia sobre las votaciones presidenciales del año 2006. Pero no olvidemos que el narcomenudeo ya se encontraba en el horizonte de enunciación político como un problema en expansión y que también era "combatido" y perseguido por instancias de seguridad y justicia, pues como se ha planteado en capítulos anteriores, desde el periodo post revolucionario y durante la época de la guerra fría, la persecución del comercio de drogas ilegalizadas ha sido un espacio de control político y social.

Ejemplo de esta estrategia es el impulso que Calderón dio a la narrativa del combate contra las drogas que se extendió a diferentes ámbitos de acción como el terreno legal. En agosto del año 2009 se promulgaron una serie de reformas, que cambiaron o ampliaron ciertas normas y disposiciones incluidas en la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales. Este proceso fue llamado *Ley contra el narcomenudeo*, y fortaleció el ámbito de concurrencia entre las facultades de los estados y estableció marcos de referencia para el control de drogas ilegalizadas a través de una tabla de orientación respecto a los gramajes máximos permitidos para consumo personal inmediato, además intentó separar el mercado y los delitos a través de conductas y tipificación de las mismas con la distinción entre tráfico al menudeo y tráfico de drogas a gran escala y posesión para consumo.

También se incluyó la distinción entre farmacodependiente o consumidor y se propuso un eje de prevención y obligación de las entidades federativas de no ejercicio de la acción penal contra estos mediante la asistencia a tratamiento, esta ley dio de 3 años a partir

de su publicación para que todas las entidades federativas pusieran en vigor esta normativa. Aunado a ello, esta normativa es concurrente, por ejemplo, con la Ley para el combate al crimen organizado donde se establecieron penas que permiten la incautación de bienes.

Esto concuerda con el amplio proyecto político que el presidente Calderón intentó impulsar durante su gestión, donde se incluyeron una serie de reformas respecto al control de la seguridad en alcance a distintos compromisos internacionales y bi nacionales en particular la negociación y puesta en marcha del Plan Mérida (Covarrubias, 2013) y cerca de 16 convenios firmados entre el ejecutivo federal y distintas entidades de Estados Unidos los cuales no necesitaban ratificación del senado (Monroy, 2012), pero también los compromisos adquiridos políticamente que debían implementarse en el país a partir de tomar la decisión de imponer como una agenda prioritaria el combate al crimen bajo la tutela del modelo norteamericano con su influencia económica y política. En particular el combate al crimen organizado, por esto impulsaron medidas como los operativos policiaco-militares y reformas que incluyeron modificaciones en el sistema penal, como el cambio a un modelo acusatorio o juicios orales, el uso del arraigo (Madrazo, 2014).

Para esta tesis el rasgo más importante es el ámbito de competencia que los delitos contra la salud tomaron, en particular el tránsito de la persecución de un carácter federal a uno local. Esto quiere decir que, desde la institucionalización de los delitos contra la salud en el código penal de 1931, la competencia federal de su combate o persecución había estado a cargo del Ministerio Público Federal, aún y cuando las detenciones de los vendedores la hicieran policías locales, los detenidos eran procesados en el sistema federal. Estas medidas fueron criticadas en su momento por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (Azar, 2011), ya que mencionaba que la aplicación de las sanciones y la persecución no quedaba claro los ámbitos de competencia, también que facultaba para que la extensión del combate al crimen organizado no fuese lo suficientemente estricto, aunado a ello algunas entidades federativas como por ejemplo Campeche criticaron la medida ya que implicaba una carga al sistema de justicia local y la implementación de fiscalías especializadas implicaría un mayor gasto para las entidades.

Sobre este asunto, se recupera un fragmento de una de las entrevistas realizadas a actores institucionales que laboraron en áreas de representación mexicana ante organismos

internacionales de fiscalización de estupefacientes. En este caso en particular, se preguntó al entrevistado sobre su perspectiva sobre si el narcomenudeo en el territorio mexicano tiene implicaciones o consecuencias internacionales.

> Entrevistado 1. No hay un solo narcomenudeo, o sea hay diferentes expresiones de narcomenudeo, y también creo que hay diferentes niveles de involucramiento de organizaciones criminales en tipos de narcomenudeo, es decir, ciertas circunscripciones puntuales en donde una organización criminal tiene una alta presencia, está presente en la esquina de las calles, pero es una organización, entonces, al final no resulta narcomenudeo, es digamos, una evolución de delincuencia organizada, eso no lo puedes comparar a las expresiones básicamente de barrio donde definitivamente en la mesita de la esquina de una colonia, sin que tenga vínculos con grandes organizaciones criminales pues hay una venta de estupefacientes por razones económicas meramente, es como cualquier otra expresión económica ilícita.

Sobre este tema, Juan Cajas (2009) menciona que: la prohibición históricamente inaugura el tráfico de sustancias y que "el narcotráfico es una construcción jurídica. La criminalización de una conducta se transforma en un negocio redituable para el crimen organizado una apología de la desviación" (2009: 239). Desde este plano, al tejerse relaciones asimétricas de poder y concentrarse recursos significativos, en este caso mercancía o droga, la acumulación de capital a través de la explotación del circulante hace necesario el uso de armas de fuego para la protección de la mercancía, las personas a cargo y las ganancias, es por esto que el narcomenudeo también faculta y permite que a nivel político se orienten recursos del complejo militar industrial para su combate, ya sea mediante tácticas de entrenamiento y guerra psicológica, así como el uso de tecnología para investigación, de este modo al volverse asunto de consumo y venta de drogas al menudeo, los traficantes adoptan medidas más violentas.

Entonces, el narcomenudeo pasa a ser parte del discurso del combate a la inseguridad a partir del enmarcamiento que los medios de comunicación le delegaron a este delito en el horizonte del crimen organizado emparentado con la venta de mercancía apócrifa, pirata, irregular o de contrabando y con la venta informal. Aproximadamente entre el 2010 al 2020, el narcomenudeo se incorporó como un esquema de explotación de los mercados ilegales, paralelo al de la extorsión, despojo, invasión de predios, secuestro y cobro de piso, pero

también como un método de control social y policial con el pretexto de criminalizar prácticas y sujetos en un entramado de crecimiento y radicalización de bandas criminales locales, que se adaptaron al modelo de sujeción violenta adquirida por los traficantes a gran escala como la decapitación, el uso del cuerpo muerto para enviar mensajes, el amedrentamiento de autoridades y la extensión a otros delitos.

Esto lleva a plantear que el fenómeno del narcomenudeo, al menos en la Ciudad de México, se ha configurado en dos esferas: la económica y la social; en la primera, como fenómeno de mercado obedece a un mercado ilícito en un entramado con conexiones internacionales, globales y condiciones de asimetría entre los países productores y consumidores y los actores del mercado ilegalizado. Mientras que, en la segunda, la social hay un entramado de relaciones heterogéneas donde para la venta de drogas al menudeo existen dinámicas protagonizadas por redes de diversos actores los cuales comparten patrones y tendencias dentro de la venta de drogas a pequeña escala en occidente.

Una generalidad en estos patrones podría situarse en que al ser los jóvenes quienes consumen más sustancias ilegalizadas, sus pares sean quienes se las venden protagonizada por hombres jóvenes con poca escolaridad (Torres, 2019) o que viven con sus padres (Levitt y Dubner, 2005), adultos de mediana edad que incorporaron la venta de drogas como un modo de subsistencia en entornos de informalidad e ilegalidad (Zamudio, 2012), mujeres desempleadas o en situaciones de vulnerabilidad (Pérez-Correa y Azaola 2012), pero también han mostrado una diversidad que ha complejizado el fenómeno en las clases medias, donde la venta de droga, en particular de mariguana y sustancias de síntesis pueden ser un articulador de relaciones sociales cuestión por la cual en ocasiones las relaciones entre vendedores y comparadores (Dickinson y Jaques, 2019: Korshøj y Søgaard, 2024).

Y de estas relaciones se estructura un marco normativo formal e informal de relaciones que supeditan los campos de producción, cultural, social y política donde se delegan las percepciones y acciones que se tienen hacia los actores sociales ya sea en la prensa, en las instituciones de salud o de seguridad incluso entre las relaciones que se dan entre los vendedores y los actores encargados de limitarlas o perseguir la venta o reportar acciones policiales sobre detenciones o incautaciones.

También es indispensable señalar la diferencia que existe en el comercio de sustancia a sustancia, lo cual algunas pueden ser más rentables que otras, inmiscuirse en dinámicas diferencias, así como de las distintas penas y agravantes que conllevan su posesión, transporte o venta, como se puede observar a continuación en la tabla de portación de dosis mínimas contenida en la Ley General de Salud.

Tabla 5. Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato

Narcótico	**Dosis máxima de consumo personal e inmediato**	
Opio	2 gr.	
Diacetilmorfina o Heroína	50 mg.	
Cannabis Sativa, Indica o Mariguana	5 gr.	
Cocaína	500 mg.	
Lisergida (LSD)	0.015 mg.	
MDA, Metilendioxianfetamina	Polvo, granulado o cristal	Tabletas o cápsulas
	40 mg.	Una unidad con peso no mayor a 200 mg.
MDMA, dl-34-metilendioxi-ndimetilfeniletilamina	40 mg.	Una unidad con peso no mayor a 200 mg.
Metanfetamina	40 mg.	Una unidad con peso no mayor a 200 mg.

Fuente: Diario Oficial de la Federación (20 de agosto de 2009).

De acuerdo con lo observado en la tabla 5, con el gramaje más alto, se sitúa la mariguana y sus derivados como resinas, hashis y extractos, esto puede indicar también que es el narcótico más fácil de adquirir y al mismo tiempo de distribuir, ya que la venta de mariguana implica manejar un mayor volumen de traslado o de almacenamiento, además de que desprende un olor particular ya sea a hierba fresca o seca según sea el caso. Mientras que la venta de cocaína se realiza en cantidades más pequeñas, en la tabla se indica que la dosis máxima de consumo personal es de 500 mg, pero su venta se da por dosis, papeles o "puntos", lo mismo sucede con la metanfetamina, la cual está aún más restringida.

En este sentido, la tabla de dosis máximas está en función de la peligrosidad de las sustancias y el posible daño que generan. Sin embargo, esta no contempla situaciones cotidianas como que un policía que detenga a un usuario en posesión pueda conocer con certeza el gramaje exacto, lo cual da pie a extorsión o siembra de mayores cantidades de droga. Algo similar sucede en el caso de la relación de compraventa, ya que el usuario puede tener dificultades para conocer la dosis e incluso los componentes del producto que adquiere, en todo caso, en ambos escenarios el pequeño usuario suele ser el más afectado.

Otro aspecto para considerar es que las sustancias con los gramajes máximos más bajos se pueden trasladar o vender en cantidad o volumen y a un precio más redituable, aunado a esto, si bien las personas usuarias de estas sustancias, en su mayoría, son poli usuarios de drogas, la sustancia de su elección puede implicar cambios en el temperamento o en el tipo de consumo. Para el caso de la cocaína los usuarios suelen utilizarla para momentos de ocio o entretenimiento y mientras que los usuarios con trastornos por uso dependiente o problemático suelen empeñar y vender artículos electrónicos e incluso delinquir, lo cual puede indicar relaciones de complicidad con narcomenudistas lo cual corresponde con la idea de que esto han diversificado su campo de acción y que como argumentan Hernández y Zamudio (2009) pueden llegar incluso a coaccionar o probar la lealtad de los usuarios.

Sobre la tabla de orientación de dosis máximas para consumo inmediato publicada en la reforma a la Ley Narcomenudeo fue interpretada por algunos periodistas nacionales e internacionales como una descriminalización (HIV Aids Policy Law Review, 2009) y por otros como una legalización de la posesión (Grillo, 2009; Shapiro, 2010). Por un lado, en la retórica y en términos de atribuciones jurídicas supuso la consolidación de la separación del usuario del vendedor en el contexto de compra venta de bienes ilícitos, pero por el otro, esta aparente descriminalización no ocurrió como tal, ya que se siguio deteniendo a personas y en casos donde los detenidos no tenían los recursos o información necesaria fueron encarcelados. Este modelo aparentemente basado en la salud sugirió la remisión forzada a los sistemas de salud mediante la remisión a tratamiento de los detenidos como farmacodependientes aunque la mayoria eran enviados a centros doble AA o a Centros de Integración Juvenil sin que hubiera un seguimiento.

Así que la innovación de la tabla de dosis residió en incluir un listado de sustancias y una supuesta nueva aproximación en el contexto de la persecución armada a grupos criminales o guerra contra las drogas que emprendió el gobierno de Felipe Calderón. Sin embargo, despúes de tres lustros de aplicación de las reformas y el tránsito en el cambio de competencias a nivel local respecto al control de los delitos contra la salud, esta tabla no fue tan innovadora y contrario a lo que se sugirió como una victoria para los usuarios fue una apuesta dudosa como lo señalaron Hernández y Zamudio (2009) ya que no descriminalizó y

además continuó con la discriminación y aplicación desproporcionada de las leyes (Pérez-Correa, 2012).

Por otro lado, se siguió utilizando a los usuarios como chivos expiatorios (Hernández, 2012) del sistema de seguridad y como una forma de justificar las detenciones y actuaciones policiales en flagrancia y pocas veces con investigación (Baca *et al*., 2015). Quizá esta normativa como eje positivo logró que algunos usuarios construyeran autodeterminación, autonomía percibida y relativa con las instituciones encargadas del control de drogas ilegalizadas (Baca *et al*., 2015) ya que mediante campañas de organizaciones no gubernamentales y con apoyo de organismos autónomos encargados de derechos humanos en el Distrito Federal, se logró difundir información para que pudieran conocer los derechos y obligaciones sobre las personas que usan drogas ilegales con la cartilla guía legal de usuarios de drogas (CUPIHD *et al*., 2012) de la cual se llegaron a repartir más de 60 mil ejemplares siendo un eje de educación, pedagogía y construcción de ciudadanía para actores que habían sido marginalizados y criminalizados históricamente.

Sin embargo, no todo fue positivo ya que las reformas a la ley narcomenudeo se convirtieron en un incentivo para agentes de seguridad corruptos para explotar la economía de la extorsión, y también sirvió para justificar las cuotas de detenciones, incluso se ha documentado que personas detenidas no usuarias y que no estaban en posesión se les llegó a sembrar droga para retenerlas o extorsionarlas (Silva, 2023) .

En este orden de ideas, el actual modelo de narcomenudeo sigue incentivando el tráfico en pequeñas cantidades de manera ilícita, ya que grupos delincuenciales han utilizado este modelo para comerciar drogas esquivando las normativas (Alvarado, 2016). Por ejemplo, teniendo poca droga en el punto de venta, señalando a sus vendedores que se declaren como usuarios o adictos para que puedan entrar a los beneficios que el no ejercicio de la acción penal otorga sobre este modelo de control jurídico.

Retomando la discusión sobre los modelos de umbrales (dosis minimas y maximas), se puede mencionar que fracturan el estado de derecho y certidumbre jurídca, ya que estimulan e incentivan la informalidad, la corrupción y arbitrariedades. Aunado a esto, se enmarca un contexto estructural de explotación ilícita por parte de las autoridades, como un esquema de extorsión que abarca desde el primer respondiente hasta jueces y ministerios públicos (Ibarra y Ravelo, 2022). También es un articulador para dinámicas en escenarios de

privación legal de la libertad, ya que en entornos penitenciarios tampoco desaparece la venta de droga al menudeo y es un motor de usufructo de renta ilícita.

Para ilustrar estas dinámicas, sirva de ejemplo un corto de estudiantes del Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C, titulado *Cola de rata* del año 2022, el cual fue filmado en Tepito y que cuenta la historia de tres jóvenes que acuden a comprar droga a una vecindad y en plena transacción son sorprendidos por un operativo policiaco, lo cual los lleva a huir junto con los *dealers* para ponerse a salvo (Salomo, 2022).

En esta línea, y como una forma de seguir ampliando el análisis del contexto capitalino en relación con el narcomenudeo, se propone la incorporación de la narración de casos emblemáticos que han fortalecido la narrativa de criminalización de las dinámicas asociadas a la compra de sustancias psicoactivas en pequeña escala en la capital. Estos casos clave dan cuenta de un largo y complejo trayecto en la institucionalización del narcomenudeo, en este sentido, no se trata de una revisión exhaustiva de casos, ya que cada día y con el paso del tiempo se irán acumulando otros con mayor violencia o más espectaculares, sin embargo, la selección radica en que estos reflejan como en los campos de producción política y cultural el narcomenudeo pasó a ser un componente cotidiano de los problemas de seguridad y de interés público. Los casos seleccionados comprenden entre el 2006 y el 2020.

Se puede identificar al 2007 como un año de operativos sorpresa contra la piratería y el narcomenudeo en la ciudad, ya que se aplicó esta estrategia en diferentes delegaciones con resultados no del todo satisfactorios para las autoridades, llama la atención una nota del periódico *La Jornada* donde se hace hincapié en la inconformidad del entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, Joel Ortega quien se quejaba de que muy pocos narcomenudistas eran remitidos al Ministerio Público (Gálvez, 2007). Y es que en febrero del mismo año se había expropiado una vecindad ubicada en Tenochtitlán 40 en Tepito, y meses después la SSP-DF volvió a sorprender a los vecinos y comerciantes de esta calle, pero en esa ocasión los detenidos fueron 24 incluidos menores de edad y hasta un ciudadano de origen nigeriano.

El decomiso consistió en 40 kilogramos de mariguana, 10 bolsas de cocaína y cartuchos útiles, lo cual corresponde a la lógica de la protección de los recursos significativos

que los vendedores deben seguir, aunado a la red de complicidad y vínculos existentes entre vecinos y locatarios que a su vez protegen, avisan o vigilan la seguridad de los puntos de venta. En este sentido, llama la atención también en esta nota de la Jornada que el jefe de la policía justifica ante la prensa la aplicación de estos operativos bajo el argumento de ofrecer respuesta a denuncias ciudadanas anónimas donde se daba santo y seña de las actividades e involucrados en transacciones de narcomenudeo (Gálvez, 2007).

El predio relatado en la nota era conocido como *la fortaleza,* con ese alias fue cubierto por la prensa y formó parte de la estrategia narrativa y política que el jefe de Gobierno Marcelo Ebrard y el secretario de Seguridad del Distrito Federal Joel Ortega emprendieron en el territorio del barrio de Tepito con el fin de formalizar directrices para implementar el modelo de cero tolerancia y aplicación de medidas para la contención de la criminalidad, mediante la expropiación de predios donde se desarrollaban actividades ilícitas esto empata con las campañas permanentes adoptadas por los personajes políticos, la securitización y el uso de modelos norteamericanos para el control de la criminalidad como lo fue la extinción de dominio.

En particular el control sobre el narcomenudeo y la retórica construida en la prensa sobre la venta de drogas era apoyada con evidencia estadística enunciada por las autoridades las cuales referían que de las más de 2 mil 200 detenciones realizadas en la colonia Morelos 8.43 por ciento ocurrieron en la calle de Jesús Carranza y el 32 porciento de las denuncias por hechos delictivos se concentraban en los predios comprendidos la unidad habitacional que conectaba a las calles Jesús Carranza con el número 33 y la calle de Tenochtitlán número 40 (Bolaños, 2007). Este caso concluyó un operativo policial con la participación de diversas autoridades y el desalojo de 70 departamentos de los aproximadamente 150 con los que contaba el predio esto daba pauta a pensar que más de la mitad del predio era utilizado para almacenar mercancía o eran ocupados para venta de drogas, algunos vecinos fueron indemnizados y provocó malestar dentro de la comunidad y el predio fue convertido en un centro comunitario sin embargo las dinámicas ilícitas en predios aledaños han continuado a pesar de los operativos, de la presencia policial, del robustecimiento de uso de cámaras de vigilancia.

Un año después, otro operativo tuvo un trágico desenlace donde 12 personas murieron, entre ellas menores de hasta 13 años, policías auxiliares y judiciales que se encontraban al interior de un club llamado News Divine. Este operativo en el que participaron la SSP-DF en conjunto con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y la dirección del Sistema de Coordinación Policial del Distrito Federal (Unipol) estuvo mal planeado, mal ejecutado y los hechos derivados de esta acción policiaca fueron mal manejados, esto aunado a que "la discoteca News Divine operaba ilegalmente" (CDHCM, 2008: 71).

En los pocos videos que se conservan del hecho se puede observar una fachada gris con un relieve que asemeja pierdas plateadas, sobre la marquesina guinda en letras amarillas se lee al centro: *News Divine/Disco & Club* y a un costado en letras negras la leyenda *Un nuevo concepto para gente con estilo*, a manera de remate en la parte inferior un cintillo con la publicidad de cervezas. Mientras que al interior dos tornamesas y una mezcladora continúan encendidas pues aún se alcanza a escuchar la música de merengue. De pronto baja el volumen y se escucha una voz distorsionada que dice lo siguiente: "A desalojar el lugar… vamos a desalojar el lugar por favor, el operativo, el operativo así nos lo marca" (La Jornada Online, 2008).

Entre los cortes de cámara se observa a decenas de personas desesperadas aglomerándose en la única salida del recinto, esto ante la presencia de la policía capitalina, y no era para menos, pues algunos de los uniformados ya habían ingresado al club, mientras que afuera la orden fue no dejar salir a nadie, de esta forma los policías preparados con equipo táctico como goggles negros, casco antimotines y chalecos antibalas no permitieron que los cientos de jóvenes escapen del operativo.

Se corta la toma, aquel que graba realiza un acercamiento a un grupo de alrededor de 50 personas que rodean una mesa, en la cual hay equipo de sonido de un *disk jockey*, quien invita a los asistentes a asistir de manera gratuita el día siguiente, momentos después es nuevamente cortada la toma y solo se observa el interior del local vacío, solo se escucha a lo lejos una discusión entre el dueño del local y las autoridades (El Universal, 2008). En otros videos, quedaron capturados los tensos momentos durante y después de la tragedia, donde se aprecian terribles tomas de adolescentes en el suelo que apenas reciben atención por parte de

sus amigos, otros policías y los pocos servicios de apoyo y paramédicos que ya han arribado al lugar, pero no se dan abasto y ya nada pueden hacer por los muchachos que no responden a estímulos como agua en jarras de plástico y abanicos improvisados por sus conocidos quienes piensan que darles aire les pueda devolver el aliento.

Era el 20 de junio del año 2008 y según información proporcionada por la misma SSP-DF, debido a una denuncia anónima por la presunta venta de drogas y alcohol a menores. Según el informe especial elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En el operativo se desplegó una fuerza desproporcionada, por ello se bloquearon las entradas de un centro de entretenimiento, club, discoteca o antro en donde se solían reunir jóvenes de la delegación Gustavo A. Madero de la colonia Nueva Atzacoalco. Dentro de la información proporcionada, se indicó por parte de la autoridad que un grupo de narcomenudistas o una banda delictiva conocida como *los negros* era la encargada de vender droga al interior del establecimiento, cuestión que fue corroborada, ya que fueron detenidos algunos presuntos vendedores, y el grupo fue vinculado con una serie de homicidios y detenciones posteriores.

Esta tragedia demostró la forma arbitraria de operar por parte de la policía, hechos a los que se sumaron señalamientos que indicaron que aún después de la tragedia las autoridades continuaron violando los derechos de los jóvenes, así algunos detenidos, sobre todo mujeres jóvenes y menores de edad, mencionaron que sufrieron vejaciones de índole sexual durante su detención y traslado.

El caso de la tragedia del News Divine, sentó un precedente en la ciudad por diversas razones, en primer lugar, porque dentro de las estrategias de mano dura implementadas se puso en evidencia la falta de coordinación y comunicación sectorial y entre instituciones policiacas, en segundo lugar, como resultado de estos lamentables hechos el modelo de mando único de policía fue condenado y posteriormente revocado, finalmente, se llamó la atención sobre la importancia de la vigilancia puntual de los protocolos de protección civil en los establecimientos capitalinos, los cuales en este caso fueron nulos, sino que la delegación GAM permitió que este establecimiento operara sin las condiciones necesarias.

El 2 de junio del año 2009 a unos meses de que entrara en vigor la implementación de la ley narcomenudeo, en el estacionamiento de la Facultad de Filosofía y Letras de la

UNAM fue asesinado Ricardo Valderrama "El Valde" un vendedor de drogas que habría entrado en conflicto con otro vendedor y supuestamente habrían discutido por un cliente y por este motivo le disparó dejándolo sin vida cerca de la entrada de la Facultad a unos escasos metros de la Biblioteca Central. El titular del diario la Jornada un día después indicaba: "abaten a tiros en CU a presunto narcomenudista" (La Jornada, 2009). En las pesquisas por este asesinato fue detenido días después en la colonia Roma León Tagoré Ponce apodado "el patrañas" otro vendedor de drogas que también vendía en la zona de Ciudad Universitaria y el cual fue detenido con un menor de edad en posesión de planillas de ácidos (El Economista, 2009). Este caso es notable debido a que ejemplifica cómo es que hubo un cambio respecto a la narrativa en el narcomenudeo en el Distrito Federal tanto por parte de la prensa, las autoridades universitarias y las dinámicas propias de los delitos contra la salud y cómo es que algunos consumidores pueden estar en riesgo ante dinámicas ilícitas, pero también mostrará al fenómeno del narcomenudeo como un modo de auto empleo y cómo es que este se transformó en un corto periodo de tiempo y fue cooptado por grupos criminales más violentos.

Las universidades al poseer una población estudiantil joven y estos al ser en buena medida los principales consumidores de drogas suelen ser un punto de encuentro para el consumo, la compra y venta. Pero también porque bajo el amparo de la autonomía universitaria y debido a que existen grandes zonas verdes o espacios donde ocultarse son lugares poco vigilados por la policía. En el caso de Ciudad Universitaria de la Ciudad de México los amplios espacios abiertos en particular la zona de Ingeniería, Zona Cultural, El jardín de Rectoría, Las islas y la zona de frontones y las facultades de Ciencias, Ciencias Políticas y Filosofía y Letras se habían caracterizado por ser espacios para poder conseguir o comprar drogas.

Al respecto en una entrevista realizada por la psicóloga Nuria Araiza a un narcomenudista que estuvo en prisión y cuyos puntos de venta estuvieron en la zona de Coyoacán y en Ciudad Universitaria durante la segunda mitad de los años noventa. En la entrevista, el narcomenudista señaló que comenzó a relacionarse con la venta en particular de mariguana, primero muy joven a los 16 años acudiendo a comprar a la Facultad de

Ingeniería y posteriormente reuniendo dinero entre varios de sus conocidos para evitar aglomeraciones en el punto de venta. Práctica que suele ser recurrente entre usuarios de drogas ilegales, ya que de esta manera se aminora el riesgo en el acto de la transacción. Y después al darse cuenta que podía conseguir de esta manera algunas dosis sin tener que poner dinero comenzó a comprar cantidades más grandes para venderla el mismo.

> Me empezó a llevar al punto donde se vende, que era C.U. Entonces ya me comencé a juntar con varios chavitos de ahí mismo de esa unidad, ya conocí a varios y pus ya todos me conocían a mí, ya como que me integré, vamos, a esa sociedad, a ese grupito. Y pus ya era en la noche, en las noches nos juntábamos y decíamos quiénes vamos a ir a comprar, y ya agarrábamos ocho personas y nos íbamos y nos metíamos a C.U. El punto era en ingeniería, ahí estaba el señor, que ya murió, ahí lo mataron, y pus ya el señor veía que éramos una bandita como de ocho personas que casi cada tercer día llegábamos a comprarle cada quien compraba sus cinco, cincuenta, veinte pesos, treinta pesos un día este señor nos dijo: "oigan, ustedes vienen juntos. Por protección mía, porqué no se viene uno solo, en vez de que vengan tantos en bola y llamen la atención". Esta persona nos empezó a pedir que fuéramos solos, ya no tantas personas, entonces nosotros le pedíamos la lana a los chavos (Araiza y Morales, 2013).

Debido a que asesinaron al vendedor al cual Valderrama solía comprarle, en 1996 junto con otros conocidos comenzaron a vender droga en Ciudad Universitaria, transitó de la venta de solo mariguana a drogas de síntesis como tachas y ácidos, cocaína en polvo, opio y fármacos. Señala que en aquel tiempo Las Islas, comenzaron a ser un punto de reunión de varios vendedores que solían apostarse en los jardines a vender y consumir todo tipo de drogas, también señaló que comenzó a vender en el tianguis del Chopo y que la gente ya lo reconocía porque según él no era *malencarado* y solía dar abundantes dosis, aunque no ganara tanto con tal de que siempre le compraran a él porque la competencia comenzaba a ser mayor. Con ese dinero solía irse de fiesta, comprar más drogas e irse de vacaciones. Indicó que, en aquel momento era tanta la venta de drogas en la UNAM y aunado a la propia inseguridad de la universidad y en el Distrito Federal, en concordancia con los procesos de securitización y tecnificación de la seguridad nacional y al interior de la universidad comenzaron a haber más rondines por la Policía Judicial y la vigilancia UNAM y también señala que colocaron cámaras en la torre de rectoría y en algunas otras facultades.

> Algo que nunca pude calcular fue lo que ganaba, porque, así como yo ganaba, así también gastaba. Y así como también vendía, así usaba yo también, o sea me metía también, ¿no? Ya empecé después a conectar, se empezó a hacer grande el mercado allá en C.U., en las islas, y empezaron a bajar otras personas que traían pastillas, otras que traían que los ácidos, otras personas que traían las tachas, otras personas que traían los hongos, el peyote. La cocaína empezaba, justo antes de que me agarraron, tenía como seis meses que empezaban a bajar con cocaína ya, y cocaína base y cocaína en polvo. Y fue algo que también fue muy muy muy cabrón. Porque la cocaína absorbe todo tu cerebro, no te deja usarlo, vamos, con la mariguana te puedes fumar un toque y ponerte a leer un libro, a gozar, pero con la cocaína yo veía cómo se ponía la gente y cómo me ponía yo, porque yo también la usé, y yo decía: "es que no puedo pensar, es que esto me bloquea el cerebro, esto no, no sé cómo lo utiliza la gente".
> (Araiza y Morales, 2013)

En 1998, fue detenido por policías de la PGR y señala que fue llevado a la subprocuraduría en delitos contra la salud por el monumento a la revolución y que en la pesquisa uno de los detenidos murió por los posibles golpes que le propinaron policías durante el interrogatorio, es notorio que en toda la narración debido a la época jamás se utilizó el término narcomenudeo y las veces que utiliza la palabra narco suele referirse a traficantes en grandes volúmenes. Señaló que, al interior de la cárcel se dedicó a la venta de drogas donde fue trasladado a distintos penales en distintas ocasiones hasta que salió libre diez años después, cuestión que al haber sido encarcelado a sus 21 años le costó trabajo insertarse a la vida laboral por lo que regresó a hacer lo que sabía, vender drogas y otros artículos como libros, revistas y películas. El asesinato de Valderrama en el año 2009 fomentó un proceso de reestructura al interior de la Facultad de Filosofía y Letras en particular los corredores contiguos a la Biblioteca Central donde en un primer momento removieron a los vendedores ambulantes para posteriormente organizarlos en puestos semifijos y construir una zona de comida. También endureció ciertas medidas por parte de vigilancia de la universidad, pero al parecer no bastaron ya que según notas periodísticas en el año 2010 miembros pertenecientes a una escisión del grupo de los Beltrán Leyva y traficantes de la zona de Tláhuac decidieron apoderarse de los espacios de venta en ciudad universitaria cuestión que

desembocó en una balacera en 2017 y posterior ejecución de un narcomenudista en la zona de frontones en 2018 (El Universal, 2018).

Cinco años después del caso News Divine, las cosas habían cambiado en la ciudad, Miguel Ángel Mancera era el nuevo jefe de Gobierno y durante su gestión defendió la idea de que en la ciudad de México no existían carteles, sino bandas o pandillas. Sin embargo, diferentes conflictos entre grupos criminales locales pusieron en entredicho las afirmaciones de Mancera. Y si bien, los bares y antros capitalinos fueron los escenarios de las disputas, los protagonistas fueron sicarios, narcomenudistas, gerentes y meseros apoyados por miembros de las fuerzas policiacas.

Y es que a diferencia de lo acontecido en el News Divine, donde la policía actuó con negligencia y ejecutó mal su labor, en ese contexto de reconfiguración de los grupos criminales, patrulleros y agentes fungieron como cómplices, contactos y emisarios de los miembros de dos bandos que pusieron a la ciudad bajo una jornada de terror, Los Pellejos/La Unión Insurgentes grupo de la "vieja guardia" (Romandía, Fuentes y Nieto, 2019: 75) asentado en la colonia Romero Rubio que controlaba la venta de drogas al menudeo en el corredor Insurgentes-Zona Rosa-Condesa y el grupo conocido como La Unión Tepito, que habría de tomar cada vez mayor relevancia.

Los desencuentros y alianzas entre la UI y la UT pueden encontrase con sus vínculos con los Beltrán Leyva, al presentarse la detención de Edgar Valdez Villareal alias "La Barbie" en 2010 la ciudad atravesó por un desequilibrio de poder y estas dos organizaciones comenzaron sus roces (De Mauleón, 2018). En enero de 2013, dos jóvenes supuestamente narcomenudistas de la Unión Tepito fueron secuestrados con apoyo de un agente de nombre Luis Guillermo Flores Capetillo después de haber sido sacados a golpes del *Bar Living* ubicado en la calle de Bucareli en la colonia Juárez. Flores junto con el gerente del bar, trasladó a los jóvenes y posteriormente los entregó a miembros de la UI, quienes los asesinaron, cortaron orejas y sacaron los ojos, para después abandonar sus cuerpos en la colonia Agrícola Oriental.

De acuerdo con Romandía, Fuentes y Nieto (2019: 76) "el homicidio de los jóvenes raptados afuera del *Bar Living* llevó la pugna al siguiente nivel". A este hecho siguieron otros incidentes en bares de la ciudad, en particular los ubicados en el mencionado corredor y a su

vez se relacionaron con otros que hasta ese momento se habían considerado asesinatos y secuestros aislados. Las discordias por las cuantiosas ganancias derivadas de drogas al menudeo en los centros nocturnos llegaron a un punto crítico el 23 de mayo de 2013 cuando un narcomenudista de nombre Horacio Vite Ángel fue asesinado, presuntamente por miembros de la UT, afuera del Bar Black ubicado en la calle de Tamaulipas en la Condesa.

No obstante, Vite no era cualquier personaje dentro la estructura de la UI, sino el primo del actual jefe de la organización Edwin Agustín Cabrera Jiménez alias *El Antuán*, quien ordenó a su jefe de sicarios José Joel Rodríguez Fuentes alias "El Javis" dar el contragolpe en el Bar *Heaven* solo dos días después. Así, *El Javis* orquestó un plan, consistente en un "falso operativo" (2019: 92), para que 13 jóvenes, algunos de ellos vinculados con la UT, fueran secuestrados del bar en complicidad con el gerente, posteriormente ejecutados y finalmente enterrados en una fosa en un rancho, propiedad de *El Antuan*, ubicado en Tlalmanalco, Estado de México.

La finalidad de recuperar los casos antes descritos es dar cuenta de que la operación de grupos de delincuencia organizada en la Ciudad de México no es algo nuevo, pero la violencia y la efectividad en sus ataques, así como la conformación de una reputación siniestra y comunicación efectiva para implantar el miedo y temor se han convertido en una manera de enviar mensaje entre los grupos que operan de forma extremadamente violenta. Así la construcción de un enemigo interno para combatir y como parte de la agenda personal, y la agenda mediática, que en particular se construyó mediante la inseguridad, será también en el delito y en el crimen, es por ello por lo que los delitos contra la salud caben en ese mismo modelo de persecución.

En este sentido, la implementación de la ley contra el narcomenudeo, a pesar de haber sido gestada durante el sexenio de Calderón como una fase de personalización de la política mediante la agenda de seguridad, en la Ciudad de México se alineó al modelo de combate internacional de delincuencia organizada trasnacional y de control urbano con la reforma policial dotando de un esquema de concurrencia mediante los delitos contra la salud a través del modelo de combate al narcotráfico, esto aún y cuando implicó un desafío institucional para las instituciones de seguridad y justicia, en el terreno narrativo perpetuó con lógica el uso de estrategias de criminalización.

También logró articular la *narco narrativa* (Zavala, 2022) en una versión particular para la ciudad, utilizando la misma nomenclatura como: narco, cárteles, células, fragmentación o descabezamiento (Romandía, Fuentes y Nieto, 2019) en este sentido los grupos de crimen organizado que operaban en la ciudad estrategia del *King pin* también ha generado algunos aspectos negativos. Por un lado, ha llevado a un aumento de la criminalización y la estigmatización de ciertos grupos sociales, especialmente de personas en situación de vulnerabilidad que se dedican al narcomenudeo por falta de oportunidades económicas. Esto puede exacerbar las desigualdades sociales y dificultar la reintegración de estas personas a la sociedad una vez que cumplen sus penas. Pero también aceleran los procesos de ejercicio de la disputa violenta tomemos por caso la reorientación que han tenido los grupos criminales en la ciudad donde cada vez son más jóvenes los actores y más violentos.

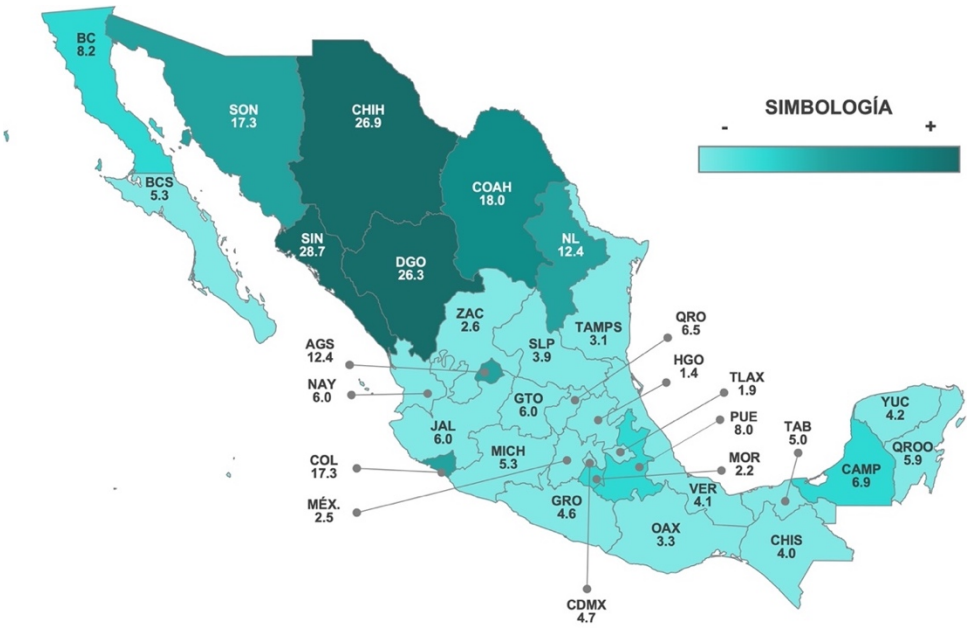
Para mitigar estas consecuencias no deseadas a principios de la gestión de Andrés Manuel López Obrador y es por ello que la temporalidad del análisis también culmina en el año 2020 a un año de comenzar la gestión se propuso una Ley de Amnistía en la cual se incluyen un decreto que beneficia a encarcelados por delitos contra la salud siempre y cuando tengan competencia federal y que quien los haya cometido se encontrase en situación de pobreza o en extrema vulnerabilidad por tener una discapacidad, incluso señala el decreto y toma en cuenta condiciones de género y relaciones asimétricas de poder reconociendo que los delitos contra la salud pudieron haber sido cometido bajo coacción de familiares como cónyuges o parejas, incluso bajo presiones de la delincuencia organizado (DOF, 2020).

Con la aplicación de la ley contra el narcomenudeo, desde el año 2012 en la ciudad se ha encontrado desarticulada ya que los ejes de seguridad han sido superiores a los económicos o de salud y a pesar de las campañas de prevención o la reforma a la ley de salud mental y algunos otros esfuerzos. Se ha continuado con un enfoque punitivo y como hemos visto ha perpetuado el ciclo de violencia sistémica y marginalización ante un mercado, prácticas y venta de drogas ilícitas que jamás desaparecerá.

Respecto a los principales hallazgos, si bien en la Ciudad de México no se ha dado una sobrepoblación en el sistema penitenciario debido a la criminalización de los vendedores

o de usuarios en portación de pequeñas cantidades ya que representan menos de un 5% de los presos, como se observa en el mapa del INEGI. El uso indiscriminado de la figura de narcomenudeo o posesión simple al ser agravante para la detención si se aumenta la carga penitenciaria e influye en el actual sobre poblamiento de los centros de reclusión ya que del total de los detenidos el 60% de los encarcelados están detenidos por la modalidad de posesión simple cuestión que puede ejercer presión adicional sobre los recursos del sistema de justicia y aumentar los riesgos de hacinamiento y violaciones de derechos humanos.

Figura 2. Delitos relacionados con drogas cometidos por la población en los centros penitenciarios estatales, 2020



Fuente: INEGI. Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales 2021.

En este orden de ideas con la securitización de la seguridad pública, en particular con el uso de la contención de grupos más violentos dedicados a distintos delitos entre ellos el narcomenudeo, como un efecto del combate al crimen organizado, las medidas han sido nocivas por varias razones fundamentales. En primer lugar, porque al priorizar la seguridad, con respuestas que suelen ser orientadas hacia el control y la represión que hacia la protección y el respeto a los derechos individuales. Además, este enfoque ha desviado recursos significativos hacia actividades de vigilancia y militarización, en detrimento de iniciativas

sociales y económicas que aborden las causas subyacentes del crimen por poner un caso y también hasta el momento ha alimentado el ciclo de violencia al legitimar respuestas militares y policiales más agresivas, lo que ha generado una escalada en la confrontación con los grupos criminales.

Tómese lo acaecido en la delegación Tláhuac el día 20 de junio cuando fue abatido por miembros de la Armada de México un supuesto miembro del grupo delictivo autodenominado "Cártel de Tláhuac" esto provocó un movimiento agresivo por parte de bases sociales arraigadas y posiblemente vinculadas a las redes de vigilancia para el grupo criminal de la zona como: moto taxis y vendedores ambulantes, los cuales realizaron bloqueos quema de automóviles y llantas (Ruiz, 2017). En un comunicado de prensa, la Secretaría de Marina Armada de México indicó que el enfrentamiento había comenzado ante un patrullaje que había sido atacado y terminase en la incursión a un domicilio donde fue abatido un líder criminal que presuntamente lideraba un grupo de narcomenudistas que operaban en Iztapalapa y Tláhuac. Pero que, también se dedicaban a la extorsión, secuestro y homicidios, sin embargo la cabeza del comunicado hacía hincapié en el narcomenudeo como principal delito: *SEMAR en coordinación con Fuerzas Federales y de SP de la Ciudad de México repelen agresión de presuntos Narcomenudistas, en Tláhuac* (SEMAR, 2017), cuestión que reafirma cómo el término comienza a ser utilizado al igual que el narcotráfico para englobar un universo de crimen y delitos en concordancia con la narco narrativa dominante (Zavala, 2018).

En este sentido, la relación entre el narcomenudeo en la Ciudad de México, la extorsión y el cobro de piso, despojo e invasión de predios especialmente a partir de la irrupción del Cartel de Tepito o La Unión, y otros grupos como el antes mencionado establecido en Tláhuac ha generado graves consecuencias para la ciudad (Alvarado-Mendoza, 2019). Estas organizaciones criminales han impuesto un control violento sobre áreas específicas, utilizando la violencia y la intimidación como herramientas para mantener su dominio. Además, el cobro de piso y la extorsión asociados con el narcomenudeo han generado un clima de miedo y desconfianza entre los comerciantes y residentes de las zonas afectadas. Muchos negocios se ven obligados a pagar sumas exorbitantes para evitar represalias, lo que no solo afecta su estabilidad financiera, sino que también socava la

legitimidad del Estado y su capacidad para garantizar la seguridad ciudadana. Esta relación entre el narcomenudeo y la extorsión refleja la complejidad y la gravedad de los problemas de seguridad pública que enfrenta la Ciudad de México es por ello que identificar históricamente la evolución del fenómeno y los usos del término pueden servir para identificar las prioridades en la implementación y articulación de narrativas, políticas e intervenciones políticas y mediáticas efectivas para la contención de los grupos más violentos y los cuales cometen delitos de alto impacto.

Al respecto en entrevista un exfuncionario sobre derechos humanos menciona que la venta de drogas también es un espacio o un delito el cual es difícil establecer puntos medios o esquemas de mediación, por eso la Amnistía y modelos de no encarcelamiento son relevantes ya que demuestran que la penalización de la tenencia, posesión o comercio de drogas realmente no detienen los flujos criminales.

> Entrevistado 2. "La verdad es que también hay una tendencia un poquito a echar la culpa, y a ver con ojos digamos negativos todo el tema de los narcomenudeos y el debate está incluso en la pena que le puedes dar a una persona que trae cinco pastillas de fentanilo o a aquella que trae un cargamento, y al final las penas resultan prácticamente igual, eso habla de la desproporción en el sistema de justicia, de observar el narcomenudeo como parte, o más bien, como origen del problema y yo creo que no debería ser visto así, debería ser visto más bien como el momento previo al enganche en las expresiones más violentas y de delincuencia organizada".

En este contexto, la venta de drogas ilegales por estos grupos delincuenciales no sólo alimentan el flujo de más drogas ilegales o la proliferación de sustancias más nocivas, sino que también facilita la proliferación de otros delitos, como el secuestro, la extorsión y el homicidio por lo que dividir el mercado de drogas de otros delitos, comenzando por la separación de mercados entre sustancias debe ser una tarea prioritaria para autoridades y dentro de la agenda académica como uno de los grandes problemas nacionales, pues como se ha mostrado a lo largo de esta investigación el desafío radica en que las relaciones establecidas por las redes de los mercados ilegales e informales son muy delgadas y no existe sólo una forma de narcomenudeo o delincuencia por lo que colocar en el mismo saco punitivo o narrativo puede ser problemático. Pero si es posible limitar la acción con estrategias como

las que se han venido implementando como la detención de los grupos más violentos sin embargo no han sido suficientes estos esfuerzos.

Como ya se ha mencionado, el fenómeno del narcomenudeo se ha construido a través de un complejo entramado de relaciones sociales, culturales, políticas y económicas, al entenderse que mediante el acto de compra-venta de bienes ilícitos, se le dará un uso final a dicha mercancía. En este sentido, cuando los consumidores o usuarios adquieren o usan estas sustancias, que no provienen de mercados legales aún y siendo sustancias de tipo farmacéuticas derivadas al mercado ilegal, algunos de sus derechos se ven interrumpidos. Por ejemplo, el acceso libre a la salud, ya que de facto no hay forma de adquirir cocaína, heroína o mariguana por vías legales y la oferta de consultoría psicológica, acompañamiento médico o tratamiento son limitadas. Por lo tanto, no existen sitios de aprovisionamiento regulados, aunado a que pocos usuarios utilizan parafernalia adecuada, sobre todo en el caso de inyectores, y como se ha mencionado, también algunos carecen de información, si bien el internet ha masificado los sitios de intercambio de experiencias, de difusión o de socialización entre personas que usan drogas ilícitas esto no siempre fue así.

Por ello, es pertinente mencionar desde una perspectiva histórica que la primera experiencia de este tipo, en el cual usuarios organizados de alguna droga ilícita formaron una red de apoyo muto ante un contexto adverso, se situaría en 1986 con la fundación del Programa Compañeros en Ciudad Juárez Chihuahua, lo cual fue una respuesta temprana a los problemas ocasionados por el uso de heroína (Anaya y Contró, 2016). Y también se organizaron programas pioneros impartidos por el Consejo Nacional Contra el SIDA los cuales utilizaron redes de usuarios para informar y mitigar los riesgos y los daños asociados al uso de drogas inyectadas, con el intercambio de jeringas, distribución de material para evitar la transmisión de infecciones de trasmisión sexual como condones. Sin embargo, los datos existentes sobre inyectores siguen siendo limitados (Ospina y Magis, 2022).

Retomando entonces, los primeros casos de SIDA en México fueron detectados en 1983 (Magis *et al*., 1996) y su rápida expansión por transmisión sexual también empata con la crisis internacional y el vínculo que tuvo con los usuarios de drogas inyectables, en particular los usuarios de heroína callejera intravenosa en condiciones poco saludables y otra respuesta al mercado institucionalizado fue la aparición de la primera clínica de metadona una terapia de sustitución que fue abierta en la ciudad de Mexicali en 1993 y que contó con

6 unidades de atención. Sin embargo, esto causo tensiones ya que los usuarios dejaron de comprar droga de los puntos de venta y los vendedores llegaron a atacar las clínicas por lo que la tensión entre centros privados y el mercado ilegalizado en particular vendedores violentos fue una amenaza real desde los años noventa.

Por otro lado, ha sido en la mariguana y en los usuarios de drogas inyectables donde se ha construido maso menos una identidad. En el caso de la mariguana, como se ha mencionado anteriormente, esta es parte de un entramado de consumos culturales (Nateras, 2024) y apropiaciones significativas de la cultura donde se ha desarrollado incluso una *cultura cannábica* con códigos que son locales pero también reconocidos internacionalmente, logrando concentrar usuarios organizados a micro escala y escala global, los cuales han logrado tener visibilidad, incidencia política e incluso se han derivado contextos regulatorios ejemplares.

En este orden de ideas, la legalización de la marihuana como movimiento social puede ubicarse en Norteamérica y tiene raíces en la contracultura, el liberalismo económico, los movimientos anti guerra y varios grupos heterogéneos a lo largo de la unión americana entre ellos uno de los más antiguos es la Organización Nacional para la Reforma de las Leyes de Mariguana o NORML por sus siglas en inglés, fundada a finales de los años 60 y visible en el activismo desde los años setenta funcionando con capítulos locales o estatales y una gran cabeza nacional (NORML, 2024). En los años 1990 debido a la masificación del internet algunas de estas organizaciones han logrado tener un crecimiento importante y campañas logrando avances significativos en California y Oregón que darían píe a la ola de legalizaciones y modelos de organización política de base junto con la expansión del mercado regulado de cannabis medicinal y recreativa que actualmente cuenta con más de la mitad de estados de la unión con alguna clase de regulación, descriminalización o legalización total.

En México, a partir del año 2000, de igual manera el acceso a internet y los movimientos globales como el "*Million Marijuana March*" impulsaron el activismo por la regulación de la marihuana. De este modo, se inauguró un incipiente movimiento y colectivo social cuyos integrantes se reunían todos los primeros sábados de mayo en el Parque México y en la Alameda Central para marchar por la liberación de la marihuana, donde activistas conformarían proyectos de difusión de la cultura cannábica, científica y de orientación

comunitaria como la Asociación Mexicana de Estudios del Cannabis AMECA, el Movimiento Cannábico Mexicano (Tagle y Romero, 2024) y la Biblioteca Cannábica, un espacio el cual albergó una colección de libros en la Biblioteca Pública del Parque México y que después se extendió a otras sedes como el Centro Cultural La pirámide, el Circo Volador y el Faro de Oriente (García, 2012).

Como menciona Romero (2024), la irrupción del cannabis en la arena política y que incluyera una perspectiva de consumidores o usuarios con una visión menos estereotipada e integral del mercado se dieron a partir de la época de la transición democrática con la plataforma electoral del Partido Democracia Social, lo cual, empatado con el crecimiento de una pequeña corriente de consumidores y actores sociales que retomaron escritos clásicos y que hicieron visible la necesidad de darle un nuevo viraje a las políticas de prohibición.

En este sentido, las primeras iniciativas presentadas fueron del grupo parlamentario de Alternativa Social, un pequeño partido político que a través de su diputada Elsa Conde en 2007 elaboraron una iniciativa de ley que generó debate pero no prosperó en el Congreso. Estas iniciativas fueron elaboradas también por el Grupo Cáñamo, un conjunto de especialistas que formarían organizaciones de la sociedad civil, frentes académicos y sociales importantes para los procesos de discusión y debate sobre el cambio a las políticas de drogas en México como el Colectivo Por una política Integral hacia las drogas, El programa de Política de Drogas del CIDE, La Cátedra Unesco sobre Drogas entre otros espacios encabezados por Luis Astorga, Alejandro Madrazo y Jorge Javier Romero entre otros.

Es importante mencionar que el litigio estratégico y el cabildeo político también se logró gracias a la presión política de organizaciones no gubernamentales con apoyo de grandes capitales y con lazos empresariales, como cuando en el año 2012 México Unido contra la Delincuencia (MUCD) cambió su postura hacia una perspectiva reformista organizando durante el último año del gobierno de Felipe Calderón el Foro Drogas a un siglo de su prohibición en el Museo de Antropología y donde la esposa del presidente Calderón Margarita Zavala asistió y durante su intervención dijo de manera sarcástica, -¿Qué van a discutir? Si ya todos están de acuerdo con la legalización. Ante un público el cual en algunos momentos la increpó por la muerte de jóvenes y desaparecidos, también durante su participación el entonces secretario de gobernación Alejandro Poire fue interrumpido por un

asistente que leyó un pasaje de un libro Antonio Escotado cuestionando la eficacia de la prohibición y la responsabilidad de los gobiernos en el descontrol de drogas (Anaya 2024).

Ese mismo año, 2012 con el contexto internacional se fundó la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART) con el objetivo de impugnar la prohibición del cannabis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El debate sobre la regulación del cannabis cobró relevancia en la agenda política con la participación de legisladores del PRD, como Fernando Belaunzarán y Mario Delgado, quienes impulsaron iniciativas y foros de discusión. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), se consolidó una coalición entre sociedad civil y actores políticos favorables a la regulación. En el año 2015, la SCJN otorgó un amparo a SMART, reconociendo el derecho al libre desarrollo de la personalidad como base para el consumo personal de cannabis. Este fallo aceleró el debate legislativo, el cual fue incluso propuesto por el mismo presidente Enrique Peña nieto quien instruyó un gran debate nacional sobre uso de la mariguana que si bien ya había existido una ola de foros nacionales y locales este era el primer momento en el cual a través de una petición del titular del ejecutivo se instruía construir una relatoría y avanzar en términos reglamentarios, propiciando nuevas iniciativas como la Ley General del Cannabis, presentada en 2016 por el senador Roberto Gil Zuarth (PAN), y la propuesta de Martha Tagle, que contó con el respaldo de diversas organizaciones civiles y activistas (Romero, 2024).

Por su parte en lo que corresponde a un actor que se había mantenido al margen de las discusiones, eran los usuarios de cannabis medicinal con productos derivados farmacológicos y siguiendo el modelo de presión del modelo norteamericano de la niña Charlotte`s Web el caso de Grace Elizalde, generó presión social y mediática, facilitando la aprobación de una reforma sobre derivados farmacéuticos 2017 que permitió el uso medicinal del cannabis, sin embargo, esta regulación encontró resistencias dentro del PRI, e incluso fue señalada de haber logrado una baja en la aprobación del gobierno y que la iniciativa de matrimonio homosexual y de mariguana habían perdido parte de las elecciones intermedias (Fernández, 2016).

En 2018, la SCJN concedió un segundo amparo basado en el libre desarrollo de la personalidad, sentando un precedente clave para la regulación del cannabis en México y consolidando el debate como un tema central en la política pública. En febrero de 2019, la

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prohibición absoluta del consumo de cannabis y otorgó al Congreso seis meses para legislar al respecto. Aunque el gobierno de López Obrador incluyó en su Plan Nacional de Desarrollo un cambio en la política de drogas, no presentó un plan concreto para su implementación.

El Congreso inició un proceso de consulta pública en el Senado, donde participaron diversas organizaciones, empresas y legisladores. Se presentaron múltiples iniciativas para regular el cannabis en sus distintos usos, desde el personal hasta el medicinal e industrial. Sin embargo, el proceso enfrentó obstáculos políticos y cabildeo de empresas extranjeras, particularmente canadienses. El debate se prolongó hasta 2020, cuando finalmente el Senado aprobó la Ley Federal para la Regulación del Cannabis. No obstante, la ley presentó deficiencias, como mantener la criminalización de pequeños productores y consumidores sin recursos, favorecer a grandes empresas con altos requisitos de entrada al mercado y no eliminar el cannabis del Código Penal. Legisladores de Movimiento Ciudadano criticaron estas limitaciones y propusieron un modelo más incluyente, pero sus reservas fueron rechazadas.

A manera de cierre en el capítulo Historia social del narcomenudeo en la Ciudad de México en el periodo 1989-2020 se elaboró la tematización, pertinencia y relevancia de enfoque del narcomenudeo desde una perspectiva de la historia social mediante la perspectiva multi escala a partir de la dimensión social de los hechos y acontecimientos que se pueden analizar desde la historia política, la económica los cambios tecnológicos y los capos de producción de la cultura. En el primer apartado ¿Es posible una historia social del narcomenudeo en la ciudad de México? Se delimitó de manera a conceptual la ciudad desde una perspectiva espacial histórico antropológica.

En un segundo momento en el aparado, configuración del crimen organizado trasnacional en la agenda de seguridad hemisférica 1989-2001, y su repercusión local en el Distrito Federal se incluyó una perspectiva sobre el modelo que adquirió el combate al tráfico ilícito de drogas ilícitas desde el sistema político y desde lo organizacional como mundo de posibilidad, será a través de las instituciones encargadas de regular, castigar y vigilar el cumplimiento de las normas respecto a las drogas ilegalizada que las competencias entre el áreas jurídicas, de seguridad y de salud resaltarán como concurrentes.

En este contexto, las competencias entre los ámbitos jurídico, de seguridad y de salud se destacan como áreas concurrentes, ya que cada una aporta diferentes enfoques y recursos para enfrentar el problema del narcotráfico. Estas instituciones crean un mundo de posibilidades en la lucha contra el tráfico ilícito, coordinando sus acciones dentro del marco legal y administrativo pero tambien procuran un campo de producción en el imaginario dando cavida a productos de la cultura pobular como películas y música como las ejemplificadas en el capitulo tales como el Jefe de Jefes de los Tigres del Norte y las vicisitudes ocasionadas por el peculiar estilo de vigilancia y modelo autoritario corrupto heradado de la adminsitración de la Policía a cargo del Negro Durazo, cuya repsresentación pervivió en productos de la cultura popular.

Por último, en apartado sobre Campaña permanente contra el narcomenudeo e Implementación de la ley contra el narcomenudeo 2006-2020 se particulariza en cómo la campaña permanente es entendida como una serie de estrategias controladas y dirigidas en la política en particular por cabezas de instituciones y gobiernos donde se emprenden actividades como si siempre fuera tiempo de elecciones con un ataque agresivo, con repetición, control sobre la información y sobre los recursos. Por lo cual no es necesario que se establezca un plan por escrito, basta el uso de una retórica reiterativa y rotativa donde temas en específico se repitan en este caso el combate al narcomenudeo se convierten en una lógica de extensión electoral con personalización, mediatización como lo ocurrido durante el sexenio de Felipe Calderón y las administraciones de los jefes de gobierno de la ciudad donde el combate a la inseguridad y al crimen se convirtieron en ejes programáticos de sus agendas lo cual amplificó la cobertura mediática y en el marco de interacción con los modelos de americanización y securitización.

Conclusiones

Comenzaré este último apartado mencionando los alcances del análisis del narcomenudeo desde una perspectiva de la historia social. Este análisis se desarrolla a partir de un bosquejo general de los apartados y sub apartados del capitulado para que el lector recupere a grandes rasgos algunos de los principales hallazgos respecto a un entramado de prácticas, nociones, representaciones y asuntos económicos, políticos y sociales, los cuales se entretejen con órdenes definidos dentro de la legalidad del Estado y el resultado de la institucionalización de prácticas, conceptos e instituciones jurídicas desde una perspectiva multinivel que se tienen sobre el tráfico de drogas a pequeña escala o narcomenudeo. En este contexto, a partir de un entramado de relaciones económicas y políticas, los mercados ilegalizados, las sustancias fiscalizadas y el largo continuum del proceso de prohibición y control de drogas han sido analizados desde una perspectiva estructural y coyuntural mediante una estructura de cortes históricos y categorías analíticas.

El narcomenudeo es uno de los delitos contra la salud y se le puede reconocer como una operación de mercado, en la que participan dos o más personas como compradores y vendedores, y en la cual hay una mercancía ofertada que es la droga. El término narcomenudeo ha sido utilizado por agencias de seguridad en México desde el año 2002 y no ha dejado de estar presente hasta la fecha debido a diferentes procesos que han obedecido tanto al clima político nacional, y el actuar de sus actores más importantes, como a las complejas relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos.

Por ello, esta investigación tomó como uno de sus ejes principales la relación entre las dinámicas locales, en particular las que se han manifestados en espacios urbanos, y los procesos globales, dado que las discusiones conceptuales, e incluso las disposiciones derivadas de estas, han marcado las políticas sobre el tema en el mundo, es por esta razón que esta tesis se insertó en el campo del análisis de las políticas de drogas, las cuales se han ido modificando a lo largo del tiempo como resultado de cambios coyunturales y ciertos acontecimientos determinantes, que en conjunto han hilvanado narrativas alimentadas tanto por la prensa como por los medios de comunicación mediante películas, canciones y documentales, y actualmente, por medio de plataformas con series y videoblogs donde se

abordan ciertos temas. Hay que señalar que dichas narrativas han comenzado a ser analizadas y estudiadas desde diferentes ámbitos de la investigación social.

Por estas razones, el objetivo de este trabajo fue elaborar una historia social del narcomenudeo, es decir una historia que analiza cómo los individuos, grupos con determinados intereses, instituciones de justicia, organismos internacionales o fuerzas del orden, actúan como contrapesos en diferentes procesos de mercado, donde las drogas ofertadas al menudeo ocupan un lugar preponderante no solo en la dinámica de la ciudad o en las calles, sino como parte de un gran entramado de relaciones, dicho con otras palabras un análisis del marco de intercambio internacional y local a la luz del proyecto global de larga duración denominado: Régimen Internacional de Prohibición de drogas o del Consenso de Viena.

Para lograr este objetivo, se realizaron diferentes cortes históricos basados en rupturas y procesos políticos, económicos y sociales, relevantes en el contexto global y local con perspectiva coyuntural y estructural. Por su parte, el objetivo particular buscó analizar las normas, leyes, acuerdos locales y globales, en cada uno de los cortes temporales propuestos, pero a partir de los modelos de securitización, americanización de las políticas de control de drogas y la reconfiguración del poder político.

Entre los hallazgos de este trabajo de investigación se pueden mencionar los siguientes: se identificó que el proyecto global que representa el Régimen Internacional de Prohibición ha funcionado históricamente mediante el control social, político y cultural, para ello ha sido necesario que este interactúe con los sistemas jurídicos, los modelos de securitización internacionales y también regionales, de esta forma, cuando se observa este proceso históricamente, es decir, a partir de las transformaciones, permanencias y continuidades económicas y políticas durante la era coyuntural del cambio democrático, acontecimientos como la caída del muro de Berlín o las guerras globales contra las drogas y contra el terrorismo, pueden comprenderse como parte dicho proyecto global, el cual a su vez tiene impacto en los cambios que se presentan a nivel local, por alejados que parezcan.

De esta forma, señalar los límites temporales, espacios de acción y características de los actores, es útil para identificar un proceso de *securitización* de la vida pública, a partir del discurso político, las aproximaciones institucionales y mediáticas, dicho proceso se

construyó a partir de medidas como por ejemplo: restringir derechos y libertades, enmarcando temas como la protección de bienes intangibles y la salud, cuestión que facilitó un sistema de vigilancia policial izado o militarizado e instrumentalización del control armado para la protección de la salud pública.

Sin embargo, la estrategia más polémica e identificable tanto a nivel discursivo como por sus repercusiones a escala global y local ha sido la guerra contra las drogas, que es una forma de acción de comunicación política y también un acto administrativo, que en la investigación se entiende como un dispositivo político-moral que surge como resultado de coyunturas políticas, por ejemplo, la reestructuración y el reacomodo de las agendas bélicas convencionales desde la década de los sesenta a raíz de la derrota en Vietnam y el aumento en el consumo de drogas ilícitas ante un nuevo contexto e individualismo. De este modo, durante la era Nixon entre 1961 y 1971, se presentó un control diplomático y científico en materia de drogas con la prohibición del LSD y MDMA sustancias que comprendían el universo farmacológico controlado. Posteriormente, a finales de los años ochenta del siglo pasado se ha extendido la percepción generalizada de que los mercados de drogas ilegalizadas causan conflicto y violencia, esta percepción negativa se delegó a la cultura urbana de la droga en particular de la cocaína y del crack.

De tal modo, también la guerra contra las drogas supone un dispositivo de control que oscila entre lo jurídico, político, cultural, pasando por lo social construyendo un andamiaje de bio poder y control de la salud. Comienza como un experimento para el control social y político de ciertas minorías étnicas, y sirve para controlar ciertas prácticas culturales sobre la salud enfermedad y prácticas tradicionales. Aunado a esto, la guerra contra las drogas dados sus efectos directos y explícitos en discursos y narrativas, así como por aquellos acontecimientos al margen de la escena global, se puede rastrear históricamente mediante la interrelación de sus impactos con momentos coyunturales y espacios diversos.

En este sentido se comprueba la hipótesis de investigación la cual sostiene que existe una relación en la expansión del narcomenudeo o la venta de drogas a pequeña escala dirigidas al consumidor final en la Ciudad de México a partir de la interacción entre las políticas globales del régimen internacional de prohibición con la ratificación por parte de México de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes

y Sustancias Psicotrópicas de 1988 en 1989 la cual promovió una penalización del consumo y posesión de drogas en los sistemas jurídicos locales como lo ocurrido en 2009 con la promulgación de la ley contra narcomenudeo en un entorno de institucionalización y vigorización de los modelos de seguridad.

Esto se pudo observar en el caso mexicano, porque pese a la existencia de distintas teorías y enfoques hay un consenso para distinguir una nueva época de guerra contra las drogas utilizada como campaña permanente, como forma de capitalización política y parte de una agenda hemisférica securitaria internacional derivada del ataque terrorista a las Torres Gemelas del *World Trade Center* en Nueva York el 11 de septiembre de 2001, y sus consecuencias posteriores como respuesta al terrorismo, las cuales impactaron en las normativas y en diferentes contextos donde la seguridad era un eje clave.

Así, a nivel local en las diferentes ciudades mexicanas el narcomenudeo significó la convergencia de una serie de dinámicas el orden económico, político y social que se analizaron desde la perspectiva de la historia social porque esta ayuda al investigador a comprender un fenómeno complejo como la compra-venta de drogas a pequeña escala o para el consumidor final, porque considera el entramado de relaciones que se gestan entre aspectos como la cultura y el mercado, todo ello a la luz de procesos históricos rastreables dadas las relaciones, interdependencias y particularidades entre el régimen internacional de prohibición que ha funcionado como un dispositivo global radical y la articulación de un sistema de control local a través del paradigma médico y de seguridad a través de la denominación del circuito del tratamiento con la figura de farmacodependiente y del narcomenudista.

Y es que conceptualmente el narcomenudeo es un fenómeno reciente, sin embargo, la venta de drogas al menudeo en la Ciudad de México tiene por lo menos cien años documentado, esto sin contar las transacciones cotidianas que pasaron desapercibidas al ojo de la historia oficial por no resultar relevantes en ese momento, pero que hoy son útiles para reconstruir una historia donde desde yerberas, boticarios, policías, delincuentes y hasta transeúntes de las calles de la ciudad dan cuenta del endurecimiento del régimen local, pero también de la gradual persecución de lo que conocemos como delitos contra la salud.

Esto es importante, porque uno de los puntos cruciales de la investigación recae en las narrativas vinculadas con los actores en el tiempo, lo cual dota al concepto de narcomenudeo de sentido en cuanto irrumpe en el escenario histórico con todo y sus derivaciones en el plano económico, político y de la seguridad a nivel local a partir del análisis de fenómenos urbanos, como lo son los delitos contra la salud, el esquema y origen de la prohibición jurídica y el tipo penal utilizado para su persecución, mediante la categorización de enemigos internos derivado de problemáticas globales como: el tráfico ilícito, el uso indebido de drogas y el marco internacional del problema mundial de las drogas.

En este sentido, aunque no es posible establecer la fecha exacta en la que comenzó a utilizarse el término narcomenudeo, fue en el año 2002 que, en el informe de labores de la Procuraduría General de la República, en el apartado Fiscalía Especializada para la atención de delitos contra la salud, se distinguió la modalidad de venta de drogas al menudeo del narcotráfico. Para el siguiente informe del 2003, hace su aparición el término narcomenudeo para designar a las transacciones ilícitas de venta a detalle, en este documento se propuso la creación de un Programa Nacional para el Combate al Narcomenudeo cuyos objetivos fueron la prevención, tratamiento y reducción de la oferta de drogas en esta modalidad, lo cual, diversificó la persecución de los delitos contra la salud en el ámbito local, en particular con un modelo policial securitizado, por ejemplo, con los grupos de reacción de la policía judicial cuya función era la captura de vendedores al menudeo en la ciudad.

Así, los delitos contra la salud en la modalidad de pequeñas dosis o al menudeo se contemplaron y tipificaron dentro del catálogo de delitos perseguidos por el fuero federal es por ello por lo que la PGR a partir de la AFI coadyuvó con las policías locales la persecución de dichos delitos y eran procesados ante autoridades federales un desafío, ya que el narcomenudeo no es privativo de la Ciudad de México y la zona metropolitana, pero ha alcanzado una mayor proyección en estas áreas debido a que concentran un mayor número de población y por ende de usuarios, además, de que en los estados del interior de la república se desarrollan dinámicas de producción a mayor escala, lo cual corresponde más al narcotráfico, mientras que la ciudad es un espacio de comercio y con grandes flujos de mercancías ilegales y mercados informales procedentes de todo el mundo.

Así, se identificó a la PGR como uno de los actores determinantes en esta investigación debido a los cambios históricos en relación con el fenómeno que son rastreables y verificables, porque la PGR concentró la fuerza de ley, en la cual recayó el control penal de las drogas ilegalizadas, esto sin olvidar que habían existido distintas áreas encargadas de combatir los narcóticos y enervantes al menos desde los años 30 del siglo XX.

También se identificó que para explicar el fenómeno era necesario comprenderlo en el marco de la reconfiguración política y el declive del presidencialismo mexicano y una posterior época de expansión y aceleración de la globalización e integración regional y económica de América del Norte. De esta forma, el combate al narcotráfico recibe atención institucional, cuando se delimita al consumo interno como un asunto de Estado en el marco de endurecimiento del sistema internacional y el contexto de la firma de una nueva convención en 1988 para suprimir el tráfico ilícito y que conminó a penalizar en los aparatos jurídicos internos la posesión de drogas y combatir el crimen organizado.

Tomando esto en cuenta, se configuró el horizonte de posibilidad para que una década después el narcomenudeo tuviera la presencia mediática y política logrando establecer reformas administrativas, creación de burocracias y nuevos criterios jurídicos. Si bien los cambios experimentados en el consumo de drogas en México se han mantenido estables, las historias y narraciones en la prensa y adoptados por los políticos se siguen presentes al menos en el último siglo, lo cierto es que la agenda personalista del presidente en turno respecto a enmarcar el consumo interno, a los traficantes y vendedores pasaron de ser ocasionales notas principales o notas interiores a un énfasis político construyendo una agenda pública que se fue exacerbando.

Por su parte, en términos metodológicos esta es una investigación cualitativa, es decir que se construye sobre un balance entre la interdisciplina y la triangulación aplicadas a un objeto de estudio para lograr una mejor comprensión de este, y para la recolección de datos cualitativos, se propuso una herramienta flexible basada en índices temáticos concernientes al análisis de contenido pero enriquecido desde la perspectiva etnográfica, en la cual estos documentos se interpretan mediante la identificación como textos de cultura, en este caso, la entrevista es el método de investigación cualitativo con la capacidad de recolectar

información, para que después el investigador delimite algunas tendencias generales sobre el objeto de estudio (

Se tomó como ejemplo el caso de las entrevistas realizadas a Hobsbawm donde este habló sobre diferentes temáticas desde su experiencia como historiador, pero también como analista social que experimentó los retos y posibilidades derivados de las tendencias y crisis económicas y sociales que caracterizaron al nuevo siglo. En este sentido, se recopilaron experiencias sobre el narcomenudeo, más que buscar opiniones subjetivas positivas o negativas de los procesos multinivel, regionales y locales se identificarán amplias capas sobre, tensiones, resistencias y transformaciones.

En cuanto al análisis de índices temáticos, este se realizó a través de categorías construidas y propuestas por otros referentes metodológicos y teóricos como lo es la amplia literatura existente sobre el sistema político mexicano, la securitización, la americanización y el régimen internacional de prohibición, esto para el establecimiento de pautas para la comprensión de una socio historia de la prohibición de drogas, sus derivaciones y consecuencias políticas y administrativas en el campo social, político, cultural y económico, para así estudiar el cómo se ha configurado el fenómeno del narcomenudeo.

En este sentido, se identificó que la *americanización* es un término utilizado en la historia, la economía, la ciencia política, la sociología y en la comunicación política para señalar la influencia de los valores estadounidenses y su presencia en las instituciones políticas, lo cual ha generado transformaciones que se presentaron de manera acelerada en el contexto del auge y declive de la hegemonía norteamericana durante y post guerra fría. Además, este término ha sido utilizado al menos desde el siglo XIX para señalar la supuesta influencia estadounidense en alguna sociedad, entidad, objeto material o práctica cultural.

Entonces, se observó a la *americanización* como parte de una lógica histórica, en la cual se han desplegado los valores políticos protagonizados por: la libertad individual, la democracia liberal occidental, formas de hacer las guerras de intervención y ocupación, métodos específicos de control de la inteligencia política y la insurgencia, así como de gestión de controles geoestratégicos a partir de operaciones encubiertas y/o políticas militares directas, en lo económico se podrían mencionar a: la industrialización, el capitalismo, la tecnificación y la mediatización como las más relevantes y en lo social y cultural la

secularización, individualización la predominancia de las libertades individuales, el auge de las industrias culturales mediante la llamada homogeneización a través de la televisión y el cine.

Así, el modelo de desarrollo y la influencia que la cultura norteamericana ha tenido sobre la sociedad mexicana también es un vector en el cual el consumo de mercancías y los medios de comunicación tienen una fuerte influencia a pesar del centralismo y el proyecto nacionalista del Estado mexicano, que para este análisis contempla otras categorías como la cultura urbana, la cultura juvenil y las tensiones derivadas de la guerra fría y la agenda conservadora norteamericana, que se consolidó en los organismos internacionales, en las agencias anti droga y por último en las relaciones locales y globales aumentó la intensidad y frecuencia del tráfico de drogas debido a los cambios de la denominada guerra cultural, la expansión urbana y demográfica.

Durante la época de reconfiguración del poder político y el agotamiento del modelo de partido único hacia coaliciones partidistas y con la transición democrática en México entre los años 1997 y el año 2006, la noción de enemigo interno se ha intensificado en relación con el crimen organizado y paulatinamente con la figura del narcotráfico ante el agotamiento de la narrativa del guerrillero y comunista como enemigos punibles en el ocaso de la guerra fría como sistema relacional, especialmente en un contexto de creciente inseguridad urbana. A medida que el país enfrentaba desafíos políticos y sociales ocasionados también por la apertura económica, el narcotráfico fue conceptualizado no solo como un problema criminal, sino como una amenaza a la estabilidad del Estado y a la cohesión social. Este enfoque ha llevado a la implementación de políticas de seguridad que incluyen la militarización de la lucha contra el narcotráfico, justificando la intervención del ejército en operaciones de seguridad pública en una extensión de la securitización regional. La percepción de que el narcotráfico corrompe los valores y tradiciones de la sociedad mexicana ha reforzado esta idea, posicionándolo como un enemigo que socava la seguridad nacional y la tranquilidad pública, en un periodo marcado por un aumento en la violencia y la inseguridad.

Además, con el uso y adaptación del sistema criminal norteamericano de la figura del crimen organizado ha servido como una herramienta de control social e institucional. En este contexto, el narcotráfico se ha entrelazado con la narrativa de la seguridad nacional, donde los narcotraficantes son vistos como adversarios que amenazan no solo la integridad del

Estado, sino también la vida cotidiana de los ciudadanos. Esta percepción ha permitido a las autoridades justificar medidas extraordinarias que, aunque buscan restaurar el orden, a menudo resultan en violaciones a los derechos humanos y en un debilitamiento de las instituciones democráticas al tiempo que se desvían las miradas de otros problemas sociales y económicos, evidenciando la complejidad del fenómeno del tráfico ilegalizado de drogas y el vínculo que se ha instrumentalizado narcotráfico en la política mexicana contemporánea y su impacto en la seguridad y el control social.

En este sentido como se ha desarrollado durante las últimas tres décadas del siglo XX y las actuales del siglo XXI, el narcotráfico en México ha sido objeto de diversas narrativas que han moldeado la percepción pública y política hacia la representación del narcotraficante como un enemigo interno del Estado. Mediante la construcción de figuras míticas como: Félix Gallardo o Joaquín *El Chapo Guzmán*, estas narrativas han servido para justificar políticas de seguridad y militarización, sin embargo, se profundizó en señalar cómo la narrativa del cártel ha sido criticada por la simplificación del fenómeno, ya que las organizaciones delictivas operan de manera más compleja y no siempre se ajustan a un modelo vertical de control. Además, la cobertura mediática ha contribuido a la creación de un imaginario colectivo que asocia el narcotráfico con la violencia y la corrupción, lo que a su vez alimenta la estigmatización de comunidades enteras y perpetúa un ciclo de miedo y represión.

El análisis conceptual del narcomenudeo se centra en desentrañar las múltiples dimensiones y significados que este fenómeno adquiere en el contexto mexicano. Se aborda el narcomenudeo no solo como una actividad delictiva, sino como un constructo social que refleja las dinámicas de poder y control en la sociedad, se argumenta que el narcomenudeo es un término polisémico que denota relaciones asimétricas de poder, donde las políticas de prohibición de drogas y la criminalización de ciertos comportamientos han contribuido a la estigmatización de los involucrados en esta actividad.

También destaca la importancia de contextualizar el narcomenudeo dentro de un marco histórico y social más amplio. Se analiza cómo las políticas de cero tolerancia y la militarización de la lucha contra el crimen organizado y la inseguridad han transformado la naturaleza del narcomenudeo, llevándolo a ser percibido como un fenómeno que amenaza la

seguridad pública. Esta percepción ha llevado a la implementación de medidas represivas que, en lugar de abordar las causas estructurales del problema, han exacerbado la violencia y la inseguridad en las comunidades. Así, el narcomenudeo se convierte en un símbolo de un enemigo interno, utilizado por el Estado para justificar acciones de control social y militarización.

El análisis conceptual del narcomenudeo también implica una crítica a la narrativa oficial que rodea este fenómeno. Se argumenta que la construcción de una *narco narrativa* en los medios de comunicación y en el discurso político ha contribuido a la creación de estereotipos y mitos en torno a los consumidores y vendedores de drogas. Esta narrativa simplista no solo deshumaniza a los involucrados, sino que también oculta las complejas realidades sociales y económicas que impulsan el narcomenudeo. Por lo tanto, se aboga por un enfoque más matizado que reconozca las intersecciones entre el narcomenudeo, la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades, promoviendo así una comprensión más integral de este fenómeno social.

Como se ha mencionado en reiteradas ocasiones, la reconfiguración del poder político, especialmente desde la administración de Miguel de la Madrid, ha llevado a una transformación en las organizaciones policiales, el sistema político y de seguridad en la Ciudad de México ha experimentado cambios significativos que han impactado la dinámica del crimen organizado Este proceso ha sido descrito como un detonador que ha permitido a las estructuras de delincuencia común ejercer una autonomía relativa frente a los controles existentes, lo que ha facilitado el crecimiento del crimen organizado en la capital.

La relación entre la policía y los grupos criminales ha sido compleja y a menudo conflictiva y se puede observar en la tesis la evolución del crimen organizado y el narcomenudeo en la Ciudad de México, destacando cómo la reconfiguración del sistema político y de seguridad desde la década de 1980 ha influido en estas dinámicas. Se examinan casos emblemáticos, como el de la masacre en el Río Tula, que ilustran la complejidad del fenómeno delictivo y la relación entre la policía y los grupos criminales. En el caso del News Divine, un evento trágico que resultó en la muerte de varios jóvenes, se evidenció la falta de coordinación y la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad. Este incidente no solo puso de manifiesto la violencia inherente al narcomenudeo, sino que también reveló cómo la

policía a veces se ve atrapada en dinámicas de poder que favorecen a los grupos delictivos, lo que complica aún más la lucha contra el crimen.

En 2007, las autoridades implementaron estrategias para combatir el narcomenudeo, que incluyeron operativos policiaco-militares y reformas en el sistema penal. Sin embargo, los resultados de estas acciones han sido mixtos. A pesar de los esfuerzos por desmantelar redes de distribución de drogas, la violencia ha continuado en aumento, lo que sugiere que las medidas adoptadas no han sido suficientes para abordar las raíces del problema. La falta de un enfoque integral que incluya aspectos sociales y económicos ha sido señalada como una de las principales limitaciones de estas estrategias.

La diversificación del narcomenudeo en la Ciudad de México ha llevado a un mercado complejo y arriesgado tanto para consumidores como para vendedores. Este fenómeno se ha caracterizado por la aparición de diferentes perfiles de vendedores y a la variabilidad en la calidad de las sustancias. Como resultado, los usuarios enfrentan riesgos significativos al consumir productos que carecen de regulación y control. Además, los vendedores operan en un entorno donde la violencia y la competencia desleal son comunes, lo que agrava la situación de inseguridad en la ciudad. Ahora, en estos modelos de venta no se contempla ni la calidad ni la pureza de las sustancias, cuestión que encarece el producto. Pongamos por ejemplo, no es lo mismo distribuir cannabis de baja calidad en envoltorios de 50 o 100 pesos, en comparación con cannabis de importación o mejorada genéticamente vendida por gramo con costo de dos mil pesos aproximadamente. Tampoco es lo mismo vender cocaína por gramo o por dosis en algún barrio de Iztapalapa en comparación con un centro nocturno del sur de la ciudad.

Se desarrollaron casos aleatorios y significativos los cuales ejemplifican algunas dinámicas dentro del fenómeno del narcomenudeo como las relaciones entre algunos vendedores con autonomía relativa a grupos criminales, otro caso de violencia entre pandillas antagonistas asentadas en la ciudad en el entorno de disputa criminal ocasionada por la reconfiguración del poder criminal en la ciudad donde se enfoca en las relaciones institucionales que las autoridades tomaron con respecto al enmarcamiento de contención de la crisis y también en cómo el tránsito del término narcomenudeo quedó por instalarse en la jerga coloquial impulsada por las autoridades y la prensa.

Al respecto, se destacó el asesinato de Ricardo Valderrama, conocido como "El Valde", en 2009, un narcomenudista que fue abatido en el estacionamiento de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM por un rival en un contexto de politización de la universidad y de inseguridad urbana cuestión que fue enmarcada en un contexto de violencia escolar, lo que subraya las dinámicas de compraventa de drogas en espacio donde suelen existir vacíos de autoridad o espacios para la tolerancia de venta.

Por último, se menciona otro hecho que se enmarca en un contexto de reconfiguración criminal en la Ciudad de México, donde la lucha por el control territorial entre grupos delictivos se intensificó. Este evento reflejó la creciente violencia asociada a la competencia entre organizaciones como el Cartel de Tláhuac y La Unión Tepito. La presencia de estos grupos en áreas cercanas a instituciones educativas pone de manifiesto cómo el crimen organizado ha adaptado sus estrategias para expandir su influencia, afectando la seguridad de la comunidad universitaria.

La detención de miembros del Cartel de Tláhuac, que ocurrió en un contexto de creciente violencia, estuvo acompañada de *narco bloqueos* en diversas zonas de la ciudad, lo que evidenció la respuesta agresiva de estos grupos ante la presión de las autoridades. Estos bloqueos no solo buscaban desestabilizar las operaciones policiales, sino que también reflejaban la resistencia de las organizaciones criminales frente a la reconfiguración del poder en el ámbito de la seguridad. La interconexión entre la balacera en CU y las acciones del Cartel de Tláhuac resalta cómo la violencia y el narcomenudeo se han entrelazado en la vida cotidiana de la ciudad, generando un ciclo de inseguridad que afecta a diversos sectores de la población.

Dado el actual entorno nacional y en la Ciudad de México, el narcomenudeo como modo de explotación ilegal y narrativo seguirá en expansión y reconfiguración. Por lo que respecta al horizonte de seguridad tampoco parece que vaya a menguar su tamaño institucional ya que cuenta con una estructura administrativa, que si bien ha sido insuficiente cuenta con fiscalías especializadas locales y federales. Este aparato técnico, jurídico legal y operativo ha generado una inercia burocrática y un modo de articulación para la ejecución de programas y presupuestos mediante recursos públicos. Por lo que es redituable en términos políticos y periodísticos depositar cierto tipo de criminalidad en este rubro.

Sobre las implicaciones que el fenómeno del narcomenudeo tiene sobre los actores como vendedores y consumidores, si bien es urgente contener a los grupos generadores de violencia y mejorar los servicios de salud mental y de tratamiento de adicciones a las drogas que pudieran generar problemas graves de salud como la metanfetamina y otras drogas sintéticas, también es necesario dar soluciones diferenciadas apegadas al respeto a los derechos humanos, protocolos convenciones internacionales y con esfuerzos que ya han sido probados como las estrategias de reducción del daño o la prioridad cero o deflexión blanda. De este modo, sin necesidad de hacer cambios a las normativas tan solo con algún bando u acuerdo local la policía de la Ciudad de México podría eliminar la persecución total por cannabis o sus derivados. Sin embargo, el modelo actual parece obstinarse en seguir persiguiendo y gastando recursos por ejemplo con las revisiones y detenciones aleatorias en operativos en transporte público deteniendo a personas con pequeñas cantidades.

Ya que, como se ha argumentado, se sigue teniendo la percepción generalizada de que todo el consumo de drogas ilegales es dañino, produce daños sociales y a la persona, y se relaciona con actividades antisociales. Por lo cual se les debe detener para darles una lección y sean canalizados obligatoriamente a tratamiento, aunque en la práctica esto no se aplique. Una posible vía para la disminución de los delitos contra la salud en modalidad narcomenudeo y además mitigar a las organizaciones criminales más violentas podría ser eliminar la ilegalidad de la mercancía y el fomento al contrabando y continuar con las detenciones de alto perfil pero también minar la explotación y usufructo ilegal. Lo cual implicaría contemplar opciones regulatorias para todas las drogas y desviar este comercio clandestino hacia uno mayoritariamente lícito, mediante la disminución de los índices de impunidad corrupción y criminalidad por lo que resulta necesario identificar problemáticas, diagnosticarlas y proponer soluciones diferenciadas según el entorno, las sustancias y las condiciones contextuales.

En cuanto al panorama en materia bilateral en la coyuntura actual, no se puede soslayar que el narcotráfico, se consolidó durante los últimos cuarenta años como un punto complejo en la relación entre México y Estados Unidos y un dispositivo local de enunciación de criminalidad, relaciones políticas sociales y culturales. Con el advenimiento de la segunda administración de Donald Trump (2025-2029), habrá un enfoque de mayor presión y una

reconfiguración del modelo de seguridad al designar a las organizaciones criminales mexicanas como terroristas.

Esta orden ejecutiva justificaría la posibilidad de: incursiones militares, extracciones, uso de misiles de largo alcance o drones artillados así como altas penas de prisión, eliminación de acuerdos con fiscalías o confinamientos extremos como los que se realizan entre otras estrategias de presión. Aunado a esto, existe el actual desafío por mitigar la epidemia de defunciones relacionadas por sobredosis de analgésicos opioides y la histeria mediática y política que se ha generado entorno al fentanilo ilegal por lo que la narrativa alimentada en la prensa y en la política de que estas drogas que "matan americanos" supuestamente son provenientes de México continuará y afectarán el tipo de respuesta que el gobierno mexicano adopte así como la cobertura que se tiene de México en el extranjero.

Si bien estas presiones relacionadas con el trafico de drogas no son nuevas, como se puede observar en esta tesis, el tono agresivo y desafiante de la adminsitración Trump fortalece la narrativa securitaria de mano dura y un contexto que puede ser incierto y cambiante Así ante las consecuencias económicas, políticas y sociales que implicará una orientación más represiva, punitiva y con la presión diplomática y no es que la política anti droga norteamericana fuera laxa, pero se establecian ciertas lineas definitorias y quizá con la detención del General Cien Fuegos y el caso de la detención del Mayo Zambada no había existido una crisis de mayor como la vivida con el asesinato de Camarena por lo que se espera un nuevo escenario de incertidumbre.

En este contexto, al incluir las organizaciones criminales mexicanas dedicadas al trafico de drogas como terrosistas se vigoriza y expande el modelo de estado de excepción y la conexión entre la doctrina de combate al terrorismo derivada de los atques terrosistas del 11 de septiembre de 2001. Con el control de drogas ilegalizadas bajo el régimen internacional de prohibición, la inseguridad urbana y las agendas políticas mediáticas de corte represivo probablemente robustecerá el modelo de prohibición, por ejemplo, con las drogas sintéticas y grupos criminales, en comparación con la laxitud local ante las inflexiones de regulación local de cannabis y otras drogas en la unión americana. Incluso Trump ha señalado su visto

bueno al modelo de venta regulada de cannabis recreativa y médica donde casi 40 estados de la Unión Americana cuentan con algun modelo de venta tolerada.

Ante ello México ha incluido la prohibición de la elaboración de fentanilo, cuestión que complica el acceso a los medicamentos analgésicos para enfermedades terminales o cuidados paliativos. Esta medida ha mostrado una baja eficacia respecto al acceso a medicamentos análogos o derivación al mercado ilícito. Por ejemplo, con la prohibición de la pseudoefedrina durante el gobierno de Felipe Calderón, no se detuvo la elaboración de metanfetaminas en el territorio nacional, por el contrario más organizaciones cada vez más violentas se apropiaron de la producción trasiego y venta al mayoreo y menudeo, como la facción de los Arellano Félix, la Familia Michoacana, los Caballeros Templarios, y el Cartel Jalisco Nueva Generación y el acceso a esta droga se volvió de uso corriente entre usuarios, mientras que la prohibición para uso industrial de los precursores como la pseudoefedrina cambió la producción nacional de los medicamentos para alergias, asmáticos y otros problemas respiratorios, por lo que algunos de estos medicamentos bajaron su eficacia.

Por último, señalaré algunas de las limitaciones del trabajo. La primera reside en que al pensarse desde una historia social se ofrecen escenarios de carácter estructural coyuntural, por lo que algunos aspectos particulares como cronologías sobre grupos criminales están ausentes. Seguido que, esta tesis no es capaz de ofrecer datos a nivel de otras entidades federativas. Además, la fuerte orientación del enfoque hacia la relación binacional entre México y Estados Unidos tampoco puede presentar evidencia a nivel regional latinoamericano. Por su parte, también hay ausencia de datos estadísticos longitudinales sobre la incidencia del narcomenudeo lo cual dificulta la evaluación del fenómeno en términos numéricos. Sin embargo, se establecen pautas y generalidades para poder profundizar en tres temas: en particular las relaciones existentes entre el marco normativo internacional y local sobre la prohibición de drogas, aspectos políticos y sociales coyunturales respecto a la economía, la sociedad, así como la producción de textos de sentido en los campos de la cultura y la política.

Durante la escritura de esta tesis 2021-2025 también ocurrieron eventos relevantes que por su significancia son nombrados respecto a la reconfiguración de los mercados locales

de drogas en la Ciudad de México, pero que por cuestiones de la temporalidad establecida en la tesis quedaron fuera. De acuerdo con reportes de policiacos y otros publicados por la prensa, concernientes a la narco narrativa y respecto al macro mercado dominante señalaron que grupos pertenecientes a la llamada facción de los hijos de Joaquín Guzmán Loera "Los Chapitos" intentaron instalarse en el sur y norte de la Ciudad de México, por su parte grupos antagonistas del occidente el Cártel Jalisco Nueva Generación también realizaron incursiones en la Ciudad de México, incluso se señalaron como responsables del atentado contra el jefe de seguridad pública de la ciudad Omar García en junio de 2020 un hecho de violencia espectacular ampliamente cubierto por la prensa y que evidenció fallas en las estructuras de seguridad de la ciudad.

Por su parte a nivel de crimen local el llamado grupo criminal organizado Cartel de la Unión Tepito tuvo mermas mediante la estrategia del descabezamiento o *kingpin strategy*, lo cual provocó una supuesta fragmentación de la supuesta operación vertical del grupo criminal por el modelo de pequeñas células de franquicia criminal lo cual aumentó la violencia y homicidios por rivalidad delincuencial, así como el tránsito a otro tipo de renta criminal como el cobro de piso extorsión y despojo por lo que la venta de drogas al menudeo no es el único delito al cual este grupo criminal.

El marco normativo actual de los delitos contra la salud ha probado tener baja eficacia en eliminar la venta clandestina de drogas, por el contrario el valor que la prohibición confiere a las sustancias aumenta su rentabilidad en el contexto ilegal, por lo mismo, también fomenta que grupos criminales tomen ventaja y quieran participar de este negocio en ocasiones mediante cohersión y uso de la violencia. Además, no cumple su principal objetivo que es proteger la salud pública, ya que, sustancias de impacto como la metanfetamina han sustituido y son utilizadas como adulterantes en el mercado de estimulantes fumados e inhalados, cuestión que parece no tener eco o impacto en las campañas de prevención o en los modelos de tratamiento. Por el contrario, se ha continuado un enfoque punitivo y alienado a la agenda nortemericana con campañas agresivas de terreno y en prensa sobre la prohibición de los dispositivos electrónicos o vapeadores así como el uso y la explotación del fentanilo como retórica negativa.

Y aunque algunas instituciones como el Instituto para Prevenir las Adicciones de la Ciudad de México, La Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, antes CONADIC,

han sugerido un nuevo enfoque como aceptar lenguaje y términos de referencia apegados a los derechos humanos o enfoques de reducción del daño, la política de largo alcance federal continúa con la criminalización y estigmatización desde la narrativa insitucional en las campañas masivas de salud, al menos eso se ha mostrado con las dos últimas campañas: *con las drogas no hay final feliz* en el gobierno de Obrador y la que se está implementando en el corto lapso de la administración de Claudia Sheinbaum *el fentanilo a la primera te mata.*

Lejos de reproducir las narrativas alarmistas es necesario señalar los posibles riesgos y tomar acciones respecto al posible uso que el fentanilo tendra sobre las personas que usan drogas en particular las que se inyectan o utilizan drogas de sintesis, ya que los mensajes esterotipados con verdades a medias y basados en el miedo y la estigmatización tambien han probado tener baja eficacia.

Bibliografía

AP EFE (20 de enero de 1982). Misteriosa matanza en México. *El País*. https://elpais.com/diario/1982/01/21/internacional/380415617_850215.html

Aguayo, S. (1990). "Los usos, abusos y retos de la seguridad nacional (comp.), En *En busca de la seguridad perdida. Aproximaciones a la seguridad nacional mexicana* (107-145). Siglo XXI.

Aguayo, S. (2001). *La Charola: Una Historia de los servicios de inteligencia en México*. Sextil.

Aguiar, José. (2012). Policing New Illegalities Piracy, Raids, and Madrinas, en Wil G. Pansters (ed.), *Violence, Coercion, and State-Making in Twentieth Century Mexico: The Other Half of the Centaur* (159-181). Stanford University Press.

Aguilar, R., & Castañeda, J. (2007). *La diferencia. Radiografía de un sexenio*. Grijalbo.

Aguilar, R., & Castañeda, J. (2009). *El narco: la guerra perdida*. Punto de lectura.

Agustín, J. (1996). *La contracultura en México. La historia y el significado de los rebeldes sin causa, los jipitecas, los punks y las bandas*. Mondadori.

Akin, J. (1987). *Financing health services in developing countries: An agenda reform*. World Bank.

ALDF. (17 de septiembre de 1999). Diario de Debates de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. *Asamblea Legislativa del Distrito Federal*. http://aldf.gob.mx/archivo-c6a92360d693bf411bdb0909951c2b30.pdf

Aldrige A., & Levine, K. (2003). La selección de muestras *en Topografía del mundo social. Teoría y práctica de la investigación mediante encuestas* (87-112). Gedisa.

Altheide, D. (1987). Ethnographic Content Analysis. *Qualitative Sociology*, (10) 1, pp. 65-77.

---------(2008). Ethnographic Content Analysis. En Given. L (ed) *The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods*. SAGE. p 287-288.

Alvarado-Mendoza, A. (2016). Crimen organizado en una ciudad de América Latina: la Ciudad de México. *URVIO. Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad.* N.° 19, diciembre de 2016, pp. 129-145

-------- (2019). Organizaciones criminales en América Latina: una discusión conceptual y un marco comparativo para su reinterpretación. *Revista Brasileira de Sociologia*, 7(17), 11-32.

Anaya H. y Contró A. (2016) Reducción de riesgos y daños. Concepto, historia y su aplicación en México, *Revista Redes*, Distrito Federal, México, FUPAC, pág 44-47.

Anaya, H. J. (2019). Cambio de régimen y política de drogas en México. *Journal of Multidisciplinary Studies in Human Rights and Science, 1*(1-4). https://doi.org/10.5281/zenodo.7248211

Anderson, P. (2014). *Imperium et Consilium La política exterior norteamericana y sus teóricos*. Akal.

Andreas, P., & Nadelman, E. (2006). *Policing the globe. Criminalization and Crime Control in International Relations*. Oxford University Press.

Aponte, D. (3 de junio de 1997) Investiga EU si se usan helicópteros Huey contra el EPR, *La Jornada*, México.

Aranda, J. (23 de enero de 1997). Tengan cuidado en México, advierte el gobierno británico a sus ciudadanos. *La Jornada en línea* https://www.jornada.com.mx/1997/01/23/ingleses.html

Aranda, J., & Aponte, D. (9 junio 1999). Niegan que existan nexos entre Stanley y Gutiérrez Rebollo. *La Jornada*. https://www.jornada.com.mx/1999/06/09/hallan.html

Araiza, N., & Morales, N. (2013). "Pues nací, pues nací. Testimonio de Ricardo Valderrama", en B. Mayer Foulkes y F. Pérez (eds.), *Tráficos,* 17 (29-66). Teoría Crítica, volumen 2.

Aronoff, M. J. (2000). The "Americanization" of Israeli Politics: Political and Cultural Change. *Israel Studies*, *5*(1), 92–127.

Aróstegui, J. (1995). *La investigación histórica: Teoría y método*. Crítica, Grijalbo Mondadori.

Arredondo, J., Gaines, T., Manian, S., Vilalta, C., Bañuelos, A., Strathdee, S., & Beletsky, L. (2018). The Law on The Streets: Evaluating the Impact of Mexico's Drug Decriminalization Reform on Drug Possession Arrests in Tijuana, Mexico. *International Journal of Drug Policy*, 54, 1-8.

Asif, M. (2022). *Handbook of Energy and Environmental Security*. Academic Press.

Astorga, L. (1999). Cocaine in Mexico A prelude to "los Narcos" en *Gootenberg, Cocaine Global Histories* (176-182). Routledge.

---------(2004). *Mitología del narcotraficante en México*. Plaza y Valdés.

--------- (2005). Corridos de traficantes y censura. *Región y sociedad*, 17(32). 145-165

---------(2007). *Seguridad Traficantes y Militares*. Tusquets.

---------(2012). *El Siglo de las Drogas*. Grijalbo.

--------(2015). *¿Qué querían que hiciera? Inseguridad y delincuencia organizada en el gobierno de Felipe Calderón*. Grijalbo.

--------(2023). *¿Sin un solo disparo? Inseguridad y delincuencia organizada en el gobierno de Enrique Peña*. Instituto de Investigaciones Sociales. Universidad Nacional Autónoma de México.

Azar, E. (2011). *Temas de Narcomenudeo*. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal: Consejo de la Judicatura del Distrito Federal.

Aznáres, J. (21 de febrero de 2000). Un grupo de 'narcos' mexicanos 'vende' su zona para dedicarse a cobrar peajes. *El País*. https://elpais.com/diario/2000/02/22/internacional/951174012_850215.html

-------- (24 de mayo de 2003). México extradita a EE. UU. al presunto 'capo' de un cartel de la droga. *El País*, 23 de mayo 2003. https://elpais.com/diario/2001/05/24/internacional/990655215_850215.html

Bacca, A., Broudeau, J., & Zamudio, C. (2015). *Encuentros con la ley. Relaciones entre jóvenes usuarios de drogas ilícitas y policías en Ciudad de México*. Cuadernos CUPIHD, Colectivo por una polítca integral hacia las drogas. 3-38.

Bagley, B. M. (1988). US Foreign Policy and the War on Drugs: Analysis of a Policy Failure. *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, *30*(2/3), 189–212.

-------- (1993). Los mitos de la militarización de las fuerzas armadas en la guerra contra las drogas. En Smith Peter, *El combate a las drogas en América*. Fondo de Cultura Económica.

Balz, J. (27 noviembre 1990). Bush visits Salinas in Mexico. *The Washington Post* https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1990/11/27/bush-visits-salinas-in-mexico/d4aee379-467e-4704-9c88-81a4e15c8fc8/

Baker, E., y Roberts, J. (2005). Globalization and the new punitiveness en Pratt et al. *The New Punitiveness* (121-138). SAGE.

Barajas, G. (1997). Comités de Solidaridad en México. Surgimiento y evolución de la estructura organizativa promovida a partir del Pronasol. *Estudios Sociológicos*, 15(45), 741-771.

Baylis, J., & Smith, S. (2005). *The Globalization of world politics*. Oxford University Press.

Beck, U. (1997). *¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización*. Paidós.

Bellinghausen, H. (20 de mayo 2000). Hostilidad y prepotencia, signos de la PFP en Chiapas. *La Jornada*. https://www.jornada.com.mx/2000/05/21/pol1.html

Benítez, R. (2010). México: Seguridad nacional, defensa y nuevos desafíos en el siglo XXI en Benítez (coord.). *Seguridad y defensa en América del Norte: Nuevos dilemas geopolíticos* (153-205). Woodrow Wilson Center.

Berdal, M., & Serrano, M. (2006). Integration and Security in North America: Do Good Neighbors Need Good Fences? *International Journal*, *61*(3), 611–632.

--------- (2002). *Transnational Organized Crime and International Security: Business as Usual?* Boulder, USA: Lynne Rienner Publishers.

Berelson, B. (1952). *Content Analysis in Communication Research. Michigan*: Free Press, Glencoe.

Bernard, R. (2004). *Research methods in anthropology: qualitative and quantitative approaches.* AltaMira Press.

Billboard. (2024). Top Latin Albums. Jefe de Jefes. https://www.billboard.com/charts/latin-albums/1997-07-25/

Bloch, M. (2000). *Apología para la historia o el oficio de historiador*. Fondo de Cultura Económica.

Bolaños, A. (15 febrero de 2007). Expropian dos predios de la colonia Morelos. *La Jornada*. https://www.jornada.com.mx/2007/02/15/index.php?section=capital&article=043n1cap

Bolaños, C. (28 de octubre de 2010). Víctimas de Tepito tenían antecedentes: Mancera, *El Universal*.

Bourgois, P. (2003). *In Search of Respect: Selling Crack in El Barrio*. Cambridge University Press.

Boyer, J.F. (2001). *La guerra perdida contra las drogas*. Grijalbo.

Brewer, J., & Hunter, A. (1989). *Multimethod research: A synthesis of styles*. SAGE.

Briggs, A., & Burke, P. (2002). *De Gutenberg a internet: una historia social de los medios de comunicación*. Taurus.

Britto, L. (1990). Creación exógena de subculturas de consumo: «cultura para las masas» en El imperio contracultural del Rock a la postmodernidad. *Nueva Sociedad*. 15-19.

Brownlee, J. (2009). 'Portents of Pluralism: How Hybrid Regimes Affect Democratic Transitions'. *American Journal of Political Science*, *53*(3), 515–32.

Brunsson, N., & Olsen, J. P. (1993). *Organizationals forms: Can we choose them?* Routledge.

Buzan, B., Wæver, O., & Wilde, J. (1998). *A New Framework for Analysis*. Lynne Rienner Pub.

Byram-Lake, G. (5 de octubre de 1984). Fourteen murdered men haunt El Jefe - police corruption in Mexico City. *National Review*. https://web.archive.org/web/20080922031815/http://findarticles.com/p/articles/mi_m1282/is_v36/ai_3465618

Cajas, J. (2004). *El truquito y la maroma, cocaína, traquetos y pistolocos en Nueva York. Una antropología de la incertidumbre y lo prohibido*. Miguel Ángel Porrúa, Conaculta-Instituto Nacional de Antropología e Historia, Cámara de Diputados.

--------- (2009). *Los desviados. Cartografía urbana y criminalización de la vida cotidiana*. Universidad Autónoma de Querétaro- Miguel Ángel Porrúa.

Camacho, M. (1977). Los Nudos Históricos Del Sistema Político Mexicano. *Foro Internacional*, *17*(68), 587–651.

Camacho, Z. (20 noviembre de 2010). Focos rojos en Sedena ante posible intervención de EU. *Contralínea.* https://contralinea.com.mx/portada/focos-rojos-en-sedena-ante-posible-intervencion-de-eu/

Cámara de Diputados. (2006). Informes presidenciales. Ernesto Zedillo Ponce de León. Centro de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis. Cámara de Diputados LX Legislatura.

--------- (2008). *Iniciativa Mérida Compendio*. Centro de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis. Subdirección de Política Exterior. Cámara de Diputados LX Legislatura.

Cameras, C. (2006). Desarrollo de políticas públicas en el combate al narcomenudeo dentro de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. *Revista Mexicana de Justicia*, Séxta época (15), 117-145.

Campos, I. (2017). A Diplomatic Failure: The Mexican Role in the Demise of the 1940 Reglamento Federal de Toxicomanías, Third *World Quarterly*, 39(3), 232-247.

Caporal, J. (2012). *El Cártel de Neza*. Grijalbo.

Carroll, R. (10 de septiembre de 2010). Hillary Clinton: Mexican drugs war is Colombia-style insurgency. *The Guardian*.

https://www.theguardian.com/world/2010/sep/09/hillary-clinton- mexican-drug-war-insurgency

Carvente, V. H. (2014). *Reestructuraciones de órganos y funciones de combate al tráfico de drogas: Procuraduría General de la República (1952-2012).* Instituto Nacional de Administración Pública, A. C.

Casanova, J. (2003). *La historia social y los historiadores. ¿Cenicienta o princesa*? Crítica.

Casey, R. (2013). Row Over Drug War Follows Mexico's Ex-Chief to Harvard. *Wall Street Journal*. https://www.wsj.com/articles/SB10001424127887323301104578257840528061604

Castillo, G., & Gómez, C. (24 de agosto de 2002). Detienen a otros 2 presuntos miembros del cártel de Neza. *La Jornada* https://www.jornada.com.mx/2002/08/24/042n1soc.php?printver=1

Castillo, G. (2005). Narcomenudeo, amenaza mayor que la de grandes capos a la seguridad nacional. *La Jornada*. https://www.jornada.com.mx/2005/10/03/index.php?section=politica&article=023n1pol

Castillo, G., & Zuñiga, J. (4 mayo 2001). El secuestro, en aumento; crece el número de bandas. *La Jornada*. https://www.jornada.com.mx/2001/06/04/012n1pol.html

CDHCDM, (2008). *Informe especial sobre violaciones a los derechos humanos en el caso New's Divine*. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Chabat, J. (2006). Mexico: The Security Challenge. *Documentos de trabajo CIDE*. *140*, 2-24.

Chartier, R. (1996). *El mundo como representación.* Gedisa.

Chomczyński, P., Guy, R., & Cortina, R. (2019). Front Business–Back Business: The Social Anatomy of Small-Time Drug Dealing in a Mexico City Neighborhood. *Journal of Contemporary Ethnography*, (1), 1-23.

-------- (2022). Weed Central: Cannabis Specialists and Polydrug Vendors in Mexico City. *Journal of Contemporary Ethnography*. 1-26.

CNDH. (2001). *Informe especial sobre las quejas en materia de desapariciones forzadas ocurridas en la década de los 70 y principios de los 80.* Comisión Nacional de los Derechos Humanos. https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2001_Desapariciones70y80.pdf

Coello. J. (2021). *El Fiscal de Hierro. Memorias*. Planeta.

Cohen, P. (1972). "Subcultural Conflict and Working-Class Community" in S. Hall, D. Hobson, A Lowe, and P. Willis (Eds.) *Culture, Media, Language*, Hutchinson.

Collins, J. (2012). *The International Drug Control System. Governing the Global Drug Wars*. The London School of Economics and Political Science.

--------- (2012). Why We Make War on Some Drugs but not on Others. En Collins, J. *Governing the Global Drug Wars* (17-25). The London School of Economics and Political Science.

--------- (2014). *Ending the drug wars*. London School of Economics and Political Science.

CONADIC. (1998). *Encuesta Nacional de Adicciones, 1998*. Consejo. Nacional Contra las Adicciones. Salud Pública de México, Instituto Nacional de Salud Pública. *45*(1), 16-25.

Concha, M. (19 de junio de 1999). El candidato y las ratas, *La Jornada.* https://www.jornada.com.mx/1999/06/19/concha.html

Contreras, M. (2012). *Marco jurídico de la delincuencia organizada en México. Una reflexión en el contexto global*. Universidad Veracruzana.

Coria, J., Fernandes, C., & Saint-Dizier, E. (1998). El agua y la sed un cine que vive y se deja morir / l'eau et la soif: un cinéma qui vit et se laisse mourir. *Cinémas d'Amérique Latine*, *6*, 46–50.

Correa-Cabrera, G. (2017). *Los Zetas Inc*. University of Texas Press.

Courtwright, D. (2002). *Las Drogas y la formación del mundo moderno. Breve historia de las sustancias adictivas*. Paidos. 245- 261.

Covarrubias-Velasco, A. (2013). La política exterior de Calderón: objetivos y acciones. *Foro Internacional*, LIII (3-4), 455-482.

Craig, R. (1978). La Campaña Permanente: Mexico's Antidrug Campaign. Journal of *Interamerican Studies and World Affairs*, *20*(2),107-131.

Creswell, J. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE.

Cruz, A., & Servín, M. (30 de octubre de 2010). Operan al menos diez bandas delictivas en Tepito: PGJDF. *La Jornada*. https://www.jornada.com.mx/2010/10/30/capital/027n1cap

Davenport-Haines, R. (2001). *La búsqueda del olvido. Historia global de las drogas 1500-2000*. Turner-FCE.

Dávila, I. (21 de abril de 2003). Formal prisión a 41 policías mexiquenses ligados con narcos. *La Jornada*. https://www.jornada.com.mx/2003/04/22/034n2est.php?printver=0https://www.jornada.com.mx/2003/04/22/034n2est.php?printver=0

Davis, D. (2013). Zero-Tolerance Policing, Stealth Real Estate Development, and the Transformation of Public Space: Evidence from Mexico City. *Latin American Perspectives*, *40*(2), 53-76.

Davis, D. E., & Reyes, Ó. L. (2007). El factor Giuliani: delincuenda, la "cero tolerancia" en el trabajo policiaco y la transformación de la esfera pública en el centro de la ciudad de México. *Estudios Sociológicos*, 25(75), 639–681.

Gamboa, J., & Revah, J. A. (1990). Reconstrucción y política urbana en la Ciudad de México. *Foro Internacional*, 30(4), 677–694. https://forointernacional.colmex.mx/index.php/fi/article/view/1222

DEA. (20 May 2018.) The Drug Enforcement Administration (DEA) 1985-1990 en DEA Our History. https://www.dea.gov/sites/default/files/2021-04/1985-1990_p_58-67.pdf

De Mauleón, H. (13 de noviembre de 2018). La Barbie fue el creador de La Unión Tepito. *El Universal.* https://www.eluniversal.com.mx/columna/hector-de-mauleon/nacion/la-barbie-fue-el-creador-de-la-union-tepito/.

Del Villar, S. (1998). El nudo gordiano. *Nexos*. https://www.nexos.com.mx/?p=5139

Denzin, N. (2008). Evolution of Qualitative Research. En L. Given (Ed.), *The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods* (311-318). SAGE.

Denzin, N., & Lincoln, Y. S. (1994). "Introduction: Entering the Field of Qualitative Research" en Denzin, N. K., Lincoln (eds.) *Handbook of Qualitative Research* (1-17). SAGE.

Derridá, J. (1997). *Fuerza de ley. El "fundamento místico de la autoridad".* Tecnos.

Diario Oficial de la Federación. (17 de febrero de 1940). Reglamento Federal de Toxicomanías del Departamento de Salubridad Pública, *Diario Oficial de la Federación,* 5-6. https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4510267&fecha=17/02/1940&cod_diario=191983

--------- (5 de septiembre 1990). DECRETO de promulgación de la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas adoptada en Viena, Austria el 20 de diciembre de 1988. *Diario Oficial de la Federación*. Secretaría de Gobernación.

--------- (29 de enero de 1992). DECRETO por el que se aprueba el Programa Especial denominado Programa Nacional para el Control de Drogas 1989-1994. Diario Oficial de la Federación. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4675731&fecha=05/09/1990#gsc.tab=0

--------- (4 de septiembre de 1995). Mensaje al H. Congreso de la Unión del C. Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, con motivo de la presentación de su Primer Informe de Gobierno. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4880581&fecha=04/09/1995#gsc.tab=0

--------- (24 de julio de 2003). ACUERDO número A/070/03 del Procurador General de la República, por el que se establecen criterios de coordinación, entre las delegaciones en las entidades federativas con las unidades administrativas de la institución que se indican. *Diario Oficial de la Federación*. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=693241&fecha=24/07/2003#gsc.tab=0

--------- (31 de enero de 2005). Ley de Seguridad Nacional. *Diario Oficial de la Federación*.

--------- (20 de agosto de 2009). DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales. México: Primera Sección. Jueves 20 de agosto de 2009. Secretaría de Gobernación.

Díaz-Román, M. (2022). Inseguridad y narcomenudeo en la Ciudad de México: distribución diferenciada correlativos asociados. *Sociológica México*, Nueva época, año *37*(105), 207-240.

DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *American Sociological Review*, *48*(2), 147–160. https://doi.org/10.2307/2095101

--------- (1999). Introducción, en Paul DiMaggio y Walter W. Powell (comps.), *El nuevo institucionalismo en el análisis organizacional,* Fondo de Cultura Económica.

Easterly, W., Fiess, N., Lederman, D., Loayza, N. V., & Meller, P. (2003). NAFTA and Convergence in North America: High Expectations, Big Events, Little Time, *Economía, 4*(1), 1–53.

El Economista. (18 de junio de 2009). Cae presunto responsable del asesinato en CU. *El Economista*. https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cae-presunto-responsable-del-asesinato-en-CU-20090618-0114.html

El Universal. (27 de enero de 2005). Carta del embajador Antonio O. Garza. *El Universal.* https://archivo.eluniversal.com.mx/primera/19630.html

El Universal. (26 de junio de 2008). *Imágenes sin edición del operativo en News Divine* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=4XdflYa1RYY

El Universal. (27 de febrero de 2018). Lo que sabemos de la balacera en ciudad universitaria. *El Universal Online*. https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/lo-que-sabemos-de-la-balacera-en-ciudad-universitaria/

Emmerich, N. (2015). *Geopolítica del narcotráfico en América Latina*. Instituto de Administración Pública del Estado de México.

Enciso, F. (2009). Régimen global de prohibición, actores criminalizados y la cultura del narcotráfico en México durante la década de 1970. *Foro Internacional*, XLIX (3), 595-637.

-------- (2010). Los fracasos del chantaje: régimen de prohibición de drogas y narcotráfico", en Mónica Serrano y Arturo Alvarado (eds.), *Seguridad Nacional y Seguridad Internacional: Los grandes problemas de México* (62-104). El Colegio de México.

--------(2015). *Nuestra historia narcótica: pasajes para (re) legalizar las drogas en México.* Debate.

Escalante, F. (2011). *Homicidios 2008–2009 La muerte tiene homicidios: Una medición*. Nexos.

Escohotado, A. (2002). *La herencia de una rebelión abortada. La nueva ley internacional, en Historia General de las Drogas* (885-907). Espasa.

Espino-Sánchez, G. (2011). La transformación de la comunicación política en las campañas presidenciales de México. *Convergencia. Revista de Ciencias Sociales*, *18*(56), 59-86.

Espinosa, J. (2 febrero 1998). Policías mexicanos protegen al mayor secuestrador del país. *El Mundo.* https://www.elmundo.es/elmundo/1998/febrero/02/internacional/mexico.html

Esquivel, G., Lederman, D., Messmacher, M., & Villoro, R. (2002). *Why NAFTA did not reach the south?* (1-34). World Bank Report.

Esquivel, J. (2014). *La CIA, Camarena y Caro Quintero. La historia secreta*. Grijalbo.

Fabbrini, S. (1994). Personalization as Americanization?: The Rise and Fall of Leader-Dominated Governmental Strategies in Western Europe in the Eighties. *American Studies International, 32*(2), 51–65.

Fazio, C. (1996). *El tercer vínculo. De la teoría del caos a la teoría de la militarización*, Joaquín Mortiz.

---------(2013). El caso Stanley y el Golpismo mediático en Terrorismo Mediático. En *La construcción social del miedo en México* (39-47). Debate.

Fernández, J. (1994). *La Trama negra: de las redes del narcotráfico a la despenalización de la droga*. Rayuela Editores.

-------- (1999) *Narcotráfico y Poder*. Rayuela Editores.

---------(2001). *El otro poder. Las redes del narcotráfico, la política y la violencia en México*. Aguilar.

-------- (2012). *La batalla por México. De Enrique Camarena al Chapo Guzmán*. Taurus.

Fernández, E. (9 de junio 2016). El PRI perdió por la iniciativa de matrimonio homosexual: Labastida. *El Heraldo de Chihuana* on line. https://oem.com.mx/elheraldodechihuahua/mexico/el-pri-perdio-por-la-iniciativa-de-matrimonio-homosexual-labastida-14454380

Fernández, J., & Salazar, A. (2008). *El enemigo en casa Drogas y Narcomenudeo en México*. Taurus.

Flores, C. (2013). *Historias de polvo y sangre. Génesis y evolución del tráfico de drogas en el Estado de Tamaulipas*. Publicaciones de la Casa Chata.

Flores, M. (2013). *"La alternativa mexicana al marco internacional de prohibición de drogas durante el cardenismo*", Tesis de licenciatura, El Colegio de México.

Fondevilla, G. (2009). *Madrinas. Informantes parapolicías. La colaboración ilegal con el trabajo policial en México*. Documentos de trabajo. Centro de Investigación y Docencia Económicas.

Fontana, A., & Frey, J. (2012). La entrevista. De una posición neutral al compromiso político, en Denzin, N. & Lincoln (Coords.), *Manual de Investigación Cualitativa*. Vol. VI (138-202). Gedisa.

Fontana, J. (2002). *La historia de los hombres: en el siglo XX*. Crítica.

Forbes. (2013). Joaquín Guzmán Loera. *Forbes* https://www.forbes.com/profile/joaquin-guzman-loera/?sh=77c4d5336778

Foucault, M. (1988). Nietzsche, la genealogía y la historia. Editorial Pre-Textos, Ediciones La piqueta.

---------(2006). *Seguridad, territorio, población. Curso en el Collège de France (1977-1978)*. Fondo de Cultura Económica.

Freije, V. (2015). Exposing Scandals, Guarding Secrets: Manuel Buendía, Columnismo, and the Unraveling of One-Party Rule in Mexico, 1965-1984. *The Americas*, *72*(3), 377–409.

Fuentes, L. (2019). *Fundamentación histórico-metodológica para el estudio del ciberacoso en México, 1999-2017*. Tesis de maestría, Instituto Politécnico Nacional.

Gair, C. (2007). *The American Counterculture*. Edinburgh University Press.

Gallardo, F. (2001). *Always Near, Always Far: The Armed Forces in Mexico*. Global Exchange.

Gálvez, E. (13 de abril de 2007). Detuvo la SSP-DF a 24 narcomenudistas durante operativo sorpresa en Tepito, ayer, *La Jornada*, https://www.jornada.com.mx/2007/04/13/index.php?section=capital&article=037n1cap.

García, S. (2005). *Delincuencia organizada. Antecedentes y regulación penal en México*, 4a. ed., UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas Porrúa.

García, J. (2012) Disidencia Psicoactiva. Eterno Femenino.

Gascón, V. (28 de noviembre de 2002). Aumentan jóvenes en reclusorios. *El Universal.*

Geertz, C. (2003). *La interpretación de las culturas*. Gedisa.

Girola, L. (2011). Historicidad y temporalidad de los conceptos sociológicos. *Sociología* (73), 13-46.

Given, L. (2008). Ethnography En Given. L (ed). *The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods* (288-293). SAGE.

Gómez, C. (2015). *Sistema político y formas de gobierno*. Universidad Autónoma de Nuevo León.

González, M. (2016). Crecimiento socioeconómico, estabilidad macroeconómica y política económica bajo los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón. El Cotidiano, (195), 53-62.

González, S. (2019). *60 Años de rock mexicano Vol. II (1980-1989).* Autopublicado.

Gootenberg, P. (2008). A Guide to the Historiography of Cocaines. En *Andean Cocaine the Making of a Global Drug* (377-384). The University of North Carolina Press.

-------- (2012). Cocaine's 'Blowback' North: A Commodity Chain Pre-History of the Mexican Drug Crisis. En Collins, *Governing the Global Drug Wars.* London School of Economics and Political Science, pp 37-42.

Gootenberg, P., & Campos I. (2015). Toward a New Drug History of Latin America: A Research Frontier at the Center of Debates. *Hispanic American Historical Review 95*(1), 1-35.

Grillo, I. (2009, 26 Agosto). *New drug law may set an example*. Time. https://time.com/archive/6947761/mexicos-new-drug-law-may-set-an-example/

Guerrero, A. (2014). *Evaluación preliminar de la implementación de las políticas para combatir el narcomenudeo en México 2007-2012*. Centro de Investigación y Docencia Económica Región Centro.

Hall, S., & Jefferson, T. (2006) 'Once More Around and Through Subcultures' En S. Hall & T. Jefferson (Eds.), *Resistance Through Rituals: Youth Subcultures in Post-war Britain*. Routledge.

Hallin, D., & Mancini, P. (2004). Americanization, Globalization, and Secularization: Understanding the Convergence of Media Systems and Political Communication. In

F. Esser & B. Pfetsch (Eds.), *Comparing Political Communication: Theories, Cases, and Challenges* (Communication, Society and Politics, pp. 25-44). Cambridge University Press.

Hart, C., Csete, J., & Habibi, D. (2014). *Methamphetamine: Fact vs. Fiction and lessons from the crack hysteria*. Open Society Foundation.

Herlinghaus, H. (2013). *Narcoepics. A global aesthetics of sobriety*. Bloomsbury.

Hernández, B. (17 de septiembre 2022). La violencia desenfrenada: la matanza del río Tula. *La Crónica*. https://www.cronica.com.mx/nacional/violencia-desenfrenada-matanza-rio-tula.html

Hernández, J., & Zamudio, C. (2009). *La ley contra el narcomenudeo: una apuesta dudosa. Serie Reformas legislativas en materia de drogas*. Washington Office on Latin America, Transnational Institute.

HIV/AIDS Policy Law Review. (2009). Mexico decriminalizes small-scale drug possession. *HIV/AIDS Policy & Law Review, 14*(2), 23-24. PMID: 20225507.

Hobsbawm, E. (1995). *Historia del Siglo XX. Historia del Mundo Contemporáneo*. Crítica.

--------- (1998). De la historia social a la historia de la sociedad. En *Sobre la Historia* (82-119). Crítica/Grijalbo Mondadori.

--------- (2012). *Entrevista sobre el siglo XXI. (Pequeño mundo global). Al cuidado de Antonio Polito*. Crítica.

--------- (2013). *Un tiempo de rupturas. Sociedad y cultura en el siglo XX*. Crítica.

Hofmann, A. (1991). *LSD Cómo descubrí el ácido y qué pasó después en el mundo*. Gedisa.

Hurrell, A. (1998). Seguridad y violencia en América Latina: un análisis conceptual. *Foro internacional*. Vol. XXXVIII, *1*(151), 19-36.

Ibarra, F. y Ravelo, A. (2022). *El delito de posesión simple en México: castigando sin proteger*. México Unido Contra la Delincuencia.

Iber, P. (2013) Managing Mexico's Cold War: Vicente Lombardo Toledano and the Uses of Political Intelligence, *Journal of Iberian and Latin American Research*, *19*(1), 11-19.

Igartúa, J. J. (2006). El análisis de contenido. En J. J. Igartúa, Pero Sanz, *Métodos cuantitativos en comunicación* (175,203). Bosch.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2020). *Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2019*. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

--------- (2021). Estadísticas a propósito del día internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico de drogas (26 de junio). Comunicado de Prensa 334/22 23 de junio 2022. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Instituto Nacional de Ciencias Penales, (2011). *Farmacodependencia, narcomenudeo y narcotráfico*. Instituto Nacional de Ciencias Penales, Procuraduría General de la República.

Instituto Nacional de Salud Pública. (2008). *Encuesta Nacional de Adicciones, 2008. Consejo. Nacional Contra las Adicciones*. Salud Pública de México, Instituto Nacional de Salud Pública.

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud. (2014). *Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014: Reporte de Drogas* en Villatoro-Velázquez, J., Oliva Robles, N., Fregoso Ito, D., Bustos Gamiño, M., Mujica Salazar, A., Martín del Campo Sánchez, R., Nanni Alvarado, R., Medina-Mora, M.E.

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Instituto Nacional de Salud Pública, Comisión Nacional Contra las Adicciones, Secretaría de Salud. (2017). *Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-17*: Reporte de Drogas, 29-44.

Isidro, L. (16 de diciembre 2010) "Muere Arturo Beltrán Leyva en enfrentamiento con militares" *Milenio*.

Jelsma, M. (2003). *Las drogas en el sistema de la ONU: la historia no escrita de la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS) sobre el problema mundial de las drogas* (1-26). Transnational Institute TNI.

Jernigan, D., & Dorfman, L. (1996). Visualizing America's drug problems: an ethnographic content analysis of illegal drug stories on the nightly news. *Contemporary Drug Problems*, *23*(2), 169–196.

Jiménez, M. (1999). *Seguridad Pública y participación ciudadana. Estudio de caso en los subprogramas de seguridad pública en las colonias Guerrero y Roma Norte de la Delegación Cuauhtémoc.* Tesis que para obtener la maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco.

Jiménez, M. (2006). Las crisis económicas de México 1976-1982 y su relación con la criminalidad, *Sincronía*, (41). http://sincronia.cucsh.udg.mx/jimenezo06.htm

Jiménez, C. (7 de octubre de 2010) "Familia ejecutada recibió amenazas hace un mes". *La Razón*, 7 de octubre de 2010.

Jiménez. H. (2011). *El 68 y sus rutas de interpretación: una crítica historiográfica*. Tesis para obtener la Maestría en Historiografía de México. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. 44-52.

Jiménez-Ornelas, R., & Reyes, D. (2020). El secuestro: una pandemia en México. *Estudios de la Seguridad ciudadana, 3*(3), 149-173.

Jiménez, G. (26 noviembre 2019). 'El Bandido' o 'Cara Puerca' tiene un perfil altamente violento. *Excelsior*. https://www.excelsior.com.mx/comunidad/el-bandido-o-cara-puerca-tiene-un-perfil-altamente-violento/1349753

Johnson, T., Wanta, W., & Boudreau, T. (2010). Drug Peddlers: How Four Presidents Attempted to Influence Media and Public Concern on the Drug Issue. *Atlantic Journal of Communication*, *12*(4), 177-199.

Jore, S. (2019). The Conceptual and Scientific Demarcation of Security in Contrast to Safety. *European Journal for Security Research*. *4*, 157–174.

Julien, H. (2008). Content Analysis en Given. L (ed). *The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods* (120-121). SAGE.

Keenan, M. Jones, A. Carey, D. D' Amour, P. (1996). Third Eye [Canción]. En *Ænima*. Zoo. Volcano Records.

Knight, A. (2018) Narco-Violence and the State in Modern Mexico. En Wil G. Pansters (ed.), *Violence, Coercion, and State-Making in Twentieth-Century Mexico: The Other Half of the Centaur* (115-134). Stanford University Press.

Koselleck, R. (2012). *Historias de conceptos. Estudios sobre semántica y pragmática del lenguaje político y social*. Trotta.

Krasner, S. (1983). *International Regimes*. Cornell University Press.

Krauze, E. (1997). *La presidencia imperial. Ascenso y Caída del sistema político mexicano (1940-1996)*. Tusquets.

Labastida, J. (2015). La transición, del autoritarismo a la democracia en México en Carbonell, M. Fix, H, Valadés, D. (coords). *Estado constitucional, derechos humanos, justicia y vida universitaria. Estudios en homenaje a Jorge Carpizo* Estado constitucional, tomo IV, volumen 2 (121-187).

Labate, B., & Rodrigues, T. (2015). *Drogas, política y sociedad en América Latina y el Caribe*. CIDE.

Laguna, E., (2005). Americanización/Globalización/Anglobalización. *El Cotidiano*, (129), 16-21.

Lajous, A. (1984). Las razones y las obras. En *Gobierno de Miguel de la Madrid. Crónica del sexenio 1982-1988*. Primer año. Presidencia de la República.

Lagos, R. (2014). *Contrainsurgencia en América del norte influjo de estados unidos en la guerra contra el EZLN y el EPR, 1994-2012*. El Colegio de Michoacán.

Latinobarómetro. (1996). *Informe latinobarómetro*. Corporación Latinobarómetro.

--------- (2003). *Informe latinobarómetro*. Corporación Latinobarómetro.

La Jornada (24 de enero de 1997). Ecos de la inseguridad. *La Jornada*. https://www.jornada.com.mx/1997/01/24/edito.html

La Jornada Online, (26 de junio de 2008). *Video sin editar de la tragedia en News Divine* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=8dTWYX7MgVw.

Lefebvre, H. (2013). *La producción del espacio*. Capitán Swing.

Levitsky, S & Lucan A. (2010). *Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War*. Cambridge University Press.

Levitt, S., & Dubner, S. (2005). Why do drug dealers still live with their moms? En *Freakonomics: A rogue economist explores the hidden side of everything*. Penguin. 78-105.

Lindo, J. M., & Padilla-Romo, M. (2018). Kingpin approaches to fighting crime and community violence: Evidence from Mexico's drug war. *Journal of Health Economics*, 58, 253–268. Routledge.

Lockyer, S. (2008) Textual analysis. En Given. L (ed). *The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods* (865-867). SAGE.

Los Hermanos Coria de Michoacán. (1985). *El Río de Tula*. [Canción]. Álbum 15 de septiembre.

Los Tigres del Norte. (1997). *Jefe de jefes*. [Canción]. Álbum Jefe de jefes. Fonovisa.

Lora, A., & Martínez, P. (1994). *Con la cola entre las patas*. [Canción]. En Una rola para los minusválidos. Warner Music México.

Lupo, S (2009). *Historia de la mafia. Desde sus orígenes hasta nuestros días*. Fondo de Cultura Económica.

Mabry, D. (1988). The US Military and the War on Drugs in Latin America. *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, *30*(2/3), 53–76.

Macías, V. (13 agosto 2012). En el D.F. 1700 narcotienditas, *El Economista*. https://www.eleconomista.com.mx/politica/En-el-DF-1700-narcotiendas-20120812-0026.html

Maciel-Padilla, A. (2021). El reto de la agenda de defensa de México: La ausencia de un enfoque integral de Seguridad Nacional, en Griffiths J. y Toro J. (eds.). *Desafíos para la seguridad y defensa en el continente americano*. Athena LAB.

Madrazo, A. (2014). *Los costos constitucionales de la guerra contra las drogas: una primera aproximación (desde México)*. CIDE Región Centro.

--------- (2016) "Criminals and enemies? The drug trafficker in Mexico's Political Imaginary", *Mexican Law Review*, *8*(2), 53–78.

Magis-Rodríguez, C., Loo-Méndez, E., & del Río-Chiriboga, C. (1996). La epidemia de SIDA en México. Análisis global 1981-1996. *Gaceta Médica de México, 132*(5), 545-550.

Mason, A. (2001). La reconfiguración del Estado: el nexo entre la globalización y el cambio internacional, *Revista de Estudios Sociales*, 09, 48-56.

Mattelart, A. (1998). *La mundialización de la comunicación*, Paidós.

McAllister, W. (2000). *Drug Diplomacy in the Twentieth Century*. Routledge.

-------- (2012). Reflections On a Century of International Drug Control. En Collins, *Governing the Global Drug Wars* (10-17). LSE. London School of Economics and Political Science.

Medina-Mora, E., & Guiot, E. R. (2003). La demanda de drogas: México en la perspectiva internacional. *Salud Mental*, *26*(2), 1-11.

Mejía, J. (2000). El muestreo en la investigación cualitativa. *Investigaciones sociales*, *4*(5), 165-180.

Méndez, A. (2007). Formal prisión a ex subdirector de Seguridad Pública. *La Jornada*, https://www.jornada.com.mx/2007/09/10/index.php?section=politica&article=019n2pol

Mendoza, C. (dir.). (2009). *1968: La conexión americana*. Canal 6 de julio.

Mercado, P., & Romero, J. J. (2024). *La política de la reforma de la regulación del cannabis en México*. En I, Flores et al. *4 20 Diálogo de saberes: hacia una regulación integral del cannabis y revisión de la política de drogas en México*. Universidad Nacional Autónoma de Mexico 85-109

Monroy, J. (7 noviembre 2012). Calderón firmó 16 convenios con EU. *El Economista*. https://www.eleconomista.com.mx/politica/Calderon-firmo-16-convenios-con-EU-20121107-0115.html

Monsiváis, C. (1979). Cultura urbana y creación intelectual, en P. González-Casanova, *Cultura y creación intelectual en América Latina* (25-41). El Colegio de México.

Morelos, R. (16 de diciembre de 2011). "Creció Violencia tras muerte de Arturo Beltrán" en *La Jornada*.

Moreno, H., & Villasana, J. (2002). *Sangre de mayo: El homicidio del cardenal Posadas Ocampo*, Océano de México.

Moreno, A. (2018). El cambio electoral. Votantes, encuestas y democracia en México. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica. Centro de Investigación y Docencia Económicas.

Moreno, J., Pérez, E., & Ruiz, P. (2004). El Consenso de Washington: aciertos, yerros y omisiones, *Perfiles Latinoamericanos* 12(25) 149-168. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-76532004000200006

Morín, E. (2015). *La maña. Un recorrido. Antropológico por la cultura de drogas*. Debate.

Musto, D. (1999). *The American Disease Origins of Narcotic Control*. Oxford University Press.

Nateras, A. (2024) Agrupamientos juveniles, usos sociales y consumos culturales: el caso de la "juanita" en Nateras A. comp *Juventudes sitiadas y Resistencias afectivas Tomo V Un toque académico: regulación, uso social y lúdico de cannabis*. Universidad Autonoma Metropolitana. Gedisa. 125-169.

Nelken, D. (1997) The Globalization of Crime and Criminal Justice: Prospects and Problems, *Current Legal Problems*, Volume 50, Issue 1, Pages 251–277.

Niblo, S. (2000). Mexico in the 1940s. The Politics of Corruption en Niblo Modernity, Politics and Corruption (253-311). Scholary Resources.

Nohlen, D., Rainer-Olaf, S. (2006). *Diccionario de Ciencia Política. Teorías, métodos, conceptos*, 2 tomos. Porrúa, El Colegio de Veracruz.

Ojeda, R. (2010). Análisis jurídico en materia de narcomenudeo. *Revista del Instituto de la Judicatura Federal Escuela Judicial*, (30), 245-255. https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/judicatura/article/view/31958/28949.

Olvera, N. (2016). *Policías Toxicómanos y traficantes.* Tesis de maestría. Centro de investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

------- (2021). "*Modernidad, seguridad y corrupción. Control de drogas en México durante la posguerra* (1946-1949)", Tesis de doctorado. Instituto de Investigaciones José Luis Mora.

O'Malley, P., & Mugford, S. (1991). The Demand for Intoxicating Commodities: Implications for the 'War on Drugs. *Social Justice 18*(4), 49–75.

ONU. (1998). A/S-20/11. *Declaración Política, 20º período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, 9ª reunión plenaria*, 10 de junio de 1998. Organización de las Naciones Unidas.

Organization of American States. (2013). Summary and findings en *The drug problem in the Americas. Chapter 4. The economics of drug trafficking* (5-7). Organization of American States.

Organización de los Estados Americanos. (2004). *Las Naciones Unidas informan sobre la "disminución constante" del cultivo de coca en la región andina*. https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=ONU-06-17

Organización Editorial Mexicana. (2022). El general Durazo: la matanza del río tula. *El Sol de Quintana Roo* https://solquintanaroo.mx/la-matanza-del-rio-tula/

Ortiz, A., Martínez, R., Meza, D., Soriano, A., Galván, J., & Rodríguez, E. (2007). Uso de drogas en la Ciudad de México: Sistema de Reporte de Información en Drogas (Srid). *Salud mental*, 30(4), 41-46.

Ospina, A., & Magis, C. (2022). Transition from first illegal drug use to first injection among people who inject drugs in Northern Mexico: A retrospective survival analysis. *Salud Mental*, *45*(2), 71-80.

Ott, J. (2011). *Pharmacoteon. Drogas enteogénicas, sus fuentes vegetales y su historia*. La Liebre de Marzo.

Padua, M. (1999). *México en el umbral del siglo XXI. Los efectos de la globalización*, Fontamara-Universidad Autónoma de Guerrero.

Palti, E. (2005). De la historia de 'ideas' a la historia de los 'lenguajes políticos' las escuelas recientes de análisis conceptual. El panorama latinoamericano, *Anales Nueva Época*, *7*(8), 63-82.

Paniagua, J. (2013, 14 de octubre). *¿QUÉ ES LA MÚSICA? #113 - ROD LEVARIO | Charla sobre música | Mi vida e historia en el Rock* [video de YouTube]. https://www.youtube.com/watch?v=X-zSwy4hI0w

Pansters, W. (1998). La transición a fuego cruzado: nuevo análisis de la política mexicana contemporánea. *Estudios Sociológicos*, 16(48), 623–659.

--------- (2012), "Zones of State-Making: Violence, Coercion, and Hegemony in Twentieth Century Mexico", en Wil G. Pansters (ed.), *Violence, Coercion, and State-Making in Twentieth-Century Mexico: The Other Half of the Centaur*, Stanford University Press.

--------- (2018). Drug trafficking, the informal order, and caciques. Reflections on the crime-governance nexus in Mexico. *Global Crime*. *19*(3-4), 315-338.

Pansters, W., & Castillo, H. (2007). Violencia e inseguridad en la ciudad de México: entre la fragmentación y la politización. *Foro Internacional*, XLVII (3), 577-615

Pardo, M. (2003). La modernización administrativa zedillista, ¿más de lo mismo? *Foro Internacional*, *43*(1 (171)), 192–214.

Pedraza, A. (1991). *Los combatientes de la droga*. Hermanos Pedraza Editores.

Pérez, M. (20 de marzo de 1997). Se usa equipo antinarco contra el EZLN, *La Jornada*.

Pérez-Correa, C. (2012). *Delitos contra la salud y (des) proporcionalidad en la legislación mexicana. Justicia desmedida. Proporcionalidad y delitos de drogas en América Latina* (167-200). Fontamara, Colectivo. De Estudios Drogas y Derecho.

Pérez-Correa, C., & Azaola, E. (2012). *Resultados de la Primera Encuesta Realizada a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social*. Centro de Investigación y Docencia Económicas.

Pérez-Ricart, C. (2017). US pressure and Mexican anti-drugs efforts from 1940 to 1980: Importing the war on drugs? en Wil G. Pansters, Benjamin T. Smith y Peter Watt (Eds), *Beyond the Drug War in Mexico: Human rights, the public sphere and justice*, 33-52.

---------(2018). The Role of the DEA in the Emergence of the Field of Anti-narcotics Policing in Latin America. Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations, *24*(2), 169-192.

-------- (2019). El papel del Federal Bureau of Narcotics en el diseño de la política de drogas en México (1940-1968). *Frontera Norte*, *31*(1).

--------(2020). *¿Qué hace la DEA en México?* 26 de octubre de 2020. *Nexos*. https://seguridad.nexos.com.mx/que-hace-la-dea-en-mexico/

--------(2021). Estados Unidos frente a la promulgación y suspensión en méxico del Reglamento de Toxicomanías de 1940. *Foro Internacional*, LXI, (3), cuad. 245, 649-686.

--------(2022). *Cien años de espías y drogas: La historia de los agentes antinarcóticos de Estados Unidos en México*. Debate.

Pérez-Ricart, C., y Olvera, N. (2021). Ascenso y declive de la Policía de Narcóticos del Departamento de Salubridad Pública en México (1917-1960). *Historia Mexicana*, *70*(4), 1661–1714.

Pérez-Montfort, R. (2015). *Tolerancia y Prohibición: Aproximaciones a la historia social y cultural de las drogas en México 1840:1940*. Randomhouse.

Phillips, J., & Land, K. C. (2012). The link between unemployment and crime rate fluctuations: An analysis at the county, state, and national levels. *Social science research*, *41*(3), 681–694.

Pineda, A. (2014). *La naturaleza del crecimiento económico mexicano, 2000-2012. En Rozo, Dávila, Azamar, La economía mexicana en la alternancia panista* (23-43). Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco.

Piñeiro, J. (1994). La Seguridad Nacional con Salinas de Gortari. *Foro Internacional*. Vol. XXXIV, *4*(138), 754-772.

Posada, M., & Urrutia, A. (20 agosto 1997). Tepito, el mayor almacén de droga en el DF. *La Jornada*. https://www.jornada.com.mx/1997/08/20/tepito.html

Procuraduría General de la República, Subprocuraduría Especial para el Caso Colosio. (2001a). *Informe de la Investigación del Homicidio del Licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta. Tomo IV. Entorno político y narcotráfico*, PGR.

--------- (2001b). *Primer Informe de Labores de la Procuraduría General de la República*. Procuraduría General de la República.

--------- (2002). *Segundo Informe de Labores de la Procuraduría General de la República*. Procuraduría General de la República.

--------- (2003). *Tercer Informe de Labores de la Procuraduría General de la República*. Procuraduría General de la República.

--------- (2004) *Cuarto Informe de Labores de la Procuraduría General de la República*. Procuraduría General de la República.

--------- (2005). *Quinto Informe de Labores de la Procuraduría General de la República*. Procuraduría General de la República.

--------- (2006). *Informe de Labores 2006 de la Procuraduría General de la República*. Procuraduría General de la República.

--------- (agosto, 13, 2007). *Discurso de Inauguración del procurador José Luis Santiago Vasconcelos, durante las mesas de trabajo para la Extradición*. Procuraduría General de la República. http//www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol07/PGR/bol38807.shtm.

Rabotnikof, N. (2005). *En busca de un lugar común. El espacio público en la teoría política contemporánea*, Instituto de Investigaciones Filosóficas, Universidad Nacional Autónoma de México.

Ramón, R. (13 de marzo de 2003). Aprehenden al jefe de la policía de Nezahualcóyotl acusado de narcotráfico. *La Jornada.* https://www.jornada.com.mx/2003/03/13/038n1est.php?printver=0

Reuter, P., & Ronfeldt, D. (1992). Quest for Integrity: The Mexican-US Drug Issue in the 1980s. *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, *34*(3), 89–153. https://doi.org/10.2307/165926

Reuter, P. (2014). "Drug Markets and Organized Crime". En *The Oxford Handbook of Organized Crime*, ed. por Letizia Paoli, 359-379. Oxford University Press.

Rico, M. (7 de mayo de 1997). La visita de Clinton a México abre la vía para la cooperación antidroga. *El País.* https://elpais.com/diario/1997/05/08/internacional/863042408_850215.html

Riguzzi, P., & De los Ríos, P. (2012). *Fin de la guerra fría y globalización 1982-2000. En Las relaciones México-Estados Unidos, 1756-2010* (445-465). Universidad Nacional Autónoma de México y Secretaría de Relaciones Exteriores.

Ríos, P. (30 septiembre 2019). El Operativo Guardián: a 25 años, la militarización mortífera continúa. *Los Angeles Times* https://www.latimes.com/espanol/opinion/articulo/2019-09-30/columna-el-operativo-guardian-a-25-anos-la-militarizacion-mortifera-continua

Riquelme, G., & Fuentes, L. (2019). *Riesgos asociados al ciberacoso. Una amenaza latente*. Gernika.

Robinson, J. B., & Rengert, G. F. (2006). Illegal drug markets: The geographic perspective and crime propensity. *Western Criminology Review*, *7*(1), 20–32.

Rodríguez, L. (1974). *Los estupefacientes y el Estado Mexicano*. Ediciones Botas.

Rodríguez, S., & Mastrogiovanni, F. (2018). Narrativas hegemónicas de la violencia. El crimen organizado y el narcotráfico entre el periodismo y las ficciones televisivas. *Anàlisi. Quaderns de Comunicació i Cultura*, 89-104.

Romandía S., Fuentes, D., & Nieto, A. (2019). *Narco CDMX. El Monstruo que Nadie quiere ver*. Grijalbo.

Romero, J. (2018). La dimensión desconocida de la producción de drogas en México en L., Atuesta, A., Madrazo y J., Romero. *Las violencias: en busca de la política pública detrás de la guerra contra las drogas.* Centro de Investigación y Docencia Económicas.

-------- (2024). El Poder de la Legalización. Ante la violencia generada por el tráfico de drogas en México. Editorial Terracota.

Rohter, L. (18 de enero de 1990). Mexicans React Furiously to an NBC Drug Series. *The New York Times*. https://www.nytimes.com/1990/01/18/world/mexicans-react-furiously-to-an-nbc-drug-series.html

Rohter, L. (13 abril 1989). Mexico Using Special Squad in Drug War. *The New York Times*. https://www.nytimes.com/1989/04/13/world/mexico-using-special-squad- in-drug-war.html

Ruiz, J. (1997). Usó México contra el EPR helicópteros donados por EU, *El Universal*.

-------- (20 julio 2017). Tras muerte de El Ojos y otros 7, queman vehículos en Tláhuac. *Quadratín.* https://mexico.quadratin.com.mx/tras-muerte-de-el-ojos-y-otros-7-queman-vehiculos-en-tlahuac/

Salazar, V. L. (1938) El mito de la marihuana. En *Criminalia*: *Revista de Sociología Criminal*, *12*.

Salgado, J. (2009). *Alcances y límites de los procesos de reforma policial local en México*. Banco Interamericano de Desarrollo. https://rednacionalporlaseguridad.com/wp-content/uploads/2018/01/BID-RefPolMex-JSalgado-final.pdf

Salinas, C. (1988*). Discurso de toma de posesión. Comercio Exterior*. Revista Mexicana de Comercio Exterior.

Salomo, J. A. (Director). (2022). *Cola de rata* [Corto]. Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.

Sanguinetti, A. (2023). *La Campaña Permanente: Una matriz para identificar excesos de electoralismo en la comunicación gubernamental actual*. Austral Comunicación, *12*(2), 1-31.

Sánchez, K., Herrera, O., & Bolaños, C. (30 de enero de 2004). Reos usan explosivos al pretender fugarse. *El Universal*. https://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad/56747.html

Sánchez, A. (25 de mayo de 2020). Cuando Generales dirigieron la Policía en CDMX. *Reforma.*

Schievenini, J. D. (2013). La prohibición de las drogas en México (1912-1929). *URVIO, Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana*, 13, 57-68.

Schivelbusch, W. (1993). *Tastes of paradise. A social history of spices, stimulants, and intoxicants*. First Vintage Books.

Schmitter, P.C. (1974). Still the century of corporatism?, *Review of Politics, 36*(1).

Scott, P., & Marshall, J. (1998). *Cocaine Politics: Drugs, Armies, and the CIA in Central America,* University of California Press.

Secretaría de Marina. (20 julio 2017). *SEMAR en coordinación con Fuerzas Federales y de SP de la Ciudad de México repelen agresión de presuntos Narcomenudistas, en Tláhuac.* Comunicado de prensa número 131/17. Gob.mx https://www.gob.mx/semar/prensa/la-secretaria-de-marina-armada-de-mexico-en-coordinacion-con-fuerzas-federales-y-de-seguridad-publica-de-la-ciudad-de-mexico-repelen-agresion-de-presuntos-narcomenudistas-en-tlahuac

Senado de la República. (9 de diciembre de 2010). Punto de acuerdo para citar a comparecer al gabinete de Seguridad Nacional. Gaceta del Senado de la República. https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/28102

Serrano, M. (1998). América Latina: la nueva agenda de seguridad. *Foro Internacional*, *38*(1) 151, 124–144.

---------(2006). Integration and Security in North America: Do Good Neighbors Need Good Fences? *International Journal*, *61*(3), 611–632.

---------(2007). Narcotráfico y gobernabilidad en México, *Pensamiento Iberoamericano*, (1) 251-278.

---------(2012). States of violence: State-Crime relations in Mexico, En Pansters (ed.), *Violence, Coercion, and State-Making in Twentieth-Century Mexico: The Other Half of the Centaur* (135-158). Stanford University Press.

Shapiro, J. B. (2010). What are they smoking?! Mexico's decriminalization of small-scale drug possession in the wake of a law enforcement failure. University of Miami *Inter-American Law Review*, 42(1), 115-149.

Sierra, J. (2003), *El enemigo interno. Contrainsurgencia y fuerzas armadas en México*, Plaza y Valdés, Universidad Iberoamericana.

Silva, C. (2024). El control judicial de las detenciones por posesión simple de drogas en la Ciudad de México. *Política Criminal*, *19*(38), 311-339.

Smith, P. (1992). *El combate a las drogas en América.* FCE.

Smith, B. (2021). The High 1960-1975 en *The Dope. The Real History of the Mexican Drug Trade* (195-249). Norton.

Stewart, D. (1990). Internationalizing the War on Drugs: The UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, *Denver Journal of International Law. & Policy, 18*, 387-404.

Stonor, F. (1999). *PEN, en La CIA y la guerra fría cultural*. RL. Lull. Debate.

Tejera, H. (2015). *Participación ciudadana y Estructura Política en la Ciudad de México*. Gedisa-Universidad Autónoma Metropolitana.

Thane, P., & Muñoz, P. (2008). ¿Qué es hoy la historia social? *Historia Social,* (60), 225-232.

The Washington Post. (2021). Mexico Declares $3 Billion U.S. security deal “dead”, seeks revamp. 29 de julio 2019.

https://www.washingtonpost.com/world/2021/07/29/mexico-merida-initiative-violence/

Toral, A. (24 de junio 2020). El grito del último gran capo vivo: "La cocaína es la bomba atómica de los colombianos contra EE. UU., *El mundo*, https://www.elmundo.es/cronica/2020/06/23/5ef1071dfc6c8320068b45be.html

Toro, C. (1995). *Mexico's "War" on Drugs: Causes and Consequences*. Boulder, London: Lynne Rienner Publishers.

--------- (1998). La internacionalización de la policía: la DEA en México. En F. Migallón (ed.), *Homenaje a Rafael Segovia* (pp. 461-478). El Colegio de México.

Torres, I. (2019). "Chavitos narcomenudistas": tocados por Dios e intocables por la policía. *Estudios Sociológicos*, *37*(111), 581–610.

Tyrrell, I. (2010). *Opium and the fashioning of the American moral empire. Reforming the World, the Creation of America´s Moral Empire* (146-165). Princeton University Press.

United States Northern Command. (2021). *About US NORTH COM* https://www.northcom.mil/About-USNORTHCOM/

United States General Accounting Office, (1999). "*DEA's Strategies and Operations in the 1900s"* Washington D.C. General Accounting Office.

United Nations. (2019). *Tratados multilaterales de las Naciones Unidas (desde el 31 de mayo de 2019)*. Naciones Unidas https://treaties.un.org/doc/source/titles/spanish.pdf

UNODC, (2004). *Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos*. Naciones Unidas.

--------- (2014). *Los tratados de fiscalización internacional de drogas. Naciones Unidas.* Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Int_Drug_Control_Conventions/Ebook/The_International_Drug_Control_Conventions_S.pdf

Unites States Department of the Treasury (15 de diciembre 2009). *Treasury Designates Sinaloa Cartel Members Under the Kingpin Act*. https://home.treasury.gov/news/press-releases/tg444

United States Department of Justice Office of the Inspector General US DOIG U.S. (1997) *Department of Justice Office of the Inspector General 1997. Special Report The CIA-contra-crack cocaine controversy: a review of the justice department's investigations and prosecutions*. Department of Justice Office of the Inspector General https://oig.justice.gov/sites/default/files/archive/special/9712/index.htm

United States Government Publishing Office US GPO (7 de mayo 1997). *Declaration of Mexican and United States Alliance Against Drugs*. United States Government Publishing Office. https://www.gpo.gov › WCPD-1997-05-12-Pg663

Van Elteren, M. (2006a). *Americanism and Americanization: A critical history of domestic and global influence*. McFarland.

--------- (2006b). Rethinking Americanization Abroad: Toward a Critical Alternative to Prevailing Paradigms. *Journal of American Culture*, *29*(3), 345-367.

Valdés, G. (2015). *Historia del narcotráfico en México*. Proceso-Grijalbo.

Valenzuela, J. M. (2012). Narcocultura, violencia y ciencias antropológicas. *Desacatos*, (38), 95-102.

Vásquez-Rocca, A. (2009). Las críticas de Habermas a Foucault y Sloterdijk; en torno al discurso filosófico de la modernidad y la teoría consensual. Nómadas. *Critical Journal of Social and Juridical Sciences*, *24*(4).

Velázquez, J. A. V., Icaza, M. E. M. M., del Campo Sánchez, R. M., Ito, D. A. F., Gamiño, M. N. B., Escobar, E. R., ... Martínez, V. C. (2016). El consumo de drogas en estudiantes de México: tendencias y magnitud del problema. *Salud mental*, *39*(4), 193-203.

Vega, A. (5 junio, 2012). Ubican más de mil 700 narcotienditas en el Distrito Federal. *Excélsior.* https://www.excelsior.com.mx/2012/06/05/comunidad/839137

Vilalta, C. (2009). La geografía local del narcomenudeo: patrones, procesos y recomendaciones de política urbana. *Estudios Demográficos Urbanos*, 24, 49-77.

Waever, O. (1995). "Securitization and Desecuritization", en Ronnie D. Lipschutz (ed.), *On Security* (46-86). Columbia University Press.

Walker, W. (1978) "Control across the Border: The United States, Mexico, and Narcotics Policy, 1936-1940", *Pacific Historical Review*, *47*(1), 91-106.

Webb, Gary. (1998). *Dark Alliance. The CIA, the Contras, and the Crack Cocaine Explosion*. New York, Seven Stories Press.

White House. (7 de mayo de 1997) *President Clinton Addresses the People of Mexico*, May 7, 1997. https://clintonwhitehouse4.archives.gov/WH/New/Mexico/briefings.html

--------- (15 de febrero de 1999). *Press briefing by Secretary of State Madeleine Albright, Attorney general Janet reno, National security advisor sandy Berger, Office of National Drug Control Policy General Barry McCaffery, And national economic council deputy director Lael Brainard*. *White House* https://clintonwhitehouse4.archives.gov/WH/New/Mexico/19990216-33756.html

Whitford A., & Yates, A. B. (2009). *Presidential Rhetoric and the Public Agenda: Constructing the War on Drugs*. Johns Hopkins University Press.

Woldenberg, J. (2014). Transformaciones del Régimen de Gobierno en México. De chile, dulce y manteca. *Nexos*. https://josewoldenberg.nexos.com.mx/?p=94

Zamudio, C. (2008). ¿Qué es el narcomenudeo? Un acercamiento etnológico. *LiberAddictus*, 103, 3-7.

--------- (2012). *Las Redes del Narcomenudeo*. CEAPAC.

--------- (2013). *Drogas DF. Los mercados de drogas ilícitos de la Ciudad de México*. Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas.

Zamudio, C., & Santos, A. (2013). La aplicación de la ley contra narcomenudeo: El nuevo reto para las instituciones de seguridad y justicia. *Revista El Tribunal Superior de Justicia Del Distrito Federal*, *15*, 95-116.

Zavala, O. (2018). *Los cárteles no existen: Narcotráfico y cultura en México*. Malpaso.

---------(2020)"La narconarrativa después del “juicio del siglo”." *Confluenze. Rivista di Studi Iberoamericani*. 2.1 2020: 5-28.

---------(2022). *La Guerra en las palabras. Una Historia intelectual del narco en México*. *1975-2020*. Debate.

Zebadúa, E. (1994). Del plan Brady al TLC: La lógica de la política exterior mexicana 1988-1994. *Foro Internacional*, XXXIV *4*(138), 626-652.

Zermeño, G. (2016). *Historia fin de siglo*. El Colegio de México.

Zürn, M. (2006). Régimen/Análisis de régimen. En Nohlen 2006, *Diccionario de Ciencia Política. México* (1179-1180). Porrúa- El Colegio de Veracruz.